



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES LA NACION

13^a REUNION – 4^a SESION ORDINARIA
28/29 DE MARZO DE 2001

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado, don MARIO A. LOSADA y del señor vicepresidente del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM, del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor LUIS A. LEON, del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, don FELIPE R. SAPAG y del señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia, senador JOSE M. GARCIA ARECHA

Secretarios:

Señor JUAN C. OYARZUN, señor JOSE D. CANATA y señor MIGUEL J. MAMY

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, doctor MIGUELA. FERNANDEZ ALIAS y señor RODOLFO BERNARDINI



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ANGELOZ, Eduardo C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUM, Daniel
 BAUZA, Eduardo
 BRANDA, Ricardo A.
 CABANA, Fernando V.
 CANTARERO, Emilio Marcelo
 CARBONELL, José F.
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 DEL PIERO, Pedro
 FUNES, Carlos D.
 GAGLIARDI, Edgardo
 GARCÍA ARECHIA, José M.
 GENOUD, José
 GIOJA, José L.
 HUMADA, Julio C.
 LEÓN, Luis A.
 LÓPEZ, Alcides H.
 LOSADA, Mario A.
 LOZA, Juan Carlos
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTINEZ, Nélida Susana
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MASSACCESI, Horacio
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MENEGHINI, Javier R.
 MENEM, Eduardo
 MIKKELSEN-LÖTH, Jorge F.
 MOLINARI ROMERO, Luis A. R.
 MOREAU, Leopoldo R. G.
 NEGRE de ALONSO, Liliana Teresita

ORTEGA, Ramón B.
 OUDIN, Ernesto
 PALACIOS, Gerardo L.
 PARDO, Angel F.
 PRETO, Ruggero
 PRUYAS, Tomás R.
 RAJER, Beatriz I.
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 ROMERO, Marcelo J.
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SÁEZ, José María
 SAGER, Hugo Abel
 SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio A.
 SAPAG, Felipe R.
 TELL, Alberto Máximo
 TORINO, Héctor Omar
 ULLOA, Roberto Augusto
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VAQUIR, Omar M.
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNA, Carlos Alberto
 VILLARROEL, Pedro G.
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo

AUSENTES:

CAFIERO, Antonio F.
 CORACH, Carlos Vladimiro
 GALVÁN, Raúl A.
 SAPAG, Silvia E.
 VILLAVEVERDE, Jorge A.
 YOMA, Jorge R.

SUMARIO

—En Buenos Aires, a las 15 y 35 del miércoles 28 de marzo de 2001:

1. Consideración del dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley en revisión por el que se faculta al Poder Ejecutivo al ejercicio de atribuciones en materias determinadas de su ámbito de administración y de emergencia pública (C.D.-13/01). Se aprueba. (Pág. 934.)
2. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Gioja y otros señores senadores sobre integración de la Comisión Bicameral para la Delegación de Facultades. (S.-239/01). Se aprueba. (Pág. 1058.)
3. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado.
 (Pág. 1059.)

II. Inserciones. (Pág. 1059.)

Sr. Presidente (Losada). — Continúa la sesión.

1

**OTORGAMIENTO DE FACULTADES
 AL PODER EJECUTIVO**

Proyecto de ley en revisión

Sr. Presidente (Losada). — Por Secretaría se enunciará el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Secretario (Oyarzún). — (Lee) “Expediente número 13/2001, Cámara de Diputados: proyecto de ley en revisión facultando al Poder Ejecutivo al ejercicio de atribuciones en materias determinadas de su ámbito de administración y de emergencia pública.

Buenos Aires, 27 de marzo de 2001.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional al ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1º de marzo del año 2002.

I. Materias determinadas de su ámbito de administración:

- a) Decidir la fusión o centralización de entes autárquicos, reparticiones descentralizadas o desconcentradas o la descentralización de organismos de la administración central, pudiendo otorgarles autarquía;
- b) Transformar entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, total o parcialmente, en empresas públicas, sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica, para que puedan cumplir su objeto sin más limitaciones que las que determinen las necesidades de un mejor funcionamiento y eficacia en su gestión o resulten de la ley de administración financiera 24.156;
- c) Sujetar al personal de los entes comprendidos en los supuestos contemplados en el inciso b), a las normas del derecho común.

Las normas que se dicten a tal efecto garantizarán a los trabajadores la preservación de los derechos adquiridos en virtud de la ley marco de regulación del empleo público nacional cuando queden sujetos al régimen laboral y gozarán de la estabilidad en el empleo por ella prevista por el término de dos (2) años a partir del momento en que se modifique la naturaleza del vínculo laboral al que estén sujetos, quedando vigente por dicho lapso el convenio colectivo de trabajo aplicable.

Durante el término indicado en el párrafo precedente, las partes deberán negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo. En el caso de no arribarse en ese lapso a un nuevo convenio colectivo de trabajo las partes deben someterse a un arbitraje;

- d) Desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el debido control del sector;
- e) Modificar la Ley de Ministerios, según lo estime conveniente;
- f) Con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración podrá derogar total o par-

cialmente aquellas normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento operativo de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales o mixtas, o entidades públicas no estatales, adecuando sus misiones y funciones; excepto en materia de control, penal o regulatoria de la tutela de intereses legítimos o derechos subjetivos de los administrados, y con respecto al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

II. Emergencia pública:

- a) Crear exenciones, eliminar exenciones excepto aquellas que beneficien los consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales, sociedades cooperativas, mutuales, asociaciones y obras sociales sindicales; disminuir tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de mejorar la competitividad de los sectores y regiones y atender situaciones económico-sociales extremas. Autorizar la devolución, acreditación o compensación con otros tributos de los saldos a favor a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997), así como regímenes de regularización y facilidades de pago;
- b) Modificará los procedimientos aduaneros, tributarios o de recaudación previsional al sólo efecto de otorgar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual tratamiento que al Estado nacional en su condición de personas de derecho público –a condición de reciprocidad– con el objeto de mejorar la recaudación, reducir la evasión y evitar el contrabando;
- c) Crear tasas o recursos no tributarios con afectación específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura, los que serán definidos con criterio federal y distribución equitativa en todo el territorio nacional, respetando la rentabilidad económico-social de las obras y siempre que la percepción de las tasas o recursos no tributarios se efectúe con posterioridad a la habilitación de las obras, salvo que sea para reducir o eliminar peajes existentes;
- d) Establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales;

- e) Dar continuidad a la desregulación económica derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la competitividad de la economía, exceptuando expresa e integralmente toda derogación, modificación y suspensión de la ley de convertibilidad 23.928, de los Códigos Civil, de Minería y de Comercio o en materia penal, tributaria, laboral del sector público y privado, salud, previsional, de las asignaciones familiares, la ley marco regulatorio del empleo público 25.164 y la ley 25.344 de emergencia pública, en lo referido al pago de la deuda previsional con bonos Bocón III, contenidos en el artículo 13 de la mencionada ley.

III. Las delegaciones previstas en esta ley excluyen la privatización total o parcial y/o cesión en garantía de empresas públicas, universidades, Banco de la Nación Argentina y otras entidades financieras oficiales, Administración Federal de Ingresos Públicos, entes reguladores de servicios públicos, la participación del Estado nacional en entes y/o empresas binacionales, parques nacionales e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. También se excluye la modificación de la autarquía del Banco Central de la República Argentina y de las universidades nacionales así como el artículo 55 de la ley 25.401.

Para la transferencia de empresas, sociedades o cualquier otra forma de organización jurídica de propiedad del Estado nacional deberán seguirse los procedimientos previstos en la ley 23.696.

Art. 2º – El ejercicio que hiciere el Poder Ejecutivo nacional de las facultades previstas en la presente ley, se ajustará a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional entendiéndose que las disposiciones de la presente son las bases de la delegación del ejercicio de atribuciones legislativas y que se encuentra vigente la situación de emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.344 y requerida por el mencionado artículo 76 de la Constitución Nacional. Dicho ejercicio estará sujeto a que no se aumente el gasto público consolidado a nivel nacional ni se creen otros impuestos que el establecido en el artículo 1º de la ley 25.413. El ejercicio de las facultades delegadas no podrá provocar despidos y tampoco podrá utilizarse para disponer rebajas de salarios o de haberes jubilatorios.

Art. 3º – Ratifícase en todos sus términos y alcances el contenido del artículo 11 de la ley 25.413, aclarando que el mismo incluye en sus términos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia y mensualmente, por medio del jefe de Gabinete de Ministros en oportu-

nidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Art. 5º – Hasta tanto se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente prevista en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional el control y seguimiento de lo que hiciere el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las facultades delegadas, será hecho por una comisión bicameral integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El presidente de la comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Art. 6º – Al término del plazo establecido en el artículo 1º, se operará de pleno derecho la caducidad de la delegación de facultades dispuesta en la presente ley sin perjuicio de la validez y continuidad de la vigencia de las normas que haya dictado el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de las atribuciones que se le delegan.

Art. 7º – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 20 de la Ley de Impuestos a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias), el cual quedará redactado de la siguiente forma:

3. Los resultados obtenidos por la enajenación de bienes muebles amortizables, acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga.

Sustitúyase el primer párrafo del inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias) que quedará redactado de la siguiente forma:

- w) Los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas, excluidos los sujetos comprendidos en el inciso c) del artículo 49.

Art. 8º – Ratifícase en todas sus partes el decreto 1.299/00, Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de la Infraestructura, publicado en el Boletín Oficial del jueves 4 de enero de 2001.

Rectifícase la nominación de la obra incluida como ruta 68, en el acuerdo adjunto, por ruta 86, Tartagal-Misión La Paz.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

RAFAEL M. PASCUAL,
Guillermo R. Aramburu.

1

**Constitucion de la Cámara
en comisión**

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: propongo que se vote el tratamiento sobre tablas del referido proyecto, que se constituya la Cámara en comisión y se ratifiquen las autoridades de la mesa.

Sr. Presidente (Losada). – No hay quórum. Se va a llamar para votar.

–Así se hace.

–Luego de unos instantes:

Varios señores senadores. – Ya hay quórum, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). – En consideración la moción formulada por el senador Agúndez.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas, constituida la Cámara en comisión y confirmadas sus autoridades para la conferencia.

2

Conferencia

Sr. Presidente (Losada). – Queda abierta la conferencia.

Corresponde considerar el proyecto de ley enunciado por Secretaría.

Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: sin duda, esta tarde vamos a asistir a un debate de suma importancia para el país. Un debate que tiene que ver con la realidad que enfrentamos por estos días y con la responsabilidad institucional del Congreso, específicamente, del Senado de la Nación.

Al inaugurar este debate, debo decir...

Sr. Meneghini. – ¿Me permite...?

Sr. Presidente (Losada). – Señor senador Molinari Romero: el señor senador Meneghini le solicita una interrupción, ¿la autoriza?

Sr. Molinari Romero. – Con todo gusto, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Meneghini.

Sr. Meneghini. – Señor presidente: deseo que se haga constar que todos los integrantes de este cuerpo tienen en sus bancas el proyecto de ley que ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Losada). – Si algún señor senador no lo posee, se le hará llegar.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Después de la oportuna intervención del señor senador Meneghini, quiero resaltar la importancia de este debate y, además, traslucir lo que seguramente está en el ánimo de cada uno de los señores senadores esta tarde.

Quienes estamos sentados aquí para abordar la discusión del proyecto, lo hacemos con absoluta tranquilidad de conciencia. No necesitamos de ningún tipo de amenazas, provengan de quienes provengan, para saber que lo que vamos a decidir esta tarde en el Senado de la Nación es nada más que el uso de las facultades constitucionales que tienen este cuerpo y el Congreso. En definitiva, si necesitamos algún guardián de los actos que hoy vamos a llevar adelante, es nuestra propia conciencia.

Además, quiero señalar públicamente que durante todo el proceso de ese largo fin de semana y lo que ha significado la discusión ardua en la Cámara de Diputados, este cuerpo ha tenido su participación a través de los distintos bloques; y concretamente, el del radicalismo –al que represento– ha tenido un activo papel en la discusión que se dio en la Cámara de Diputados.

Por eso, el tema en consideración no es absolutamente nuevo sino que ha sido el producto de una ardua tarea de discusión y negociación; negociación que es propia del Parlamento de la Nación. Y el día que deje de serlo, el Congreso habrá dejado de tener razón de ser como el escenario político en el cual confluyen todas las fuerzas políticas que representan el pensamiento de un país en un momento determinado.

La delegación de funciones que está prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional no representa la suma del poder público ni es tampoco el otorgamiento de las facultades extraordinarias, sino que constituye la decisión del

Congreso de que ciertas precisiones normativas sean adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco de los lineamientos que fija el propio Congreso.

La Constitución debe interpretarse en forma integral. El artículo 29, tan meneado en estos días, podía ser la vía para cuestionar las delegaciones cuando no había una clara voluntad del constituyente que otorgara la facultad de delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo.

Hoy, la realidad institucional que está consagrada por la reforma de 1994 es distinta: delegar facultades en el marco del artículo 76 no es conceder la suma del poder público.

Como todos sabemos, el artículo 29 de la Constitución es, tal como lo sostiene uno de nuestros más afamados tratadistas, Germán Bidart Campos, la norma más autóctona de la Carta Magna. Responde a una clara circunstancia histórica y, por lo tanto, debe ser interpretada en el marco de ese contexto histórico y no fuera de él.

¿Cuáles eran las facultades extraordinarias que se habían otorgado al gobernador de la provincia de Buenos Aires y que determinaron la prohibición del artículo 29 en la Constitución del 53? Ese antecedente son las leyes de la provincia de Buenos Aires que otorgaron competencias especiales a distintos gobernadores de esa provincia: Martín Rodríguez en 1820, Viamonte en 1829 y Juan Manuel de Rosas en 1835 y 1851.

Como consecuencia de esas normas, el gobernador Rodríguez fue autorizado a aplicar penas sin detenerse en la lentitud y trabas de las formas ordinarias; Rosas, a adoptar medidas según su ciencia y conciencia, sin otras restricciones que conservar la religión católica y defender la causa nacional de la Federación. En 1851 tuvo a su disposición, sin limitación ni reserva alguna, los fondos de la provincia, la fortuna, la vida, la fama y el porvenir de los representantes de ella y de sus comitentes.

Señor presidente, señores legisladores: nada de esto estamos por hacer al sancionar este proyecto de ley.

El artículo 29 prohíbe conferir la suma del poder público. Ello supone que todas las competencias propias de todos los poderes quedan en manos de un solo órgano de gobierno. Hoy no estamos haciendo eso.

El artículo 29 incrimina la concesión de facultades extraordinarias. Ello implica, según Néstor Sagüés, desorbitar a un poder del Estado, aumentando desmesuradamente sus competencias con funciones de otro órgano o con las que no le otorga la Constitución, lo que quiebra el equilibrio de poderes o el de las relaciones entre el Estado y las personas. No es esto lo que estamos haciendo esta tarde en el Senado.

La Corte ya ha sostenido que quien ejerce una facultad constitucional, aunque sea excepcional, no está asumiendo facultades extraordinarias en el sentido del artículo 29, y lo tiene sentado en una vieja doctrina a partir del caso "Zabala".

Ya antes de la reforma del '94 la doctrina constitucional entendía que la delegación de competencia legislativa en el presidente o el hecho de que éste dicte decretos de necesidad y urgencia no significan de por sí la práctica de facultades extraordinarias.

De la misma forma que en el caso del estado de sitio el Poder Ejecutivo asume facultades especiales que no implican la violación del artículo 29, cuando se delegan en el Ejecutivo facultades legislativas en virtud del artículo 76 tampoco se viola el artículo 29. Señor presidente: se trata en esencia de emergencias constitucionales que alteran temporariamente el reparto normal de los recursos del gobierno, pero dentro de los límites que la propia Constitución ha establecido.

La reforma del '94 constitucionalizó la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, superando un largo debate precisamente sobre la constitucionalidad de esa delegación que —vale la pena decirlo— ya se había transformado en una práctica.

Tal cual lo señalara en el debate de la nueva Constitución el constituyente Raúl Alfonsín, la reforma constitucional del '94 incorporó el artículo 76 como una forma de atenuar el poder presidencial. Ello fue así porque la delegación sin limitación alguna había adquirido carta de ciudadanía en la práctica constitucional argentina y era necesario que la utilización de esa herramienta se hiciera limitada en el tiempo, en la materia y en la forma de ejercicio y siempre bajo el control del Congreso.

Hoy, aunque se hayan levantado algunas voces en contrario en la Cámara de Diputados, ya

no caben dudas sobre la constitucionalidad de la delegación como una institución incorporada al cúmulo de herramientas y recursos con que cuenta el Parlamento para regular y normar la realidad.

La delegación es una herramienta del Congreso, que es quien decide sobre su amplitud, el tiempo y los lineamientos a los que se debe atener el Poder Ejecutivo en el uso de las facultades delegadas. Es el Congreso el que controla el ejercicio de la delegación y la deja sin efecto a través del mismo mecanismo que utilizó para otorgarla.

No hacen falta, como veremos hoy, mayorías especiales. Tampoco es necesario establecer un plazo determinado ni es menester que se den causales específicas. El Congreso sigue siendo el titular de la función legislativa: delega y reasume sus funciones a su entero arbitrio.

El rígido esquema presidencialista de 1853 carecía de la flexibilidad y de la adaptabilidad que el mundo moderno, con su realidad compleja, reclama. La idea de los convencionales constituyentes—muchos de ellos aquí presentes—, fue la de flexibilizar el sistema presidencial y de hacerlo más apto para responder a tiempo a las emergencias y situaciones excepcionales que se plantean en un mundo como el que nosotros enfrentamos.

A las tradicionales emergencias constitucionales que ya estaban reguladas, como el estado de sitio y la intervención federal, la reforma de 1994 incorporó las emergencias públicas en general, teniendo en la mira especialmente las emergencias y crisis económicas, en cuya resolución la demora en la adopción de medidas puede generar un perjuicio enorme para el país.

Para hacer frente a estas emergencias la Constitución del 94 otorga, al mismo tiempo, una facultad al Poder Ejecutivo: la de dictar decretos de necesidad y urgencia, y otra al Congreso: la de delegar sus funciones. Esto debe ser entendido exactamente así: como una facultad del propio Congreso.

El principio de pesos y contrapesos característico del sistema de división de poderes se mantiene inalterable, ya que si bien ambas herramientas concentran la decisión del Ejecutivo, al mismo tiempo, se refuerza el control en el Congreso de la Nación.

El proyecto de ley que estamos considerando ahora en esta Cámara no implica cerrar el

Congreso, como por allí se ha dicho irresponsablemente. El Congreso tendrá una gran tarea de control y revisión de las decisiones del Poder Ejecutivo. Asumirá así el perfil de un órgano legislativo moderno y ágil que fija la política legislativa. Siguiendo la terminología utilizada por la Corte Suprema, da directivas y controla su cumplimiento y, cuando estima que se han incumplido los lineamientos que ha fijado, reasume el ejercicio en plenitud de las funciones que había delegado.

Después de haber aprobado este Parlamento a través de la ley 25.148 la ratificación de la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública acontecidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994; después de haber aprobado múltiples leyes sobre delegaciones en las más diversas materias incluida la impositiva, el discurso sobre poderes especiales, facultades extraordinarias y su secuela de acusaciones o amenazas de acusaciones sobre traición a la Patria resulta, por lo menos, llamativo.

Al delegar hoy funciones en el Poder Ejecutivo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, queda claro que es el Congreso el que define los lineamientos rectores de la normativa futura; o sea, su patrón o estándar de política legislativa. Como ha sostenido la Corte, no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones que quedan libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya quedado claramente establecida. Esta es la doctrina que la Corte fijara en el caso "Domínguez c/Kaiser Aluminio".

Asimismo, la Corte ha reiterado que ante situaciones de grave crisis o de necesidad pública el Congreso está obligado a adoptar medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales. En el marco de estas hipótesis, el Congreso puede sancionar la legislación indispensable para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, como forma de impedir que los derechos amparados por dichas garantías corran el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía.

Dicho esto, señor presidente, y adelantando el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica Radical al proyecto de ley venido en revisión, desco resaltar algunos aspectos de la iniciativa

en cuestión, sin perjuicio de que otros señores senadores pertenecientes a nuestro bloque abundan en consideraciones en particular.

Para no repetir la explicación de cada una de las cláusulas de los artículos que integran este proyecto de ley—explicación harto detallada en la Cámara de Diputados durante el debate seguido con atención por toda la ciudadanía—, me quiero referir en particular a algunas disposiciones.

En primer lugar, en cuanto a la desregulación y al mejoramiento del funcionamiento y transparencia del mercado de capitales, el inciso *d*) del punto I, del artículo 1º genera incentivos para que la economía argentina pueda crecer sostenidamente en el futuro. La búsqueda de ese crecimiento sostenido requiere de la recuperación de la confianza de los mercados de capitales. Es importante que los fondos voluntarios del mercado permitan el financiamiento para recuperar la inversión y el consumo de bienes durables.

Particularmente problemática fue la discusión del inciso *g*), que ha quedado sancionado en el proyecto en consideración como inciso *f*). Se ha sostenido que la delegación otorgada allí era de una magnitud impresionante. No es así. La norma autoriza la derogación total o parcial de algunas leyes con un objetivo claro: hacer eficiente a la administración pública. Además se refiere a aquellas leyes que afecten el funcionamiento operativo de la burocracia estatal, en especial aquella relativa a sus misiones y funciones.

Las facultades impositivas que se conceden en el punto II del artículo 1º tampoco violan los límites impuestos por el artículo 76 de la Constitución Nacional. Un principio elemental de la interpretación jurídica afirma que donde la ley no distingue no debemos distinguir, sin perjuicio de la interpretación restrictiva que merece cualquier delegación.

Es evidente que el constituyente de 1994 no quiso introducir en el artículo 76 los límites temáticos que sí impuso para los decretos de necesidad y urgencia previstos en el artículo 99. Si hubiera querido que se aplicaran lo habría establecido expresamente, como hizo en otras normas en las que vedó la aplicación de cierta institución a algunos temas, tal el caso del artículo 99 inciso 3) y del artículo 39, referido a

Por otra parte, el propio artículo indica cuáles son los límites dentro de los que cuales podrá usarse la facultad impositiva y qué exenciones no podrán modificarse.

Los incisos *c*) y *d*) del punto II del artículo 1º implican el reconocimiento de las necesidades de las provincias y de las particularidades de las economías regionales, garantizándoles un trato adecuado a sus circunstancias.

En cuanto a las facultades del inciso *e*) en materia de desregulación no puede decirse, como se ha afirmado por allí, que la delegación sea una norma en blanco ni que ella sea abierta. La facultad que se delega para derogar o modificar normas de rango legal no podrá afectar los códigos de fondo, las leyes penales o previsionales ni la ley de convertibilidad, entre otras disposiciones previstas específicamente en ese inciso.

En cuanto a la posibilidad de privatizar, en el punto III del artículo 1º se establece claramente cuáles son las exclusiones y limitaciones, quedando a salvo entre otros organismos—y quiero destacarlos especialmente—, las universidades, el Banco de la Nación Argentina, la AFIP y los entes reguladores.

El artículo 2º no sólo aclara que las restricciones establecidas en los artículos anteriores son las bases del ejercicio de la delegación que vamos a hacer sino que, además, fija de modo claro cuatro restricciones que son el marco de aplicación general de esta delegación: prohibición de crear nuevos impuestos, de aumentar el gasto público, de provocar despidos y de establecer rebajas salariales o de haberes jubilatorios.

En cuanto al control exigido por la Constitución en los artículos 76 y 100 inciso 12), hasta tanto se concrete la creación de la Comisión Bicameral Permanente, no sólo se crea una comisión de control con representación pluralista y proporcional a la representación parlamentaria de las fuerzas políticas sino que para mayor control del uso de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo—y al respecto tanto ayer en la Cámara de Diputados como hoy en este Senado se da un paso importante en la historia institucional del país—, ella será presidida por un hombre de la oposición.

Con la sanción de este proyecto el Congreso ha demostrado a la sociedad que ejerce en plenitud sus facultades y atribuciones y que lo hace

con total responsabilidad y razonabilidad. En efecto, no rehúye su responsabilidad frente a la emergencia económica que atraviesa el país sino que, por el contrario, utiliza las herramientas que la Constitución le asigna a través de la delegación de funciones.

En este sentido, al delegar sus facultades le fija al presidente de la República límites de tiempo; materia y modo y, finalmente, mantiene en plenitud sus facultades de control sobre el ejercicio, asignando una misión especial a la oposición, tal como señalaba recién.

La clave para la recuperación de la Argentina radica en el restablecimiento de señales positivas para la inversión, de modo de evitar la escasez de capitales, de despejar dudas acerca de la posibilidad de recuperar el crecimiento en el mediano plazo y de hacer frente a los compromisos económicos en los próximos años.

El Congreso va a cumplir con su responsabilidad dando al Poder Ejecutivo las facultades que el presidente de la Rúa ha solicitado; y cumplirá también con la función de control sobre los actos del presidente y de sus ministros, que le está reservada y que no renuncia.

Ahora, le corresponde al Poder Ejecutivo ejercer esas facultades con razonabilidad y sin violar los límites impuestos, generando las condiciones necesarias para el logro de los objetivos comprometidos, que son la reactivación de la economía, la promoción de las inversiones y el desarrollo de las economías regionales en un marco de respeto a los derechos de todos los argentinos.

Adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque al proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. García Arecha. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Menem. – Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Losada). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador García Arecha.

Sr. García Arecha. – El presidente de nuestro bloque informó que a efectos de un correcto desarrollo de esta reunión se había acordado un determinado tiempo en el uso de la palabra para los miembros informantes y otro para los senadores que expongan, que era de media hora y de diez minutos, respectivamente.

Quisiera que se me informe si ello es lo acordado en la reunión de labor parlamentaria y si la sesión se va a desarrollar de esa manera.

Sr. Presidente (Losada). – Señor senador: ello no fue acordado ni oficializado. En la reunión de labor parlamentaria se analizó la posibilidad de que las exposiciones fueran lo más breves posible, respetando los tiempos, dada la cantidad de legisladores que podrían anotarse, pero no hay ninguna decisión oficial.

Sr. García Arecha. – Entonces, ¿no hay límite de tiempo para ningún orador?

Sr. Presidente (Losada). – No; sólo el límite que prevé el Reglamento; no hubo modificaciones en ese sentido.

Sr. Gioja. – Hay un pedido de comprensión de todos en cuanto al tiempo.

Sr. Presidente (Losada). – Es lo que la Presidencia está informando y es la aspiración que se tiene, aunque sin coartar a nadie en su exposición. Informo que hay treinta y cinco oradores anotados.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: coincido con las expresiones vertidas por el señor senador por Córdoba en cuanto a la trascendencia del proyecto de ley que vamos a tratar hoy. Aunque diría que su trascendencia está más bien dada por las circunstancias políticas, sociales y económicas que estamos viviendo que por su contenido.

En efecto, el contenido de esta iniciativa en materia de delegación de facultades no tiene nada de novedoso. Me atrevería a decir –y perdonen la expresión un tanto vulgar– que hoy no vamos a perder la virginidad en materia de delegación de facultades legislativas; la perdimos y la continuamos perdiendo desde hace mucho tiempo.

Seguramente algunos van a decir que estamos incurriendo en un acto de irresponsabilidad al tratar este proyecto a unas pocas horas de haber sido sancionado por la Cámara de Diputados. Pero también dirían que somos irresponsables, y además vagos, si tardáramos más de dos o tres días en considerarlo. Aquello de “palos porque bogas y palos porque no bogas” es de estricta aplicación; siempre va a ser así.

Quiero decir que los que asumimos con responsabilidad esta tarea hemos seguido muy de cerca, desde su mismo origen en la Cámara

de Diputados, todo el proceso legislativo. Así, hemos concurrido a reuniones y a deliberaciones, seguido de cerca el debate; muchos de nosotros nos hemos quedado hasta tarde por la noche en la Cámara de Diputados prestando atención a los distintos discursos, hemos escuchado las exposiciones de algunos miembros del Poder Ejecutivo y opiniones de autores; y hemos estado estudiando el tema todos estos días.

Entonces, aquí no venimos a improvisar sino a dar las razones de nuestra convicción para aprobar —y aquí estoy adelantando el sentido de mi voto— la iniciativa tal como ha sido sancionada por la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo vamos a hacer no como un favor al Poder Ejecutivo ni para que la opinión pública hable bien de nosotros sino porque tenemos la íntima convicción de que el gobierno nacional necesita hoy este proyecto de ley. Entonces, como una oposición responsable, tenemos la obligación de colaborar para que el gobierno pueda superar esta tremenda crisis que hoy está viviendo el país. Es decir que más que un acto de irresponsabilidad es un acto de responsabilidad plena y republicana.

Además, tengo la convicción de que aquí no estamos cometiendo ninguna violación de carácter legal sino que estamos totalmente encuadrados dentro del estado de derecho, dentro de las instituciones de la República y dentro de la vigencia de una plena democracia.

Y esto es lo que valoriza más la posición de nuestro bloque, porque frente a una institución que ha sido tan duramente castigada en los últimos tiempos, que ha sido vituperada, vilipendiada y agravada, está presente para decirle sí a la República, para decirle sí a nuestra responsabilidad, para actuar con grandeza y para estar a tono con las responsabilidades que la hora nos demanda.

Decía que la ley parece más trascendente por todo el escenario que se ha montado alrededor de ella que por su propio contenido. En una palabra, estamos poniendo en marcha un dispositivo constitucional introducido por la Convención Constituyente de 1994, que tuvo el honor de presidir. Y esta fue una disposición que vino a reforzar realmente el estado de derecho y no a atacarlo, porque para nadie es un secreto que las delegaciones legislativas se venían haciendo sin norma constitucional y habían sido

aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal.

Además, la delegación legislativa no era una invención nuestra sino que estaba aceptada en el derecho comparado y en instituciones avanzadas de otros países. Lo que hizo el constituyente de 1994 fue simplemente darle constitucionalidad a algo que se había hecho práctica y que había sido aceptado por la jurisprudencia como un modo de reforzar el estado de derecho y no de debilitarlo; como un modo de afianzar la división de poderes del Estado, lo cual constituye uno de los pilares de la República, y no para atacar la división de poderes del Estado, porque en esta norma se dice que se puede hacer esto, pero hasta acá y no más allá; y en tales circunstancias y durante determinado tiempo. Es decir que se le está poniendo los límites.

Pero la delegación es una institución típica del derecho administrativo. Siempre se habló de la delegación por la cual se autoriza a que un órgano transfiera a otro el ejercicio de su propia competencia. Lo que ocurre es que en materia legislativa, siempre se ha cuestionado la posibilidad de que el Poder Legislativo pudiera ceder facultades al Poder Ejecutivo.

De todos modos, nuestra jurisprudencia fue reconociendo esto. Por ejemplo, en el caso “Delfino”, de 1927 y a través de una rica jurisprudencia que fue sucediéndose y que incluyó los célebres casos “Mouviel”, de 1957 y el más reciente caso “Cochia”, la Corte Suprema aceptó ampliamente la validez de la legislación delegada.

En el fallo “Delfino” la Corte dijo que no existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona, descargando sobre ella esas facultades.

En los autos “Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ More”, de 1985, el procurador General de la Nación, Juan Octavio Gauna, un destacado miembro del radicalismo —más conocido por “Yuyo” Gauna— sostuvo que la permanente expansión del ámbito de actividades del Estado social impone que la extensión del área legislativa adquiera singulares proporciones, determinando ello la existencia de la controlada y limitada delegación de facultades, sin perjuicio del principio de división de poderes,

ya que el Congreso no pierde la titularidad del poder.

En el artículo 76 de la Constitución Nacional se establecen claramente los límites o las condiciones en base a las cuales se debe fijar esa delegación. Así, empieza con el principio general que es la prohibición. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de interpretar la delegación, porque si es una prohibición y se la admite en ciertos y determinados casos, desde ya que la interpretación debe ser restrictiva y los casos enumerados taxativos, es decir que no se pueden extender por analogía ni por similitud.

Por eso yo digo que si bien el principio es la no delegación, ella se admite en materia de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

De esta manera, se fija claramente que la regla general es la prohibición de la delegación legislativa, lo que impide la existencia de legislación delegada.

A ese respecto, Bianchi dice que “la intención del constituyente ha sido la de prohibir – como regla – toda clase de delegación legislativa, no sólo la que ya estaba prohibida sino también la que estaba permitida a través de la línea jurisprudencial Delfino - Mouviel - Cochia. (Bianchi, Alberto, “La delegación legislativa luego de la reforma constitucional de 1994”, La Ley, 1996-IV, página 769).

Sin embargo, esa regla general tiene dos excepciones: la primera, cuando la delegación se otorgue sobre materias determinadas de administración y, la segunda, cuando se establezca para enfrentar una situación de emergencia pública.

Permítaseme añadir, como una forma de aportar fundamentos a nuestra posición –reiterando, de alguna manera, lo que dije anteriormente– que en la legislación extranjera es común la existencia de normas similares a las de nuestra Constitución en lo que respecta a la delegación de facultades.

Así, a simple título de ejemplo, puedo mencionar que el artículo 76 de la Constitución de Italia de 1947, aunque confirma el principio de división de poderes, admite que el ejercicio de la función legislativa puede delegarse en el gobierno, pero únicamente con determinación de los principios y criterios directivos y sólo por tiempo limitado y con objetos definidos. Cual-

quier similitud con nuestra norma no es casual sino que se la ha tenido en cuenta por parte de los constituyentes de 1994.

Lo mismo ocurre con el derecho constitucional español, ya que el inciso 1º del artículo 82 del Capítulo II, titulado: De la elaboración de las leyes, de la Constitución de España de 1978 – que terminó con la dictadura de Franco – establece que las cortes generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Y este artículo anterior hace referencia a las leyes orgánicas relativas al desarrollo de derechos fundamentales, como libertades públicas, estatutos de autonomía y régimen electoral. Es decir que también en España la delegación tiene que ser concreta, sobre materias determinadas y se excluye el dictado de leyes sobre derechos fundamentales como régimen electoral y autonomías regionales, tema este último que es muy caro para el derecho español.

Asimismo, si analizamos las constituciones de los Estados Unidos y de Alemania también veremos que las normas sobre delegación tienen un hilo conductor que las posibilita, aunque por distintas razones –pudiendo mencionar entre ellas a la emergencia–, y siempre por tiempo determinado y sobre bases y materias prefijadas.

Ahora bien, ¿cuáles son las materias determinadas de administración? Este es el primer supuesto. ¿Qué son materias determinadas de administración? Esto se ha preguntado desde hace mucho tiempo.

Siguiendo a Marienhoff podemos decir que se trata de cuestiones materialmente administrativas que, por ello, corresponderían al ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, aunque por expresa disposición constitucional han sido atribuidas al Poder Legislativo. Es decir que la materia determinada de administración es aquella materia administrativa que normalmente debería corresponder en cuanto a su manejo al Poder Ejecutivo, pero que la Constitución ha puesto en cabeza del Poder Legislativo. Entonces, en virtud de esta delegación se la estamos devolviendo, en ciertos y determinados casos, al Poder Ejecutivo. Esas son las materias determinadas de administración.

Nosotros mismos hemos determinado en alguna medida cuáles son las materias determi-

nadas de administración. Como mencionaba en su magnífica exposición el distinguido colega por Córdoba, el señor senador Molinari Romero —a quien aprovecho para felicitar por la solidez de sus fundamentos— en la ley 25.148 ratificamos la legislación delegada. En su artículo 2º se señala lo siguiente: “A los efectos de esta ley se considerarán materias determinadas de administración, aquellas que se vinculen con: a) la creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y toda otra entidad que por disposición constitucional le compete al Poder Legislativo crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso, el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización; b) la fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno; c) la organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios; d) la creación, organización y atribuciones de un organismo fiscal federal, a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal; e) la legislación en materia de servicios públicos, en lo que compete al Congreso de la Nación; f) toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo, que se relacione con la administración del país”.

O sea que la legislación delegada ya ha sido definida por la ley 25.148 y no necesitamos acudir a interpretaciones doctrinarias. Justamente, teniendo en cuenta esas materias determinadas de administración es que nosotros vamos a delegar algunas facultades al Poder Ejecutivo a través del proyecto que hoy estamos tratando.

Por otra parte, además de las materias determinadas de administración, este proyecto de ley hace referencia a la emergencia pública.

A diferencia de los decretos de necesidad y urgencia, en los cuales el Congreso actúa a posteriori, en este caso el Parlamento actúa a priori. Efectivamente, en el caso anterior, el que decreta que hay necesidad y urgencia a fin de atribuirse potestades legislativas es el propio Poder Ejecutivo. Dice: “Por razones de necesidad y urgencia, yo asumo el Poder Legislativo en estas materias —que, como sabemos, no pueden versar sobre derecho penal, laboral, previsional e impositivo— y lo comunico al Congreso”.

Los dos casos respecto de los cuales la Constitución ha establecido la emergencia son los vinculados con los decretos de necesidad y urgencia y los relacionados con la legislación delegada. La única diferencia es que en este último caso el Congreso actúa a priori. Dice: “Por tales y cuales causas —por necesidad de administración o por emergencia— le vamos a conceder al Poder Ejecutivo ciertas y determinadas facultades”.

El control se hace a priori cuando establecemos los límites, pero también a posteriori, porque interviene la misma Comisión Bicameral Permanente establecida para los decretos de necesidad y urgencia.

Bidart Campos, siguiendo esta línea de pensamiento, entiende que el presidente sólo puede emitir decretos de necesidad y urgencia cuando existe, en razón de la urgencia, la imposibilidad de legislar; mientras que de existir esa posibilidad el Congreso podrá, en todo caso, delegar en el presidente las facultades que crea convenientes. (Bidart Campos, Germán. *Tratado Elemental de Derecho Constitucional*, tomo IV, página 347.)

Barra sostiene que en el caso de la delegación esa intervención posterior del Congreso es posible, aunque no la prevé expresamente la norma constitucional. Es que nada puede impedir que el Congreso se encuentre disconforme con la manera en que el Ejecutivo ejerció la competencia delegada, y derogue o modifique la norma delegada sin perjuicio de su validez y vigencia hasta ese momento. En la situación de emergencia pública, discrecionalmente valorada por el Congreso, lo que excluye su revisión judicial, el legislador entiende que la forma más rápida y efectiva de enfrentarla es a través de la delegación en favor del Ejecutivo, para lo cual debe establecer un plazo para su ejercicio y las bases o políticas.

¿Qué son las bases? Son las finalidades, los criterios, inclusive los medios fundamentales apropiados que la norma delegada deberá respetar. La ley de delegación debe contener estos requisitos para su validez constitucional, los que sí pueden ser examinados por los jueces y respetados por la norma delegada.

Cuando las razones que justifican la delegación se fundamentan en emergencia pública, la Constitución no establece limitaciones por la materia. Como sabemos, los decretos de ne-

cesidad y urgencia no pueden recaer sobre ciertas y determinadas materias. Ahora bien, cuando hay delegación legislativa, ¿se establece algún tipo de límite? No se establecen expresamente –diría yo–, pero efectivamente existen limitaciones porque no se pueden alterar los principios constitucionales básicos.

Al respecto debemos hacer una interpretación armónica de la Constitución para impedir que por vía de la delegación se puedan alterar principios constitucionales fundamentales, porque la emergencia tiene grado y recae sobre determinada materia. Por ejemplo, nosotros sostenemos que la materia impositiva en cuanto a la facultad de crear tributos, es decir, el aspecto constitutivo de la obligación fiscal, no puede ser materia de delegación, así como tampoco la reglamentación de los derechos básicos previstos en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Se podrán preguntar por qué. Porque no hay emergencia que pueda justificarlo. ¿Cuál sería la razón de emergencia para delegar una función para que se reglamente el artículo 14, para que se cree un impuesto o para que se altere el principio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional? No hay razón.

Entonces, en este caso que estamos analizando, si bien la Constitución no lo establece expresamente, yo digo que tenemos que interpretarlo a la luz de todos los principios constitucionales. A algún despistado se le ocurrió decir que estamos delegando facultades que van a modificar el Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal... Algunos dirigentes que están en contra de la delegación han creado un verdadero terrorismo informativo diciendo que podemos delegar facultades de todo tipo, para modificar incluso estos códigos. ¡Es una barbaridad que se haya alarmado a la población sosteniendo semejante disparate!

La Constitución no quiere que se deleguen integralmente las facultades para legislar sobre materia laboral, previsional, de la seguridad o asistencia social. Por ejemplo, el proyecto originario del Poder Ejecutivo enviado a la Cámara de Diputados delegaba facultades para modificar la legislación laboral y previsional sin ningún límite, lo cual habría implicado violar el principio constitucional. Por eso los diputados, con muy buen criterio, las eliminaron totalmente.

Además, debemos tener en cuenta que el Congreso tiene a su cargo todos los poderes residuales no expresamente atribuidos al Poder

Ejecutivo o al Poder Judicial, según lo establece el artículo 75, inciso 32) de la Constitución. Por ello, como poder con algún grado de preeminencia sobre los otros y constituidos por la representación del pueblo de las provincias tiene una competencia exclusiva e indelegable en cuanto a la reglamentación de los derechos básicos. Este es otro principio a tenerse en cuenta.

En este sentido, Manuel María Diez ha sostenido que la reglamentación de derechos privados debe realizarse por medio de una ley formal, ya que así lo establece la Constitución al disponer que los derechos se ejerzan de acuerdo a las leyes que lo reglamenten. (Diez, Manuel María, *Manual de derecho administrativo*, tomo I, página 102.)

Señor presidente: me extiendo respecto de este punto porque se ha distorsionado tanto esta cuestión de la delegación de facultades que da la sensación de que esta norma va a sentar un precedente legislativo en esta materia. Si bien, como dije al principio, ya hemos hecho delegaciones en otras oportunidades, dada la trascendencia que ha tenido el tema –por el *streptitus forum*, como decimos los abogados– creo que debemos prestarle cierta atención. Por eso me he permitido hacer algunas anotaciones para procurar hacer una exposición con alguna prolijidad dentro del escaso tiempo que hemos tenido, no para formar convicción sino para buscar antecedentes.

¿Qué son las bases de la delegación a que se refiere al artículo 76 de la Constitución? Por base debe entenderse a las políticas, finalidades, criterios, incluso, los medios fundamentales apropiados. Es decir, queda prohibido al Congreso efectuar una delegación de funciones propias, sea amplia o restringida, si no se fijan en la misma ley delegante esas bases a las que el Poder Ejecutivo deberá ajustar las normas delegadas.

Pero es necesario ser prudentes en cuanto a la extensión y detalle que se exijan a dichas bases. Al establecerlas no se puede pretender que se haga un detalle pormenorizado, minucioso y detallado de todo lo que debe contener la ley que debe dictar el Poder Ejecutivo, porque si fuera así podríamos dictarla nosotros, sin que haga falta que deleguemos facultades.

Entonces, la interpretación tiene que ser racional y razonable. Debemos establecer los principios, propósitos y finalidades, pero no con una

minuciosidad tal que lo único que haría el Poder Ejecutivo sería reglamentar la norma que nosotros estaríamos sancionando. Por eso la interpretación tendría que ser bastante prudente en ese punto.

¿Por qué la Constitución establece que tienen que determinarse las bases de la delegación? Para poder ejercer el posterior contralor. Para que nosotros como poder delegante, como poder concedente, podamos controlar después si el Ejecutivo se ha ajustado a nuestras previsiones en materia de delegación. Para que veamos si realmente los propósitos, finalidades, criterios y principios son los que nosotros hemos establecido. En efecto, nosotros establecemos los parámetros, el marco del cual no se puede salir el Poder Ejecutivo. Por eso se establecen las bases. No es una delegación cualquiera. Luego vamos a hablar del famoso artículo 29.

Es decir que esta explicitación de las bases permite el posterior análisis y control para verificar que el Poder Ejecutivo no se ha extralimitado en su función, si con dicho decreto no respeta las finalidades y criterios bajo los cuales el Congreso realizó tal delegación.

¿Qué vamos a controlar nosotros después? Es un tema importante porque estamos haciendo una delegación. ¿Vamos a controlar la legalidad y también la oportunidad y el mérito, que son los elementos del acto administrativo o del acto legislativo? Entendemos que nuestro control se puede referir exclusivamente a la legalidad. Nosotros no podemos controlar ni el mérito ni la oportunidad del acto. Debemos ser conscientes de que cuando delegamos estamos cediendo la facultad legal de dictar la norma dentro de ciertos parámetros. Pero desde mi punto de vista, no podemos entrar a controlar, analizar ni juzgar el mérito, la oportunidad ni la conveniencia, dado que son facultades que le corresponde al ente delegatario; en este caso, al Poder Ejecutivo.

¿Quién es el titular de la delegación? Indudablemente, el titular de la delegación es únicamente el Poder Ejecutivo. Esto debe quedar claro porque todos los días se escucha o se lee en todos los medios, como si fuera una muletilla, que estamos dando poderes extraordinarios al ministro Cavallo. Esto no es lo que estamos haciendo nosotros; estamos delegando una facultad constitucional al señor presidente de la Nación. De acuerdo con el artículo 87 de la

Constitución, el único titular del Poder Ejecutivo es el presidente de la Nación.

Por supuesto que es así. No obstante, voy a proponer a modo de recomendación, que todos los actos que dicte el Poder Ejecutivo como consecuencia de la delegación de facultades, además de ser refrendados por el señor jefe de Gabinete de Ministros, se hagan en acuerdo general de ministros. Esto sería una forma de ampliar el ámbito de responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque también lo son los que refrendan el acto.

Dicho esto, reitero que debe quedar claro que el único titular de la delegación es el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación. Y hago esta aclaración no sólo por esta circunstancia política y por los comentarios periodísticos sino también porque en alguna jurisprudencia de la Corte se autorizaba la delegación en cuerpos administrativos. Eso no lo admite la Constitución y nosotros no lo podríamos decidir. La delegación se hace al titular del Poder Ejecutivo, al presidente de la Nación que, según el inciso 12) del artículo 100 de la Constitución Nacional, debe contar con el refrendo del señor jefe de Gabinete de Ministros, sin lo cual los actos estarían viciados de nulidad absoluta.

El órgano de control parlamentario es la Comisión Bicameral Permanente. El hecho de que no esté creada no implica que el Congreso pierda la facultad de controlar. En el proyecto se establece la creación de una comisión para el control de las facultades y, en ese sentido, nuestro bloque propondrá que hoy mismo dictemos una resolución por la que se constituya dicha comisión para el ejercicio del control de la legislación delegada.

La ley 24.631, en su artículo 8º, establece que hasta tanto se cree la Comisión Bicameral Permanente las funciones serán ejercidas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso. Esta sería una solución transitoria hasta tanto se cree la mencionada Comisión Bicameral Permanente.

Queda claro que como un ejercicio de esa facultad de control, aunque no se lo diga expresamente, el Congreso tiene la posibilidad de derogar o modificar esas normas delegadas por razones de legalidad a través de la comisión que creamos oportunamente.

Sr. Branda. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Menem. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Losada). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor presidente: seré muy breve.

Solamente pedí esta interrupción a efectos de reforzar lo que dice el señor senador Menem respecto de este tema, que luego obviaré en mi exposición en general.

Me parece que no debemos olvidar lo que es el doble control ya que el Poder Judicial también tiene la facultad del control de constitucionalidad mediante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Creo que no podemos dejar de mencionar este juego armónico de los poderes porque si el Congreso delegara inconstitucionalmente, el Poder Judicial estaría en condiciones de revocar esa situación.

En este sentido, más allá de las facultades de delegación que nos compete como Poder Legislativo y de aquellas vinculadas con el ejercicio por parte del propio Poder Ejecutivo, el control de constitucionalidad también existe por parte del Poder Judicial.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Señor presidente: agradezco la intervención del señor senador por Formosa porque lo que acaba de manifestar es muy pertinente.

No sólo se trata del control que vamos a ejercer como poder delegante, sino también del inherente al Poder Judicial a través de sus jueces de declarar la inconstitucionalidad, aun de oficio, de acuerdo con lo que fija la Constitución reformada en 1994.

Señor presidente: el señor senador por Córdoba expuso muy bien la cuestión del artículo 29. Con las amenazas por estos asuntos nos han querido quitar el sueño. Un senador de mi bloque decía muy graciosamente: “La perpetua es muy larga, si es que nos aplican lo que menciona el artículo 29 de la Constitución”.

Se hizo terrorismo, señor presidente. A nadie se le ocurra que ejercer una facultad constitucional como la del artículo 76 puede tener algo que ver con el artículo 29 de la Constitución

que, como bien lo explicó el señor senador Molinari Romero, tiene una razón de ser histórica. Esto ha sido porque en algún momento en la provincia de Buenos Aires se dictó una ley poniendo a merced del entonces gobernador la fama, la fortuna y el honor de los ciudadanos. Efectivamente, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó leyes por las que se otorgaron poderes extraordinarios y la suma del poder público al entonces gobernador Juan Manuel de Rosas. El 6 de diciembre de 1829 esa Legislatura lo inviste de las facultades extraordinarias que “juzgue necesarias” para arreglar la administración interior, proveer a sus necesidades, prevenir ataques y afianzar el orden y la tranquilidad pública.

La ley del 7 de marzo de 1835 deposita la suma del poder público de la provincia en la persona del gobernador sin más restricciones que las que paso a enunciar. Fijense qué parentesco puede haber entre aquellas disposiciones y ésta; las únicas limitaciones que había para el gobernador eran las siguientes: deberá conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana; deberá sostener y defender la causa nacional de la Federación que han proclamado todos los pueblos de la República. Por su parte, el artículo 3º decía: “El ejercicio de ese poder extraordinario durará por todo el tiempo que, a juicio del gobernador electo, fuese necesario”; es decir, indefinidamente.

Por si esto fuera poco, como dicen algunos vendedores, la ley del 20 de setiembre de 1851 completa la atribución de la suma del poder público cuando pone fondos, fortuna, vida y fama a disposición de Rosas, concentrando en él todas las funciones de gobierno.

¿Qué tiene que ver lo que estamos haciendo hoy, dentro de la Constitución, con todos los parámetros legales, con todos los controles y garantías, con las instituciones de la República funcionando a pleno, con un Senado, con una Cámara de Diputados, con un Poder Judicial, con un Ministerio Público extra poder —según sostienen algunos— con todo aquello? Hay que ser exagerado para pretender comparar ambas cosas. Porque, además, esto de amenazarnos con el artículo 29 lo decían con un tono melodramático; prácticamente, era para meter miedo. A mí me pareció bastante grotesco.

Sobre este tema Segovia dice que la norma del artículo 29 es inaplicable a la delegación de

facultades legislativas, ya que la misma “no envuelve la concesión de poderes absolutos extraordinarios; tampoco constituye en supremo al Poder Ejecutivo ni significa un sometimiento del Poder Legislativo. La delegación de facultades legislativas implica un traspaso de facultades legislativas normales, ordinarias y controlables por el Congreso”. (Segovia, Juan Fernando. “Delegación de facultades legislativas” en *Atribuciones del presidente argentino*, página 323.)

Es decir, ¿qué facultades extraordinarias estamos cediendo? Acá lo dice Segovia: estamos cediendo facultades ordinarias, facultades nuestras. Lo extraordinario son la circunstancia y la excepcionalidad. Es extraordinario que hoy nosotros tengamos que ceder, pero las facultades que cedemos no son extraordinarias. Por ello, digo que si no hubiera existido el artículo 76 de la Constitución de 1994, quizá, podríamos haber invocado el artículo 29 de la Carta Magna para hacer la delegación. Porque lo que prohíbe el artículo 29 es hacer delegación de facultades extraordinarias, pero de ningún modo prohíbe la delegación de facultades ordinarias. Por eso se han venido haciendo durante todo este tiempo, aun antes de la sanción del artículo 76 de la Constitución Nacional.

Hay algunos que invocan al artículo 29 para castigarnos. Yo lo invoco a favor de nuestra posición, porque estamos cediendo facultades ordinarias y, de ningún modo, facultades extraordinarias.

Por eso, sostiene García Lema, analizando el artículo 76, que la idea que anima esta prohibición es que el Congreso no está habilitado para delegar en bloque en el presidente todas sus facultades legisferantes porque ello está impedido por el artículo 29 de la Constitución, que sanciona tal acto con nulidad insanable y sujeta a los que la formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de infames traidores a la Patria. Como consecuencia de esa regla, la delegación legislativa tampoco puede importar la transferencia lisa, llana y definitiva de la facultad de legislar sobre ciertos asuntos. Esto sostiene –reitero–, el doctor García Lema en “Delegación legislativa” en *La reforma de la Constitución*, página 400. Está demás decir que García Lema fue uno de los convencionales constituyentes que intervino en la redacción de este artículo.

Estas son, señor presidente, las consideraciones que, en general, nos merece este proyecto.

En el libro *La Constitución reformada*, que tenemos con el doctor Dromi, que alguna vez ha sido motivo de “chanzas” acerca de quién ha escrito tal o cual parte –veo que se ríe el senador Villarroel, pero esta parte la escribimos entre los dos– coincidimos sobre esta materia. En esa obra hablamos de un sistema policéntrico de producción del derecho en el sentido de que el derecho no es creado sólo por el Poder Legislativo. Lo crea también el Poder Ejecutivo por atribución propia y a través de sus distintos órganos administrativos. Y también lo crea ese poder por cesión del Poder Legislativo. Se trata, como he dicho, de un sistema policéntrico de producción del derecho. En este caso, dentro de este sistema estamos cediendo ciertas facultades nuestras al Poder Ejecutivo, para que las ejerza.

Con relación al proyecto en análisis, voy a ser breve en su consideración porque lo hizo muy bien el senador Molinari Romero. Pero quiero hacer alguna referencia que considero necesaria.

¿Cuáles son las facultades en materia de administración en el proyecto en tratamiento? Son las indicadas en el artículo 1º, punto I, que se encuadran claramente en esos parámetros. Debo decir que hay algunas imprecisiones en este artículo 1º, que deberíamos aclarar para su correcta interpretación posterior. Se habla de reparticiones descentralizadas y desconcentradas. En primer término, el concepto “repartición” no tiene un sentido jurídico preciso. ¿Qué es una repartición? En derecho administrativo no se habla de repartición. Se habla de órganos, de entes. Gordillo afirma que el órgano, que es un medio para imputar una actuación o una voluntad al ente del que forma parte, no constituye una persona diferenciada del mismo, sino que se confunde como parte integrante de él; no tiene pues derechos o deberes diferenciados del ente del que se desprende. Así, los principales órganos de la administración central son el propio presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros, direcciones generales, etcétera.

Dromi, recién citado, afirma en otro libro que hay desconcentración cuando la ley confiere regular y permanentemente atribuciones a órganos inferiores dentro de la misma organización de una entidad pública. El órgano

desconcentrado carece de personalidad jurídica y patrimonio propios, y está jerárquicamente subordinado a las autoridades superiores del organismo. Por ejemplo, organismos recaudadores, fuerzas de seguridad, entes que cumplen con función administrativa de policía.

Por ello, debe entenderse que la norma indicada, en sus incisos *a)* y *b)*, se refiere a entes autárquicos y órganos desconcentrados.

En cuanto al inciso *c)*, cuando indica: "Sujeta al personal de los entes comprendidos en los supuestos contemplados en el inciso *b)* a las normas del derecho común..." —y les solicito que prestemos mucha atención a este tema—, debe entenderse que se refiere a los nuevos entes descentralizados que eventualmente se crearán en uso de facultades delegadas y no a las entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas que quedan sujetas a la transformación.

Entendámonos bien: se sujeta a las normas de derecho común a las personas de los nuevos entes que se crean, no a las de los ya existentes. Sería inaceptable la posibilidad de modificar la situación jurídica del personal de dichas entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, dado que ese personal presta servicios para el Estado nacional y respecto del mismo mantiene plena vigencia la ley 25.164 de empleo público y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantizan la estabilidad del empleado público. No puede aceptarse entonces que una parte del personal quede sujeto a la estabilidad del artículo 14 bis y la otra quede sujeta a normas de derecho común.

Quiero puntualizar que cuando digo que voto este proyecto de ley con convicción, lo hago también en el entendimiento de que no estamos afectando la estabilidad del empleado público porque ella es una prescripción constitucional perfectamente establecida en el artículo 14 bis. Entonces, si nosotros dictáramos una norma en contra de esa disposición, sería inconstitucional.

Entiendo entonces que estamos legislando en el sentido que acabo de mencionar, y con esos alcances daré mi voto afirmativo por considerar que no se afecta la estabilidad del empleado público, que está protegida —repito— por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Después me referiré al tema de los entes públicos no estatales, ya que allí también existe

un problema que puede generar algunas interpretaciones encontradas. Pero es un asunto que abordaré en la consideración en particular a efectos de no extender demasiado esta exposición.

Dentro del artículo 1º, luego del apartado I relativo a "Materias determinadas de su ámbito de administración", se habla en el II de "Emergencia pública". Nosotros solicitamos a la Cámara de Diputados que incluyera en el texto la referencia a la emergencia pública, que inicialmente no figuraba. Es cierto que en una ley anterior —la 25.344— nosotros habíamos declarado al Estado en emergencia económico-financiera. Esa declaración de emergencia está vigente. Pero de todos modos, como ésta es una ley muy particular por lo que decíamos al principio, no está de más esta declaración. Felizmente, los señores diputados introdujeron ese concepto en el texto de la norma, que es en realidad lo que da razón de ser a estas facultades excepcionales que nosotros estamos considerando.

No cedemos facultades extraordinarias. Estamos frente a una situación excepcional en la que nosotros delegamos facultades al Poder Ejecutivo porque —y de esto no cabe duda— nos encontramos en un estado de emergencia.

No voy a hacer el chiste de que cada vez que asume un gobierno radical entramos en la emergencia; no voy a hacer ese chiste ...

— Murmullos en el recinto.

Sr. Menem. — ...pero la verdad es que estamos en emergencia.

Sr. Gioja. — No es un chiste; es la realidad.

Sr. Menem. — Estamos en emergencia.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Menem. — Y los indicadores de la realidad así lo demuestran.

Pregunto: ¿hace falta demostrar la emergencia? Considero que, no.

Fíjese, señor presidente: también me tocó hablar de la emergencia cuando en 1989 fundamente la ley 23.696. Parece que ahora nuevamente me corresponde hacerlo.

En aquella oportunidad, cité palabras de quien fuera viceministro de Economía del gobierno radical —el doctor Canitrot— quien decía que le iban a dejar al peronismo una situación inmanejable. La casa está incendiada; el Estado está destruido; un desastre.

En ese momento quizás era más fácil fundamentar la situación. Yo decía en aquel entonces que la emergencia se palpaba, se tocaba. Recordemos cuál era el contexto: una inflación del 5 mil por ciento, problemas en los supermercados, el Banco Central sin reservas, etcétera.

Hoy los indicadores son distintos, pero también estamos ante una emergencia. Nos encontramos ante una delicada situación fiscal. Se ha dicho que estamos al borde del *default*. Los bonos de la deuda argentina han descendido a valores mínimos. La sobretasa conocida como “riesgo país”, que nos obliga a pagar intereses de locura, se ha elevado. Luego de anunciado el blindaje financiero a principios del año, el déficit fiscal se ha descontrolado proyectándose a cifras inusitadas. Los índices de pobreza y desocupación crecen de modo alarmante. Se suceden conflictos sociales con manifestaciones como los cortes de ruta en todo el país y la misma situación del gobierno es preocupante; no es que ésa sea la emergencia.

Pero la delicada situación por la que atraviesa el país trajo como consecuencia que en diez días la crisis devore a un ministro de Economía y se deba nuevamente cambiar en forma total el plan económico, el ministro y todo su equipo de trabajo. Estas son las consecuencias de la crisis y de la emergencia.

¿Cómo vamos a desconocer que estamos en emergencia y que, por lo tanto, se justifica la aplicación de esta cláusula constitucional por la cual estamos delegando facultades al Poder Ejecutivo! De todos modos, esta delegación será por el término de un año; algunos entienden que tendría que perdurar nada más que hasta noviembre; ello, por la duración de la emergencia dictada en la ley anterior. Pero no voy a entrar en esa interpretación; eso lo harán otros senadores.

Por mi parte, considero que cumplimos con la Constitución; y el límite establecido es de un año.

Recuerdo que la ley a la que hacía referencia —la 23.696— determinaba que el plazo era de seis meses prorrogable por otros 180 días; después se volvió a prorrogar. Es decir que varias veces nos hemos encontrado en estado de emergencia y, además, los decretos de necesidad y urgencia —que tanto nos criticaron en su momento— también eran una manifestación de la necesidad de legislar de esa forma.

Y quiero comentar algo antes de terminar. Cuando se habla de que estamos cediendo facultades, invito a todos a examinar el proyecto porque algunos hablan sin haber hecho una lectura detenida. Este proyecto de ley tiene más limitaciones de las que yo he conocido hasta ahora en cualquier otra ley de delegación de facultades.

Fíjense que el artículo 1º, por ejemplo, cuando habla de transformar entidades autárquicas, reparticiones, etcétera, dice: “...para que puedan cumplir su objeto sin más limitaciones que las que determinen las necesidades de un mejor funcionamiento y eficacia en su gestión o resultado de la Ley de Administración Financiera...”. Ahí ya se está estableciendo un contralor.

En el inciso c) se menciona que “...Las normas que se dicten a tal efecto garantizarán a los trabajadores la preservación de los derechos adquiridos en virtud de la ley marco...”; en el inciso d) se habla de “Desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros, garantizando el debido control del sector”. En el inciso f), luego de mencionar al principio “Con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración (allí está estableciendo una base), podrá derogar total o parcialmente aquellas normas...” y dice en su última parte: “...adecuando sus misiones y funciones; excepto en materia de control, penal o regulatoria de la tutela de intereses legítimos o derechos subjetivos de los administrados, y con respecto al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

En el punto de la emergencia pública, se habla de “Crear exenciones, eliminar exenciones excepto aquellas que benefician los consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales, sociedades cooperativas, mutuales, asociaciones..., con el objeto de mejorar la competitividad de los sectores y regiones y atender situaciones económico-sociales extremas...”.

Es decir, en todo el texto de la ley campean las limitaciones, las bases, los principios y todos aquellos parámetros que están indicando que no se cede cualquier cosa para cualquier fin sino que se cede sobre ciertas materias para ciertos y determinados fines.

Y cuando se habla del tema de las exenciones, quiero dejar bien en claro que esta eliminación de exenciones no puede afectar de ningún

modo a los beneficios promocionales que están establecidos en algunas provincias de nuestro país porque, en primer término, se trata de derechos adquiridos. Por lo tanto, si nosotros diéramos facultades para afectarlas sería inconstitucional. A su vez, la propia iniciativa que estamos considerando lo dice: "Crear exenciones, eliminar exenciones excepto aquellas que benefician los consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales...". Es decir que los beneficios promocionales no se tocan; están amparados por otra ley y si alguien se anima a tocarlos estaría violando no sólo el compromiso político asumido sino también la Constitución y la propia ley que hoy vamos a sancionar.

Señor presidente: un autor sostuvo que más allá de lo bien o mal que se la emplee, la delegación es un instituto que está incorporado en la naturaleza de cualquier organización pública o privada. Y no en vano ha sido aceptada sin cuestionamientos en ordenamientos jurídicos mucho más avanzados que el nuestro.

Hoy estamos haciendo un aporte a la gobernabilidad. No estamos cogobernando desde nuestra posición como oposición; estamos sí haciendo un aporte a la gobernabilidad. Estamos actuando con una alta dosis de sentido de responsabilidad frente al requerimiento del Poder Ejecutivo, quien nos ha pedido la sanción de este proyecto de ley. Ha sido trabajado y consensuado en la Cámara de Diputados y produjo algunos cortes transversales en los bloques políticos de ese cuerpo. Pero, en definitiva, nosotros no podemos soslayar todas estas circunstancias en nuestras consideraciones.

Quiero terminar haciendo una reflexión. Cedemos las facultades legislativas con todos estos parámetros porque muchas veces, más allá de la rapidez en la sanción de las leyes, en las situaciones de emergencia los tiempos parlamentarios no se suelen compadecer con los tiempos en que hay que tomar las decisiones políticas. Esto lo sé por experiencia, porque lo he vivido con nuestro gobierno. Muchas veces hay que actuar mucho más rápido que lo que puede hacer el Parlamento.

El Congreso de la Nación está actuando con mucha premura, con mucha rapidez. Hemos sesionado el sábado y el domingo durante toda la noche. Pero no siempre puede ser así, no siempre se logran los consensos de manera tan rápi-

da. Si nosotros concedemos estas facultades, porque los tiempos parlamentarios a veces no se compadecen con los tiempos políticos, creo que lo menos que podemos pedir es que el Poder Ejecutivo ejerza esas atribuciones con suma prudencia, que sea respetuoso de los límites. Pero también que sepa aprovechar estos tiempos que le estamos dando. No vaya a ser que necesite sancionar una norma de estas que nosotros estamos delegando y que, por la situación política existente dentro de la alianza gobernante, —y lo digo sin malicia—, en virtud de ese tironeo permanente al que se ve sometido el Presidente de la izquierda y de la derecha, demoren las decisiones y estas delegaciones no sirvan para nada.

Creo que éste es un acto de confianza en el gobierno nacional, en el presidente de la Nación.

Quiero decir que confío —ésta es una posición personal— en el hombre de derecho que ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, en el doctor Fernando de la Rúa. Hemos ido a la misma Facultad de Derecho en Córdoba y hemos tenido casi los mismos profesores. Creo que tenemos la misma formación jurídica. No sólo espero sino que creo que en el ejercicio de estas facultades no nos va a defraudar. Considero que las va a ejercer con prudencia y en miras de los altos objetivos para los cuales ha concitado el voto de casi el cincuenta por ciento de los argentinos. Y si así no lo hiciere Dios y la Patria se lo van a demandar.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente, señores senadores: éste es un tema que sin duda alguna tiene una tremenda importancia. Y es difícil para mí fijar una posición después del criterio que adopté en 1994, cuando con motivo de las elecciones de constituyentes me opuse en mi provincia a la reforma constitucional de aquel año. A pesar de ello, fui electo convencional constituyente, juré por esta Constitución y creo —debo decirlo con sinceridad y sin ningún tipo de arrepentimiento— que se han introducido algunos institutos que son importantes para la vida del país, sin que por ello renuncie, de ninguna manera, a defender a la sabia Constitución de 1853/60.

Creo que es necesario recalcar este concepto, señor presidente. Y debo decir que para ser

coherente —como he tratado de serlo durante toda mi vida pública en cuanto a las posiciones que adopto—, voy a formular en este momento algunas reflexiones y algunas críticas a esta delegación de facultades. No obstante, ante la emergencia que vive el país, adelanto mi voto favorable en general.

Ha sido siempre un concepto pacífico de la mejor doctrina aquel que dice que el rasgo esencial del Estado constitucional es la limitación y el control del poder por medio de la división del mismo, creándose así un sistema de frenos y contrapesos cuyo objetivo es que cada órgano gubernativo se desempeñe dentro de su respectiva órbita, en forma independiente pero coordinada. Esta fragmentación del poder está destinada a preservar el goce de la libertad de los habitantes y la plenitud de sus derechos constitucionales.

Por eso, señor presidente, la práctica institucional de los últimos años anteriores a la reforma de 1994, desleal en su mayor parte a los principios de la sabia Constitución de 1853/60 —como he denunciado en forma permanente y lo dije hoy— y la evolución socioeconómica del país, han dejado en clara evidencia el avance desmedido del poder central, que se ha nutrido y fortalecido a costa de los poderes provinciales, desnaturalizando nuestro federalismo constitutivo, que por historia y tradición se encuentra arraigado profundamente en las raíces de las comunidades del interior del país.

Por otra parte, señor presidente, el órgano ejecutivo se autoprivilegió por sobre los restantes. Siempre sostuve —por cierto en forma desencantada— que no podíamos mantenernos ajenos al esquema que significaba reconocer la creciente fortaleza del Poder Ejecutivo —esto lo dije en la Convención Constituyente de 1994—, más que por imperio constitucional por el propio peso de circunstancias políticas y económicas que condujeron, según mi criterio, a provocar una reformulación del equilibrio del poder en favor del poder administrador a partir de la última reforma constitucional. Y no, como sostuvieron sus impulsores, una atemperación de ese poder.

La Constitución argentina de 1853/60 no autorizaba tanto poder al Ejecutivo, ni la posibilidad de que emitiera decretos de necesidad y urgencia, ni que el Poder Legislativo le delegara su función natural. Esta práctica de con-

centración del poder desgraciadamente se fue acrecentando en los últimos años, y es claramente violatoria del sistema de gobierno republicano, ya que lesiona la división de poderes que lo caracteriza, provocando una marcada inseguridad jurídica al diluirse sus límites; por consiguiente, afecta el vital equilibrio entre aquellos.

Es cierto que las experiencias acumuladas desde el restablecimiento de la democracia marcaban la necesidad imperiosa de revitalizar los canales de comunicación e interconexión entre los poderes del gobierno y generar nuevas vías que, sin desvirtuar el sistema, tendieran a oxigenarlo especialmente en lo concerniente a la relación entre los poderes políticos del Estado.

Pero esta necesidad podía concretarse ejercitando los medios y facultades que el esquema político constitucional proveía a cada uno de los órganos estatales, recreando aquellos que aparecían superados y procreando nuevos que procuraran tales fines. El equilibrio de los poderes debe reflejarse ante los ojos de la comunidad, no bajo la forma de contienda entre sus actores, sino bajo la característica de cooperación y coordinación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. León.

Sr. Romero Feris. — Por eso siempre sostuve —y así lo manifesté hasta el cansancio antes de la reforma constitucional de 1994— que la coordinación reclamada debía partir, más que de la flexibilización de las competencias constitucionales de los poderes —como sugirió por momentos la Corte en el famoso caso “Peralta”—, del ejercicio firme de dichas facultades por cada uno de ellos, reclamando la decisión última en aquellas cuestiones que corresponden a su jurisdicción originaria y que por razones extraordinarias habían sido transitoria o permanentemente acaparadas por otro poder.

En este sentido, nunca procuré estancarme en la justa crítica de estas actitudes extraconstitucionales, siendo consciente de que debía proponer ideas, formas y reformas que contribuyeran a retornar y encuadrar los excesos y a restablecer la armonía en las relaciones a través de la búsqueda coordinada de los fines y las necesidades, respetando las competencias constitucionales originarias.

Lamentablemente, en este aspecto la misión que la Constitución Nacional le tiene asignada a nuestro máximo tribunal, como único poder no político del gobierno, no fue eficientemente ejercida, por lo que la Corte se vio continuamente inmersa en la puja de los poderes políticos del Estado, produciéndose efectos críticos respecto de la credibilidad de sus fallos y provocando una crisis social de confianza que tiñó a todo el Poder Judicial.

Como he sostenido antes, durante y después de la Convención Constituyente de 1994, las modificaciones introducidas en nuestra Constitución, relacionadas con el funcionamiento de los poderes, lejos de lograr el objetivo de atenuar el rígido presidencialismo argentino, han conformado el férreo circuito jurídico que provoca tres claras consecuencias: mayor concentración de poderes en el Poder Ejecutivo, desnaturalización de la filosofía republicana del control y consolidación en el sistema político de grandes partidos nacionales.

Es que bajo el objetivo aparente de atenuar el presidencialismo argentino, la reforma institucionalizó los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa que nos ocupa y la promulgación parcial de las leyes, todas prácticas patológicas que el Ejecutivo acostumbraba a ejercer.

Los nuevos institutos nombrados, sumados a otros que no cabe analizar en este momento, perfilaron el nuevo diseño de poderes que estatuye la Constitución vigente, la cual marca un claro predominio del órgano administrador.

Señor presidente: el tema de la constitucionalidad y los límites de la delegación de facultades legislativas por parte del Congreso al poder administrador constituye desde hace muchos años uno de los dilemas de nuestro derecho que no pudo ser previsto por la Constitución de 1853-1860, ya que nació como consecuencia de la creciente complejidad que adquirieron las funciones estatales a partir de la segunda década del siglo pasado.

La reforma de 1994 recogió en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, estableciendo en el primer párrafo el principio que prohíbe la misma y, a continuación, las excepciones que desmienten la afirmación anterior: "...salvo —como dice acá— en materias determinadas de administración o de emergencia pública".

Afortunadamente, el citado artículo 76 fija que el Congreso debe estipular un plazo durante el cual el Ejecutivo puede emitir reglamentos delegados en las materias autorizadas. Y condicionó la validez de estos reglamentos al control previo de la Comisión Bicameral Permanente.

Pero lamentablemente, señor presidente, esta comisión aún no ha sido reglamentada por el Congreso, a partir de las trabas y dilaciones que los partidos en el gobierno evidencian cuando se trata de poner en marcha institutos que tienen por fin ejercer el control o la limitación del poder. Se impone entonces en ese momento cumplir lo más inmediatamente posible con esto que manda la Constitución.

Por otra parte, no debemos olvidar de ninguna manera que nuestra Corte Suprema definió su doctrina vigente en el discutido caso "Cochia", fulminando de nulidad las delegaciones que impliquen el traspaso total del poder, quedando afuera aquellos actos de delegación parcial. La validez de la delegación radica, según la propia Corte, en que la política legislativa esté claramente establecida, lo que implica un compromiso y una responsabilidad que el Congreso debe asumir sin ningún tipo de titubeos.

Señor presidente: son conocidos los efectos nocivos que puede traer la invocación de la emergencia como medio legitimador de situaciones que escapan de los marcos jurídicos previamente establecidos. El peligro de un régimen de emergencias está dado por su abuso.

El Poder Legislativo no puede ni debe eludir competencia. Todos sus integrantes debemos comprender y asumir la responsabilidad que nos cabe en esta difícil etapa por la que transita la historia de nuestro país. No es nuevo el llamado a relegar intereses y coyunturas políticas en pos de la conveniencia y consolidación institucional de la República.

El Congreso no puede delegar emitiendo cheques en blanco y debe ejercer vigorosamente su función de control. Por supuesto que debe hacerlo fielmente y dentro de su marco constitucional evitando actitudes de bloqueo.

Señor presidente: ayer el diario "Clarín" publicó un artículo de mi autoría en donde ponía límites a esta delegación de facultades. En el correcto cumplimiento de esta atribución radica la diferencia de desempeñar con responsabilidad los roles que naturalmente la Constitución asigna al órgano de gobierno que constituye la

sede directa de la soberanía popular o entregar al Poder Ejecutivo lisa y llanamente la función de legislar.

A partir de estos conceptos enraizados en mi íntima convicción republicana, no ignoro que hoy la sociedad espera un acto de renunciamento de la dirigencia política nacional en pos de una unión que permita afrontar la grave crisis económica y social que vive el país.

Por eso, este pedido de facultades especiales nos encuentra a muchos de nosotros enfrentados entre nuestras convicciones y el riesgo cierto del abismo institucional que la Nación afronta.

Para terminar con estas consideraciones, reflexiones, opiniones y convicciones, por las circunstancias señaladas y sopesada en mi ciencia y conciencia la difícil situación por la que atravesamos, el bloque Autonomista votará afirmativamente en general el proyecto en tratamiento. Espero que esta vez los grandes esfuerzos que nuestro pueblo realiza no sean en vano.

Sr. Presidente (León). – Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. – Señor presidente: intentaré hacer una lectura de la situación desde otro ángulo del que se lo ha hecho hasta el presente. Puede ser que actúe en función de mis capacidades para analizar el proyecto de ley que hoy nos convoca, pero en realidad lo hago fundamentalmente trayendo a mi memoria el origen de la iniciativa que hoy vamos a estudiar, que se remonta a un proyecto de ley indivisible remitido por el Poder Ejecutivo, de urgente tratamiento –porque de lo contrario el país sucumbía– y que era imposible de ser tocado en ninguno de sus artículos.

La Cámara de Diputados lo debatió, entendió la conveniencia de dividirlo en dos proyectos de ley para tratar, en primer término, las normas concernientes a la recaudación, que permitía brindarle recursos al Estado, que está agonizando en una situación terminal y, en segundo lugar, considerar la segunda mitad del proyecto en cuestión.

Posteriormente, fue enviado al Senado, que en forma inmediata lo consideró el viernes pasado con la presencia en las puertas del Salón Eva Perón del señor ministro de Economía, quien nos amenazaba con entrar al recinto para que tratáramos la iniciativa de manera integral, porque su consideración no se podía postergar ni modificar.

La conclusión a la que arribamos los que seguimos el tratamiento irregular y maratónico que hizo la Cámara de Diputados de la Nación los días viernes, sábado, domingo, lunes, hasta las últimas horas de ayer, es que se efectuaron ricas modificaciones; esas que es capaz de efectuar un cuerpo colegiado a un proyecto que viene elaborado por un grupo de asesores bajo el mandato de un director o de un rector ideológico, con el fin de darle un camino o una luz a la iniciativa parlamentaria.

Lo que se aprobó no es el proyecto original. Hoy estamos considerando algo totalmente distinto de lo que vino del Poder Ejecutivo nacional, que era temerario. Muchos de los que hoy dicen, según lo que fija el artículo 29 de la Constitución Nacional, que estamos haciendo terrorismo, plantean cambios importantes. Repito, el proyecto que venía del Poder Ejecutivo nacional era muy temerario, muy lesivo para las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Esto demuestra la vigencia del Poder Legislativo y me demuestra a mí, personalmente, que las emergencias no tienen por qué ser de largo plazo, que tiene que darse el tiempo suficiente y necesario como para producir estas correcciones que imperan en nuestro sistema de vida, fundamentalmente, en nuestro sistema económico y social.

Hoy no me voy a expresar como lo han hecho quienes me precedieron en el uso de la palabra, o efectuando una rica exposición como las realizadas por algunos señores diputados estudiosos –que han sido valiosísimas–, que recurrieron a todos los argumentos de la literatura jurídica en la materia. Simplemente voy a señalar lo que ocurre en la calle; me voy a referir a los problemas vinculados con la emergencia y con las necesidades que hoy se plantean, a la asociación entre la emergencia cívica –que vamos a declarar– y la realidad del país. Es decir, aquello que mira la gente, la sociedad, y lo que observó respecto de aquellos temas que son de mi incumbencia porque ocurren en el ámbito de la provincia a la que represento.

Me formulo la siguiente pregunta, ¿cuál es el gabinete de crisis? Repito, ante semejante emergencia, ¿cuál es el gabinete de crisis? ¿Cuáles son las directivas que se han impartido al gabinete de crisis? O lo que ocurre es que como la Alianza no está de acuerdo no se nombró al

ministro de Desarrollo Social. Si esto es así, la cuestión no es humanitaria, sino financiera y fiscal.

La crisis que estamos describiendo, además de tener un fuerte impacto en el Tesoro nacional y en el destino mismo de la Nación, es tremenda para los argentinos, para aquellos que hace muy poco tiempo tuvimos que aprender sobre el hantavirus, que es un indicador de la pobreza, después de dominar lo relativo al cólera y al dengue.

Hoy en día ya hablamos de leptospirosis, que debe ser también un macro indicador de la miseria. Aparecieron casos de leptospirosis en Belgrano, Quilmes y Misiones, en la puerta de entrada del turismo que va a las cataratas del Iguazú.

Como las señales de la crisis son la miseria, la pobreza, la angustia y el dolor, me vuelvo a preguntar: ¿cuál es el gabinete de crisis? ¿Cuál es el representante que tiene el Poder Ejecutivo para identificar las crisis de dolor, angustia, pobreza y hambre que tienen los argentinos?

El ministerio respectivo, es decir, el que entiende en estos asuntos, es el de Salud Pública de la Nación, a cargo del doctor Lombardo. Cuán grande es mi confusión cuando veo que en época de crisis este ministro va a celebrar en el avión presidencial unas elecciones provinciales anticipadas. El hombre que me imagino al frente de la crisis del hambre, del dolor, de la desnutrición y de todos los padecimientos sociales viaja en el avión presidencial a celebrar el resultado de elecciones anticipadas. Entiéndase por esto mayores gastos en medio de una gran crisis. No viaja en un avión de línea cubriendo sus gastos de militante radical o de la Alianza; lo hace en el avión presidencial y acompañado por el señor ministro del Interior, que también tiene su responsabilidad porque parte de la crisis está constituida por el contrabando y la inseguridad. Y el responsable en el Poder Ejecutivo de reprimir el contrabando es el ministro del Interior; es la autoridad directa de las fuerzas de seguridad y de las de frontera. Entonces, ¿fue a controlar las fronteras de Catamarca o fue a celebrar el resultado de una elección que yo no celebraría? No lo haría porque se le ganó al segundo por una diferencia del 7 por ciento; es decir, se le ganó al "diablo" de la sociedad argentina —Ramón Saadi— por un 7 por ciento de los votos y al tercero, que es una división del

justicialismo quizá producto de una picardía política. Los votos en blanco también sumaron el 4 por ciento.

Señor presidente: esto es una contradicción muy difícil de explicar a la sociedad. ¿Pero cuál es la señal que recibo de la sociedad? Que ayudemos a Cavallo porque nos va a sacar adelante. A mí no me hablan de De la Rúa, no me hablan del Poder Ejecutivo nacional; es algo que dan por superado.

Están apostando a "superman". Nuevamente, los argentinos que antes decían "golpe", ahora dicen "supermingo"; toda la sociedad argentina, en una demanda que conmueve —así lo he percibido—, nos pide que no le restemos facultades para que esté en condiciones de modificar esta crisis. Este es el mensaje de la sociedad. Pero mañana podrá cambiar cuando el ministro, con algún argumento, toque sus intereses y se sienta afectada.

No obstante esto, las primeras señales del ministro de Economía son excelentes. No hay señales del presidente de la República; no las encuentro.

Hoy, los analistas extranjeros desde los Estados Unidos, en su castellano americanizado, decían a través de las radios del país que estaban preocupados por lo que el ministro les dijo a los banqueros. Es decir que la Argentina pagaría la misma tasa que México, el 6 por ciento. Entonces, esos analistas argentinizados con acento del país del Norte decían que eso afecta a los inversores. ¡Pero mienten! Afecta a los prestamistas. No hay inversores sino prestamistas, que son los que hasta ahora defienden sus privilegios.

Por estas razones estoy arrepentido de no haber planteado una modificación en el proyecto de ley que aprobamos la semana pasada. Lo digo públicamente: estoy arrepentido porque sé que estuvo en todo momento en la intención de muchos legisladores aplicar la alícuota de los movimientos en cuentas corrientes, aun en otros valores, a las transacciones entre bancos, ya que es un negocio como el de los carniceros, almaceneros, profesionales, pymes o exportadores. Entonces, en función de la velocidad por salvar a mi país he obrado como lo hice, pero estoy arrepentido de no haber realizado esa modificación.

Voy a continuar marcando las contradicciones. Asistí con el presidente de la República al

centenario de la fundación de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en mi provincia, que es también la del senador Altuna de la Alianza. Hubo allí un hermoso acto y un hermoso homenaje. Y escuché atentamente el mensaje que dio el señor presidente al inaugurar un astillero; en esa oportunidad habló de la necesidad de la ocupación de mano de obra argentina para trabajar en la construcción de los barcos y de no actuar como el anterior gobierno entreguista que vendió la Nación y la Patria.

El 25 de enero de este año, un mes antes de ese discurso, el presidente de la República firmó un decreto de necesidad y urgencia. Y voy a poner este ejemplo para demostrar que este tema de las emergencias y de los decretos de necesidad y urgencia son un nuevo invento para tratar de eludir al Poder Legislativo.

Decía que el 25 de enero dictó un decreto de necesidad y urgencia que modificó un artículo de la Ley Federal de Pesca, sancionada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, que establecía que los buques que se pueden alquilar para explotar la pesca en zona argentina debían tener cinco años de antigüedad. A través de ese decreto se modificó esa norma y se estableció que esos buques de alquiler pueden tener veinte años de antigüedad. ¡La chatarra del mundo puede venir a la Argentina!

¿Saben lo que hacen los Estados Unidos en esta materia? Para obtener un permiso de pesca el buque debe ser fabricado en su país. Ya sé que alguien me dirá "es el Primer Mundo". Pues bien, ¿saben lo que hace Brasil? Para poder pescar allí se pueden alquilar barcos afuera, pero los pueden utilizar sólo durante el tiempo en que dure la construcción de otro encargado en Brasil; una vez que el astillero brasileño entrega un barco exactamente igual, se deben llevar el buque alquilado.

Esta es la diferencia de la crisis. Para salir de la crisis y para resolver los problemas del hambre, del dolor, de la angustia, se deben tomar medidas de esa naturaleza.

De cualquier manera, mis ejemplos no terminan acá. Les pido disculpas porque mi especialidad, mi vinculación y mi conocimiento con la actividad de la pesca hacen que sobreabunde en cierta información. De cualquier manera, hay algo que no me puedo "tragar" y que debo informar a este Senado.

Nosotros tuvimos un ministro de Economía que duró una semana, el doctor López Murphy. El designó como subsecretario de Producción al ingeniero, empresario e industrial Víctor Luis Savanti, quien se presentó ante el Consejo Federal Pesquero pidiendo disculpas porque si bien no distinguía un tomate o una lechuga de una merluza, la situación lo llevaba a hacerse cargo de toda la producción del país y agregó que ésa era su responsabilidad y que quería interiorizarse de la situación. Esa fue la forma en que se presentó ante dicho organismo.

De todos modos, el viernes antes de irse firmó una resolución por la cual se prorrogó por un año el "charteo" de buques para la explotación del calamar, con ocupación de mano de obra extranjera y sin necesidad de procesar en nuestra tierra lo pescado; salvo el 6 por ciento de lo capturado, el resto se lo puede procesar en el barco o en su país de origen. Son treinta y cinco buques que pagan 200 mil pesos por cada permiso. Es un negocio de 150 millones de pesos. ¿Quién se quedó con el "retorno"?!. Repito: ¿quién se quedó con el "retorno"?!. ¿El anterior funcionario o el que firmó la resolución antes de irse y cuando ya estaba prácticamente renunciado, porque ese mismo viernes sabía que este proyecto era inviable?

Actualmente, la gente de la pesca argentina está desesperada porque esto se podía haber pescado con mano de obra argentina, obligando a que el procesamiento se hiciera en plantas industriales en tierra, a fin de dar trabajo a los miles de desocupados de nuestro país. Por lo menos, se podría haber pedido a los países asiáticos que no nos cobren aranceles cuando llevamos los productos elaborados en nuestras fábricas. Pero no es así: nos fijan aranceles.

Les adelanto que estos buques de "charteo" están exentos de inspección de la Aduana y de otro tipo de carga. Lo único que hacen es pagar un canon de 200 mil pesos por cada buque. Esto es una estafa nacional.

Esto lo hacía el gobierno anterior y se lo criticó desde todos los ángulos y tribunas que analizaban la situación del sector pesquero. Pero la situación se repitió en el primer año de este gobierno y ahora se decidió prorrogar estos permisos por un año más. A raíz de esto, el señor senador por Santa Cruz Arnold presentó una denuncia penal que duerme en la Justicia.

Este es el concepto de la crisis. Por eso hablo de las contradicciones. Yo no voy a citar a tratadistas o a estudiosos y no me voy a referir a los artículos 29 o 76 de la Constitución, si determinada cosa la dijo tal o cual profeta del derecho argentino. Porque tuve la desgracia de que en el secundario me hicieran estudiar, para una monografía, la vida de Charles de Secondat. Cuando el profesor me “enchufó” la vida de este personaje, dije ¿qué tendrá que ver esto con mi vida? ¿Saben quién era Charles de Secondat? El barón de Montesquieu, el autor de la división de los poderes, el que creaba y elogiaba la necesidad de la vigencia y la compensación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Algo suena raro. Algo huele mal en este camino que estamos transitando. Lo cierto es el reclamo de la gente: no le aten las manos a Cavallo; los titulares de los medios de comunicación no hablan del Poder Ejecutivo nacional sino de facultades delegadas a Cavallo; “Cavallo, por favor salvanos”; “Como hiciste con la estabilidad, recuperá el empleo y la producción”.

Voy a votar afirmativamente en general el proyecto de ley que hoy estamos considerando, pero también quiero dejar aclarado que con relación al artículo 1º voy a insistir en el plazo de seis meses, porque creo que para el talento, la capacidad y la inteligencia del ministro de Economía un período de esa magnitud es más que suficiente para restaurar los resortes de la democracia.

Me dirán que el Parlamento lo puede modificar. Saquémoslo de ambas Cámaras. Deroquenos un decreto de necesidad y urgencia en ambas Cámaras. Cuando lo sacan en la que el peronismo es mayoría, lo voltean en la que el oficialismo es mayoría, o viceversa. A veces, se mezclan los votos.

Esta es la situación que estamos analizando. De ninguna manera voy a hacer una interpretación profunda. No aceptaría la redacción que crea una estabilidad por dos años para los empleados de la administración pública, porque después qué: ¿convenios colectivos o arbitraje? Dios dirá. No lo puedo aceptar.

Con respecto al artículo 2º, cuando dice que el ejercicio de las facultades delegadas no podrá provocar despidos ni tampoco podrá utilizarse para disponer rebajas de salarios o de haberes jubilatorios, quiero que quede constan-

cia de que quiero que se incluya a las presentes y a las futuras. Porque si para las futuras jubilaciones va a haber una disminución en cuanto a la protección básica universal, el famoso PBU, que sea el Senado el que diga cuál es el monto de las jubilaciones que pueden estar sometidas a este riesgo.

Finalmente y con relación al artículo 8º, no creo que junto con la emergencia y la delegación de facultades que estamos analizando tenga que sancionarse el plan federal de infraestructura. No creo que por esta emergencia haya que ratificar ese decreto. Al respecto hay un dictamen firmado con correcciones que enriquecen muchísimo ese plan y creo que el ministro de Economía nos lo va a agradecer, cuando conozca las modificaciones que le hemos hecho en las comisiones de la Cámara de Senadores. El dictamen ya está hecho. No creo que haya que ratificar esa iniciativa, sino que hay que enriquecerla, como pasó con el proyecto que estamos analizando. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (León). – Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: he seguido atentamente el debate de la Cámara de Diputados y he escuchado con mucho detenimiento las exposiciones que se hacen en este Senado.

Creo que, de alguna manera, todos hemos hecho un curso acelerado de derecho constitucional; no sé si lo aprobamos, pero no me cabe la menor duda de que lo hicimos.

Me alegro de que se haya producido algún alarmismo con relación al artículo 29 porque a todos nos preocupó ser cuidadosos en el respeto de la Constitución; y algunas de las modificaciones que se hicieron tenían precisamente por objeto cuidar el detalle de los artículos de nuestra Carta Magna. De manera que más allá de la reacción que pudieran haber provocado estas manifestaciones alarmistas, creo que de algún modo vinieron bien.

Estamos considerando un proyecto de ley de emergencia en el que, precisamente, declaramos la emergencia. Cuando días atrás sancionamos la ley por la que se crea un gravamen a los débitos y créditos en cuentas corrientes hice alguna referencia al motivo por el cual caíamos en esta declaración de emergencia, que me permitirá repetir muy brevemente.

Durante muchos años –no hablo del gobierno anterior ni del que lo precedió– el Estado

argentino gastó más de lo que podía y mediante la maquinita de imprimir billetes se emitía y así se disimulaba el gasto. Y esto era pagado con inflación por todo el pueblo, especialmente por quienes menos tenían.

En determinado momento, y esto es mérito del gobierno anterior, surgió la Ley de Convertibilidad. Y al respecto debo decir que esta norma me obligó a tomar una decisión muy importante, porque en aquel momento era diputado y, como presidente interbloque de partidos provinciales, actuaba como árbitro. Lo cierto es que los 14 votos de mi bloque fueron los que decidieron la aprobación de la ley por 7 votos. De manera que siempre me he sentido un poco responsable de esta ley que, si bien nos ha hecho sufrir, también nos ha brindado muchas ventajas. En aquel entonces impusimos una condición: que el respaldo fuera en divisas y no más del 10 por ciento en títulos dolarizados, para evitar que "nos empapelaran" el país. Pero no vale la pena continuar abordando el tema de la Ley de Convertibilidad. Fue eficaz.

Al acabar la emisión, el Estado debió haber puesto sus cuentas en orden, pero no lo hizo. Sin embargo, sobrevivió; y lo hizo porque vinieron las privatizaciones, fuimos vendiendo todo lo que teníamos, disimulando la crisis, y endeudándonos. Por aquel entonces la deuda rondaba los 60 mil millones y, si bien vendimos por un valor aproximado de 40 mil millones, se elevó hasta 120 mil millones o más. Es decir, algo así como 100 mil millones más de deuda en diez años.

En determinado momento sancionamos la Ley de Responsabilidad Fiscal. También fue mérito del gobierno anterior. Lástima que llegó nueve años tarde. Se sancionó cuando ya se iban, pero de todos modos fue bueno que ello ocurriera. En aquel entonces pensamos: "Bueno; ahora, con la Ley de Convertibilidad y la de Responsabilidad Fiscal, se acabó el desbarajuste en las cuentas públicas". Pero veníamos cuesta abajo, muy embalados y no pudimos frenar.

Hubo un límite al endeudamiento, pero no fue la Ley de Convertibilidad la que lo impuso sino la realidad que nos alcanzó y las fuentes de financiamiento externo que dijeron: "A este país que gasta más de lo que tiene, que propone un límite y no lo puede cumplir y que no puede parar de gastar, no le podemos seguir prestando". Fue entonces cuando la emergencia realmente

se manifestó en toda su magnitud; más allá de la emergencia y la deuda social existente, que es responsabilidad de todos nosotros, tanto de los actuales gobernantes como de los anteriores y de los que los precedieron.

Pero lo real y positivo es que éste es nuestro pueblo y nuestro país. Cuando ayer escuchaba el debate en la Cámara de Diputados me dolía cuando se decía "este país". No señores: ¡nuestro país es el que está en emergencia! ¡Nuestra gente es la que está en emergencia!

Y después del fracaso de un primer intento aparece una alternativa a través de la adopción de medidas de contención del gasto pero con crecimiento, porque de lo contrario fallaríamos. En efecto, se fracasó al tratar de incrementar los impuestos, porque ello no fue aceptado por la sociedad ni por la dirigencia política ya que evidentemente se trataba de volver a un ajuste más.

Entonces, es allí donde aparece esta propuesta: vamos a ajustar los gastos combatiendo la evasión y haciendo crecer al país. No me cabe duda alguna de que se trata de un plan tremendamente ambicioso. Y para su progreso, es el propio presidente de la Nación —no un ministro o dos— quien nos solicita la delegación de facultades legislativas, asumiendo así una tremenda responsabilidad histórica, al igual que lo hará este Congreso con la decisión que va a tomar.

Anticipo que, aunque con algunas dudas, como creo que las tenemos todos, voy a votar favorablemente en general este proyecto. De todos modos considero que, por lo menos, hemos fijado los extremos que exige la Constitución.

En efecto, la emergencia actual existe y además la declaramos y está vigente por la ley 25.344. Por otro lado, en cuanto a las bases, ellas se fueron perfeccionando durante el transcurso del debate en la Cámara de Diputados. En este sentido, una de las que a mí me aterrizzaba, que afortunadamente se eliminó, era la establecida en el inciso f), que permitía comprometer los recursos de recaudación y los activos.

Yo he tenido oportunidad de observar de cerca, tanto en mi provincia como en otras, que no hace mucho tiempo se ha publicado el grado de compromiso asumido respecto de la coparticipación federal y salvo alguna honrosa excepción, los datos indicaban que excedían el 90 por ciento. Incluso, debo decir que mi provincia ha

vendido en forma anticipada quince años de regalías, a través de un bono por 250 millones que las empresas depositan en el banco y si sobra algo éste lo reintegra a la provincia. Esto está dentro de sus atribuciones. Se lo puede discutir políticamente, pero es legal.

Ahora bien, yo no quiero esta situación para el país porque inclusive —y no vale la pena extenderse mucho— tenemos créditos soberanos, porque somos la Argentina, confían en nosotros y si bien nos cobran más intereses, no nos piden garantías. En este sentido, respiré cuando se eliminó este aspecto porque de lo contrario para todos los créditos nos iban a exigir garantías. Sin dudas, éste fue un punto positivo que debemos reconocerle a la Cámara de Diputados. De manera que las bases las hemos diseñado, más allá de que podemos coincidir con ellas o no.

Estoy de acuerdo en general con este proyecto, pero no coincido con el inciso c) del punto II del artículo 1° porque no lo veo bien definido. En todo caso, durante el tratamiento en particular me extenderé sobre el tema.

Pero voto tranquilo y lo hago con responsabilidad. Por supuesto que es mucho más fácil votar por la negativa porque, en definitiva, no se asume ningún compromiso.

En cambio, a mí me parece que el compromiso ante nuestra gente es ponerle el hombro al país y en este momento él necesita que le pongan el hombro al gobierno, al presidente, que está asumiendo su responsabilidad y, por lo tanto, nosotros también debemos asumirla.

Veamos si podemos —y creo que sí no me cabe la menor duda— controlar de cerca las facultades que delegamos. Esta es la responsabilidad que asume el Poder Legislativo. Más responsabilidad aún que el hecho de aprobar, como espero que se haga esta iniciativa, es la del seguimiento por la comisión que vamos a crear. En este sentido, desearía que no fuera una comisión bicameral que funcionara más o menos; no voy a hacer referencia a ninguna en especial, pero hay algunas que no han trabajado de la manera que yo hubiera querido.

Pero ahora que delegamos nuestra capacidad de legislar, quienes asuman la responsabilidad de seguir las medidas que se le han autorizado a adoptar al Poder Ejecutivo tienen tanta responsabilidad como el presidente de la Nación.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Verna. — Señor presidente: como la posición de mi bloque ya ha sido fundada voy a dar las razones por las cuales votaré afirmativamente el proyecto que tenemos en consideración.

Lamento que no esté presente en este momento el señor senador Genoud porque voy a comenzar leyendo la versión taquigráfica de la sesión pasada sobre la cual tuvimos una discusión. Al final dije que “Le vamos a dar al ministro Cavallo la facultad de cobrar el impuesto a los débitos y a los créditos. Pero no le vamos a dar facultades para que derogue el convenio del Estatuto del Docente; no le vamos a dar facultades para que lleve a cien años la edad de jubilación; no le vamos a dar facultades para que reduzca el salario mínimo, vital y móvil a cincuenta pesos; no le vamos a dar facultades para que privatice las universidades estatales”.

Como esto ha sido impedido por el Congreso de la Nación a través de las modificaciones que se le han hecho al proyecto que oportunamente elevara el Poder Ejecutivo, voy a votar favorablemente la iniciativa que tenemos en consideración.

Además, como últimamente cuando hablo le hago un homenaje a alguien, en este caso se lo haré al miembro informante del oficialismo de la Cámara de Diputados y a los miembros informantes del oficialismo y de la oposición de la Cámara de Senadores, porque han hecho un gran esfuerzo para decir que estos poderes se los estamos confiriendo al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la Nación.

En este sentido, yo veía al señor diputado Baglini cuando trataba de explicarle al resto de los legisladores que estos poderes eran para el doctor De la Rúa, mientras que los canales de televisión ponían la placa que decía “Se discuten los poderes a Cavallo”, “Se tratan los poderes para el ministro de Economía”.

Como dijo el señor senador Sala yo creo que, poniéndole el oído no a los tratadistas sino a la gente, lo que estamos debatiendo hoy son los poderes para el ministro de Economía que le ha prometido a la sociedad argentina que la va a sacar de la crisis; y nosotros estamos hoy dándonoselos.

De todos modos, no puedo dejar de señalar la coherencia de haber votado siempre de la misma manera en este Senado. En febrero de

1996 me tocó ser el miembro informante de la ley 24.631, de reforma tributaria, cuando era presidente el doctor Menem y ministro de Economía el doctor Cavallo. En ese momento, a través de la iniciativa se delegaron facultades y señalé cuáles eran a mi criterio las observaciones de delegación de funciones contributivas.

Decía entonces que había inconvenientes a las exenciones tributarias y daba tres razones. Una, que era la configuración de situaciones de preferencia, ventaja o privilegio. La segunda, que era la complejidad de las exenciones que se incorporaban a los tributos. Y la tercera razón era la pérdida de transparencia del sistema tributario.

Señor presidente: creo que a usted le va a interesar saber qué decía el miembro informante del radicalismo. Decía así: "Entonces resulta que al señor ministro de Economía (que era el doctor Cavallo) no le salen bien las cuentas. Ocurre que ahora, después de someter al pueblo a sacrificios extraordinarios, de agobiarlo (y yo les recuerdo que ya votamos dos impuestos: el de Machinea y el del cheque) y de someterlo a situaciones difíciles (y les recuerdo que también bajamos los sueldos de los empleados públicos), los senadores que pertenecen a la Unión Cívica Radical no van a votar estas facultades extraordinarias para el ministro de Economía, que vive de prestado". Repito que esto lo decía el miembro informante del radicalismo cuando hablaba de las facultades para el doctor Domingo Felipe Cavallo. Claro, en esa época era un ministro malo porque estaba en un gobierno peronista.

Decía además un senador de la Unión Cívica Radical: "Se está consolidando en el país un singular y gravísimo fenómeno institucional que no voy a temer en denominar el menemismo de Estado, que se caracteriza por el recurso de excepcionalidad: el estado de emergencia." Yo les recuerdo que en noviembre del año pasado declaramos la emergencia económico-financiera y de los contratos; y hoy estamos declarando la emergencia pública y otorgando facultades excepcionales al Poder Ejecutivo que, además, hace uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia.

Como usted ve, señor presidente, yo sigo pensando lo mismo que pensaba cuando discutíamos la reforma tributaria, que posteriormente

fue la ley 24.631. Parece que algunos integrantes de este cuerpo han cambiado de idea.

Me preocupó además el problema de conciencia que debe tener hoy un senador del actual oficialismo que dijo: "Yo he llegado al Parlamento argentino asumiendo mi compromiso ante los ciudadanos de mi pueblo. En oportunidad de ser electo diputado nacional dije que no iba a consentir jamás la delegación de una facultad del Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo".

Personalmente, cuando me presenté como candidato en mi provincia nunca dije esto, por eso puedo votar con absoluta tranquilidad.

Sí quiero confiarle, señor presidente, la enorme mala suerte que tengo. Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante de la bancada peronista me tocó defender las leyes del Domingo Felipe Cavallo "malo", cuando era ortodoxo y liberal. Yo pretendía vanamente impulsar políticas activas. Hoy, cuando estoy en la oposición, veo que Domingo Felipe Cavallo es casi keynesiano. Está proponiendo medidas diferenciales por sector y por región.

Me alegro de que en vez de habernos convencido el ministro a nosotros, hayamos sido los peronistas quienes hemos convencido al ministro.

Sr. Presidente (León). – Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. – Señor presidente: cuando discutíamos el otro día parte de esta ley –más allá de que después se desdobló y ahora estamos en presencia de dos normas y no de una–, yo decía que era ocioso –por lo menos para la coyuntura, ya que puede resultar en la campaña electoral más ilustrativo, o aún más para la historia–, discutir acerca del origen de la emergencia o de la crisis que estamos viviendo, que tiene una enorme magnitud o profundidad.

Digo esto con relación a discutir si esta crisis se origina en la herencia recibida o en los errores políticos esencialmente cometidos a lo largo del primer año de gestión del gobierno de la Alianza.

En todo caso alguien con mayor grado de precisión podría asignar toda esta situación –remontándose un tiempo atrás– a la baja calidad institucional que ha tenido la Argentina durante los últimos 30 o 40 años, en virtud de los sucesivos golpes de Estado que impidieron fijar

políticas de Estado e imposibilitaron también que se pudieran trazar líneas de acción que permanecieran en el tiempo defendiendo, por supuesto, los intereses de la sociedad argentina y de la Nación misma. Obviamente —es una redundancia señalarlo— los golpes de Estado siempre fueron contra los intereses de la sociedad argentina en su conjunto y representaron los intereses de las minorías, aquellas que antiguamente se denominaban oligárquicas y proimperialistas y que ahora tienen otros tipos de denominaciones, como por ejemplo, grupos concentrados de la economía, grupos de intermediación financiera, etcétera.

Por supuesto, estoy convencido de este último diagnóstico. Sin embargo, con esto no quiero decir que los partidos populares estén eximidos de errores o de responsabilidades. Pero la baja calidad institucional que ha tenido nuestro país y la falta de compromiso de determinados sectores de la sociedad con la democracia han sido los factores que provocaron estas situaciones que, sucesivamente, los gobiernos legítimos y de origen popular debimos administrar y tratar de corregir.

También lo tenemos que hacer, por supuesto, bajo la presión de los *lobbies*, que felizmente ya no tienen la facultad de sacar a los militares de los cuarteles para que se lleven por delante la voluntad popular, pero que siguen teniendo una enorme gravitación en la vida económica y social de esta Nación y que no han cambiado el objeto de su actividad, el cual no es precisamente construir una sociedad equilibrada, en la que se garanticen los principios de igualdad de oportunidades y de equidad. Ellos actúan bajo otras formas.

Y estoy convencido de que llegamos a un punto de la crisis en el que efectivamente la sociedad política de la Argentina tiene que revelar su mayor o menor grado de madurez frente a lo que está sucediendo. Pero no porque seamos sus responsables sino porque somos quienes tenemos sobre nuestros hombros —felizmente, la continuidad democrática nos obliga a ello— la responsabilidad de sacar a la Argentina de la crisis en que la han ido sumiendo a lo largo de todos estos años. Algunos podemos hacer arrancar sus orígenes en el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, otros en el de 1955. Pero lo cierto es que hubo una continuidad histórica que nos ha llevado a esta situación.

Por eso estaba convencido de que era bueno el llamado hecho por el presidente De la Rúa para formar un gobierno de unidad nacional. Creo que hemos llegado a la etapa final que marca todo un proceso histórico en la Argentina. Gracias a esta estabilidad democrática hoy tenemos la oportunidad de empezar a construir una nueva sociedad a través de acuerdos políticos transparentes con la producción y el trabajo.

Claro que eso puede ponerse en un plano de ingenuidad o de un idealismo puro e impracticable, sobre todo en un año electoral. Pero más allá de que este año sea electoral y de que pueda haber cierto grado de ingenuidad, lo cierto es que estamos enfrentados a una situación dilemática: o seguimos por caminos diferentes, o nos unimos para sacar a la Argentina de esta prolongada crisis que se origina en la baja calidad institucional que durante 30 o 40 años exhibió, la cual a su vez permitió que los grupos económicos más perversos y concentrados distorsionen el modelo de construcción que la gente quería respecto a su sociedad.

El problema consiste entonces en determinar quiénes nos unimos y para qué. Coincido, obviamente, en que hay una emergencia. Las emergencias tienen por un lado la virtud de llamar a la responsabilidad de todos, como en este caso y, por el otro, el defecto de actuar como antiguamente lo hacían nuestros padres cuando nos querían disciplinar diciéndonos que venía el cuco. En una emergencia económica ocurren las dos cosas. Por un lado, todos nos sentimos al borde del precipicio, vemos el fondo y sabemos que estamos en una situación difícil. Pero por otra parte también sentimos que viene alguien por nuestra espalda para empujarnos al precipicio o, por lo menos, para que sintamos la sensación de que nos van a empujar y que nos caeremos en ese pozo si no hacemos determinadas cosas. Se dan las dos situaciones. Y esta emergencia —grave y profunda— vuelve a repetir ese escenario y esa situación.

Creo honradamente que los partidos políticos de la Argentina —no digo “la clase política” porque considero que dicha expresión produce equívocos—, las expresiones políticas o como se los quiera llamar, en realidad han actuado con bastante responsabilidad frente a esta situación de emergencia; y que en verdad la unidad nacional —que lamentablemente no se ha podido plasmar

en la configuración del gobierno nacional— en los hechos y en la práctica se dio en el Parlamento argentino.

Por eso digo que se ha actuado con muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Parlamento argentino atendió el primer componente de la emergencia: el de la realidad. Si se lo miraba desde el punto de vista de la caja, el país estaba virtualmente en quiebra, en una situación difícil para afrontar sus compromisos internacionales, sin importar cuándo fueron contraídos o quién contrajo más o menos. Pero el hecho era que los teníamos. Entonces, no sólo se actuó con celeridad. Muchas veces, cuando se nos exige actuar con celeridad, nos imponen —como ya dijimos en el debate anterior— que lo hagamos en determinada dirección. Si actuamos con celeridad en otra dirección, ya no les gusta.

Actuamos con celeridad porque dimos el instrumento que hacía falta para atender esa situación de emergencia real que eran los recursos. En efecto, se votó el instrumento necesario, es decir, el impuesto a las transferencias financieras o la Ley de Cheques, como se la conoce comúnmente. Como bien dijo el senador Gioja la semana pasada, no se trató de una cuestión menor toda vez que no era un impuesto cualquiera. Sobre su carácter progresivo o regresivo me reservo opinión, según lo que vaya a ocurrir con la aplicación de esos recursos. Si esos recursos son aplicados a la baja de los costos de producción y efectivamente producen una reactivación de la economía tendrán carácter progresivo; si simplemente son aplicados a cubrir el déficit fiscal, tendrá carácter regresivo.

Tampoco voy a hacer una valoración de carácter ideológico, porque ha sido muy habitual en la política de los últimos diez años, disparar por izquierda y terminar gobernando por derecha. A esta altura no me atrevo, respecto de ningún gobierno —propio o ajeno—, a hacer valoraciones de esa naturaleza. También alguna vez en el pasado se nos dijo que les quitábamos recursos a las provincias para dárselos a los jubilados y terminaron dándoselos a cualquier otro menos a los jubilados y semiprivatizando el sistema jubilatorio argentino. Justamente, entre los responsables del endeudamiento que hoy tiene el país, se encuentra el actual ministro de Economía, que desfinanció el sistema previsional argentino a través de la baja de los aportes patronales y de la semiprivatización del sistema

jubilatorio, y después nos obligó —cuando se peleó con Menem y se fue del gobierno— a endeudarnos a razón de 10 mil millones de dólares en los últimos cinco años para cubrir parte de ese descomunal déficit previsional que hoy tiene una gravitación enorme en la insolvencia fiscal de la Argentina. En ese momento parecían medidas no sé si progresistas pero al menos modernas, pero no dieron el resultado esperado. Por lo tanto, no voy a abrir juicios sobre lo que va a ocurrir con estos recursos hasta ver a qué se los aplica.

De todas maneras, me parece mucho mejor esto que bajar los salarios —medida que achataba aún más a la economía argentina—, o anunciar un recorte de mil millones de dólares en la educación pública.

Si se me permite la licencia de hablar de la ley que ya sancionamos, también debo decir que coincido con esta especie de blanqueo bancario que permite abrir nuevas cuentas corrientes. Lo veníamos reclamando a los ministros anteriores porque era evidente que, sobre todo en el caso de las pymes, aunque las tasas de interés bajarán a niveles absolutamente aceptables, si cada vez que iban al mostrador les decían que no les podían dar un crédito porque estaban en el Veraz, porque tenían un descubierto muy amplio o porque estaban mal calificadas, el esfuerzo de bajar la tasa de interés no servía para reactivar la economía. De modo que me parece positiva la decisión de permitir —saliendo de las reglas del Banco Central— reabrir las cuentas corrientes, especialmente en el caso particular de las pequeñas y medianas empresas.

Si bien ésta es la parte positiva, debo confesar que solamente me hubiera gustado otorgar al Poder Ejecutivo —y no voy a entrar en una discusión ociosa respecto de si se lo estamos dando al presidente o al ministro de Economía, estamos hablando del gobierno en su conjunto— facultades para aplicar este impuesto, modificar alícuotas, establecer exenciones y manejar la política arancelaria. Yo me hubiera parado ahí. Eso era responder a la emergencia de caja y a la proveniente de las contingencias internacionales. Con eso hubiera sido más que suficiente desde el punto de vista de la responsabilidad de la dirigencia política argentina. Pero como las emergencias también sirven de cuco, ocurrió lo que invariablemente ocurre cada vez que hay una emergencia: nos trajeron lo que necesitaban urgentemente y nos trajeron inicial-

mente la receta que sistemáticamente desde hace diez años aparece cada vez que hay una emergencia, consistente en privatizar todo, en vender todo, en entregar lo que no hemos entregado, etcétera. Esa es la segunda parte, es la receta única que siempre está presente ante cualquier emergencia sin importar su naturaleza.

Por eso digo que el Congreso ha hecho un enorme esfuerzo. ¿Por qué? Porque primero tuvo que dividir aguas, separar lo urgente de lo que no era tan urgente y que en realidad significaba otorgar superpoderes que tenían como intención introducir la receta única que utilizaron en todas las gestiones anteriores en todas las etapas de estos últimos años.

Entonces, el primer esfuerzo intelectual importante consistió en dividir aguas. Y ahí es donde empieza a trabajar la dirigencia política de la Argentina que está llena de defectos y que seguramente tiene muchas cosas para corregir pero que, gracias a Dios, funciona en el marco democrático porque hasta aquí, frente a la crisis de la Argentina, es la única valla que ha ido impidiendo que la sociedad termine absolutamente indefensa, porque entrega o porque destruye aquellos instrumentos que le han servido para defender el interés popular, que no es una frase. Digo esto porque, por ejemplo, defender la educación pública significa defender la movilidad social, la igualdad de oportunidades, la equidad, elementos que constituyen el sustento de una sociedad civilizada. Esa clase política que a veces es fulminada por quienes no les interesa demasiado en qué régimen político pueden realizar sus objetivos económicos, aquellos que participan en gobiernos militares y después, con mucha liviandad, dicen que se arrepienten, o participan de gobiernos a los que después califican como sometidos a las mafias y después, de manera irresponsable, reparten amnistías del mismo modo en que otros irresponsablemente repartieron culpas. En realidad no les interesa más que realizar sus objetivos económicos. Y como yo siempre me opuse a las generalizaciones porque no me gusta ni una cosa ni la otra, en realidad sobre lo que pasó en el Senado, yo no quiero la opinión de Cavallo sino del juez Cavallo, porque creo que en la Justicia.

Está muy claro, señor presidente, que otra vez nos encontramos frente a la obligación de dar una respuesta a las necesidades reales de la gente sin negar las facultades al Poder Eje-

cutivo. En 1989 tampoco se las negamos al presidente Menem —como diría mi ex colega Jarovslasky “No se lo negamos en el 89 (y disculpen la expresión) con el traste”— respecto de la Ley de Emergencia Económica y de la de Reforma del Estado. Es cierto que en esas circunstancias teníamos nuestras dudas acerca de lo que podía ocurrir. En aquel momento, aunque habíamos perdido las elecciones, teníamos mayoría circunstancial en el Parlamento y creamos las condiciones para aprobar esas leyes.

Hoy estamos actuando de la misma manera porque no se niegan al gobierno estas facultades; simplemente no se le otorgan superpoderes omnímodos.

No creo que comparar el proyecto original que enviara el Poder Ejecutivo nacional al Congreso con el que hoy estamos considerando sea un ejercicio inocuo que solamente sirva para que nos luzcamos en los discursos que pronunciamos aquí. Si se está transmitiendo por televisión me parece que es muy importante que la gente sepa qué se hizo aquí adentro durante estos cuatro días. No es que esta vez trabajamos. No es que nos pusimos un jogging y salimos a dar cien vueltas alrededor del Congreso para transpirar. Durante estos cuatro días estuvimos cambiando estas normas porque, como bien dijo el señor senador Menem en auxilio de nuestro miembro informante... (*risas.*) ...originariamente constituían poderes absolutamente extraordinarios que en algunos casos caían en la caracterización del artículo 29 de la Constitución Nacional.

Para ejemplificarlo voy a leer un par de ellas —no a ustedes, que durante estos días estuvieron trabajando, sino a quienes todavía tengan la paciencia de escucharnos— para que vean cuáles son las diferencias sustantivas entre un proyecto y otro. Por ejemplo el inciso b) del artículo 11 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional decía: “Sujetar a los entes autárquicos, reparticiones descentralizadas, desconcentradas, o a su personal, a normas de derecho privado, sin más limitaciones que las que determinen las necesidades de un mejor funcionamiento...”, etcétera. Sin embargo, el actual inciso b), que figura en el artículo 1º del proyecto de ley que vino de la Cámara de Diputados no menciona absolutamente nada de eso, y cuando lo repasemos lo van a confirmar.

El proyecto de ley original decía: “Fomentar la creación del empleo (siempre empiezan así) mediante la modificación de la legislación labo-

ral, previsional, de la seguridad social o de la asistencia social". Esto significaba que efectivamente se podía terminar con todos los convenios colectivos de trabajo; se podían disminuir o suprimir las jubilaciones, reemplazándoselas por una suma fija, se podía terminar con todos los regímenes de asignaciones familiares; en síntesis, se podía hacer infinidad de cosas.

El inciso d) del artículo 11 —siempre refiriéndonos a la iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo— decía: "Derogar total o parcialmente normas de rango legislativo que afecten la actividad económica...". Con esta propuesta caían desde la Ley de Convertibilidad hasta la de Medicamentos o cualquier otra cosa que se les ocurriera. Al respecto alguien dirá, con justa razón, que se estaba poniendo en duda qué se iba a hacer con esto, cómo podíamos dudar. En mi caso no dudo de nadie; pero como el camino del infierno también se construye de buenas intenciones y acá lo que estamos haciendo no es calificándolas sino dictando normas en las que si ponemos mal una coma se afecta a millones de compatriotas, no dudo, pero prefiero que hagamos las cosas como debemos y para eso nos vamos a tomar todo el tiempo que haga falta. Aunque no voy a negar que tengo mis dudas. Porque simultáneamente con el envío de este proyecto aparece una propuesta para modificar el sistema de salud de la Argentina; una propuesta de una fundación. Y a las fundaciones hay que darles mucha relevancia en este último tiempo político de la Argentina. Siempre aparece una fundación. En todos los gobiernos están las fundaciones propias. Antes era la Fundación Mediterránea, luego apareció la FADE, ahora está Novum Milenium, estuvo FIEL, etcétera. Reitero: siempre hay fundaciones, lo cual marca una falencia de los partidos políticos.

En realidad, eso no habla bien de nosotros porque los partidos políticos deberíamos tener nuestras propias respuestas elaboradas para evitar este tipo de circunstancias.

Entonces, le doy importancia a lo que decía esta fundación, sucedánea de la Fundación Mediterránea, cuando hace dos o tres días discutíamos la primera parte del proyecto de ley de competitividad.

Por ejemplo, pretendía cambiar el sistema de salud y en lo concerniente al plan para jubilados decía: "El PAMI dejará de actuar como proveedor directo de servicios para permitir a los

beneficiarios que opten por los agentes de seguro que cumplan en este segmento (puntualizaba el borrador). Así las obras sociales y prepagas que quieran recibir jubilados ofrecerán un plan especial para la tercera edad". Me pregunto cuál será el plan especial para la tercera edad. No creo que sea de mejor calidad que el establecido en el PMO. Seguramente, sería de menor calidad porque, además, ¿cómo cerraba el plan? Con la propuesta de darle a cada jubilado la suma de 40 pesos y que se arregle como pueda en el mercado de la salud. Todos sabemos que el jubilado es la franja de más alto riesgo y, además, la más demandante de salud. No es lo mismo darle 40 pesos a una persona de veinte años que a una de setenta para que atienda su salud y compre sus medicamentos.

Continúa la propuesta de esta fundación: "Se estima que cada obra social o prepaga podrá recibir cuarenta pesos mensuales por cada afiliado. Luego, si el jubilado quisiera contar con un plan superior podría sumar a esa cápita aportes voluntarios". Me preguntó cuál será el plan superior. Además, dividía la prestación del PMO entre activos y autónomos: uno de alta calidad para los activos y uno de menor calidad para los autónomos.

En definitiva, no sé cuál es la intención del proyecto original enviado a este Congreso. Pero sin duda alguna me gusta más el que estamos considerando ahora, que específicamente salva al PAMI; el anterior no lo hacía. Y no digo que ésta hubiera sido la intención, pero si no lo salvaba quizá se podría haber hecho realidad el proyecto de esta fundación al que acabo de dar lectura, como podría hacerse realidad otro proyecto de esa misma fundación que, en estas últimas cuarenta y ocho horas, parece que ha tenido un ataque de producción de proyectos a ser instalados en la sociedad.

En este caso, me refiero al proyecto de constituir una sociedad anónima recaudadora. Esa sociedad anónima tendría a su cargo la recaudación previsional y reuniría a los siguientes organismos: ANSeS, PAMI, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, aseguradoras de riesgos del trabajo, obras sociales y AFIP.

Acá dice —no creo que sea cierto, debe ser un comentario malicioso del diario— lo siguiente: "Este plan podrá transformarse en realidad si el gobierno consigue perforar la férrea resistencia

que encontró en el Congreso para convalidar la segunda parte de la ley de competitividad que faculta al Poder Ejecutivo a transformar entidades autárquicas o entes descentralizados en sociedades u otras formas de organización jurídica". Esto es lo que evitamos con los cuatro días de trabajo, y que era perfectamente posible según la redacción del proyecto original. Es una mera coincidencia.

No se trata de adjudicar intenciones, pero tampoco de actuar con ingenuidad. Como estaba redactado originalmente el proyecto no me gustaba. ¿Y saben por qué? Porque la crisis no nos obliga a jugar al "adivina-advinador", no nos obliga a jugar a la "batalla naval", como sucedió al comienzo del trámite de este proyecto de ley. Le proponíamos a un funcionario un cambio, y si nos decía que no, equivalía a decir "hundido"; si nos decía que sí, era "agua". Era el juegoito de la "batalla naval". Así estaban redactadas las normas originariamente. Si decíamos que queríamos agregar que no se pudiera cambiar el objeto de los entes descentralizados, nos decían que no. Entonces, ahí nos "avivábamos" de que le habíamos hundido el barco. Y cuando hacíamos una propuesta que nos respondían que sí, nos "avivábamos" de que habíamos pegado en el agua. (*Risas.*) Así no funciona un país serio.

Si a mí me dicen que se quiere, por ejemplo, transformar el sistema de salud, prefiero que me digan qué se quiere hacer y cuál es la propuesta para hacerlo, para discutir cómo se va a concretar. Pero ello no obedece a un problema de preferencias, sino de obligación: yo estoy acá para discutir esas cosas. Eso no hacía ni hace a la emergencia, sino a la aplicación que se quiere hacer, sistemáticamente y durante todos estos años, de planes que vienen dictados desde afuera para organizarnos la sociedad en función de lo que necesitan estos grupos concentrados de la economía, las famosas "señales" que necesitan los mercados.

Por ello, no fue ocioso el trabajo que se hizo para ir cambiando la estructura de esta legislación, porque salimos del juego del "gallito ciego" y del "adivina-advinador"; ya no estamos jugando a la "batalla naval" y todos sabemos de qué se habla. Nos podrá gustar o no cada artículo de este proyecto, pero los vamos a analizar. Esa es la responsabilidad que le cabe a la clase política argentina, tanto al oficialismo como

a la oposición. Esa es la responsabilidad del Parlamento que representa al pueblo, sin importar con qué camiseta política lo haga cada uno de nosotros. Y creo que aquí lo hemos representado bastante bien.

Todos estos días de trabajo modificaron esa realidad: se le dio al gobierno lo que necesita para la emergencia. No se le dieron los "superpoderes" que se pretendían en el proyecto original, que no tenía limitación de ninguna naturaleza, porque no queremos que a la sociedad la construyan las fundaciones sino el Parlamento, que es el representante del pueblo argentino. Y si a la gente no le gusta cómo se está construyendo la sociedad, en la próxima elección votará distinto. Pero la gente no vota por fundaciones, sino por partidos políticos; la gente vota legisladores que tienen que cumplir con su mandato. Y nuestro mandato constitucional, por encima de las normas formales de la Constitución, nos obliga a defender permanentemente a los intereses del hombre común.

En ese sentido, reitero que este proyecto de ley mejoró mucho. Por ejemplo, cuando el inciso a) del artículo 1º habla de "decidir la fusión o centralización de entes autárquicos, reparticiones descentralizadas...", etcétera, se refiere a cuestiones de naturaleza operativa. En el caso de los entes autárquicos hay que distinguir entre aquellos creados por ley y aquellos creados por decreto. Quiero que quede bien expresada la voluntad del legislador en cuanto a este inciso, que no está referido a la creación o a la extinción de entes autárquicos, reparticiones, etcétera. Repito: no está referido a la extinción o creación, sino a la adecuación y a la posibilidad de que se les dé autarquía. Pero no ataca, de ninguna manera, la legislación vinculada a su existencia.

En el caso del inciso b) se cambió su redacción, que pasó a decir lo siguiente: "Transformar entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, total o parcialmente, en empresas públicas, sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica...". Si observara esto con un lente autónomo, se me presentarían dudas. En este sentido, tengo dudas sobre la expresión que habla de "...u otras formas de organización jurídica...". Pero me parece que el legislador salva mis dudas cuando en el apartado III limita esas delegaciones diciendo: "Las delegaciones previstas

en esta ley excluyen la privatización total o parcial y/o cesión en garantía de empresas públicas...”, etcétera.

Creo, señor presidente, que en primer lugar tenemos que destacar la expresión “sociedades del Estado”, que después no aparece y que debería hacerlo en otro artículo. Cuando decimos sociedades del Estado, para que se entienda de qué estamos hablando, nos referimos a las que hoy tienen nombre y apellido: Casa de la Moneda, ATC y Lotería Nacional.

Quiero declarar, señor presidente, no como declamación sino porque nadie me ha explicado lo contrario, que esto impide la privatización de estas sociedades del Estado; esto más otras normas del apartado tercero al que nos vamos a referir ahora, salvo que en los términos de la reforma del Estado 1 se envíen los proyectos de ley al Parlamento, en virtud de los artículos 8º y 9º.

¿Para qué privatizar la Lotería? ¿Cuál es el problema con esta institución? El año pasado tuvo una recaudación de 1.500 millones de dólares. Esa recaudación, en general, está destinada a los planes sociales. ¿A quién le causa pérdidas la Lotería? ¿Cuál es el negocio de su privatización?

Todos sabemos, además, que en este mundo moderno esto se ha vuelto muy complejo porque facilita muchísimo el lavado de dinero. ¿Es una carga para la sociedad argentina la Lotería Nacional? Yo no lo advierto. Salvo que sea una señal —siempre aparece el tema de las señales— que dé credibilidad. Pero, ¿a qué? ¿A los bonos de la deuda externa argentina?

Si no hay crecimiento de la economía, señor presidente, no hay un analista serio en el mundo que piense que vamos a pagar la deuda externa con la venta de la Lotería. Ese es un argumento absolutamente infantil, impropio no de quienes lo enuncian sino de quienes lo aceptan. En todo caso, podrán tener la certeza de que les vamos a pagar por dos o tres meses más, que es lo que podríamos afrontar con la venta de la Lotería.

Ni qué contarles de la Casa de la Moneda. Sigo sin entender cuál es el objetivo, tan importante, de venderla. Porque también genera recursos genuinos y se autofinancia. Y la gente de la Casa de la Moneda nos ha enviado un papel a todos, en el que enumera países en los cuales esta institución es estatal. Se trata de países tan serios como Estados Unidos, Espa-

ña, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania —no, perdón, en este país es mixta—, Italia, Austria, Japón. Son todas estatales. ¿Por qué nos agarró a nosotros el ataque de privatizar la Casa de la Moneda?

Y por supuesto que me opondría, señor presidente, y creo que la ley lo impide absolutamente, a la privatización de ATC.

Más adelante, entre las modificaciones introducidas está la del actual inciso f), porque felizmente cayó el f) anterior. Y digo felizmente porque el anterior también era peligroso desde el punto de vista de la responsabilidad constitucional porque no especificaba plazo, señor presidente. ¿Hasta cuándo enajenábamos la recaudación? ¿Cuál era el plazo de las recaudaciones que se podían comprometer para caucionar bonos de la deuda, por ejemplo? ¿Un año, dos? El plazo estaba dado para la aplicación de estas facultades, pero no para la enajenación que podíamos hacer de esos recursos hacia el futuro, lo que además iba a convertir en ociosa la elección de presidente. A partir de ahí, podríamos elegir síndicos que administraran los compromisos que, en esa materia, asumieramos internacionalmente.

Así que felizmente ese inciso cayó y ha sido reemplazado por el actual f), que era el g) anterior. El inciso g) anterior, también felizmente, se modificó y ahora dice —como inciso f)—: “Con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración podrá derogar total o parcialmente aquellas normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento operativo —operativo, reitero— de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales...”. O sea, se refiere clara y expresamente a los aspectos operativos. No se puede cambiar el objeto. Por lo tanto, no se pueden derogar normas de rango legislativo que cambien el objeto. Me parece que esto es importante.

Tampoco se están estableciendo normas de creación. Felizmente se incluyen además excepciones en materia de control, penal, regulatoria de la tutela de intereses legítimos —esto es muy amplio—, derechos subjetivos y, por supuesto, se excluye expresamente al PAMI.

Por último, señor presidente, ya que estamos en tiempos de los blindajes, debo referirme al apartado III, que es un blindaje de toda esta normativa. Dicho apartado expresa: “Las dele-

gaciones previstas en esta ley excluyen la privatización total o parcial y/o cesión en garantía de empresas públicas, universidades, Banco de la Nación Argentina y otras entidades financieras oficiales, Administración Federal de Ingresos Públicos, entes reguladores de servicios públicos, ...”, etcétera. Se hace una enumeración taxativa.

Aquí quiero hacer una salvedad, señor presidente, porque algún pícaro podría “agarrarse” de que en la enumeración realizada en este párrafo no se incluye a las sociedades del Estado.

En primer lugar, señor presidente, debo destacar que Dromi—tan mencionado por el senador Menem— con referencia a la definición de empresas públicas, después de analizar los elementos objetivos y subjetivos, en la página 427 de su *Manual de derecho administrativo* dice: “Se impone una clasificación de las distintas modalidades o tipologías de empresas públicas. Están comprendidas diversas formas de gestión público-económica a las que nos referiremos en abstracto a modo de categorías generales: entes autónomos o autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, empresas mixtas, empresas privadas controladas, administradas por el Estado, consorcios públicos...”, etcétera. Quiere decir que así como en el antiguo inciso g) —actual f)— se menciona el concepto de sociedades de Estado, debe incluirse en esta enumeración taxativa dentro del concepto de empresas públicas a las sociedades de Estado.

Aquí se vuelve a excluir de cualquier privatización total o parcial a estas sociedades del Estado que acabo de mencionar, con la salvedad establecida en un segundo párrafo que determina lo siguiente: “Para la transferencia de empresas, sociedades [esto incluye todo tipo de sociedades estatales: las del Estado, mixtas, etcétera, etcétera] o cualquier otra forma de organización jurídica de propiedad del Estado nacional deberán seguirse los procedimientos previstos en la ley 23.696”, que es la llamada Ley de Reforma del Estado I, a la que hacía referencia el senador Menem.

Para que quede muy clara la voluntad del legislador, debo decir que en los incisos 8 y 9 del capítulo II de la ley 23.696 está comprendido el procedimiento a seguir en esos casos. Y el procedimiento que abarca a todas estas instituciones estatales enumeradas—donde se incluyen las sociedades de Estado dentro del concepto

de empresas públicas, según la definición de Dromi— señala que para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos, haciendas, etcétera, que pertenezcan total o parcialmente al Estado nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión, etcétera, es requisito previo que hayan sido declaradas sujetas a privatización de acuerdo con las previsiones de esta ley. Y cuando dice “de acuerdo con las previsiones de esta ley” se refiere concretamente a lo establecido en su artículo 9º, según el cual la declaración de “sujeta a privatización” será realizada por el Poder Ejecutivo nacional, debiendo ser aprobada en todos los casos por ley del Congreso.

Esto es obvio y tautológico, porque en el caso de las que están excluidas, el Poder Ejecutivo podría intentar la privatización, pero también a través de una ley del Congreso. Entonces, este apartado III obliga al dictado de una ley y a seguir todos los procedimientos establecidos por la Ley de Reforma del Estado, con sus pertinentes modificaciones.

Ahora bien, señor presidente: si esto fuera poco, a la voluntad del legislador hay que agregar las manifestaciones del miembro informante de la Cámara baja, diputado Baglini. Frente a preguntas formuladas por los legisladores, y a propuesta de los que se ocuparon con particular atención de este punto, dijo algo que deseo que quede expresamente inscripto en el Diario de Sesiones, como voluntad del legislador. El diputado Baglini contestó: “Señor presidente, como un ente residual es una forma jurídica de propiedad del Estado tiene que cumplir el segundo párrafo del texto que acabo de leer, es decir, tienen que estar sujetos a los procedimientos de la Ley de Reforma del Estado I, la 23.696”.

Frente a nuevos pedidos de explicaciones, el miembro informante, también como expresión de la voluntad del legislador porque no fue contradicho por la Cámara que estaba en comisión y que por unanimidad votó la propuesta que formuló—por lo tanto no es la opinión de un legislador sino la voluntad del legislador—, dijo: “Lo que quiero decir—para mayor abundancia— es que para cumplir con un proceso de privatización de un ente residual habría que elaborar una ley especial que tendría que ser analizada por este Parlamento junto con el programa, tal como lo establece la ley 23.696”.

Y a lo largo del debate hay mayor abundamiento en esta cuestión. En otras de sus intervenciones, y con el asentimiento de la totalidad de la Cámara de Diputados, el miembro informante dijo: "Quiero aclarar al señor diputado Polino—que era quien le requería la explicación—que se trata de empresas y de sociedades del Estado..." y esto en relación con este punto que, aunque no están expresamente mencionadas, están comprendidas en el concepto de empresas de acuerdo a la definición de Dromi. Y por si fuera poco, el diputado Baglini—que a mi juicio tiene tanta autoridad intelectual como Dromi, aunque el senador Genoud, que es su amigo, dice que un poquito más, y además tiene mayor volumen— señala expresamente: "Se trata de empresas y de sociedades del Estado—seguramente el hijo del general Liendo hará una interpretación distinta de esta norma— y que esto clarifica su ubicación en todos los incisos e, incluso, en estas exclusiones".

Me parece que la voluntad del legislador está más que claramente expresada en los dichos del miembro informante, avalados por la totalidad de la Cámara de Diputados, en las opiniones que estamos vertiendo aquí, en la propia definición del texto, en los textos de la ley 23.696 y en lo que estoy seguro va a ser el acompañamiento de la Cámara a esta opinión, no porque sea la mejor fundada jurídicamente sino porque me parece que se ajusta estrictamente a la intención del legislador y a las normas vigentes.

Por lo tanto, señor presidente, yo tenía —y sigo teniendo todavía— algunas incertidumbres, y no objeciones de conciencia, respecto a algunas redacciones; y si el bloque Justicialista hubiera habilitado la posibilidad de realizar reformas hubiera introducido alguna propuesta porque me parece —reitero— que la velocidad no tiene que ser contradictoria con la certeza de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, aspecto que ha quedado comprobado en estos días.

Pero fíjense qué cosa curiosa. Mientras el Parlamento trabajaba con la enorme responsabilidad que lo ha hecho —lo que demuestra que cuando tenemos problemas de emergencia entre manos somos capaces efectivamente de construir la unidad nacional sin las mezquindades que hay en otros niveles— la Bolsa subió, la tasa de riesgo fue mejorando y se fueron normalizando —todavía muy lejos de lo deseable— las variables económicas. Quiere decir que no era

cierto lo que nos decían la semana pasada, que si en 24 horas no sacábamos la totalidad de lo que se nos pedía, todo se derrumbaba. Se equivocó Grondona el jueves pasado. A mí no me importa decirlo porque nunca me invita a su programa, así que no voy a perder ni ganar *rating* por esto. Tampoco me interesa demasiado porque a mí me importa la opinión de mis conciudadanos, la que gano como militante del radicalismo caminando por la calle desde que tenía catorce años.

Además, señor presidente, tampoco los pronosticadores semioficiales tuvieron razón. La Cámara de Diputados tardó cuatro o cinco días en sancionar la iniciativa y no se derrumbó nada; fueron mejorando las variables. Por lo tanto, no tendría problemas si ahora se introdujeran modificaciones y el proyecto volviera a la Cámara de Diputados. No para dilatar la cuestión sino para perfeccionar la norma. No tendría problema, reitero.

Pero también me pliego a la idea de que tal vez priva en este Senado abreviar el trámite parlamentario, porque las reformas en la Cámara de Diputados —pareciera ser— han satisfecho las expectativas que se tenían.

Por si no queda algo en claro, quise dejar subrayado como voluntad del legislador lo que puede quedar en un campo de razonable duda. Estoy seguro de que todos los senadores nacionales de todos los partidos políticos compartimos las mismas inquietudes y hacemos la misma interpretación de estas normas, más allá de la interpretación que tengamos sobre la crisis, sobre quién la originó y sobre cómo va a desembocar —parte del discurso que me ahorro, porque comprendo que la sociedad argentina hoy tiene una enorme expectativa—.

Lo único que le diría a la sociedad argentina es que no ponga demasiadas expectativas en salvadores. Lo que debería tener la sociedad es expectativas con respecto a la madurez de la clase política argentina.

Sr. Presidente (León). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Torino. — Señor presidente: creo que merece destacarse la fundamentación formulada por el señor senador preopinante Moreau, especialmente respecto de un tema que me interesa y que es digno de resaltar.

La política argentina es dinámica y cambiante, sobre todo, en los últimos tiempos: hace diez

días había un plan económico y, luego—cuatro o cinco días después—, tenemos otro muy diferente. Parecería que el fenómeno también afectó al proyecto enviado por el Ejecutivo, que luego fue dividido en dos. Así, aquel primer proyecto se parecía—permítame, señor senador Moreau—a las canciones de protesta de Mercedes Sosa; después, con los cambios, se asemejaba un poco más a *La Felicidad*, de Palito Ortega. Con todo respeto digo que me alegra de que las convicciones de los senadores puedan lograr algo como eso.

La segunda parte del proyecto de competitividad, a cuyo tratamiento hoy estamos abocados, a mi entender aún requiere ser mejorada, más allá de haberle hecho modificaciones positivas que considero y valoro. También valoro el trabajo que ha realizado el Parlamento a lo largo de estos días a través de los diversos bloques que lo integran, quienes debieron analizar las distintas posiciones existentes y negociar con el Poder Ejecutivo para consensuar y acordar los criterios, menguando tal vez el profundo efecto negativo que traía el proyecto original y que repercutía en los poderes de este Parlamento.

Pero antes de introducirme en el análisis de esta iniciativa, quiero destacar mi estado de ánimo como legislador reciente, novel e inexperto—hace sólo diez días que estoy aquí—, y expresar el honor y el orgullo que significa para mí ocupar una banca en el Senado de la Nación. Tendré ese orgullo hasta el próximo 9 de diciembre, hasta las 23 horas y 59 minutos del último día de mi mandato, como dice mi colega y amigo el senador Vaquir. Durante este lapso, seguramente voy a tener convicción en mis decisiones y en las definiciones de mi voto en este Congreso.

También quiero marcar algo que en estos pocos días que llevo como legislador me sorprende y me conmueve. Me refiero a cierta confusión que a veces, por un lado, me ha permitido aprender derecho constitucional en un curso acelerado—como decía recién un senador preopinante—y, por el otro, me ha permitido conocer lo que opinan, dicen y declaran los actores políticos de nivel nacional.

En este sentido, quiero referirme a que a veces eso que opinan y declaran los políticos me ha llevado a percatarme de que sus convicciones cambian de forma, según el año, los meses y las circunstancias.

Esto no es como tendría que ser, máxime si nos atenemos a aquella frase que dice: “El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice”. Esto no pareciera ocurrir en la política argentina. En la realidad no se ve traducido en los hechos aquello de que “se es esclavo de lo que se habla”.

Digo esto en función de ciertas declaraciones que he leído, formuladas con referencia a la convocatoria que desde el bloque de senadores justicialistas se le hiciera al ministro Cavallo. Esto es lo que me llena de incertidumbres y dudas. Allá por el 26 de septiembre de 2000—en declaraciones que tengo sobre mi banca—, Cavallo decía en el diario “La Nación” que proponía la renuncia masiva de todos los senadores y la elección directa por el voto popular de los legisladores de la Cámara alta como solución al escándalo por el presunto pago de coimas. Cavallo también decía, aseveraba y pretendía que la Justicia se expidiera en ese sentido.

Asimismo, puedo decir otras cosas más que Cavallo expresó en otros debates de campañas electorales, referentes a la Unión Cívica Radical. Pero como ya fueron mencionadas en la Cámara de Diputados, no creo necesario reiterarlas acá. También podría ponerse de manifiesto lo que decía Alfonsín en función de todo esto, cuando se dirigía a la Unión Cívica Radical.

Esto sí me lleva a otra reflexión. Cuando el ministro Cavallo ingresó ayer en mi bloque, tuvo que dedicar una gran parte de su tiempo para explicar que la situación actual no era como la anterior; que se daban otras circunstancias, que estamos en otro momento y que aquello ya había pasado. Además, dijo que en su momento entendía que lo más importante y positivo podía ser la legitimidad popular, pero que hoy, ante las nuevas circunstancias, esa opinión estaba totalmente perimida.

Creo que esto no les hace bien a la democracia argentina ni a los políticos sino que hace al desprestigio de la clase política.

Yo no estuve conforme con esa reunión, porque no se dijo nada que fuera atinado o pertinente respecto de los intereses de mi provincia, como por ejemplo alguna medida referida a la promoción industrial, a los impuestos coparticipables, etcétera.

Y menos me gustaron las repercusiones periodísticas de esta situación. Creo que no les

hacen bien al Parlamento argentino ni a los actores políticos en esta situación especial y difícil que vivimos.

Por otro lado, creo que la afirmación de Cavallo en el sentido de que él viene, ingresa y actúa en nombre de un gobierno que busca la unidad nacional, no es correcta. No creo que sea un gobierno de unidad nacional, porque solamente han ingresado en él Cavallo y algunos otros técnicos de menor jerarquía.

Considero que hoy ha cambiado la Alianza; no es la misma de 1999, no es la misma de marzo de 2001. Y lo digo así, porque no sé qué irá a pasar en abril, en mayo, en junio, en octubre, o después de las elecciones. Este es el escenario de país que —lamentablemente— tenemos.

Y digo que no creo que este gobierno sea de unidad nacional, porque el ingreso de Cavallo en el gobierno para mí se origina en una crisis política que es la génesis de todas las crisis que se han generado de manera concatenada alrededor de la económica y que afectan también a las cuestiones sociales. Aunque al respecto, tal vez tenga razón también el señor senador preopinante —Moreau—, en el sentido de que las crisis datan desde mucho tiempo atrás. O sea, podemos remontarnos a la crisis de principios del siglo pasado o a las crisis de mediados de ese siglo. Pero, de todos modos, creo que hoy todos debemos asumir las responsabilidades que nos tocan. Esto es válido para quienes hayan sido elegidos para gobernar y para quienes hayamos sido elegidos para ser oposición. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y nuestros roles con total claridad para que no se genere ninguna confusión.

Mi opinión sobre esta iniciativa tal vez sea bastante severa, ya que no estoy a favor del proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, creo que lo que importan son las convicciones y las ideas. Y en función de ellas voy a hablar.

Entiendo que la llamada unidad nacional que surgió a partir de la crisis es, como decía hace un rato, la génesis y es ella la que debe encontrar la solución a los problemas que originan las consecuencias económicas y sociales que afectan a nuestro país. Hoy nadie puede dudar de la difícil situación de la Argentina. Por eso, más allá de la función y del rol que me toca como legislador justicialista —o sea, como oposición—, estoy aquí en este Congreso permitiendo, posi-

bilitando —para ello brindo mi apoyo— encauzar esta situación dramática que vive nuestro país. Porque, por encima de todo, está el pueblo argentino.

Pero también debo aclarar que esta situación no será superada si no se logran salvar los problemas internos de esta Alianza. En ese sentido, las declaraciones formuladas por Storani en el diario de hoy fundamentan lo que yo afirmaba acerca de que no hay unidad nacional sino una crisis política.

Storani expresó que si mañana se dijera que se va el doctor Cavallo de este gobierno se produciría una verdadera hecatombe. Eso es poder real. Y está dando a entender que el poder real lo tiene Cavallo. Más adelante, Storani también dice que las facultades se ceden al presidente y no al ministro, pero que es éste quien tiene el poder real, y que si a uno de los convocados se le entrega prácticamente el poder, ya no es un gobierno de unidad nacional; menos aún, si se licua el instrumento que lo llevó al poder.

Son declaraciones muy contundentes, que me llevan a pensar que se trata de una crisis política y que tal vez haya demasiado optimismo por parte del señor presidente, a quien respeto.

Considero que la expresión “Yo soy el garante” no es buena para la democracia. Pienso que no hay elementos para que el pueblo argentino crea en esas garantías. ¿Cómo vamos a creer eso si el 1º de marzo el presidente decía que la solvencia fiscal estaba garantizada y que el Estado contaba con un blindaje que eliminaría la posibilidad de que enfrentase problemas de liquidez; que la convertibilidad estaba fuerte y que se la iba a mantener, y que el sistema financiero era muy sólido y tenía capacidad para aumentar el crédito en el corto plazo?

Por otro lado, Daniel Marx decía que los compromisos financieros este año sumaban dos mil millones de dólares, y explicó que gracias al blindaje la Argentina estaría en condiciones de cumplir sus obligaciones sin necesidad de colocar más bonos en el mercado internacional. Recién el domingo van a hacer treinta días desde que se efectuaron estas declaraciones.

Con todos los hechos que conocemos y han ocurrido, creo que no se puede decir “Yo soy el garante” de esta delegación legislativa, la cual se pretende hacer a través de este proyecto que hoy estamos considerando.

Es mi deber como senador marcar con toda claridad en este recinto mi posición y mi opinión sobre el tema. Tal vez no coincida con la posición del bloque del justicialismo, que es mayoritario en el Senado, pero condice con mis convicciones profundas. Coincide con mi opinión y con el rol que considero que tengo que desempeñar como senador justicialista —en este caso por la provincia de San Luis—, ante esta situación y en esta circunstancia especial.

Para eso voy a definir en primer término —respecto del proyecto que ha enviado Cavallo a este Parlamento— lo que es competitividad. Es un término muy lindo. Creo que nadie está en contra de la competitividad.

¿Quién no va a querer un país —o una provincia— que sea viable y competitivo ante el resto de las naciones? De esa manera va a progresar nuestro pueblo. Pero para mí la competitividad es otra cosa. La competitividad en esta sociedad del conocimiento y la información pasa por tener lo que hoy se considera más estratégico: los recursos humanos, el hombre, la formación, la capacitación y la educación; además de la infraestructura, la tecnología, el desarrollo viable y de tener saneadas las economías de los estados.

Respecto de esto último, voy a hablar de mi provincia que, estadísticamente, es la que tiene menos deuda externa. Es una provincia en la que el crecimiento y su producto bruto interno está bastante alto. Digo esto con el respeto que merecen las provincias hermanas, pero yo hablo de lo que conozco. Junto con mi gobierno provincial me ha tocado ser el gestor de esos logros.

Nosotros entendemos que competitividad significa mejorar la calidad, la capacitación y la formación del hombre, darle la infraestructura y la tecnología que necesita y lograr la reactivación del mercado interno. Hemos tomado como eje la parte social, la plena justicia social, y por eso hemos presentado una iniciativa al Poder Legislativo —que esta semana habrá de aprobar— por la que se establece el salario mínimo, vital y móvil para los privados en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos y, para el sector público, en quinientos cincuenta pesos. Así se establece también el valor de la hora de trabajo en una cifra que va de un peso con veinte a uno con ochenta o dos con veinte, y el pago por día, en una cifra que oscila entre los ocho y los quince o dieciocho pesos.

Esta es una manera de reactivar la economía y apostar al mercado interno, a la justicia social y a la dignidad del hombre. Esto es posible —como decían en las campañas—; hay un país posible y yo digo que hay una provincia posible, de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Pero esto es y hace a la competitividad; no así los recortes y la reforma del Estado, que tienden al achicamiento. No hace a la competitividad el cercenamiento de los derechos de los trabajadores, la entrega de la suma del poder público al Ejecutivo y el cercenamiento de los poderes del Parlamento. Eso no hace a la competitividad —reitero— y a que un Estado pueda conseguir las inversiones que requiere y logre el crecimiento de la sociedad.

Por eso ahora me voy a referir más a lo que hace al marco legislativo o al marco jurídico que a este proyecto de ley que nos ha convocado y que hoy estamos tratando. Quiero referirme a la problemática que ya desde la antigüedad ha preocupado a juristas en general y a constitucionalistas en especial, con el consiguiente debate doctrinario que ello ha ocasionado y que aún —con las modificaciones introducidas por las reformas de la Constitución del '94— se mantiene hasta nuestros días.

En efecto, la constitucionalidad de la delegación legislativa es una cuestión que sigue generando encendidos debates. Creo que una de las cuestiones debatidas fue la modificación introducida en virtud del artículo 76 de nuestra Constitución Nacional. Constituye una habilitación peligrosa para el sistema republicano que los propios constituyentes adoptaron como forma de gobierno.

Sostengo lo antes expresado porque considero que la división de poderes sigue siendo la columna vertebral del sistema republicano. De manera que el respeto a este principio fundamental no sólo responde a una profunda convicción democrática sino también a la necesidad de preservar el delicado equilibrio de esos poderes para evitar el predominio de un poder sobre otro. En este sentido, y en consonancia con la postura expuesta precedentemente, estimo que el proyecto en consideración, so pretexto de delegar facultades que son propias de este cuerpo en el marco del artículo 76, en realidad está confiriendo al Ejecutivo nacional, más precisamente a un ministro, en principio la suma del poder público. Ello no sólo violenta el sistema republicano de división de poderes sino que

admitir tal postura importaría otorgarles razón a los autoritarios de siempre que piensan que el Congreso no tiene razón de ser, todo lo cual no estoy dispuesto a conceder bajo ninguna circunstancia.

En el mensaje del proyecto en consideración se hace hincapié reiteradamente en que la hora exige rápidas y contundentes respuestas para una realidad que no admite dilaciones. Es menester dar urgentes respuestas a la ansiedades que determinan las emergencias públicas que muestran a las fuerzas productivas estancadas desde hace meses. La responsabilidad de la hora exige agotar los medios previstos en la Constitución Nacional para proveer a situaciones en las que resulte necesario superar los escollos que se interpongan para la mejor y más pronta realización de sus objetivos. Esto es lo que decía el mensaje que acompañaba el proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

A simple vista se advierte que el común denominador de toda la argumentación gira alrededor de la urgencia que se tiene para adoptar medidas excepcionales tendientes a superar la emergencia económica declarada. Parece que sólo se puede solucionar mediante el otorgamiento de amplísimas facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

En este sentido, y para justificar la violación de la división de poderes, veladamente se sugiere que el procedimiento legislativo tradicional resulta antifuncional en la actualidad y que el requerimiento de la sociedad se acentúa por la crisis económica, lo que lleva a que se produzcan cambios con tanta velocidad que el proceso legislativo no puede acompañarlos.

Esta argumentación es absolutamente falsa y adolece de un vicio inocultable, como es el de admitir que el Congreso no puede afrontar responsablemente con solvencia y rapidez situaciones de emergencia. Esta apreciación conducirá al absurdo de anular en la práctica política, no sólo el principio de división de poderes sino también la jerarquía del Congreso y su razón constitucional de ser.

Quisiera mencionar una pequeña frase que me parece oportuna y cuyo autor es Montequieu: "El mundo aprende que la división de poderes no es un sistema para gobernar mejor, sino la respuesta necesaria a la enseñanza histórica, que los hombres han aprendido en el sentido de que todo poder concentrado es poder

tiránico". Más adelante, continuaba diciendo: "Para detener la tiranía hay que dividir el poder político en su ejercicio".

Después de lo que acabo de citar creo que hoy debemos reflexionar respecto de hacia adónde nos lleva y guía nuestra Carta Magna, que tiene tres artículos que han sido discutidos acá y que son medulares en este debate. Me refiero a los artículos 29, 76 y 99, inciso 3.

Aparentemente, estos artículos son contradictorios porque por ejemplo el 29 prohíbe el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, mientras que el artículo 76 autoriza excepcionalmente la delegación legislativa en las condiciones que el Congreso establezca. En tanto que el inciso 3 del artículo 99 establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo y dice que solamente por circunstancias excepcionales podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, exceptuando la materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos.

Si analizamos por separado estos artículos podemos ver que parecen contradictorios, ya que el artículo 99 en su inciso 3 establece como única excepción los decretos de necesidad y urgencia, mientras que el artículo 76 menciona a la delegación legislativa, lo que sería otra excepción. Además, el artículo 29 prohíbe conceder facultades extraordinarias; razón por la cual se debe hacer un análisis integral, interpretándolos de manera tal que todos conserven su vigencia.

Los principios que ilustraron a nuestros constituyentes en 1853 respecto de la división de poderes y la prohibición de delegar en el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, se mantuvieron a lo largo de la historia.

De ninguna manera se pretendió suplantar estos principios durante la reforma constitucional de 1994, aunque sí se receptó y legisló sobre aquellas facultades que la jurisprudencia ya había admitido. De esta forma se incluyó a la delegación impropia; de no haber sido así se hubiera producido, como dice Bianchi, una grave mengua a la división de poderes y una contradicción entre los artículos 29 y 99, inciso 3. Esta interpretación es la que les da validez a los tres artículos aparentemente contradictorios y les concede un ámbito de aplicación y funcionalidad.

Por el contrario, si se pretendiera que el inciso 3 del artículo 99 autorizara una delegación en sentido amplio, las normas constitucionales serían contradictorias entre sí y habría que concluir en que se derogan unas con otras.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario A. Losada.

Sr. Torino. — Estos han sido mis fundamentos para la consideración en general del proyecto. Respecto del análisis en particular de esta iniciativa, quiero adelantar algunas cuestiones que, desde mi punto de vista, son importantes.

En lo que hace al artículo 1º, incisos b) y c), con relación a transformar entidades autárquicas, reparticiones descentralizadas o desconcentradas, total o parcialmente, en empresas públicas, sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica, entiendo que implica la posibilidad de afectación del derecho adquirido toda vez que habilita al Poder Ejecutivo a convertir por ejemplo al INTA en una sociedad anónima o de otro tipo.

En el caso de los agentes públicos, tiene la posibilidad de someterlos a un régimen laboral del derecho común. Y esto no es una mera conjetura, eventualidad o hipótesis sino que en el inciso c) expresamente se manifiesta que se faculta al Poder Ejecutivo a someter al personal de los entes autárquicos y reparticiones descentralizadas o desconcentradas a las normas del derecho común, sacándolas del régimen jurídico público. Ello, de alguna manera, significa afectar derechos adquiridos por los agentes públicos de tales reparticiones y, además, una clara violación al derecho a la estabilidad del empleado público, reconocido por la propia Constitución a través del artículo 14 bis, como aquí se ha dicho en diversas oportunidades. Ello seguramente dará lugar posiblemente a una catarsis de juicios contra el Estado, incentivando la industria del juicio, de la que tanto habla el ministro Cavallo.

Por otro lado, en lo que hace a los incisos a), c) y d), quiero marcar que, de alguna manera, configuran una violación expresa a los artículos 29 y 99, inciso 3, de la Constitución Nacional porque autorizan al Poder Ejecutivo a crear y eliminar exenciones, disminuir tributos y establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos y reintegros, lo que importa delegar el ejercicio de facultades legislativas tri-

butarias e impositivas. Tal vez se incurre con esto en un exceso inconstitucional de delegaciones legislativas, yendo más allá de lo que autoriza la propia Carta Magna.

También quiero destacar mi oposición al artículo 8º que fija la ratificación legislativa del decreto 1299/00, Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de la Infraestructura. Y lo hago porque para San Luis no implica ningún beneficio directo. Por otro lado, no contiene ninguna participación federal y no corresponde ni hace a los intereses de mi provincia.

Por eso, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, reitero la crítica a este artículo porque no contempla los intereses de la provincia a la que represento en este Senado, además de sentirnos afectados y castigados por este decreto de emergencia vinculado con el plan de infraestructura pública de la Nación.

Quiero decir que coincido con otros señores senadores que han opinado en cuanto a los plazos que se fijan por el proyecto de ley en consideración. De ninguna manera se le puede otorgar un plazo de un año al Poder Ejecutivo porque nosotros tenemos un mandato y consecuentemente una facultad para legislar hasta el 9 de diciembre del corriente año. Por lo tanto, considero que no es pertinente otorgar un plazo mayor a esa fecha.

Por último, ante esta breve fundamentación, me voy a permitir leer una frase de Miguel Angel Ekmekdjian, que resume lo que he expuesto. Dice así: "Pretextar motivos de eficiencia o de *realpolitik* para aceptar delegaciones que ponen en peligro la libertad es una miopía trágica, porque la libertad —tan duramente conseguida— es el bien más preciado del hombre. El que vende su libertad por un plato de comida se queda sin comida y sin libertad."

Señor presidente: tal vez mis reflexiones se pierdan en este recinto, pero más allá de ello yo estoy expresando con profunda convicción mis ideas y mi pensamiento. Seguramente, la historia será la que juzgará este difícil momento que vive nuestro país.

Deseo manifestar que voy a ejercer mis responsabilidades legisferantes con altura, como corresponde. Desde mi profundo pensamiento y con el único límite de mi conciencia y de hombre democrático que soy, adelanto que no voy a votar a favor del cercenamiento de los dere-

chos laborales y de los derechos e intereses provinciales. Voy a defender a rajatabla los derechos parlamentarios y las facultades de este Congreso, porque creo que es el ámbito más democrático que existe, dado que es el único lugar donde están todos los partidos políticos que representan a la comunidad y al pueblo argentino.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: desde 1890 en la Argentina hubo tres modelos: el agrario, el industrial y el financiero. Con los dos primeros modelos, el agrario y el industrial, el país creció nueve veces más que con el modelo financiero, implantado a partir de 1976 y actualizado en 1991.

Este modelo financiero constituye el paso definitivo del capitalismo productivo al capitalismo de renta, con un eje especialmente fijado en la especulación financiera, con enormes ganancias producto de los extraordinarios beneficios de los servicios públicos privatizados y monopolizados y de los ingresos de los recursos naturales como el petróleo y el gas.

Esta degradación de la economía argentina tuvo sus pilares en los siguientes puntos fundamentales: la deuda externa, la desarticulación del Estado como tal, la concentración y extranjerización de las empresas, la desindustrialización del país, la desocupación y la distribución regresiva de los ingresos.

Así, la deuda externa que en 1976 era de 7.800 millones de dólares pasó en 2000 a 150 mil millones. Y si a ello incorporáramos otros rubros que también constituyen la deuda externa y recalculáramos la deuda privada, llegaríamos a una cifra superior a los 200 mil millones de dólares.

El *establishment* financiero que, nos guste o no, es el grupo económico que manejó el país, es el gran evasor de impuestos —aproximadamente 20 mil millones de pesos al año— y, además, es el responsable de que existan en el extranjero fondos argentinos por 100 mil millones de dólares. Además de desarticular el Estado, lo dejó sin empresas y lo endeudó a extremos inauditos como acabo de expresar en cifras. ¿Y cuál fue el resultado? La crisis y el estado deplorable en que se encuentra el país.

Podemos afirmar que la deuda externa constituye la acción fundadora del modelo neoliberal,

que llevó al país a la necesidad de obtener nuevos créditos para no caer en cesación de pagos. Y en esa situación nos encontramos todos los años; necesitamos miles de millones de crédito.

Hay un economista que dijo que, para mantener este sistema sustentado en el régimen financiero, necesitamos anualmente más de 20 mil millones de dólares de préstamos. Y cuando no tengamos más esos fondos, el país se derrumbará. Eso es lo que nos dejó el *establishment* financiero: el aumento constante de la deuda externa y exigencias que conllevan y obran como motor impulsor y reaseguro del modelo neoliberal, conservador y perverso, que hoy nos tiene a todos los argentinos angustiados.

Este modelo fue generado por los grandes tecnócratas economistas que tenemos en el país, que han ocupado los distintos cargos más importantes en los gobiernos, y a quienes financian las fundaciones que, como FIEL, son la rancia expresión de los grandes bancos y empresas que acapararon los servicios privatizados. Son los mismos que aplaudieron rabiosamente el discurso de López Murphy en la Bolsa de Comercio. Es el modelo del *establishment* financiero, que trajo concentración, extranjerización, corrupción, desigualdad y pobreza.

En 1998, las quinientas mayores empresas que existían en el país concentraron nada menos que el 40 por ciento del producto bruto interno del país. Las empresas de capital extranjero que en 1976 generaron el 32 por ciento del valor agregado, en 1998, llegaron casi al 58 por ciento. La participación del asalariado en el ingreso disminuyó del 35 por ciento que tenía en 1976 al 28 por ciento actual. Es decir que los asalariados han venido sufriendo las graves consecuencias de este perverso modelo económico, así como también las padecen la clase media, las pymes, las economías regionales y todo el sector productivo del país. Podemos decir que el panorama se completa con la desaparición casi total de las empresas estatales y la extranjerización de nuestro sistema bancario.

En 1976 el sector industrial generaba el 32 por ciento del producto bruto interno. Y fíjese lo que hizo de nuestro país esta política económica, ya que el producto bruto interno que hoy genera ese mismo sector ha bajado al 17 por ciento. Esta es la demostración cabal del cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, de

la pobreza, de la desocupación y de la miseria, porque el 80 por ciento del empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas.

Ante esta calamidad, que se agudizó por la apertura externa que inundó nuestros mercados, se llegó a una crisis extrema que es la que estamos viviendo ahora.

En 1976 la desocupación era nada más que del 4,5 por ciento. Y debo decir con tristeza que hoy estamos en un 15 por ciento y que este nivel no varía fundamentalmente desde 1996. Además, a este porcentaje debemos sumarle otro tanto de subocupados. En este sentido, según un informe del Banco Mundial, existen actualmente en nuestro país 10,5 millones de personas que ganan menos de 148 pesos mensuales, que en consecuencia están por debajo de la línea de pobreza, y otros casi 5 millones de desocupados y semioocupados.

En cuanto a la distribución del ingreso, vemos que en 1974 el 30 por ciento más pobre del país recibía el 11 por ciento y en 2000 percibe nada más que el 8 por ciento. Además, debemos agregar que la representación del sector más rico del país—el 10 por ciento—en el ingreso total pasó del 28 al 36 por ciento. Esto constituye una demostración cabal de cómo los ingresos se concentraron en la clase más elevada en detrimento de la pobre y media.

Pero en la última década aparecieron nuevos ingredientes: prácticas corruptas y grupos delictivos se posicionaron en distintas áreas económicas. Así, la corrupción afectó todo el aparato productivo a través de la subfacturación y el contrabando. A su vez, a esto debemos agregar la aparición de la aduana paralela, la venta ilegal de armas, el contrabando de oro, soborno, como el del caso “IBM-Banco Nación”, las comisiones ilegales por las privatizaciones y la gran evasión impositiva organizada y especialmente manejada por los grandes intereses que pretenden seguir conduciendo el país.

A esto debemos sumar el último hecho que tuvo gran repercusión en la prensa argentina, como es el lavado de dinero, con gravísimas acusaciones contra el presidente del Banco Central, que permanece aferrado a su sillón y defendido por los grandes bancos, es decir, por el sector que representa los intereses más nefastos y que ha venido chupando la sangre al país hasta colocarlo en el estado de anemia en que hoy se encuentra.

Señor presidente: este modelo fue absolutamente incapaz de establecer un crecimiento real y una distribución justa de la riqueza. Constituye un régimen que no sirve para producir sino tan sólo para especular. Además, constantemente reclama el achique del Estado para absorber sus recursos, que es lo que vienen tratando de aplicar ministro tras ministro y gobierno tras gobierno, a efectos de dejar reducido el Estado a una mínima expresión para que estos sectores se lleven los recursos del pueblo argentino, mientras éste languidece y padece estados de necesidad, pobreza y desocupación.

Este sistema financiero nos trajo la concentración de la riqueza, la destrucción de nuestro aparato productivo, la desocupación, la miseria, la marginalidad, la pobreza, la delincuencia y grupos mafiosos que dominan sectores enteros de la economía.

Lucgo del fracaso del ex ministro Machinea vino el programa de ajuste; ese programa casi demencial y antipopular propuesto por el doctor López Murphy. Y asumo la responsabilidad que me toca porque tanto López Murphy como Machinea eran afiliados radicales...

—Murmillos en el recinto.

Sr. Maglietti. — Me corrigen aquí que todavía lo son. Sin embargo, pretendieron instrumentar programas desarrollados por los sectores más reaccionarios y conservadores del sistema financiero, con el fin de imponer un nuevo ajuste al pueblo argentino y así beneficiar a esos sectores. Como consecuencia de ello, la crisis se agudizó y entramos en una verdadera emergencia económica.

Ahora tenemos un programa y un equipo económico nuevos. Hoy quien ocupa el cargo de ministro de Economía de la Nación es el doctor Cavallo y ello debido a que los dos ministros anteriores, que eran radicales, nos ofrecieron programas reaccionarios. En cambio, el nuevo ministro ofreció al presidente un programa al servicio del desarrollo del país, de carácter progresista y con el objetivo de combatir la pobreza, reactivar la economía, crear fuentes de trabajo y, en consecuencia, apoyar al sector productivo de la Nación.

Dado que este programa está dirigido, entre otras cosas, a combatir la evasión, a eliminar la corrupción, a gravar a los sectores financieros—el cuco al que todos los tecnócratas decían que no se podía gravar—, a gravar al capital

concentrado y a apoyar a las economías regionales, el 50 por ciento del pueblo argentino le está brindando su apoyo.

Un programa económico jamás puede tener éxito si no es creíble; es decir, si el pueblo no confía en él. Evidentemente, este plan que está diseñando el nuevo equipo económico es un programa creíble, que ha despertado el optimismo y la confianza en la población. Basta con leer algunos titulares aparecidos en los diarios en los cuales se menciona, por ejemplo, que los centros comerciales vendieron hasta un 29 por ciento más que hace siete días o que este fin de semana hubo una fuerte alza de ventas en los *shopping centers*.

Señor presidente: es indudable que se está produciendo la reactivación mediante un shock de confianza porque, de lo contrario, por bueno que sea el programa económico la reacción no se haría notar. Sin embargo, está llegando rápidamente, lo que demuestra la confianza que le está dando el pueblo argentino a este plan económico.

Y esto se avala a través de las primeras medidas adoptadas. En ese sentido, uno de los principales puntos que propuso este gobierno fue la creación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias, lo que permitirá al Estado tener dinero y no pagar las tasas exorbitantes que exigían los señores banqueros hoy ofendidos porque el ministro de Economía les dijo claramente que no iba a pagar tasas superiores a las que paga México, que son del 7 por ciento. Lo que ocurre es que cuando el cargo de ministro lo ocupaba el señor Machinea, los banqueros estaban mal acostumbrados porque habían obtenido tasas hasta del 16 por ciento y hoy lógicamente ven que sus negocios se empiezan a deteriorar porque ya no podrán esquilmar a la Argentina con tasas exorbitantes. Todo ello gracias a este nuevo equipo económico que tiene autoridad para plantarse ante el sector financiero y los monopolios que hoy manejan o quieren manejar el país, e incluso ante el Fondo Monetario Internacional que lo consideró irrelevante, y que no merecían ser atendidos ni por el presidente ni por el ministro de Economía. ¡Qué tecnócrata se había atrevido en el país a hacer semejantes apreciaciones!

Hace muchos años que no escucho medidas de esa naturaleza, que me llenan de alegría como argentino. Y también me lleno de alegría cuan-

do observo que se aumenta con una tasa del 35 por ciento el impuesto a la importación de bienes de consumo para defender la producción nacional. Algunos dicen que esta medida llegó tarde ya que la mayor parte de nuestra industria ha desaparecido. Sin duda, eso lo dicen los sectores que quieren recuperar sus privilegios. En cambio, yo considero que nunca es tarde para recuperar nuestras industrias, para que vuelvan a fortalecerse y para que se creen nuevas fuentes de trabajo.

Señor presidente, a eso debemos agregarle la otra medida, el pago con cheques a partir de los mil pesos para combatir la evasión. ¿Qué equipo económico en los últimos años ha combatido la evasión en el país? Absolutamente ninguno.

Desde que soy senador hace varios años, he venido protestando por el hecho de que no se combata la evasión. No se la combatió durante el gobierno anterior ni se lo hizo durante la época en que Machinea era ministro; y no hablemos de López Murphy, porque fue nada más que un soplido que pasó y se fue.

Entonces, señor presidente, cómo no voy a apoyar estas medidas que se proponen ahora para delegar facultades. Las apoyo con mucho entusiasmo porque veo que éste es un equipo económico que va a sacar al país adelante. Tengo absoluta confianza en ello ya que las medidas que se instrumentan en este proyecto están perfectamente delimitadas y clarificadas. De manera, que aquí nadie puede acusarnos de que estamos otorgando facultades extraordinarias. En efecto, las facultades que estamos otorgando al Poder Ejecutivo son incluso de menor cuantía que las que se otorgaron por otras leyes durante otros gobiernos, específicamente durante el gobierno anterior.

Con estas medidas este equipo económico va a encaminar al país hacia la recuperación económica y hacia la creación de fuentes de trabajo. En ese sentido el reimpulso que se les está dando a los planes de infraestructura es uno de los claros ejemplos de que una vez puestos en marcha permitirán crear 400 mil nuevos puestos de trabajo, junto con otros más que ya se están programando a una velocidad fantástica. Cada 24 horas se anuncian medidas totalmente innovadoras, progresistas, al servicio de la recuperación económica del país, que resultan apoyadas por el sector de la producción.

Como dije anteriormente, son creíbles porque el pueblo argentino está demostrando su confianza.

Ahora el rol del Estado será tomar todos los recaudos para la reactivación económica y para terminar con un Estado contemplativo y complaciente, programado por este neoliberalismo que destruyó al país y que enriqueció al sector financiero.

Nos encaminamos hacia un capitalismo sano al servicio del desarrollo del país y le cerramos las puertas —lo repito, le cerramos las puertas— al capitalismo mafioso y usurero acostumbrado a operar en el país con la complicidad de los tecnócratas que lo defienden.

Con estas facultades delegadas al Poder Ejecutivo vamos a poder reorganizar la administración pública sin despidos, sin rebajas salariales ni de las jubilaciones, sin que se viole ninguno de los derechos de los trabajadores argentinos y sin que se violen las protecciones establecidas en la Constitución hacia ellos. Con este proyecto se van a crear tasas y recursos no tributarios para la afectación específica del proyecto de infraestructura.

Asimismo, señor presidente, no habrá privatizaciones. Y lo digo con las letras grandes del diccionario. No habrá privatización de ninguna empresa del Estado, no sólo porque este proyecto no lo permite sino porque —como lo explicó claramente el senador Moreau— es absolutamente imposible privatizar un organismo del Estado o un ente autárquico sin la autorización del Congreso. De manera tal que el pueblo argentino hoy no corre ese riesgo. Tampoco corren ningún riesgo los jubilados, los universitarios, los productores, los hombres del campo, los hombres de las economías regionales ni los industriales. Al contrario; como vemos, son todas medidas innovadoras al servicio de la producción. En consecuencia, todas ellas tienden a recuperar el país a fin de sacarlo del estado de estancamiento en que se encuentra, de sacar al pueblo argentino de la tristeza en que vive y encauzarlo hacia su recuperación.

Además, señor presidente, ¿quién puede decirme qué gobierno fue capaz de aprobar un artículo como el que se sancionó en la Cámara de Diputados, según el cual se podrán gravar las acciones, títulos, bonos y demás valores? Eso nunca se pudo hacer por la gran presión del sector financiero. Nosotros podremos aprobarlo, y así

darle la posibilidad al Poder Ejecutivo de que lo haga.

Este proyecto, señor presidente, permitirá mejorar la recaudación y, sobre todo, reducir la evasión y el contrabando; que son los grandes males que hoy tiene el país. Con la subfacturación entran mercaderías por miles de millones en contrabando, se facturan en negro o se subfacturan, creando una competencia desleal y destruyendo nuestra industria. Todo eso se va a terminar y nuestros industriales podrán volver a producir y a dar trabajo a los argentinos.

Un senador dijo que tenía problemas de conciencia. Le digo a ese senador que yo también los tengo. Los problemas de conciencia más graves los he tenido cuando el señor Machinea aplicó su impuestazo y la reducción del 12 por ciento de los salarios a los argentinos que ganaban más de mil pesos.

Tuve también problemas de conciencia cuando escuché el programa de ajuste del señor López Murphy. Realmente, pensé que ni siquiera estaba ante un gobierno radical. Pensé que había habido un golpe del sector financiero que quería apoderarse definitivamente del país para liquidar las universidades, para privatizar lo poco que quedaba, para destruir las economías regionales y para bajarles el sueldo a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados. Se trataba de un programa que califico de espeluznante. Ahí tuve graves problemas de conciencia.

También los tuvimos cuando el presidente de la Nación designó al doctor Cavallo como ministro. Pero, ¿qué pasó? Creo que el presidente de la República, doctor De la Rúa, se dio cuenta de que los programas que se venían aplicando no eran los que el país requería ni los de la Alianza. Y cuando se hizo asesorar por el doctor Cavallo y su equipo, seguramente se dio cuenta de que el programa que éste quería aplicar era el que más se ajustaba al de la Alianza y el que realmente necesitaba el país para salir adelante.

Entonces, el señor presidente de la Nación ha dado muestras de una extraordinaria capacidad porque tuvo la valentía de designar al señor Cavallo cuando éste era mala palabra dentro del radicalismo y ninguno de los radicales, aparentemente, estábamos dispuestos a avalar semejante designación.

Pero, señor presidente, ese problema de conciencia se me desvaneció rápidamente. Porque

cuando empecé a ver las medidas que adoptó el actual equipo económico, con la anuencia del presidente de la República, me di cuenta de que el programa económico de este equipo no tenía absolutamente nada que ver con el aplicado durante el gobierno anterior. Esto no tiene nada de horroroso, ni es nada raro. Conozco la historia de muchos prohombres que fueron conservadores y luego modificaron sus posturas. Por ejemplo, Mitterrand, quien fue presidente de Francia. El primero fue conservador y luego se hizo socialista. ¿Alguien se atreve a criticarlo? Al contrario. Fue muy aplaudido y reconocido por los franceses, porque lo eligieron presidente de su país.

Debo reconocer que este programa de Cavallo constituye un giro de 180 grados con relación al programa que aplicó anteriormente. En realidad, el programa que está instrumentando el actual equipo económico es el de la Alianza, porque todos los postulados y los puntos que están aplicando el señor Cavallo y su equipo están siendo avalados por el presidente de la República, quien se ha dado cuenta de que él es el hombre que va a hacer cumplir el programa de la Alianza y va a sacar a la Argentina de la pobreza, de la desocupación y de la miseria.

Pero no lo va a hacer solo, sino con la colaboración de todos los argentinos que estamos cansados de los programas de los tecnócratas, hechos al servicio de los intereses extranjeros que han destruido a la Nación.

Hoy tenemos la obligación de tener fe en este programa; el pueblo argentino tiene fe. Y yo, como senador de la República, tengo fe en el presidente de la Nación, porque creo que ha encontrado el carril para sacar al país de la pobreza, de la miseria y lanzarlo hacia su definitiva recuperación.

Sr. Presidente (Losada).— Tiene la palabra el señor senador Varizat.

Sr. Varizat.— Señor presidente: adelante que votaré negativamente el proyecto en tratamiento, pero quiero efectuar algunas reflexiones sobre la base de las convicciones, creencias y preocupaciones que tengo sobre el particular.

Comparto que es positivo para el país la llegada del ministro Cavallo al gobierno de la Alianza. Creo firmemente que habrá una recuperación en el terreno económico. Considero que las medidas que se están tomando son positivas

y que el aumento de los aranceles a los productos importados constituye una medida largamente esperada: en buena hora que se materialice. También creo que va a haber una reacción favorable en los mercados; pero no creo en el dios mercado, ni en el salvador Cavallo. Creo firmemente en la voluntad popular. También tengo la convicción de que no existe la emergencia pública y de que ésta no está configurada como para ser establecida; sin embargo, creo que existe una grave crisis política y una emergencia social realmente grave. Salvo que la crisis del gobierno de la Alianza, su falta de políticas claras, las contradicciones de sus ministros y la pérdida de autoridad y credibilidad de su presidente configuren una emergencia pública, yo no creo que ésta exista.

De todas maneras, estos problemas que he mencionado han quedado en gran parte solucionados con la incorporación de Domingo Felipe Cavallo al gobierno de la Alianza. En efecto, hoy ha desaparecido la sensación de los argentinos de que no tienen gobierno. Hoy existe la sensación de que existe un gobierno, una política económica, un rumbo de gobierno y de que se van a empezar a instrumentar medidas para que ese rumbo sea cada vez más cierto y para que se empiecen a solucionar los problemas de la gente, más allá de no ser el rumbo ni las políticas que los argentinos votaron en octubre de 1999.

Creo que estamos ante una difícil situación financiera y ante una severa emergencia social. La difícil situación financiera se corrige con el buen uso de los recursos que se van a recaudar con la implementación del impuesto a los créditos y a los débitos de las cuentas corrientes, establecido por la ley de competitividad que ha aprobado este Congreso la semana pasada.

La grave emergencia social podría comenzar a solucionarse destinando una parte de esos recursos a encarar los problemas más serios que tiene la Argentina, como los sociales, y fundamentalmente, la desocupación.

Pido permiso para leer un párrafo muy cortito de algo que se llamó el “plan para volver a crecer”, que fue la plataforma electoral del partido del ministro Cavallo. En un párrafo dice: “Este plan será capaz de recuperar la competitividad del sector productivo, de reactivar la economía, asegurándose solvencia fiscal permanente. De esta manera, se logrará hacer des-

cender el riesgo país y la Argentina podrá acceder al *investment grade*, la calificación de riesgo de países como Chile y Uruguay, que pagan tasas de intereses un 50 por ciento más baratas que las nuestras”.

Después se enumeran casi todas las medidas que hoy se están tomando, con lo que podemos afirmar que el gobierno de la Alianza está aplicando la propuesta electoral del partido de Domingo Felipe Cavallo, que en octubre de 1999 sacó exactamente el 10 por ciento de los votos.

Como decía antes, no creo en el dios mercado ni en el salvador Cavallo. Sí creo en la voluntad popular. Y creo también que la voluntad popular, merced a nuestra Constitución, se expresa de acuerdo con el resultado de las elecciones y no al sondeo de algunas encuestas ni a la presión de ciertos mercados.

Y en 1999 la voluntad popular determinó que prácticamente el 80 por ciento de los argentinos quería salir de un modelo económico y aplicar otro tipo de políticas. Aproximadamente un 10 por ciento seguía aferrado a un determinado modelo que, si bien maquillado, era el mismo modelo.

A mí me preocupan ciertas similitudes del resultado de la incorporación de Cavallo y la instrumentación de estas medidas. Y me voy a referir a esta cuestión despojado de todo dramatismo. Me parece que esa estrategia de asustarnos entre los legisladores con el tema de la traición a la Patria, o de asustar a los que no estamos de acuerdo con dicha exageración, es algo completamente innecesario.

Decía que me voy a expresar despojado de todo dramatismo, porque realmente me preocupa la similitud de efectos. En la Argentina de hace algunos tiempos, por suerte cada vez más lejanos, para lograr imponer la voluntad de una minoría sobre el resto del país hacía falta un golpe militar. Los efectos del golpe militar eran precisamente eso: imponerles a las mayorías la voluntad de las minorías y anular o cerrar el Congreso. Me preocupa la similitud en el sentido de que acá se impone la voluntad de una minoría y se anula —aunque más no sea parcialmente— el accionar del Congreso. Esa es una de mis preocupaciones.

Otra gran preocupación que tengo es un tema que ha sido durante mucho tiempo un latiguillo permanente de este modelo económico que sigue instalado en nuestro país. Me refiero a la

seguridad jurídica. Se nos ha dicho hasta el cansancio que sin seguridad jurídica nadie va a venir a este país a invertir un solo peso, dólar, yen o lo que fuera. Y en virtud del inciso e) del capítulo de la emergencia pública, hay aproximadamente 1.500 leyes que pueden modificarse total o parcialmente, o derogarse. Entonces, durante el tiempo que dure esta emergencia, de acuerdo con el humor con que se levante nuestro presidente, el ministro de Economía o quien sea el destinatario real de estas facultades, prácticamente podrá modificar o derogar cuatro leyes por día. Y para citar un ejemplo simple como este proyecto de ley que envió el ministro Cavallo al Congreso, una de esas normas es la Ley de Patentes. Fíjense la gravedad de estas medidas que hacen todo lo contrario de lograr una seguridad jurídica para quienes se atreven a invertir en el país.

Por otra parte, me preocupa también el rechazo de este aporte patriótico que está haciendo el Congreso de la Nación y particularmente el Senado, según los dichos del ministro Cavallo. Porque él entiende que estamos haciendo un aporte patriótico pero no quiere que intercedamos en la mayoría de las medidas que va a implementar. O sea que considera que somos patriotas y que estamos haciendo un gran aporte, pero que no lo molestemos en las medidas que va a implementar porque aparentemente no nos necesita.

Más que la “judicialización” de la política me preocupa la “camaleonización” de los políticos que dicen una cosa un día, otra al día siguiente y hacen otra completamente distinta el posterior.

Insisto en que me parece positiva la incorporación del ministro Cavallo a este gobierno. Empezamos a tener gobierno, empezamos a tener políticas económicas y un rumbo, más allá de que esto signifique el certificado de ineptitud del gobierno de la Alianza. No obstante, se trata de políticas que van a beneficiar al 10 por ciento de la ciudadanía. Es lo que pasó con la dupla Cavallo-Menem. Yo no creo en esa teoría de que a Menem le tocó el Cavallo malo y a De la Rúa, el Cavallo bueno.

Por estas dudas y estas convicciones, señor presidente, es que reafirmo que voy a votar negativamente este proyecto.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López. — Señor presidente: al comienzo del debate algún senador hizo referencia a que algún candidato a diputado dijo, en algún momento, que no iba a votar jamás una delegación de facultades si ocupara una banca en el Senado de la Nación. No estoy seguro de que me haya citado; estoy seguro de haberlo dicho. Y también decía que había un Domingo Cavallo bueno, que era el de la Alianza y un Domingo Cavallo malo, que era el de Menem. Y acá se ha hecho referencia al Domingo Cavallo malo y al Domingo Cavallo bueno. No hace demasiados minutos el senador Maglietti decía que el Domingo Cavallo bueno venía a aplicar medidas de acción positiva, de intervención en la preservación del mercado interno argentino, como ya lo ha hecho. Se han dictado medidas que parecían imposibles que las pudiera dictar un gobierno en donde Domingo Cavallo fuera ministro. Y también se ha dicho aquí —y conviene reafirmarlo— que el Domingo Cavallo malo es un buen técnico, además de un hombre que tiene pretensiones de seguir haciendo política. Es un experto. En el gobierno anterior se le dijo que tenía que estabilizar la moneda y lo hizo. Lo que no se le dijo es que tenía que preservar el mercado interno, la industria nacional, no producir desempleo y no pauperizar a la Nación y a las economías regionales, lo que luego sucedió con la aplicación de aquel plan económico que obedecía a una conducción política que era del menemismo y que le dio esas instrucciones. Lamentablemente el país se encontró con el desempleo, la pauperización, la pobreza, la quiebra de las economías regionales y la falta de competitividad de sus productos.

Pero hoy gobierna la Alianza que, como aquí se ha dicho, proponía en su programa lo que hoy manifiesta el Domingo Cavallo bueno. La conducción política del gobierno lo ha convocado con gran valentía para ejercer esta alta responsabilidad, como lo señaló el senador Menem en la sesión pasada cuando se trató la primera etapa del proyecto de ley de competitividad. Lo aprobado en aquella ocasión fue de gran importancia porque logramos ponerle límites al avance que se pretendía efectuar sobre la coparticipación federal de impuestos de nuestras provincias y sobre los fondos especiales, como el del tabaco, de la nafta, del gas y de Salto Grande. Esos límites no fueron puestos porque sí, sino porque quienes tuvimos la oportunidad de concurrir a una reunión del Comité Nacional

Federal Confederal —es decir, el Comité Nacional con sus mesas más todos los presidentes de comités provinciales— realizada la semana pasada, tuvimos en claro que se debían marcar los límites para el cumplimiento del programa de la Alianza.

Hoy, el esfuerzo y celo que han puesto todos los legisladores —los diputados que están en la atención pública y los senadores de todas las bancadas que trabajaron junto con los diputados— para resguardar las facultades legislativas dieron como resultado el establecimiento de límites importantes.

Comparto el análisis efectuado por el senador Moreau cuando mencionaba que no se afectaban las universidades, el Banco Nación en forma expresa, el PAMI y que estaban resguardadas las jubilaciones y las asignaciones familiares. Se impide también la derogación de algunas leyes en donde aparezcan este tipo de conflictos.

Todo esto que acabo de mencionar es lo que nosotros no pudimos desarrollar, pese a los esfuerzos realizados por el gobierno nacional durante este primer año y cuatro meses. Han puesto sobre mi banca una resolución de la convención de mi partido, que preside el gobernador de mi provincia, en la que se me indica que debo oponerme a la privatización de la Casa de la Moneda.

Soy un radical que se hizo desde abajo, soy hijo de un empleado público provincial —en definitiva un empleado público estatal—, soy vicepresidente de la Comisión de Trabajo y tenía quince años cuando se incorporó el artículo 14 bis en la reforma constitucional de 1957, que determinó la estabilidad propia del empleado público. Es cierto que los tribunales después dijeron que había una estabilidad impropia y que, poniendo en disponibilidad a un empleado público durante un plazo determinado, luego podía despedírsele pagándole una indemnización. Todo esto fue resultado de una larga lucha de los sectores sociales para establecer una estabilidad propia. Fue así que en 1933 se consiguió en Entre Ríos este gran avance social, después de la alternancia del poder entre conservadores y radicales que provocaba el despido de todos los empleados públicos que no eran de su militancia. Uno mamó estas cosas desde ese punto de vista y es así como realicé el análisis de este proyecto de ley.

Voy a acompañar la labor de mi gobierno en la puesta en marcha del programa de la Alianza que no pudimos impulsar durante este año y cuatro meses de gobierno. Tengo confianza en este experto que quiere ser político y que ha sufrido ahora las consecuencias de ser rechazado por el pueblo cuando marchaba por las calles de la República haciendo campaña electoral y que no quiere pasar nuevamente por esa situación. Justamente, he visto esto cuando caminaba por la peatonal de mi ciudad. Creo que ha recapacitado y ha aprendido. Es por eso que quiere establecer medidas de acción positiva para proteger nuestra industria y nuestras economías regionales. Quiere desgravar, quiere diferir impuestos y efectuar retenciones de otro tipo. Es decir, quiere hacer cosas impensables en el Cavallo malo. Está haciendo todo esto bajo la conducción política firme y férrea del gobierno de la Alianza que preside el doctor De la Rúa, que está comprometido a llevar adelante este programa que, como decía el senador Maglietti, ahora quiere ponerse en marcha.

Pero tengo algunas observaciones para formular en base a lo que he dicho y a mis íntimas convicciones, alguna de las cuales, lamentablemente, me va a llevar a no acompañar la votación de algún artículo del proyecto en consideración.

Si bien es cierto que se ponen límites, por ejemplo, por los incisos *a)* y *b)* del artículo 1º, apartado I, se posibilita la fusión, descentralización, etcétera, de reparticiones o entidades autárquicas y transformarlas en empresas públicas, sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica. Y si a esto lo hacemos jugar —quizás estoy equivocado y no es así, muchos creen que no lo es y ojalá tengan razón, pero la duda nadie me la despeja y mientras eso no suceda prefiero equivocarme por el no y no por el sí— con el inciso *c)*...

Sr. Presidente (Losada). — Señor senador: el señor senador Menem le solicita una interrupción, ¿la autoriza?

Sr. López. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Losada). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Señor presidente: escucho al señor senador y realmente no salgo de mi asombro.

Esto de distinguir entre el Cavallo malo y el Cavallo bueno, que lleva a distinguir entre el Cavallo bueno junto con el Menem malo porque aparentemente todo lo malo que hizo Cavallo fue porque se lo dijo Menem y lo bueno fue porque lo hizo Cavallo, me lleva a comprender que para los radicales esto es difícil.

Entiendo que es difícil para los radicales aceptar a Cavallo en el gobierno. Comprendo que es incómodo. Pero hemos tenido mucha tolerancia, señor senador, en no marcar las diferencias en sus actitudes. Porque si hubo una persona sumamente denostada luego del presidente Menem fue el doctor Cavallo; fue al que más atacaron.

¡Las cosas que dijeron de Cavallo! Comprendo que debe ser incómodo y difícil. Comprendo todo. Pero no traten de defender lo indefendible. No hablen del Cavallo malo y del Cavallo bueno.

El señor senador no debe hablar solamente de la inflación. Hablemos del crecimiento y de todas las cosas que ocurrieron en el período 1989-1999.

Como un aporte estamos colaborando con el gobierno radical y le estamos dando los instrumentos que solicita. Pero, por favor, no ofendan el sentido común queriendo justificar por qué Cavallo ahora es bueno y antes era malo. Les pido la misma templanza que estamos teniendo nosotros al darles instrumentos que ustedes no nos hubieran dado nunca, como efectivamente no nos los dieron cuando éramos gobierno.

Nuevamente, les solicito un poco de comprensión y que reconozcan el gesto de esta bancada que está apoyando leyes, aun teniendo la mayoría y pudiendo no darles quórum, como el radicalismo lo hizo cuando era oposición. No nos obliguen a entrar en ese debate porque, realmente, creo que no están respondiendo con reciprocidad a este gesto de generosidad de la bancada justicialista.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador López.

Sr. López. — Señor presidente: evidentemente, el señor senador no escuchó en forma completa mi exposición.

Quien habló del Cavallo bueno y del Cavallo malo fue un miembro de su bancada, y a eso hacía referencia sin tratar de ofender a nadie. Decía que se le dieron otras instrucciones para

aplicar otro programa de gobierno, que no es el que pondrá en práctica ahora. Y remarqué algunas pruebas que ratifico. De ninguna manera he querido ofender a la bancada justicialista. Además, reconozco el esfuerzo que hace la oposición para acompañar la política que quiere poner en marcha el gobierno de la Alianza y que no pudo ser implementada durante los primeros catorce meses de gestión.

Decía que si hacemos jugar los dos primeros incisos del artículo 1º, apartado I, con el inciso c) se podría dar el caso de que, por la vía de fusión, y pese a las prohibiciones existentes, o por la vía de transformación en otras formas de organización jurídica, algún trabajador estatal pierda la estabilidad laboral. Y en la duda prefiero equivocarme por el no y no por el sí.

Señor presidente: lo que quería decir es que no voy a acompañar con mi voto esta norma en tanto no se me asegure que no es así o en tanto el texto se rectifique en el tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: realmente, resulta difícil agregar algo trascendente a lo dicho en las exposiciones de los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, algunas de las cuales fueron muy completas y sólidas, aun cuando hayan sido leídas.

En primer lugar, voy a adelantar mi voto favorable a este proyecto de ley. Además, señalo que sólo voy a sugerir una modificación en el criterio del artículo 6º, aun cuando entiendo la inteligencia de aprobar esta iniciativa tal como llegó de la Cámara de Diputados.

Siguiendo el hilo argumental de la exposición del señor senador Menem, digo que por encargo de mi propio bloque he recopilado doctrina, antecedentes y casos jurisprudenciales de nuestro país y de otros lugares del mundo respecto a cómo se deben entender las delegaciones de facultades de la Constitución e, incluso, a cómo se debe entender el juego de las necesidades que tiene una comunidad en un momento determinado de la historia en cuanto a los propios límites que le establece la Constitución. A tal efecto, voy a intentar no caer en el abundamiento de reiterar conceptos o citas que ya han sido vertidos en este recinto.

Creo que hay una absoluta pertinencia por parte del Congreso de la Nación de otorgar es-

tas facultades especiales, que no son poderes extraordinarios, como titula algún canal de televisión que está filmando nuestras exposiciones o como lo hacía ayer con los discursos de los señores diputados. Como ya se ha dicho, tampoco son facultades extraordinarias. Se han fundado los orígenes y se han citado los datos históricos que justificaron que la Constitución del 53 tuviera el contenido del actual artículo 29 y que la Constitución de 1994 lo reiterara en términos más o menos exactos. De cualquier manera, no voy a entrar en ese análisis.

Ahora bien, el análisis de las facultades delegadas por el Congreso es preexistente en el derecho argentino a la propia vigencia de la Constitución de 1994 y a la expresión introducida por ese texto constitucional en el artículo 76. Hay casos de jurisprudencia que ya fueron citados por el señor senador Menem y otros que insinuó el señor senador Molinari Romero. Entre ellos, está el caso "Delfino", que me parece es el más claro en cuanto a la exposición de los antecedentes. A él se agrega un caso que me parece más claro aún: el caso "Práttico" de 1960, donde la Corte validó esta situación por vía de justificar excesos en los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, más que por la vía de las facultades delegadas por el Congreso. Pero ahí la Corte esbozó una doctrina que sería claramente aplicable al caso. No la voy a exponer ni siquiera sintéticamente, pero ella sirve en este debate parlamentario como antecedente cuando se quiera, eventualmente, analizar a qué apelamos los senadores para justificar el voto que vamos a dar.

Lo que sí quiero hacer es una referencia a los antecedentes del derecho público norteamericano, que no fueron citados por el señor senador Menem, porque me parece que pueden aportar algún dato más en sostén de la legitimidad y de la legalidad que va a tener este Senado y el Congreso argentino en la sanción de esta controvertida ley.

La jurisprudencia de la Corte estadounidense en materia de facultades delegadas se remite al caso "Whiteman", que en la primera mitad del siglo pasado fue expuesto con un voto del famoso juez Marshall de la Corte de los Estados Unidos y que validaba este concepto de facultades delegadas en la medida en que ellas estuvieran dadas sobre poderes que el Congreso pudiera delegar, que estuvieran claramente

determinadas, que estuvieran claramente controladas en su ejecución y que, además, fueran por tiempo determinado. Esto justificó una posterior enmienda que tuvo la Constitución de los Estados Unidos a principios del siglo pasado. Se trata de la enmienda dieciocho de la Carta Magna de ese país. Y esta expresa facultad de delegar capacidades que le son propias al Congreso está contenida en el Título I de la Sección 8ª, que incluye no sólo la facultad de delegar funciones parlamentarias al Poder Ejecutivo en cabeza del presidente de la Nación, sino que también incluye la facultad de delegar específicas funciones a organismos administrativos que lo componen, ya sea el Poder Ejecutivo u organismos descentralizados.

La mayor aplicación que tuvo esta enmienda fue en materia de delegación de facultades a los organismos vinculados con la seguridad de los Estados Unidos. Y fueron bastante usadas en la época de la Segunda Guerra Mundial y durante la "guerra fría" que sobrevino luego.

No quiero abundar sobre esto. Tengo varios casos de la jurisprudencia estadounidense que podrían ser citados en abono de este punto. Pero como lo señalé, no quiero abundar en lo que considero un debate que está languideciendo. Creo que se han aportado suficientes elementos doctrinarios, jurisprudenciales y antecedentes, que no sólo enmarcan la razonable interpretación del artículo 76 de la Constitución sino que, además, nos dan el concepto de que estas facultades incluso preexistían a la reforma de la Carta Magna en la cabeza de las máximas autoridades judiciales de la Nación y que fueron expresadas en numerosos fallos no contravertidos de la mejor doctrina de la Corte de nuestro país.

Sí me parece que es necesario hacer una breve referencia a ese terrorismo que se intentó hacer por parte de algunas legisladoras de la Alianza, que se convirtieron de golpe en las verdaderas opositoras no sólo de la propuesta del ministro Cavallo sino, siguiendo por natural silogismo el análisis de los legisladores de ese partido, del propio presidente de todos los argentinos.

Esa supuesta imputación de que quienes votáramos afirmativamente estas facultades especiales seríamos infames traidores a la patria, constituye una suerte de extorsión a todos los parlamentarios de la República, una extorsión

irresponsable que intenta de nuevo aportar un elemento en esta desgraciada cadena de jalones con que se trata de "judicializar" la política argentina en una mezcla, bastante inconveniente, que se combina con la "politización" de la Justicia. La Nación debiera tender a evitar ambos males, porque no sólo subvierten las funciones específicas establecidas por la Constitución sino que tienden, en el caso de la "judicialización" de la política, a lograr en los tribunales lo que no puede lograrse en las urnas.

La política es una cosa. La función legislativa, que es la expresión más pura de la política, tiene contenidos, ribetes y límites muy específicos. Para llegar a un cargo legislativo o a uno ejecutivo hay que someterse al veredicto de las urnas, hay que exponerse a la consideración pública y tener un prestigio específico que permita la adhesión de la ciudadanía a los nombres, a los antecedentes y a las propuestas.

En nuestro país para llegar a ser juez se requieren otros requisitos muy distintos. Acá los jueces no son elegidos por el voto popular, como ocurre en algunos países o estados de otros países. Esto le impone a su específica y alta función de interpretar la ley, de decir el derecho en un caso concreto, límites en su exposición pública, en la consideración de qué cosa es judicialable y qué cosa corresponde específicamente al terreno de la decisión política.

Este tema que estamos tratando es, estrictamente, una decisión política desde todo punto de análisis. Esta instancia a la que me estoy refiriendo —al igual que lo hicieron otros señores senadores— no es nada más que un manotazo marketinero de un altísimo contenido perverso, extorsivo y de irresponsabilidad cívica, que entiendo no se debe pasar por alto. Lamentablemente, en ciertos casos cuenta con la adhesión —quizás inconsciente o no— de algunos medios que le dan una difusión que va mucho más allá de lo que la Constitución, su interpretación correcta y el sentido común imponen al momento de enmarcar amenazas de esta naturaleza.

No creo que el tema merezca más consideración, pero no quería pasarlo por alto o soslayarlo de mi exposición.

En cuanto a los aspectos concretos que este texto nos propone, creo que el voto debe estar enrolado en una actitud de generosidad y responsabilidad política como la que ha tenido el justicialismo. Tengamos en cuenta que este blo-

que mayoritario, por la trascendencia que puede tener su posición en la sanción de este proyecto de ley, tiene una responsabilidad distinta que la de la bancada justicialista de la Cámara de Diputados.

En lo que hace a mi voto, existe además una adhesión responsable y meditada no sólo en cuanto al texto de la norma en sí mismo, sino respecto de las manifestaciones directas o que a nivel público ha formulado el señor ministro Cavallo. Me refiero a las medidas que en definitiva va a adoptar dentro de este marco específico —pero, aun en lo específico, genérico— de facultades que este Congreso le delega.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Carbonell. —No quiero abundar en ejemplos ya mencionados, pero sí debo referirme a lo siguiente.

Tengamos en cuenta que existen más de 50 organismos descentralizados y autárquicos del Estado nacional que funcionan en el territorio geográfico de la capital de la Nación. Ello es así, aun cuando se trate del Instituto Pesquero, del de Vitivinicultura o de IMAR, que —para quienes no lo saben— es una empresa minera que desarrolla su actividad en Catamarca y, sin embargo, tiene su sede en la Capital Federal.

Se trata tanto de organismos que en muchas oportunidades han demostrado su enorme importancia —tal el caso de la AFIP—, como de otros que, a lo largo de los años, han puesto en evidencia una manifiesta desproporción entre su nivel de costos y el resultado de sus actividades. Existen casos en los que se ha manifestado ineficiencia, si se compara su incidencia en el presupuesto con el beneficio que aporta a los fondos del Estado y al pueblo argentino. Entonces, quizá sea positivo que hoy empecemos a sintetizarlos, ya sea por vía de la fusión o por la asignación de facultades a otros organismos.

Ahora bien, recordemos que el texto del proyecto de ley en su artículo 2º se refiere expresamente a la preservación de los niveles salariales de los agentes públicos. Por otra parte, el ministro ha dicho que la activación de la economía también pasa por preservar, acrecentar y, en definitiva, mejorar la capacidad de consumo de los argentinos. Entonces, no sólo por respeto al artículo 14 bis de la Constitución y a las demás normas vigentes, sino porque va a la par

del objetivo de crecimiento de la economía nacional, no se va a producir ningún tipo de cesantía directa o encubierta ni se afectarán los niveles salariales de los agentes públicos, pero a lo mejor se suprimen algunos de los cientos de directores de esas estructuras costosas.

Tengamos en cuenta que detrás de cada uno de esos organismos hay secretarios, choferes, viajes, viáticos; en fin, mucho gasto improductivo que, además, se concentra en la capital de la Nación. Y en la Capital Federal existe un ingreso per cápita de casi 24 mil dólares, que no se compadece con el de 4 mil de mi provincia o con el de 2 mil de Formosa. De hecho, fundamentalmente no se compadece con el precepto del artículo 75 de la Constitución, en cuanto a que el crecimiento del país sea armónico y equilibrado.

Entonces, si hay que reducir gastos, me parece bien pensar en hacerlo en estructuras a veces inexplicables como las de estos organismos, y no eliminando el Fondo del Tabaco o los subsidios a las naftas en la Patagonia.

Desde lo conceptual, apoyo la definición respecto de lo que se piensa hacer con una de las facultades delegadas por la norma que vamos a sancionar. Quizá, cabría el análisis de otros tópicos contenidos en esta propuesta, pero como ya lo han hecho algunos senadores no quiero abundar sobre el tema.

Finalmente, deseo hacer una invocación con respecto a lo que es la apuesta política del justicialismo.

Algunos dicen que detrás de todo esto está la chance de convertir a la Alianza. Sin embargo, a lo largo de catorce meses de gobierno ha sufrido las crisis que hemos vivido los argentinos, con un presidente que ha visto menguado su poder, con una convocatoria que fue triunfante el 24 de octubre de 1999 y que hoy aparece deshinchada —algunos, incluso, usan términos más peyorativos para evaluar el futuro político electoral en lo inmediato de los partidos que la componen—; y, de repente, el justicialismo apoya la nueva propuesta y colabora con esta generosa cesión de facultades a un hombre que viene con un programa económico que por su prestigio y sus antecedentes genera, por sí solo y por su sola introducción en el Ministerio de Economía, confianza, credibilidad y la posibilidad de que el riesgo país baje, que el valor de los títulos suba y que, como consecuencia de

todo esto, los niveles de las tasas de interés empiecen a bajar, lo que constituye la llave del crecimiento argentino.

Sin duda, si esto es exitoso, si el ministro Cavallo termina siendo una especie de salvador de la crisis, podremos encumbrar a un duro rival como candidato a presidente para el año 2003.

Yo sostengo —y lo siento profundamente— que si el justicialismo tiene sólidas verdades, buenos candidatos y propuestas correctas puede ganarle a cualquiera. Nuestro partido tiene que ser capaz de enfrentar a los mejores candidatos, no a los devaluados por un gobierno fracasado.

Más allá de la responsabilidad de dar respuesta al país, me parece mucho más sano, desde el punto de vista de los intereses del justicialismo, que en el 2003 enfrentemos a un candidato fuerte pero con un país en marcha y no a un candidato devaluado con un país en llamas.

Esto tiene que ver con la concepción de grandeza que el justicialismo siempre tuvo cuando enfrentó contiendas electorales, con la generosidad que tuvo al darle una mano a un gobierno que se caía y generar desde su posición las condiciones para la recuperación eventual de este gobierno.

Confío en la buena fe del ministro Cavallo y en la buena intención del presidente de la Rúa cuando nos convoca a esta suerte de nueva instancia del gobierno de la Alianza —con la apertura, con esta suerte de unidad nacional y con la cesión de una cuota importantísima de poder a un hombre que no es de su partido ni de su historia y que la enfrentó en las elecciones por la Capital en términos muy duros—, que hoy recibe desde el radicalismo, desde el presidente de la Rúa y desde el peronismo la posibilidad de convertirse en el eje de una nueva política en la que todos confiemos y que haga crecer a la Nación.

Quiero finalizar citando a un pensador alemán al que leí hace mucho tiempo, Otto Baschoff, que es uno de los más sólidos constitucionalistas que tiene el derecho público alemán. En su momento evaluó a la Constitución no como el hecho constituyente definitivo, sino como un hecho posterior a una situación presignada de valores incorporados a una comunidad.

Una constitución, por ley fundamental que sea, por resumen de la conciencia y de la cultura de una comunidad en determinado momento, o por estructura básica del andamiaje normativo de un país, no puede ni siquiera por su jerar-

quía y por su supremacía, en su correcta interpretación, ir en contra de los valores centrales de una comunidad. No puede subvertir las necesidades fundamentales de una nación y de un pueblo en un momento dado de su historia. La Constitución argentina hoy no nos podría impedir jamás salvar a la Nación. No lo podría impedir jamás, ya que su texto —bien y claramente interpretado— no pone ese tipo de límites. Pero si los pusiera no podría impedir que los políticos argentinos advertidos de una situación de crisis que puede ser terminal o no, pero que es grave, dispongamos los instrumentos que nuestra inteligencia, nuestro sentido común y los datos que tenemos a nuestro alcance nos aconsejan como la mejor alternativa para sacar al país de la postulación y ponerlo en marcha.

Ese concepto, además de lo que se ha dicho, también me habilita a votar afirmativamente por este proyecto de ley y sugerir que lo hagamos desde un estado de conciencia positivo. Invito a pensar seriamente en la buena fe de quienes nos lo piden. Y solicito que desde una estricta función parlamentaria pongamos todo nuestro empeño en el control de gestión de quienes van a administrar estas facultades que hoy estamos otorgando.

Creo que en este control de gestión eficiente, mediante este seguimiento cotidiano, va a estar completada la legitimidad de las facultades que hoy con nuestro voto estamos otorgando.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Angeloz. — Señor presidente: voy a ser muy breve. Sé que formularé manifestaciones que ya han sido expresadas por otros senadores, reflexiones aquí asentadas con toda la meditación y profundidad de los que han estudiado acabadamente el tema.

Esta iniciativa es llamada ley de competitividad, y la Cámara de Diputados de la Nación tuvo la inteligencia de desdoblarla a efectos de que el aspecto impositivo y el de las facultades que va a delegar el Congreso, sean analizados de manera diferente.

Creo que la sanción de esta segunda parte de la ley que remitiera el Poder Ejecutivo, por parte del Congreso de la Nación fue dada con la celeridad y la prontitud que las circunstancias requerían. Y le ha otorgado la herramienta que solicitó para ver si es posible salir de la emergencia, de la difícil situación que atraviesa el

país, y comenzar a arrancar con un proceso de crecimiento de la economía argentina.

Quiero destacar que esta celeridad y prontitud que ha puesto de manifiesto el Congreso no ha menguado la capacidad reflexiva de estudio que era menester para dictar, anticipadamente o con tiempo suficiente, esta norma que requería el Poder Ejecutivo. Y lo ha hecho con la seriedad y la rigurosidad que un tema de tanta importancia nos estaba exigiendo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Mario Losada.

Sr. Angeloz. — La primera parte de la iniciativa —que hemos sancionado— trataba sobre la imposición de créditos y débitos de cuentas corrientes bancarias, para ser afectada a un fondo de emergencia pública que, seguramente, deberá ser aplicado de manera inmediata para resolver problemas financieros del Estado; pero fundamentalmente para ver si son aplicables a las pequeñas y medianas empresas que constituyen la herramienta válida del crecimiento ocupacional que la República necesita.

La segunda parte de este proyecto —que hoy consideramos— es la que hace a las delegaciones de las facultades que los artículos 76 y 99 consagran al Congreso de la Nación. Aquí no se ha incurrido en ninguna delegación que pudiera significar la entrega del poder absoluto, como alguna crónica ha manifestado o como ha sido expuesto en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Congreso de la Nación ha cuidado sus límites y se ha manejado dentro de los parámetros, de las reglas que para ello fija la Constitución Nacional en su artículo 76. Hay que señalar que la Corte Suprema de Justicia, con sus pronunciamientos anteriores, ya tenía una suerte de convalidación de las facultades que delegaba, que han sido definitivamente establecidas en la reforma de la Constitución que se hiciera en 1994.

Estas modificaciones se refieren a lo que la doctrina denomina “legislación derivada o secundaria”. Establece como principio y regla general una clara, expresa y terminante prohibición al Poder Legislativo para delegar sus atribuciones. Y como reverso, al Poder Ejecutivo le impide asumir funciones legislativas.

El artículo 76 fijó las condiciones en que podían hacerse esas delegaciones. Es decir, sobre

las materias determinadas y relativas a asuntos comunes y ordinarios de la administración. Estableció que debe fijarse un plazo determinado para su ejercicio y también estableció las bases, el marco y las pautas orientadoras sobre los que dicha delegación se efectúa.

Pero más allá de algunas divergencias puntuales, creo que el proyecto que estamos considerando cumple con todos los requisitos constitucionales que habilitan la delegación de facultades con carácter excepcional, estableciéndose un marco razonable, con límites precisos para el ejercicio de las mismas y claras prohibiciones para el Poder Ejecutivo en temas respecto de los cuales se encuentra vedado para actuar.

El Congreso se ha caracterizado por su apego a la letra de la ley y de la Constitución Nacional, por el respeto a la separación de los poderes y el fortalecimiento de los órganos de control. No existen razones para suponer que el Poder Ejecutivo en el futuro, por más delegación de facultades que exista, se vaya a apartar del camino, de la senda republicana, como han deslizado algunos al afirmar que estaríamos otorgando esa suma del poder público.

La gravedad de la emergencia por la que atraviesa la República me parece que impulsó al presidente de la Nación no sólo a requerir la delegación de facultades sino también a convocar a un gobierno de unidad nacional, lo cual se ha producido en la primera etapa con la incorporación al gabinete del ministro de Economía, doctor Domingo Felipe Cavallo.

El presidente de la Nación tiene el derecho absoluto de escoger a sus colaboradores, y la obligación que surge del mandato popular es administrar los intereses de la Nación hasta el 10 de diciembre de 2003.

Señor presidente: es de público conocimiento el duro enfrentamiento que he mantenido a través del tiempo con el señor ministro de Economía. Por lo tanto, me considero alcanzado por las generales de la ley. He tenido y tengo distanciamiento respecto de él. Nuestro enfrentamiento ha sido permanente desde hace más de diez años. Y además, he tenido una repulsa permanente por su discrecional estilo. Pero pertenezco a la Unión Cívica Radical, partido al que también pertenece el presidente de la República, y por lo tanto asumo en tal carácter las responsabilidades que ello implica, sin beneficio

de inventario. Sería mezquino de mi parte anteponer las diferencias personales y políticas que mantengo con el doctor Cavallo y, por tal motivo, retacear apoyo al presidente de la República.

Este no es el momento de cobrar cuentas pendientes, ni de buscar revanchas. La República y la sociedad en su conjunto exigen más que nunca que los hombres públicos actuemos con responsabilidad y patriotismo.

Por las razones expuestas, voy a votar de manera afirmativa este proyecto oportunamente enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Para mí se trata de un voto de confianza hacia el doctor Fernando de la Rúa.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. – Señor presidente: por la temática del debate pareciera que se está imponiendo como una consigna aquello de “Cavallo conducción, lo demás será traición”.

Estoy bastante de acuerdo con algunas cosas, pero no con el contenido del proyecto de ley, razón por la cual voy a votar en forma negativa la concesión de facultades extraordinarias solicitadas a favor del Poder Ejecutivo, ya que considero que no existe emergencia pública.

Los dos miembros informantes, colegas abogados a quienes escuché atentamente, me convencieron de que en esta oportunidad debía hablar poco del tema jurídico porque ellos hablaron y se esforzaron tanto por demostrar sus razones, que me hicieron recordar dos cosas. Una es aquella máxima según la cual el que más tiene que explicar las cosas es porque menos razón tiene; la otra es lo que decían en un libro célebre unos versos de Castelani: “Qué gente que dice cosas, la gente de este albardón; qué gente que dice cosas, pero cosas que no son”.

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, voy a tener dos padrinos. Uno será el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dicha institución, con la firma de su presidente, el profesor Atilio Alterini –muchos aquí hemos sido discípulos de este brillante hombre del derecho–, ha declarado que peligra el estado de derecho y advierte sobre las concesiones que el Parlamento está por hacer, lo cual considera que no es pertinente.

Pero también me siento convencido y cautivado por la visión jurídica que han tenido en este

recinto los ingenieros Verna y Sala. La verdad es que ellos, con la crudeza típica de la ignorancia del derecho, han elaborado un diagnóstico exacto de lo que es la realidad. Y han llegado a apoyar esta iniciativa, motivados por la misma bonhomía y el mismo espíritu constructivo que, con grandeza, acaba de señalar el señor senador Angeloz.

Lo hacen porque entienden que contribuyen de esa manera al bienestar del país, circunstancia que yo estaría tentado de adoptar, pero sobre la que no puedo avanzar. Y no puedo dar mi aprobación a este proyecto, porque como abogado tengo noción del peligro existente y sé que puedo quedar incurso en las pautas constitucionales, es decir, ser pasible de la sanción que tanto se ha flameado.

Sin embargo, curiosamente, a pesar de todos los antecedentes que se han mencionado –desde Rosas hasta la doctrina estadounidense, pasando por Trinidad y Tobago y El Salvador– se ha omitido uno de los pocos antecedentes que existen en el país sobre una condena por infame traición a la patria con motivo de una delegación de facultades. Lo recuerdo porque era muy chico, tenía diez años, y allá por 1956 iba a visitar de la mano de mi padre a los legisladores de mi provincia que estaban detenidos por esta causal en la vieja cárcel de Las Heras. Habían cometido el pecado de darle facultades a Juan Perón –en una ley mucho más circunscripta y taxativa que ésta– para concretar el segundo Plan Quinquenal. La verdad es que si tuviera que ir preso por Juan Perón votaría el proyecto; pero ir preso por de la Rúa sería una cuestión de sobredosis política que no soportaría.

En consecuencia, estoy resuelto a actuar de acuerdo con mis convicciones y con la visión que tengo del derecho, en el sentido de que para mí no hay emergencia pública.

Además, no creo que todo sea una cuestión negativa. Considero que hay cosas extremadamente positivas en lo que hoy estamos discutiendo.

Como bien lo señaló con esa visión jurídica el ingeniero Sala pienso que no hay emergencia. ¿De qué emergencia estamos hablando? ¿De la publicidad oficial para la campaña, del viaje del avión presidencial al festival de Catamarca, de los ministros veraneando en Brasil o Europa en medio de la crisis, sin ministro de Acción Social, sin gabinete de crisis?

Me parece que no hay emergencia pública; no se dan los presupuestos mínimos. Una de las características en el ámbito financiero y monetario es el feriado bancario; ni siquiera se tomó esa medida básica de protección o de bloqueo.

En este momento, lo que ocurre en el país es una grave emergencia política. De un lado lo tironeaban de la izquierda y del otro de la derecha. Y ahora vino uno que tironea más desde el centro y lleva para adelante las cosas. Y así se han superado las contingencias.

Creo que el país tiene un estado de expectativa tal, que no sé si en cualquier momento el ministro Cavallo no manda a retirar este proyecto del Parlamento, porque lo que hace esta declaración de emergencia es introducir ideas depresivas, es sembrar "pálidas" e ideas derrotistas ante el entusiasmo que se vive en el país. ¿No vemos que el 70 por ciento de la gente ha cambiado la cara y tiene otro humor? De no saber a dónde iban, hoy por lo menos tienen una luz de esperanza que les permite vislumbrar que el país entró en otra situación.

¿O no han leído ustedes las declaraciones que hizo ayer el ministro en el Banco Nación? Hay que detenerse a mirar con qué firmeza, resolución, convicción, fe, esperanza y seguridad retó a los banqueros y no con la "palidez" de decir "estamos en el fondo del mar en la emergencia".

¿De qué emergencia me hablan? Concentrado en la atención de los hombres de traje de la primera fila, les dijo a los banqueros: "Les vengo a decir que hoy, excepcionalmente, hemos aceptado pagar las altas tasas del once por ciento por las Letes, pero tengan por seguro que el sector público nacional no va a volver a aceptar estas tasas ruinosas. A partir de mañana no les pago más la usura".

Cavallo tiene una gran convicción y solidez: cree en su plan. Y va a recaudar mucho más que la fe que ustedes tienen. Va a juntar "un paquete", como decía Gioja. Va a recaudar más de 20 mil millones de pesos; no tengan ninguna duda.

Más aún; además de retar a los banqueros, que hace mucho que no escuchaban algo así, les dio consejos y los mandó a hacer los deberes. Además, fíjense que en el medio de esta situación, les dijo que iba a haber un blanqueo y que les iba a pagar los 8 mil millones de pesos que se les deben en concepto de deudas que

todavía no están consolidadas con el sector. O sea que no sólo va a superar el déficit fiscal y pagar los intereses de la deuda sino que también les va a abonar a los banqueros los 8 mil millones.

Y yo tengo la esperanza de otra cosa, de que no va a haber ajuste. A pesar de que muchos creen que hay un Cavallo del proceso, otro de Menem y otro de De la Rúa, éste es el Cavallo de Cavallo y va por la cuádruple corona. En efecto, tuvo la corona en la década del '80, después la tuvo en la década del '90 con Menem, y ahora él no vino a tocar el timbre sino que lo fueron a buscar, es decir que con De la Rúa tuvo otra corona en esta década.

El interrogante es saber cuál será la cuádruple corona que le toca. Creo que si en el país andan bien las cosas va a tener su recompensa, porque a la gente no le importa quiénes son los políticos ni a qué partido pertenecen sino que provoquen transformaciones en el país.

Recuerdo que cuando éramos jóvenes teníamos el coraje de ir a darles consejo o reclamarles a los hombres mayores; y uno no aprende, siempre vuelve a pisar la misma piedra. En efecto, en alguna oportunidad le reclamábamos a Perón porque queríamos que el Hospital de Niños se hiciera en el Sheraton Hotel y el general nos calmaba porque nosotros teníamos ese ímpetu de la juventud. Cuando Menem lo nombró a Cavallo nosotros fuimos a reclamarle sobre la cuestión, con la cara pintada, con la misma desolación que tienen los radicales hoy, que ven que están como el caballo del lechero al que le cambiaron el reparto y no sabe para dónde agarrar. ¿Y saben lo que nos dijo Menem? Lo mismo que debe haber pensado De la Rúa ahora: al que está en el gobierno y sentado en el sillón presidencial no le importa quién es el que viene a acompañarlo sino que lo que le importa es que le traiga soluciones para los problemas del país.

Y hoy, mal que nos pese a muchos de nosotros, por más discrepancias que tengamos, el ministro Cavallo le viene a traer soluciones no a De la Rúa sino al país. Y él es la conducción; y el presidente hace bien en ponerlo, porque debe rodearse de gente sin complejos, que sepa, y no de incapaces, inferiores, subordinados de él. Tiene que juntar a todos los que sepan más que él para que fortifiquen el gobierno, porque detrás de eso va a haber resultados.

De todas maneras, por supuesto que debemos tener cuidado porque esta gente arranca en Chicago con el neoliberalismo, el estrangulamiento del cierre de las cuentas fiscales, el ajuste y la asfixia para el país. Pero de golpe, este nuevo Cavallo pasa por Harvard. Como la consigna francesa: un puntito un poco pasado neokeynésiano; y ya apunta para el sur y mira para Cuba, marchando hacia la izquierda. Entonces, no va a haber ajustes, pero tengo miedo de qué en el cruce —y porque tengo alguna cuota de desconfianza— creo que debemos hacer el seguimiento; no estoy totalmente convencido —se nos quede con toda la recaudación y baje en Miami. Por eso el Parlamento debe estar muy cerca de este seguimiento.

Pero quiero marcar algunas cosas que son reproches para nosotros los peronistas y también para los radicales. ¿Cuántos años hace que no vemos que se instrumenten políticas tributarias que apunten a sacarles plata a los que algo tienen?

Desde siempre los gobiernos han avanzado sobre los sectores más debilitados y con menores posibilidades y hacia ellos se ha dirigido la carga de los ajustes, ya que no tienen *lobby* ni fuerza de defensa. Así fue la reforma tributaria: la menor escala impositiva incidió sobre los sectores de menores ingresos y ellos fueron los que pagaron en la reforma de Machinea.

Me acuerdo de que en aquella oportunidad este bloque justicialista planteó reformas progresistas, en el sentido de sacarles plata a los que más tenían, muchas de las cuales se están vislumbrando hoy.

Yo sé que es duro que con la ley que aprobamos el otro día sobre el impuesto a los débitos y los créditos se le saque dinero a determinado sector, pero más que a la comunidad en su conjunto se está quitando capital de trabajo a determinados sectores que tienen imaginación, capacidad y fortaleza como para poder enfrentar esa adversidad que implica el 0,6 de ida y de vuelta, es decir, el 1,2 por ciento de impuesto. En definitiva, lo que estamos quitando es capacidad de trabajo.

Pero mucho más grave es quitar capacidad alimentaria, tal como veníamos haciendo hasta ahora, sacándoles comida a los de más abajo. Mucho mejor es lo que se plantea hoy con esta transformación que se está volcando al mercado bursátil, al comercio de títulos y bonos: a los que verdaderamente tienen recursos.

Señor presidente: sabe que si bien en la Bolsa de Comercio se negocian entre 20 y 50 millones de pesos, en la media de los negocios del mercado extrabursátil nunca estamos por debajo de los mil millones de pesos. En este sentido, por las perspectivas reales de Cavallo ayer se negociaron más de 2 mil millones de dólares. Hacia allí debemos ir con la política tributaria, para tratar de que los que han ganado tanta plata durante nuestros gobiernos ahora empiecen a contribuir.

Pero se me presenta otro interrogante. ¿El nuevo Cavallo va para Cuba, se hizo peronista, se hizo popular? Ojalá que la respuesta sea afirmativa y que estas políticas estén orientadas a beneficiar a los que menos tienen. El va a sacar recursos a los sectores que más tienen, va a superar los 20 mil millones de pesos y a mejorar el perfil de la evasión, porque muchos de los que empezarán a contribuir en virtud de la ley sancionada los otros días, estaban exentos o al margen de tributar ganancias e IVA. Entonces, ahora quedará capturado aproximadamente un 15 o 20 por ciento más de contribuyentes, lo cual implicará una mejora en la recaudación de alrededor de los 3 mil o 4 mil millones de pesos, cerrando el círculo de la evasión que tanto nos preocupa.

Tengo muchísimas cosas para decir, pero lo que ahora sólo quisiera señalar es que, pese a las reservas que poseo, soy optimista porque pienso que las cosas van a andar bien. Como dijo el presidente Menem en aquella oportunidad, y también creo que el doctor De la Rúa lo debe haber tenido en su cabeza, no importa quién traiga las soluciones; lo importante es poder salir al balcón y ver a la gente feliz. Creo que para esto las condiciones están dadas; se nota a través de las encuestas que indican que hay un 70 por ciento de aceptación por parte de la gente, el cambio de humor y las perspectivas de la Bolsa.

Fijense a qué punto máximo hemos llegado que el propio doctor Alfonsín ha ponderado a Cavallo. Esto es casi una exageración; dijo que le parecían bien las cosas que estaba haciendo Domingo Cavallo.

Considero que nosotros debemos tener una actitud presente y cercana. Por mi parte, creo que el ministro no necesita de esta iniciativa, que los poderes que se piden son exagerados, desmedidos y que constituyen facultades extraordinarias.

Digo esto porque por un lado la gente nos ve trabajando, pero por el otro desacredita al Congreso, ya que con todas estas facultades que le daremos a Cavallo, me pregunto para qué estamos nosotros: ¿para hacer un homenaje al carnaval, un monumento a las fiestas del deporte o para hacer proyectos de resolución? Realmente creo que este proyecto de ley es una sobreactuación, innecesaria, y nos coloca al borde de circunstancias inconstitucionales e, incluso, en la tipificación de reo que contemplan la Constitución y el Código Penal.

Por eso, yo soy de los que no creen en el terrorismo. Fíjense que tal ha sido la preocupación de hacia dónde vamos que en el artículo 1º, apartado II, inciso e) los señores diputados han impedido la posibilidad de modificar los códigos Civil, de Minería y de Comercio. Es decir que no han estado delirando, sino que han pensado en la posibilidad de que esto ocurra; y creo que esto también es una exageración.

A mí sólo me interesa conocer los pasos. Por esa razón no estoy dispuesto a otorgarle facultades extraordinarias. Creo que el Parlamento tiene la obligación de hacer un seguimiento.

Y no se tenga dudas de que por la convicción, firmeza y audacia que tiene el ministro Cavallo, sus objetivos no van a encontrar limitaciones para dictar el decreto de necesidad y urgencia que necesite a fin de avanzar en la instrumentación de las medidas.

Si nosotros adoptamos una actitud diligente podemos ayudar mucho más que votando esta ley "pálida" y depresiva que confiesa un estado de emergencia que no tenemos.

Por el contrario, creo que debemos contagiarnos del entusiasmo, de la firmeza y de lo arrollador y atrápante que resulta de esta vocación que plantea el ministro. Uno puede estar en desacuerdo o coincidir con su comportamiento, pero nadie puede dejar de reconocer que actúa con la mayor firmeza y convicción que el país necesita.

Por eso, termino diciendo que pondere con precaución las medidas, que me contagio del entusiasmo de la gente y que espero que Dios nos ayude; que el ministro siga para Cuba y que no se baje en Miami. El pueblo necesita que las cosas anden bien, y no interesa quién las haga, aun si es Cavallo y eso nos hace perder en 2003. Lo importante es que lo antes posible la gente empiece a comer y tenga paz social.

Por las razones expuestas, no voy a votar favorablemente el proyecto de ley en consideración, que, a mi juicio, violenta las previsiones de la Constitución.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. — Señor presidente: hace una semana, cuando hice uso de la palabra...

Sr. Presidente (Losada). — Perdón, señor senador...

Sr. Genoud. — Permítame desarrollar mi alocución. Luego concederé las interrupciones que me solicitan. He esperado largamente para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. — Señor presidente: decía que hace una semana, cuando tratamos la ley que creó el impuesto a los créditos y débitos bancarios, hice cordiales reproches a los senadores justicialistas y, como consecuencia de ello, tuve airadas respuestas y algunos incluso amenazaron con retirarse del recinto.

Sr. Gioja. — Era por la hora, señor senador.

Sr. Genoud. — Por la hora o quizá porque no había estado en el debate, ya que me encontraba participando de conversaciones con miembros del Poder Ejecutivo y con diputados, precisamente para acordar el texto de este nuevo proyecto.

Entonces, el estado de ánimo que tengo al comenzar esta exposición responde a que no sé hasta dónde puede llegar mi alocución sin irritar al bloque justicialista...

Sr. Brandá. — A propios y extraños.

Sr. Genoud. — ...y, de ese modo, amenazar con prolongar indebidamente este debate que, a mi juicio, debe concluir hoy con la sanción de la segunda parte de la ley de competitividad.

Al igual que lo hice la semana pasada yo agradezco al bloque de senadores y diputados justicialistas por su gran comprensión y porque han trabajado patrióticamente para darle estos instrumentos al gobierno nacional, más allá de algunas voces destempladas y argumentos que no comparto, como los que acabo de escuchar del inteligente senador Maya que, pese a su gran capacidad de retórica, no ha dejado de incurrir en algunas contradicciones.

Por ejemplo, ha dicho que Cavallo puede gobernar sin este instrumento y sí mediante de-

cretos de necesidad y urgencia, como lo hizo antes. Precisamente, ésta es la primera diferencia que queremos trazar con el actual rol del ministro de Economía designado por el señor presidente de la Nación. Antes, se gobernó mediante decretos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, la Ley de Reforma del Estado, votada con una vigencia de un año, se prorrogó por un decreto de este tipo, lo que significó pasar lisa y llanamente por sobre las facultades de este Congreso.

En este sentido, nosotros preferimos que la delegación de facultades legislativas sea expresamente hecha por ley, que se cumpla estrictamente la Constitución y que cuando el Poder Ejecutivo avance en una determinada materia lo haga en función de las atribuciones que le confiere el Parlamento.

Por otro lado, si el señor senador por Entre Ríos tiene la certeza de que Cavallo no va a hacer el ajuste que muchos temen en el ámbito de la administración pública, porque es un Cavallo que también ha ido evolucionando en otras direcciones, no entiendo por qué no va a votar el proyecto de ley en consideración. ¿Por qué si tiene tanta confianza en Cavallo no vota ese instrumento que él precisamente está reclamando en nombre del gobierno que preside el doctor Fernando de la Rúa?

Además, tampoco entiendo por qué si el impuesto a los créditos y débitos bancarios va a producir un ingreso realmente importante, que bastaría para llevar adelante la salida de la emergencia o de la crisis económica, el señor senador por Entre Ríos y otros pocos señores senadores no votaron afirmativamente esta iniciativa, que en definitiva ha traído tranquilidad a quienes al menos procuramos reducir el déficit fiscal.

Señor presidente: este proyecto de ley de competitividad, al igual que la ley de creación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, puede recibir observaciones parciales que cada uno de nosotros puede formular. De hecho, se han realizado en este debate. Pero no hay ley que resulte una especie de traje a medida de cada legislador.

A continuación, quiero dejar sentado un reparo que formulé en ocasión de tratarse el proyecto de ley de creación del impuesto a las transferencias bancarias, que sé que más adelante vamos a revisar en asociación con los demás

senadores de las distintas provincias para que, aunque sea parcialmente, lo recaudado por este impuesto sea coparticipable entre las provincias. Porque precisamente el monto de lo recaudado proviene de todas las transferencias bancarias en los débitos y en los créditos bancarios de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, una vez cubierta la necesidad fiscal para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, sería saludable que parte de ese ingreso —que todavía no sabemos cuantificar en su monto— sea efectivamente destinado a la masa coparticipable para que, finalmente, termine mejorando las arcas provinciales.

En cuanto al proyecto de ley de competitividad que estamos analizando, he escuchado de boca de muchos senadores distintas observaciones. Pero afortunadamente también he escuchado decir a los mismos senadores que han presentado reparos y observaciones a distintos artículos de esta iniciativa que, finalmente, la van a votar afirmativamente en general y en particular.

Este proyecto de ley de competitividad trae al debate un tema que ha sido medulosamente analizado y, por lo tanto, quedo relevado de avanzar en su discusión desde un punto de vista jurídico-institucional. Me refiero, precisamente, al de la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, tema recurrente en las discusiones políticas de las últimas décadas.

Si analizamos en la práctica el comportamiento del Poder Ejecutivo en los últimos tiempos y también las discusiones que se han librado en los recintos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, concluiremos que, en definitiva, se ha discutido cuáles son concretamente las esferas de acción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.

En este sentido, cabe señalar que el Poder Ejecutivo tiene facultades colegislativas, es decir que puede enviar iniciativas al Congreso y vetar una ley emanada del Parlamento. Además, según el artículo 76 de la Constitución, tiene facultades delegadas por el Congreso y también dispone, según el artículo 99 de la Carta Magna, de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, luego de operada la reforma constitucional de 1994.

Por otro lado, de acuerdo con la nueva Constitución, el Poder Legislativo tiene mayores facultades que antes en materia de control y la

posibilidad de emitir lo que se denomina un voto de censura al jefe de Gabinete de Ministros. Además, tiene una decidida intervención en las comisiones de decretos de necesidad y urgencia y de facultades delegadas y participa directamente del control de la administración central a través de la Auditoría General de la Nación.

En definitiva, la discusión política de este tema, que no ha sido pacífica en los últimos tiempos, es la que de algún modo pretendemos que quede saldada con el debate que estamos realizando hoy. Al respecto, abundan ejemplos históricos. Recordemos aquel decreto de necesidad y urgencia que dictó el doctor Alfonsín cuando puso en marcha el Plan Austral. La justificación que dimos en aquel tiempo fue que no podía dictarse, a través del procedimiento previsto para la sanción de una ley, con iniciación a través de un proyecto y con discusión en ambas Cámaras, una norma tendiente a adoptar una medida que tiene valor si es adoptada de un modo inmediato —yo diría prácticamente abrupto—, a efectos de no producir “corridos” en los mercados.

Ese decreto, que fue uno de los pocos de necesidad y urgencia del doctor Alfonsín —no llegó a los diez durante todo su gobierno—, también fue motivo de discusión técnica.

Luego vino la época del presidente Menem. Y dicho con toda cordialidad en medio de un debate en el que, obviamente, no podemos tener amnesia o ignorar lo que pasó en la discusión política de los últimos tiempos, quizá nuestro mayor esfuerzo desde la bancada opositora estuvo en cuestionar precisamente el abuso del anterior presidente de la Nación al dictar decretos de necesidad y urgencia para cosas vitales como, por ejemplo, la confiscación de los plazos fijos, después convertidos en bonos; o bien los decretos de necesidad y urgencia...

Sr. Presidente (Losada). — Señor senador, le solicitan una interrupción.

Sr. Genoud. — Señor presidente: habrá advertido que tengo una gran dificultad para expresarme, causada por una fuerte congestión. De modo que pido que todas las interrupciones se agrupen al final de mi exposición y, entonces, no tendré ningún inconveniente en responderlas.

Sr. Presidente (Losada). — El señor senador por Mendoza no autoriza la interrupción.

Sr. Genoud. — Además, he estado presente a lo largo de toda la sesión. Pude haber pedido muchas interrupciones y no lo he hecho.

Estoy procurando hacer el mejor aporte...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — No dialoguen, señores senadores.

Sr. Genoud. — ...a una discusión madura en la que, como señalara aquí el senador Moreau, el gran triunfo es el consenso. Y no solamente el consenso entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, al que muchos querían ver derrotado por el Ejecutivo, sino a través del acuerdo logrado y de la madurez demostrada entre el oficialismo y la oposición para mejorar notoriamente un proyecto que venía del Poder Ejecutivo, que seguramente no habría podido ser aprobado sin esas modificaciones.

En aquella época los decretos de necesidad y urgencia iban al fondo de la cuestión, no solamente se referían a la confiscación de los plazos fijos, sino también a la prórroga por un año de la reforma del Estado que habíamos aprobado sólo por doce meses, a la suspensión de los juicios contra el Estado o contra la ANSES, a la privatización de Aerolíneas Argentinas que luego derivó en la Corte Suprema de Justicia, en el famoso *per saltum*. En una palabra, todo esto debe quedar saldado en esta discusión.

De modo que no nos afecta que se señale que hemos cambiado los papeles. Acá aparece como una especie de reto en el sentido de cómo es posible que el radicalismo, que se quejaba de los decretos de necesidad y urgencia, hoy está defendiendo este texto del proyecto de ley de competitividad. Y viceversa.

Creo, señor presidente, que no nos debe extrañar el cambio de papeles porque cuando uno es gobierno tiene mayor confianza en quien gobierna, que es un hombre de su partido, que participa del mismo proyecto. Y, en gran parte, la decisión que tomo al votar esta ley se basa en que creo en el uso racional de este instrumento que le estamos confiando a un hombre como es el presidente de la Nación. Fernando de la Rúa es un hombre de derecho y ajustado a la Constitución que —estoy absolutamente convencido— va a hacer un uso prudente de esa legislación.

Politicólogos importantes dicen que cuando uno está en la oposición ejerce desde el Parlamento la responsabilidad de buscar más control, lo cual implica dar más poder al Legislativo. Por consiguiente es más reticente en otorgar facultades al Ejecutivo porque es de otro partido político. Ese cambio de papeles no es extraño. Forma parte de la naturaleza política del funcionamiento de una democracia pluralista como la que estamos viviendo.

En esta oportunidad estamos por sancionar un proyecto de ley que se ajusta —como muy bien lo sostuvieron los senadores Molinari Romero y Menem, que fueron quienes efectuaron su análisis desde el punto de vista constitucional— plenamente al artículo 76 de la Constitución. Ello es así porque, en primer lugar, el destinatario de la delegación de atribuciones parlamentarias es el presidente de la República, que es quien tiene la legitimidad otorgada, como en todo poder democrático, directamente por el pueblo; de la Rúa es un hombre que va a hacer un uso racional de ese poder. Está a la vista que es un presidente al que no se le puede achacar que avance sobre los poderes constituidos o que manosee las instituciones del país. Este presidente está gobernando el país sin mayoría en ninguna de las dos Cámaras, ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, y respetando los organismos de control como la Auditoría General de la Nación, cuya cabeza es un hombre designado por el justicialismo. Este presidente está gobernando con una Corte en la que no ha designado ningún miembro, respetando el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial. Este presidente está gobernando con un Ministerio Público independiente que nació a la luz del anterior gobierno justicialista. Este presidente está gobernando con respeto absoluto por el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que es un organismo plural. Entonces, vaya nuestra carta de crédito en el sentido de que lo establecido por esta ley de ningún modo va a ser utilizado en contra de los derechos, atribuciones y facultades del Congreso de la Nación.

Es válido lo manifestado por el senador Leopoldo Moreau: obviamente, cualquier aspecto referido a la interpretación debe ser de aplicación restrictiva. En caso de duda respecto de las facultades delegadas, siempre cabe el principio de la interpretación limitada o restrictiva.

Como bien se ha dicho aquí —y debo reiterar— el artículo 76 establece el límite de un año, plazo que no va a ser prorrogado por decreto, como se hizo con la reforma del Estado durante la gestión anterior. Además, señor presidente, debo señalar que aquí existe un organismo de control a cargo de un legislador de la oposición, tal como se ha dispuesto.

Asimismo, debo reiterar enfáticamente que el Congreso no está renunciando a sus facultades y atribuciones. Simplemente las está delegando. Además, el Congreso de la Nación puede retomar las atribuciones que delega cuando lo crea conveniente, obviamente, a través de la decisión de ambas Cámaras, con las mayorías pertinentes.

—Murmullós en el recinto.

Sr. Genoud. — Luego de que terminen su conversación los senadores justicialistas continuaré en el uso de la palabra. De no tener dificultades con mi voz, subiría el tono.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia solicita a los señores senadores se sirvan escuchar al orador.

Sr. Branda. — ¿Me concede una interrupción?

Sr. Genoud. — No.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. — Debo señalar otro aspecto.

Muchas piensan que el Congreso se está desprendiendo de una facultad o atribución, poniéndola en manos del Poder Ejecutivo. El Congreso, por la misma mayoría, puede retomarla en el momento que quiera. Ese es el concepto que debe quedar absolutamente claro no sólo en los señores senadores sino también en la opinión pública. Ello es así porque ese argumento también forma parte de la reivindicación del Parlamento, que constituye la representación de las provincias a través del Senado y del pueblo, mediante el sistema proporcional de la Cámara de Diputados.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el señor jefe de Gabinete de Ministros deberá informar mensualmente sobre lo realizado en orden a las facultades delegadas. Y el Congreso de la Nación, por imperio de la Constitución, tiene el voto de censura sobre el jefe de Gabinete. De tal modo que estamos ante un resorte más que el Congreso de la Nación no pierde para hacer

valer su juicio crítico a la hora de ponderar las facultades delegadas.

Por otra parte —y esto es importante para nosotros, que somos representantes de las provincias argentinas—, aquí no se afectan los derechos de los estados provinciales. Las provincias quedan resguardadas en lo que se refiere al pacto fiscal, oportunamente votado no hace mucho tiempo por este Congreso. Asimismo, no se afecta en lo más mínimo lo dispuesto en materia de los recursos con que presupuestariamente cuenta cada provincia argentina para su funcionamiento.

Señor presidente: hoy al mediodía, cuando venía hacia este Senado después de que la Cámara de Diputados había aprobado el texto de este proyecto de ley que estamos considerando, escuché que algunos dirigentes sindicales sostenían que esta norma seguía siendo un cheque en blanco. ¡Esto es falso! Se sigue instalando que detrás del texto de este proyecto de ley existe una forma encubierta de delegaciones a modo de cheque en blanco.

Si bien aquí se ha dicho expresamente que en virtud del trabajo parlamentario que se ha hecho en ambas Cámaras con el consentimiento del Poder Ejecutivo no se acordó derogar o modificar la legislación común, los códigos Civil y de Comercio ni la legislación penal, no se ha mencionado con la reiteración que hubiera correspondido que no se puede tocar la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la SIGEN; que no podrán derogarse los estatutos públicos en cuanto a la regulación del empleo público consagrando el principio de estabilidad laboral; ni que se podrán privatizar empresas públicas, universidades, el Banco Nación, la AFIP, los entes reguladores de servicios, ni que tampoco podrán privatizarse total o parcialmente los entes binacionales como Yacaré ni Parques Nacionales. En definitiva, cualquier privatización deberá hacerse de acuerdo con lo que establece la ley de reforma del Estado, o sea previa decisión expresa de este Parlamento que con gran valor ha defendido esta atribución que le ha sido conferida a través de la Constitución Nacional.

No se puede modificar el concepto autárquico del Banco Central de la República Argentina y tampoco lo referente a las universidades; no se podrá despedir personal ni realizar rebajas salariales; no se podrán bajar jubilaciones, crear

impuestos o aumentar las alícuotas de los que ya existen. No pueden eliminarse exenciones impositivas de los productos o artículos de la canasta familiar ni las exenciones que benefician a las economías regionales así como tampoco se podrán eliminar el Fondo del Tabaco ni el subsidio a las naftas y a los combustibles patagónicos. No se podrán eliminar las exenciones que benefician a las sociedades cooperativas, obras sociales, etcétera, ni aumentar los peajes. Y aunque todo esto signifique una reiteración lo menciono para terminar con el discurso del “cheque en blanco”.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Felipe Sapag.

Sr. Genoud. — También se equivocan algunos analistas —como seguramente alguien va a escribir mañana— cuando dicen que como consecuencia de tantas modificaciones que lograron los políticos sobre los técnicos de Economía, han licuado este proyecto de ley y lo han convertido en una norma estéril. Y otra vez se equivocan, porque este proyecto es un instrumento muy necesario —y se lo digo al senador por Entre Ríos— porque a pesar de todos estos “no se puede” que he señalado anteriormente esta iniciativa es indispensable para que el presidente de la Nación y su equipo de ministros puedan eliminar impuestos distorsivos, pues ya existe un compromiso público formulado por el presidente de la Nación y el ministro de Economía a fin de reducir las alícuotas impositivas como un mecanismo para alentar el crecimiento económico. Debemos admitir que todavía es posible hacer recortes en la administración pública pero relacionados con la burocracia, sin afectar las funciones y los roles del Estado cuando realmente es insustituible en esas áreas.

Es necesaria la sanción de esta ley porque contiene una serie de normas que van a permitir combatir con eficacia el contrabando, la evasión y, en definitiva, construir un Estado más dinámico y eficaz que favorezca a la competencia.

Voy a hacer un par de reflexiones finales relacionadas con el tema de quién ha perdido acá. Cuando se dio a conocer públicamente este proyecto hubo quienes dijeron que el Poder Ejecutivo, con el nuevo ministro de Economía, iba a imponerle al Congreso de la Nación este proyecto de ley que implicaba, lisa y llanamente, el

cierre del Congreso. Y lo iba a hacer –sostenían algunos analistas– primero, porque el Congreso está desprestigiado, tiene un alto descrédito público y porque el peso de la crisis es tan grande que, por lo tanto, se va a imponer el texto tal cual lo remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Por su parte, el Congreso de la Nación ha dado una respuesta junto con el Poder Ejecutivo que “se da de patadas” con esta visión apocalíptica que planteaban algunos. Aquellos siempre interesados en desprestigiar al Congreso decían: “Los legisladores no van a tener fuerza ni recursos para decirle ‘no’ al gobierno frente a la crisis; porque hay un gran descrédito de la política, de los partidos y de los legisladores”. Pensaron que allí estaba la posibilidad de sancionar la ley y de ese modo vaciar de contenido al Congreso, lo que implicaba lisa y llanamente cerrar sus puertas, toda vez que se delegarían facultades amplísimas.

En primer lugar, no estuvo en el ánimo del Poder Ejecutivo enviar un proyecto que llegara a esos extremos. El Poder Ejecutivo puso sobre la mesa un proyecto de máxima y abrió el debate. Un debate que debía ser realizado con la mayor celeridad a fin de dar a la sociedad, a la opinión pública y a los mercados un mensaje que fuera respondido positivamente, y así fue.

Al respecto debo señalar algo que no se ha dicho: este consenso que se construyó en el Congreso de la Nación no se hizo sólo con los diputados, sino también con los senadores. El viernes pasado, cuando estábamos al borde de la votación de la iniciativa por la cual se creaba el impuesto a las transferencias bancarias, hice referencia a una reunión que en ese momento se estaba realizando en la Cámara de Diputados, que duró 5 o 6 horas y a la que asistieron el ministro Cavallo, Caro Figuerola, el jefe de Gabinete y varios legisladores de la Alianza. A partir de allí se trabajó en modificaciones sustanciales al proyecto que venía del Poder Ejecutivo y de ese modo se fue articulando el proyecto que aprobó Diputados y que ahora estamos considerando.

Pero aquí no podemos decir que el Congreso con estas modificaciones está derrotando al Poder Ejecutivo, porque tampoco sería este un mensaje correcto. Este texto ha sido consensuado, concertado y aceptado por los representantes del Poder Ejecutivo que, en un diálogo

cruzado entre legisladores de la Alianza, de la oposición y del Poder Ejecutivo, han alumbrado este proyecto que constituye el instrumento realmente importante que necesita el gobierno para salir de la crisis.

El Congreso ha demostrado una vez más que en los momentos difíciles encuentra los comunes denominadores para buscar un camino de marcha común a fin de sacar al país de la crisis que en estos momentos nos afecta, aún discrepando con aquellos que sostienen que no hay tal emergencia. La emergencia existe, está declarada por ley y está, lamentablemente, plasmada en los números.

Aunque no pretendo abrir un debate que ya se ha realizado en otras oportunidades, ésta no es una crisis que haya nacido por generación espontánea sino que se viene arrastrando lamentablemente desde 1995 a partir de la crisis de Rusia, en donde llegamos al techo más alto en materia de tasa de riesgo país: 1.300 puntos. De allí en adelante hemos tenido una caída notoria en lo que se refiere al crecimiento.

Así como admitimos que hasta 1995 hubo una tasa de crecimiento en la Argentina de entre el 6,5 y el 7 por ciento durante 4 o 5 años, no es menos cierto que desde esa fecha y por una serie de aspectos comenzó un proceso recesivo y que en 5 años solamente habíamos crecido el 0,9 por ciento. Si bien no es el tema específico del debate señalo que la crisis debe ser afrontada a fin de encontrar las soluciones. Este debe ser el objetivo común del oficialismo, la oposición, el gobierno y el Parlamento.

Con respecto a todas aquellas alusiones que se hacen del ministro Cavallo, tengo una clara memoria de todo cuanto he hecho y dicho en política, fundamentalmente, desde hace muchos años aquí en el Senado. He sido miembro interpelante en un par de oportunidades cuando el ministro Cavallo tenía a su cargo la economía de la Argentina. He leído detenidamente aquellos debates y me hago cargo de todo lo que dije. Eran posiciones serias y bien fundamentadas las que tenía mi bloque y no me arrepiento en lo más mínimo de haberlas expresado en aquel tiempo.

Pero también debo decirles que respeto técnicamente al doctor Cavallo. Es el ministro que ha elegido el presidente de todos los argentinos, aquel presidente que eligieron los argentinos y que está plenamente legitimado. Además, cuando

tenga observaciones que formular a las políticas que implemente el doctor Cavallo o cualquier otro ministro, pues está la posibilidad de hacer escuchar civilizadamente nuestras oposiciones, nuestros reparos y también de pedir rectificaciones. Eso y no otra cosa es lo que hemos hecho con este proyecto de ley.

Cuando nos remitió el proyecto por el cual se creaba un impuesto de hasta del 6 por mil a las transferencias bancarias hubo un consenso generalizado para su aprobación. Luego se produjo un desdoblamiento del proyecto, comenzamos a trabajar con la norma que estamos a punto de sancionar, la cual ha experimentado modificaciones que –a mi juicio– la han beneficiado y enriquecido. Eso partió de una discrepancia saludable que permitió mejorar notoriamente una iniciativa que había nacido del gobierno, pero más precisamente del equipo económico que dirige el doctor Cavallo.

Cada una de las normas que a partir de ahora se dicten como consecuencia de esas facultades delegadas, contarán con mi aplauso o mi reprobación, según corresponda. Desde que el doctor Domingo Cavallo es el ministro de Economía no he tenido objeciones. Cuando las he tenido, las he hecho valer en el escenario mismo de la discusión, y he escuchado afortunada y saludablemente que ha habido concesiones, tolerancia y actitudes de permeabilidad a lo que han dicho los legisladores de la Alianza. Del mismo modo, se ha escuchado la palabra de los diputados y senadores del justicialismo, así como también a referentes del justicialismo a nivel nacional que, incluso públicamente, hicieron propuestas de modificación a la ley. Por su parte, el gobierno acudió rápidamente al Congreso para mejorar la norma, modificándola.

En una palabra, señor presidente, me gustaría ver reflejado en los medios de difusión el valor del trabajo que hemos concretado entre tantos augurios negativos, de tantas visiones apocalípticas y de tantas opiniones agoreras.

El Parlamento ha estado a la altura de las circunstancias. Una vez que se apruebe esta iniciativa vamos a dar al presidente de la Nación una norma que, junto con el impuesto que votamos la semana pasada, serán seguramente instrumentos fundamentales de los cuales no nos vamos a arrepentir, toda vez que permitirán recuperarnos de esta emergencia económica e impulsar junto con otras medidas el crecimiento económico del país.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Cabana.

Sr. Cabana. – Señor presidente: después de haber escuchado los brillantes discursos de los señores senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, humildemente voy a tratar de fijar mi posición y de fundamentar mi voto en este trascendente e importante proyecto que estamos tratando. He plasmado por escrito mi exposición y trataré de ser lo más breve posible.

El Congreso argentino ha dado muestra cabal de que cuando las circunstancias lo exigen da todo de sí para salir de la encrucijada. En estos últimos días de ajetreada labor parlamentaria, se nos pidió delegar en el Poder Ejecutivo atribuciones que son propias del Parlamento. Considero que no debemos rasgarnos las vestiduras ante tal solicitud, ya que la Constitución lo prevé. Pero además, dicho mecanismo delegativo es una forma habitual de uso en las democracias modernas para acelerar determinadas actividades de los gobiernos.

Hasta aquí, una consideración personal sobre el tema que nos ocupa. Pero lo que realmente me apena es que lleguemos a esta instancia por una severa crisis del Estado, motivada desgraciadamente por la incapacidad del gobierno nacional para anticiparse a la crisis. Y era algo que se esperaba: un gobierno surgido de una coalición formada exclusivamente para el acto electoral pero enervada para gobernar por sus propias contradicciones.

La Unión Cívica Radical, el centenario partido de Alem, Yrigoyen y Alvear, que dio páginas de gloria a la historia, hoy se encuentra aliada con varios partidos, algunos de los cuales no supieron ponerse a la altura de las circunstancias.

Esa desviación partidaria, ese olvido del lema radical “de que se rompa pero que no se doble” es lo que ha llevado a la coalición y al país a este debate.

Es buena la ocasión para recordar que en la posición de ayudar a salir de la crisis producida por el desborde del déficit fiscal, nos “tragamos un sapo” y votamos el impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes. En una situación en que el país se acerca peligrosamente al abismo no podíamos hacer otra cosa; lo que aprobamos dista mucho de ser un gravamen ideal. Es un impuesto, por no decir, un “impuestazo”

que afectará los costos de las empresas y pesará nuevamente sobre la siempre castigada clase media. Pero en el corto plazo allegará los fondos para cubrir el bache fiscal. Por lo tanto, la nuestra fue una dolorosa decisión.

Como peronista me duele que el país se encuentre en este pozo pero, por sobre las diferencias políticas que nos separan, siempre aplicamos las enseñanzas del general Perón cuando decía: "Primero está la Patria, después el movimiento y, por último, los hombres".

Eso es lo que me mueve a aprobar este proyecto. Lo he leído con detenimiento y, dado que en relación a la delegación de facultades que se solicitan se aplicarán algunas modificaciones tendientes a mejorarlo, daré mi voto favorable.

Espero que el Poder Ejecutivo, con este instrumento que hoy le damos, encamine al país en la senda del crecimiento y de la justicia social.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador Meneghini.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: voy a ser muy breve. Por eso, desde ya, solicito la inserción de mi discurso.¹

Me voy a permitir hacer dos o tres reflexiones. Creo que todos coincidimos en que esta ley será el resultado de un esfuerzo conjunto de ambas Cámaras dado que, durante todo este fin de semana y hasta hoy, hemos trabajado y hemos construido un consenso que es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente porque hay algunos trasnochados que después comentan, en sede judicial, que no se tenían los proyectos en las bancas, que no se había discutido ni se sabía de qué se trataba.

Esto depende de las inquietudes y del grado de compromiso con el gobierno, con la ciudadanía y con sus propios votantes, que cada uno tiene.

En segundo término, quiero decir que a través de esta discusión, que también hemos seguido muy de cerca en la Cámara de Diputados, hemos notado que hay una palabra que no se mencionó, que estaba ausente: la palabra "confianza". Confianza en esta delegación de facultades legislativas. Y encuentro esta ausencia justificada, porque en este país son reiteradas las ocasiones en que ha habido leyes —en

gobiernos de jure y mucho más, obviamente, en gobiernos de facto— que, en definitiva, han ido concentrando un poder que nos ha dado un presidencialismo que ya tiene características de "hiperpresidencialismo".

Estoy de acuerdo en que muchas veces el Congreso ha ido autolimitándose en sus propias facultades, pero creo que saludablemente reaccionamos en el año 1994. En esa oportunidad, la Convención Constituyente estableció, en el artículo 76 de la Constitución Nacional, recaudos de índole material, institucional y temporal para conceder estas delegaciones de facultades. Pero es un poco injusto que a un gobierno que hace menos de dos años que ha asumido se le tenga tanta desconfianza sobre sus propias intenciones.

Se ha dicho cualquier cosa; se ha hablado de cheques en blanco, cierre del Congreso, reducción de los salarios de los empleados públicos y de las jubilaciones, despidos masivos. Esto no es así.

Quiero ser muy sintético y puntualizar que este gobierno tenía dos caminos para enfrentar la emergencia económica y financiera. Y nadie, en su sano juicio, puede negar su plena existencia.

Uno de los caminos era recurrir a los clásicos decretos de necesidad y urgencia. Y el otro —el que siguió el gobierno— era solicitar al Congreso las facultades del artículo 76.

Este gobierno lo ha hecho. Y después de un gran trabajo, y con mucho esfuerzo, se elaboró este proyecto que creo que tiene dos puntos fundamentales que hay que resaltar.

En primer lugar, éste es un proyecto de ley que tiene transparencia. Esta norma marco o base, como se la quiera llamar, ha acotado y limitado notablemente al proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo. Se trata de una norma clara y que no tiene trampas.

En segundo término, quiero que quede bien en claro que estos poderes han sido conferidos al presidente de la República. Estos poderes no han sido dados a la administración central o a la tecnoburocracia.

Realmente estos poderes, vuelvo a insistir, han sido dados a un presidente, que es un político como nosotros. Ha estado en estas bancas, y ha lucido siempre su prudencia y su templanza para enfrentar las circunstancias.

¹ Al momento del envío de esta versión taquigráfica a Imprenta, la inserción solicitada aún no había sido enviada.

Entonces, me parece que se trata de un problema de confianza en nuestro presidente. Creo que el gobierno no ha cambiado. Pienso que con estos instrumentos, con estas herramientas económicas, tributarias y financieras, el gobierno va a honrar el compromiso que tiene asumido con el pueblo a partir del 24 de octubre de 1999.

Simplemente quiero finalizar mi discurso diciendo que estos instrumentos otorgados tienen un objetivo muy concreto. No son para pagar la deuda externa, ni para contribuir a acrecentar el proceso de concentración de riqueza. Creo que estos instrumentos están orientados al crecimiento y al desarrollo de una economía que nos contenga a todos los argentinos; a un proceso de inclusión y no de exclusión y a aniquilar la desocupación en nuestro país.

Yo tengo confianza, y les pido a mis colegas que reiteremos esa confianza en el presidente de la Nación, quien es el destinatario y beneficiario final de esta delegación de poderes.

No me voy a referir a los otros aspectos, respecto de los cuales tengo coincidencias casi plenas.

Simplemente solicito que en su oportunidad se inserte mi discurso.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador San Millán.

Sr. San Millán. — Señor presidente: la mayoría de las medidas contenidas en este proyecto de ley que estamos tratando, han sido conceptualizadas por la opinión pública en general como bien direccionadas o, por lo menos, han generado una expectativa hacia la posibilidad de terminar con un largo período de recesión, vislumbrando, asimismo, la esperanza de que sirvan para reiniciar un camino de crecimiento.

Totalmente contraria a esta sensación fue la que produjo el anuncio del ex ministro López Murphy cuando basó su propuesta fundamentalmente en el ajuste; ajuste que se sumaba a aquella propuesta que venía implementando el ex ministro Machinea.

Y no era solamente un ajuste que estuviera direccionado a aquellos sectores a los que se visualizaba como los que habían tenido los mayores beneficios de la política económica de los últimos años, a los sectores de privilegio. No había una justicia distributiva en la asignación de recursos. El ajuste era para las economías regionales, para la educación —llámese las uni-

versidades, salarios de los docentes— y para los sectores de menores recursos, porque se quitaban las asignaciones familiares a quienes ganaban doscientos pesos.

Todo esto provocó una reacción de todos los sectores sociales, políticos y populares del país, además de la desesperanza y de la sensación de pesimismo que produjo en el ánimo de todo el pueblo.

A partir de ahí se produce esta propuesta que, en parte, recogía el reclamo de los distintos sectores en el sentido de que se defendiera a las economías regionales, a la producción y a la industria nacional; que se bajaran aquellos impuestos distorsivos que venían afectando en gran parte a la economía.

Pero si bien esta propuesta recogía o interpretaba el reclamo de los distintos sectores, creemos que fundamentalmente fue perfeccionada, precisada, y tuvo las correcciones necesarias —lo digo sin complejos— en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí se recogieron inquietudes —como dijo el senador Genoud— de este Senado.

Quiero contar como anécdota lo que sucedió el viernes pasado, en el despacho del señor presidente del este cuerpo, senador Losada, cuando estábamos tratando la primera parte de la ley que remitió el Poder Ejecutivo nacional. Ahí se encontraban el ministro de Economía de la Nación, doctor Cavallo; el jefe de Gabinete, doctor Colombo, y el vicejefe de Gabinete, doctor Caro Figueroa. En esa oportunidad un grupo de senadores del bloque Justicialista les acercamos algunas propuestas y tuvimos oportunidad de cambiar opiniones con el ministro de Economía.

Agradezco al senador Losada que haya facilitado esa posibilidad y planteamos, en esa ocasión, preocupaciones de las provincias, de las economías regionales y de aquellos sectores más castigados por las privatizaciones, como puede ser su provincia, señor presidente, o las provincias de Salta y Santa Cruz, que por las privatizaciones de Gas del Estado tuvieron consecuencias sociales gravísimas.

Se acordó, entonces, una inclusión en este proyecto de ley que luego hicimos llegar en forma escrita a la Cámara de Diputados y al vicejefe de Gabinete, doctor Caro Figueroa. Esa propuesta fue receptada por el bloque Justicialista. Con esto no quiero restar mérito a ningún

integrante de ese cuerpo ni a las tareas que realizaron en la Cámara de Diputados —como dije anteriormente— para perfeccionar este proyecto de ley, para salvaguardar el Banco de la Nación y para prohibir la baja de salarios y despidos en la administración pública.

En tal sentido, el proyecto de ley en revisión que estamos considerando incorporó el inciso *d)* en el artículo 1º, apartado II. Sobre este tema, durante el debate realizado en la Cámara de Diputados en el día de ayer, el diputado López Arias, representante de la provincia de Salta, dijo lo siguiente: “Si bien va a votarse inciso por inciso, debo señalar que existe un agregado que pienso que debería plantearlo previamente a la consideración de los incisos. Aclaro que se trata de un documento firmado por el conjunto de los senadores justicialistas y que también fue avalado por los gobernadores justicialistas por el cual se establecen medidas tributarias especiales”, y leyó luego el inciso que dice lo siguiente: “Establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales”.

El documento que mencioné anteriormente estaba firmado por los senadores Gioja, Cantarero, Menem, Costanzo, Sapag, Palacios, Arnold, Baum, de la Rosa y quien habla.

Inmediatamente el diputado Pernasetti —a quien quiero expresar mi público reconocimiento— solicitó una interrupción al diputado López Arias para expresar lo siguiente: “Señor presidente: no hay inconvenientes para aceptar este texto”. Se refería al que hoy está incluido en el proyecto, entre otras propuestas que se han incorporado. Se trata de modificaciones efectuadas tanto por mi bloque como por el bloque oficialista, tal cual lo expresado por el señor senador Genoud. Esto lo digo sin complejos por que el Congreso es uno solo aunque se encuentra integrado por dos Cámaras. Eramos conscientes de la urgencia para tratar esta iniciativa. Si no podíamos contar con el tiempo necesario y con la posibilidad de efectuar modificaciones, debíamos realizar las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo y los diputados

de nuestro bloque y del oficialismo, para que se incluyeran nuestras aspiraciones, preocupaciones y propuestas.

Por esta razón voy a votar afirmativamente este proyecto en general, acompañando a mi bancada, con excepción de un solo inciso con el que tengo alguna diferencia que voy a plantear durante la votación en particular.

No voy a abusar del tiempo que se me ha concedido —hemos acordado ser lo más respetuosos posible dado que hay muchos otros senadores que desean hacer uso de la palabra— y voy a solicitar a la Presidencia la inserción de las palabras que pretendía decir.

Sr. Presidente (Sapag). — Muchas gracias señor senador por ser tan considerado.

Tiene la palabra el señor senador Massaccesi.

Sr. Massaccesi. — Señor presidente y señores senadores: esta circunstancia que nos convoca está marcada por la emergencia que vive el país, la cual más allá de que queramos negarla, es un dato de la realidad.

Me parece que cuando uno observa el comportamiento de la sociedad argentina, no puede menos que recoger algunas señales que explican claramente lo que está pasando en estos días.

El país tiene miedo porque se viven situaciones complicadas en casi todos los estamentos de la sociedad, ya sea a nivel familiar como empresarial. En síntesis, se vive una situación en la que el argentino de todos los niveles sociales siente la necesidad de encontrar un camino y un futuro para el país.

Los hombres de la política y el gobierno tienen que interpretar esta situación. El miedo está marcando una serie de decisiones y esto ya nos pasó otras veces. Recordemos la Semana Santa de 1986, cuando todas las fuerzas políticas del país confluyeron, resignando sus banderas partidarias, para “ponerle el hombro” al sistema democrático.

En estos días uno observa que la España preocupada por el terrorismo de la ETA encuentra juntos al Partido Popular y al PSOE para hallar una solución. Lo mismo se puede decir de Colombia, donde las fuerzas políticas se juntan para ayudar al presidente Pastrana a pacificar el país.

Señor presidente: el miedo nos está juntando. Y la situación económica empieza a ser un pro-

ducto de la demora en encontrar las soluciones de fondo, que, naturalmente, son políticas.

Se dice que el riesgo país aumenta, que el índice Merval baja y que la desconfianza de los inversores empieza a crear zozobra. Esto es definido con una palabra técnica: *default*. Se dice que el país está en riesgo de *default*. Pero creo que el principal *default* que tiene la Argentina es político. Lo que falta es, precisamente, encontrar el poder político que transmita a la sociedad un rumbo claro y cierto. Sin duda, la búsqueda de ese rumbo tiene que ver con los consensos internos de la Argentina.

Si observamos el índice de riesgo país, que es un elemento que se utiliza periodísticamente, notamos que hay dos acontecimientos externos que marcaron los últimos años: la crisis de Rusia y la devaluación de Brasil. Ambas situaciones hicieron subir el riesgo país. Fueron los dos únicos acontecimientos externos y económicos que modificaron el índice. Todos los demás elementos que llevaron a la modificación del índice del riesgo país son políticos y de carácter interno: la asunción de de la Rúa, la renuncia del vicepresidente, el anuncio del blindaje, la renuncia de Machinea, etcétera. Reitero: fueron acontecimientos internos que repercutieron en la economía. Entonces, lo que está fallando en la Argentina es la política y no la economía.

Por eso, la asunción del actual ministro de Economía no viene a llenar un vacío técnico ni económico sino un vacío político. Es aquí donde nos equivocamos quienes empezamos a contar la realidad según "cómo nos va en la feria".

Me parece que el vacío político que se generó en el país en los últimos diez o quince días es el que, seguramente, habría hecho que no me alcanzara una hoja para graficar el índice del riesgo país. Menos mal que la situación de crisis se produjo un sábado y un domingo, porque si se hubiese dado en un día hábil no sé cómo la graficaríamos.

Creo que la situación viene a resolverse por el buen camino al llenarse el vacío a que hacía referencia. Pero esto no es nuevo porque sucede desde siempre en la historia.

Cuando los romanos tenían crisis políticas se ponían en manos de un poder político mucho más fuerte y el Senado delegaba poderes y principios en lo que en la Roma antigua se llamaba "el dictador". Luego la ciencia política lo deforma y para nosotros termina siendo otra cosa.

Pero reitero que en Roma era el que asumía poderes excepcionales para llevar adelante el período de crisis.

Por supuesto que lo nuestro, desde un punto de vista técnico y político, es otra cosa. Pero la base de la situación que se genera y la solución que se está dando es básicamente la misma.

Estamos delegando poderes, pero para qué. Precisamente, para salir de la situación en que nos encontramos. De ahí que, como lo adelantó nuestro miembro informante, voy a votar afirmativamente el proyecto en consideración.

No me preocupa que la capitalización se pueda hacer desde el punto de vista político porque, como lo acabo de decir, soy un convencido de que si hay una capitalización política inmediatamente habrá una mejora y un acierto en el funcionamiento del resto de las áreas de la Argentina. Tampoco me preocupa conocer a algunos personajes. Por ejemplo, no puedo evitar hablar del ministro Cavallo. Como muchos saben, en épocas políticas pasadas me ha tocado disentir con él, cuando yo era gobernador de una provincia y él se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem. Y digo que no me preocupa porque este país no es el mismo de aquel tiempo, porque seguramente el ministro no es el mismo, porque ninguno de nosotros es el mismo y porque también son diferentes las circunstancias que atravesamos. El desubicado sería yo si siguiera pensando y actuando de la misma manera en que lo hice cuando tenía otra responsabilidad, otro deber y decisiones que adoptar frente a las circunstancias que me tocaron vivir desde una gobernación.

Insisto en que, seguramente, las circunstancias políticas y económicas son totalmente distintas. Por ello, aparece distinta la propuesta del propio Poder Ejecutivo, a través de las medidas que ha elaborado este ministro de Economía.

Entonces, lo que debemos plantear hoy acá es hacia dónde vamos con este nuevo rumbo que se le da a la propuesta económica, y, tal vez, deberíamos mirar un poco hacia atrás para no volver a cometer algunos errores del pasado.

Fundamentalmente, me preocupa que se concentre la decisión política y económica en pocas manos, como viene sucediendo en los últimos años en la Argentina. Realmente, me preocupa que los beneficios del esfuerzo no puedan llegar a la mayoría del país.

En 1995 hubo un diagnóstico que señalaba que empezaban a terminar las principales finalidades de la convertibilidad, que había nacido con un dólar totalmente retrasado que, a la larga, iba a terminar afectando a los sectores productivos del país. O sea, a seis años de vigencia de la convertibilidad ya se visualizaba la necesidad de devolverles rentabilidad a los sectores productivos de la Argentina. Ello se veía reflejado en una concentración de privilegios y beneficios, fundamentalmente en los sectores del servicio y de las finanzas. En términos territoriales, se beneficiaba demasiado al centro del país y se perjudicaba demasiado a la periferia.

Paralelamente, la Argentina iba hacia una regionalización continental y consolidaba al Mercosur. Pero íbamos a ingresar en el Mercosur con nuestra producción y con los sectores del interior totalmente debilitados. Precisamente, las medidas que estamos adoptando en la actualidad vienen a corregir los excesos por el tiempo en que se han mantenido estas diferencias que, en algunos casos, han representado flagrantes privilegios, como aquellos que protegen a los sectores financieros.

Digo esto con algún conocimiento de causa, porque la necesidad de buscar una salida gradual de la convertibilidad, dando importancia a los sectores productivos, estableciendo un dólar diferencial y planteando la necesidad de proteger a los sectores financieros para dar beneficio a los sectores del trabajo fue, precisamente, mi propuesta presidencial de 1995. Hoy, me encuentro con que el 90 por ciento de las medidas que propone nuestro gobierno en la persona del ministro Cavallo son exactamente aquellos lineamientos. Por supuesto que durante estos últimos cinco años les han pasado un montón de cosas a los argentinos, al partido político que represento y también, por qué no decirlo, a quien está hablando. En este momento, quien está en uso de la palabra está expulsado de las filas de la Unión Cívica Radical.

Para finalizar, señalo que se presenta otro riesgo: hay una perspectiva de mayor recaudación. Esa perspectiva nos genera un gobierno nacional, con manejo y con caja, pero sigue dejando a las provincias sin manejo y sin caja. La promesa de que el impuesto que sancionamos va a ser coparticipable debe ser recordada permanentemente. No vaya a ser que, dentro de sesenta o noventa días, tengamos funcionarios nacionales eficientes y gobernaciones provinciales ineficientes.

No vaya a ser que tengamos funcionarios nacionales responsables y gobernaciones nacionales irresponsables. Esto ya se dijo una vez. Y si no corregimos esto hoy y no lo vigilamos, iremos de nuevo por ese camino. Lo que es peor, podemos ir por un camino no querido, que es gobierno y funcionarios nacionales eficientes e interventores federales en las provincias con caja.

Digo esto porque es inevitable el sesgo político que se habrá de producir de hoy en adelante. La Argentina, en estos días, a raíz de ese miedo y de estas circunstancias, inicia una nueva etapa política que va a estar signada por los cambios, que tiene que estar signada por la grandeza, pese a ese paraguas del miedo que está capcando sobre todos nosotros cuando nos juntamos un fin de semana en el Congreso nacional, hecho que dicen que no había sucedido en los últimos cincuenta años.

Aprovecho este momento para hacer una pequeña digresión. Hay otra circunstancia histórica y es que el Senado está sesionando mientras está jugando la Selección Argentina de Fútbol, lo cual me parece que también es un hecho bastante interesante desde el punto de vista de la inserción en el fútbol y de los antecedentes que hemos tenido en este tema durante los últimos tiempos. Creo que es una muestra más de responsabilidad y también, por qué no decirlo, de miedo.

El necesario debate que nos debemos, sobre todo los hombres del interior, tiene que versar sobre qué hacemos con un centro que concentra cada vez más el poder económico y el poder político. El cambio también tiene que llegar a la clase política. Tenemos que animarnos a hablar de una vez por todas de la regionalización del país; porque, si no, vamos a seguir abonando un federalismo solamente en las formas.

Digo esto no con criterio peyorativo, sino a modo de ejemplo de lo que no debemos hacer. Evitemos que la Argentina se nos "mexicanice" desde el punto de vista de las grandes soluciones económicas nacionales y, también, por el hecho de repartir dádivas en las provincias.

Me parece que éste es el riesgo que se corre en todo camino que conduzca a una solución que se pueda empezar a dar —y que ojalá se dé— a partir de lo que estamos por votar.

Finalmente, señor presidente, creo que es una buena oportunidad para avanzar hacia los cam-

bios. Los que le debemos un cambio al país somos precisamente los hombres de la política. No podemos tener la soberbia de pensar que hacemos cambiar a nuestros hijos, que tienen el privilegio de tener una educación diferente, que cambia el mundo, que crece alrededor nuestro y, mientras tanto, la clase política argentina no se anima a cambiar.

Creo que la realidad nos ayuda mucho y a partir de hoy es posible ese cambio. Pero no neguemos la realidad. Estamos en esta situación precisamente porque en el país se produjo un importante y grave vacío político que comienza a ser llenado con buenas decisiones, que ojalá recompongan el poder político de la Nación y sirvan, como tienen que servir en una democracia, para las mayorías.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Arnold. — Señor presidente, señores senadores: confieso que he tenido, en estos últimos días pero particularmente en estas últimas horas, antes de esta mañana en que se conoció finalmente el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados y que hoy ha venido aquí para su tratamiento, realmente muchas dudas para votar este pedido de delegación de facultades que nos hace el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, por cierto, pero por sobre todas las cosas y como se repitió muchas veces esta noche aquí, el ministro Domingo Felipe Cavallo, quien, en todos los medios, es hoy y sin ninguna clase de dudas la figura excluyente.

Por supuesto que estaba absolutamente en contra e iba a votar en tal sentido si hubiéramos tratado aquí el proyecto original, que venía del Poder Ejecutivo y que el senador Moreau desmenuzó y comparó con esta sanción de Diputados y la que hoy vamos a aprobar. Lo hizo brillantemente, cuando estableció las diferencias existentes entre el proyecto original y el que hoy, finalmente, sancionaremos.

Tampoco tuve ninguna duda, señor presidente, cuando la semana pasada tuvimos que votar la ley de competitividad. No tuve ninguna duda porque por primera vez, cuando hablamos de impuestos, no vamos derecho hacia los trabajadores que cobran 200 pesos para quitarles el salario familiar o creamos impuestos que tengan que ver directamente con el consumo; impuestos que, irremediablemente, deben sopor-

tar los hombros de quienes menos tienen. Esta vez comenzamos a hablar de impuestos a las actividades financieras. Por cierto, nosotros hubiéramos preferido que la base fueran los cheques por dos mil pesos y no los de mil. De todas maneras, consideramos que alguien con la posibilidad de extender un cheque por mil pesos seguramente no debe cobrar un sueldo de 400 o 500.

Ahora quiero hablar como patagónico. Temo que me ocurra lo mismo que al senador Massaccesi con su partido. No sé cuáles son las razones, pero soy el único santacrucense que votará afirmativamente este proyecto de ley. En mi caso, de ninguna manera creo que podría votar en contra de un beneficio fundamental para la Patagonia —el señor presidente, que también es patagónico, lo conoce— como es el de los subsidios al gas y a los combustibles.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario Losada.

Sr. Arnold. — Todas las movilizaciones que se han llevado a cabo en mi provincia en los últimos tiempos han tenido que ver recurrentemente con este par de beneficios —escasos, por cierto, pero únicos— que van directamente al bolsillo de la gente. Entonces, según lo expresa taxativamente este proyecto de ley, tendremos tranquilidad seguramente por algún tiempo.

¿Pero qué ocurre, señor presidente? Como aquí también lo expresó el señor senador Sala, no me guío por las encuestas ni hago disquisiciones filosóficas o jurídicas. Siempre estuve con la gente; siempre me manejó con la gente. Y sé que hoy lo que espera la gente del Parlamento argentino es que se concedan al ministro Cavallo las herramientas que necesita para llevar adelante este plan; que se den estas facultades al Poder Ejecutivo. Lo digo, en todo caso, para que se queden tranquilos los amigos radicales.

Creo que si el ministro Cavallo precisa estos instrumentos es porque necesita respaldo político. Ya no tiene detrás al doctor Menem, señor presidente. Pudimos tener mil diferencias con Menem, cuando fue presidente; yo las tuve. En muchísimas oportunidades hemos estado en contra de sus decisiones, pero nadie puede negar el respaldo político que daba a sus ministros y a sus funcionarios.

Como bien explicó el senador Massaccesi, en esta oportunidad la crisis política por la que atraviesa la Alianza —que paradójicamente habla de un gobierno nacional y no logra la unidad de su propia coalición— es uno de los temas fundamentales por los cuales hoy debemos sancionar esta norma. Uno no puede mirar para el costado cuando la gente nos está reclamando precisamente esto.

Por eso, anticipo que en general votaré afirmativamente este proyecto de ley. Y lo haré porque quiero comprobar rápidamente la eficacia de este impuesto tan ágil para la recaudación. Según tengo entendido, se aplicará a partir de hoy y seguramente hará que cada banco recaude más de 100 millones de pesos por día. De ser así, estaremos ante un impuesto cuya recaudación será verdaderamente rápida y ágil. Espero que, prontamente, empecemos a ver esa rapidez y agilidad —como también lo expresó brillantemente en su exposición el senador Moreau— en este impuesto, que esperamos resulte progresivo y no regresivo.

Seguramente, la primera parte de la recaudación será para cerrar las cuentas del Estado; esperemos que, lo más pronto posible, comience a llegar también al bolsillo de la gente mediante posibilidades de trabajo.

Señor presidente: votaré afirmativamente este proyecto porque su texto no resulta perjudicial para las provincias, pues están absolutamente resguardados los intereses de sus habitantes. Lo voy a votar en general porque, en el segundo párrafo, inciso a) del apartado II del artículo 1º, están reconocidas expresamente todas las cuestiones inherentes a estos beneficios escasos que tienen las provincias, pero que están taxativamente expresados en el proyecto de ley que vamos a sancionar.

Cómo voy a estar en contra del artículo que menciona a los departamentos y las localidades, como bien lo decía recién el senador San Millán. Y no quiero dejar de agradecer profundamente la nota enviada por su intermedio a la Cámara de Diputados donde pedíamos que se tuviera en cuenta a las localidades más azotadas por la privatización de las empresas del Estado. En este sentido, puedo comentar un caso en particular.

Soy de Pico Truncado, un pueblo absolutamente petrolero que fue muy perjudicado por el tema de las privatizaciones. Con la implanta-

ción del sistema de retiro voluntario mucha gente regresó a “su pago”, en el Norte del país, y volvieron cuando se “comieron” el taxi, el remise y el kiosco, todo lo que en su momento pudieron adquirir. Hoy son personas que tienen mi edad, desocupados, que no pueden encontrar trabajo porque son viejos. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo si este artículo también tiene en cuenta a la gente como la que estoy mencionando!

Sr. Vaquir. — No se autocalifique de viejo, señor senador. Usted es joven.

Sr. Arnold. — Gracias, señor senador.

¿Cómo voy a defender a mi pueblo si no voto el inciso a) que contiene las aspiraciones de las economías regionales que también tienen que ver —y vuelvo a reiterar— con los escasos beneficios que tenemos!

A su vez, quiero poner de manifiesto que no voy a votar en particular algunos artículos e incisos. Uno de ellos es el primer párrafo del artículo 1º, porque creo que no corresponde —particularmente pienso así— que quienes terminamos nuestra gestión el 10 diciembre del corriente podamos legislar más allá de ese tiempo.

No voy a votar el inciso c) del apartado I del artículo 1º porque no me queda en claro qué les puede pasar a los trabajadores dentro de dos años cuando venza este plazo. Realmente no queda claro, reitero, y como no quiero tener ninguna clase de dudas y responsabilidades, voy a votarlo negativamente.

También voy a votar en contra del inciso c) del párrafo 3º, apartado I del artículo 1º y del artículo 8º, debido a que en su momento presenté un proyecto para derogar el decreto de necesidad y urgencia 1.299/00 que está relacionado con el Fondo de Infraestructura que, oportunamente, firmó el presidente De la Rúa. Y procederé así porque considero que se tendría que haber seguido avanzando en la sanción de la Cámara de Diputados —que se encuentra a consideración del Senado— y porque creo que es importantísimo tal como se lo presentó y con la esperanza de darle trabajo a la gente de forma inmediata. Pocas cosas como la obra pública dinamizan la economía y la mano de obra, señor presidente. Pero creo que esa ley era mucho más importante que el decreto que hoy vamos a ratificar y es por eso que no lo voy a votar. Y creo que era mucho más importante porque tenía que ver con la decisión provincial

en el consejo de administración que prevé el Fondo de Infraestructura. En este caso va a quedar librado prácticamente en forma directa y exclusiva a la voluntad de un funcionario del Poder Ejecutivo. Pude comprobar hace pocos días, cuando asistimos al acto de conmemoración del centenario de Comodoro Rivadavia, cómo el secretario de Obras Públicas amparado en este plan prometía la rápida construcción de una hidrovía de ingreso a la ciudad que vale 70 millones de dólares y lo hacía en virtud de este fondo.

Me gustaría que este fondo tuviese una administración compartida, con una parte igualitaria, por lo menos, por las provincias. Por eso, señor presidente, no voy a votar en forma afirmativa el artículo 8º ni el inciso c) del apartado II del artículo 1º, que tiene que ver con el mismo tema.

Comparto también lo que manifestó el senador Sala respecto del agregado como último párrafo en el artículo 2º, con relación a las posibles rebajas salariales a los trabajadores públicos y jubilados.

Por último, creo que con estas facultades, que espero sean utilizadas de la manera que aquí se dijo, empecemos de una vez en este Parlamento a hablar de otras cuestiones que también son importantes, no solamente de las económicas. Un país sin educación —fundamentalmente—, sin salud y sin seguridad no tiene destino. Empecemos a discutir esas cosas sobre la educación de los argentinos. Espero que cuando este impuesto esté demostrando que es progresivo podamos empezar a discutir las cosas que nos importan y que le interesan a la sociedad, que van a tener mucho que ver con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra la señora senadora por Córdoba.

Sra. Raijer. — Señor presidente: en años recientes se ha conformado un contexto general que afecta las formas de hacer y de pensar la política. Estamos ante procesos de descomposición y de recomposición en que elementos viejos y nuevos se superponen y entrelazan; quizá nos encontremos ante un cambio de la política misma.

Esto lo vimos por primera vez en la Argentina con la experiencia de la Alianza. Una experiencia que lamentablemente no fue como en nuestro país vecino de Chile. Una experiencia

que la califico de negativa, porque debilitó la figura del presidente y llevó al país a una situación delicada. Algunos no tuvieron responsabilidad cívica y otros pasaron el tiempo fagocitándose como si fueran fuertes opositores. Durante este lapso se subieron impuestos y se bajaron sueldos.

Me pregunto cómo es posible que en una provincia como la mía —Córdoba— al mismo tiempo se bajaron impuestos, se alentaron inversiones y se aplicaron políticas activas para reactivar la economía. ¿Cuál ha sido el error a nivel nacional? Quizá se armó una alianza para ganar pero sin un plan para gobernar.

Hoy, es cierto, estamos en un momento crítico, pero este Senado y el bloque peronista siempre estuvo a la altura de las circunstancias y de las demandas del país, aprobando leyes a la velocidad de un rayo.

Debemos ser prudentes, no debemos delegar sin límites y sin control. No podemos volver a épocas de despotismo y de barbarie. Por eso queremos que esta delegación esté fundamentada, que sea por tiempo determinado y que se ejerza razonablemente.

Esta es una situación sin antecedentes en nuestra historia, una situación inédita, porque se le está pidiendo al Congreso que renuncie a su función, a su naturaleza.

En estos días, cuando miraba las sesiones de la Cámara de Diputados yo me preguntaba si no estábamos asistiendo a una peligrosa patología del poder en la administración. Las situaciones patológicas en general se producen porque algo no funciona. Y, en este caso, no funciona, pero no por culpa nuestra, sobre todo de los senadores, a quienes en un momento determinado del año pasado nos hicieron responsables del caos del país. En este sentido, los senadores peronistas, siendo mayoría en esta Cámara, nunca fuimos un obstáculo para que el señor presidente gobierne. Para ello lo ha elegido el pueblo argentino y es una tarea que tiene y debe cumplir, aunque a veces pareciera que tercerizara el poder.

Es importante que hoy el Poder Ejecutivo haga de este proyecto de ley un instrumento al servicio de la gente, con un manejo responsable. No queremos más inestabilidad, más inequidad y más irresponsabilidad.

Queremos que en este país se reactive la economía y se reforme el Estado para hacerlo

más eficiente y moderno, aunque sin atacar los convenios laborales. Asimismo, deseamos que se apoye a las pymes, la investigación científica y que se alienten las inversiones; pero sin atacar a los más necesitados. No queremos que se rebajen salarios, que se despida gente y que se toquen las asignaciones familiares.

Quiero adelantar que voy a votar en contra del inciso c) del apartado I del artículo 1º, porque no me queda claro qué estabilidad van a tener los trabajadores después de dos años.

Señor presidente: es importante que los funcionarios que integran el Ejecutivo, además de eficientes y solventes, quieran a este país por encima de los individualismos y de los interinos.

Yo recuerdo una frase de Eva Perón, incluida en una cita de un libro, que decía así: "Yo me alegro mucho viendo la cara de felicidad que tenía Perón cuando visitaba mis obras. Eran un descanso y un aliento en su camino de tanto trabajo y tantas luchas. El solía decirme que el Estado no podrá hacer nada de esto, porque el Estado no tiene alma, no tiene mística y esto no se puede hacer sin amor". Por eso es importante que los funcionarios y los dirigentes quieran más a la Argentina, para poder sacarla adelante y para que hoy el Estado tenga el mismo valor que el mercado.

Debo decir que esta ley no me gusta, pero también debo reconocer que estamos en una situación crítica; en consecuencia, voy a dar mi apoyo en general a este proyecto de ley. Hasta ahora, los peronistas siempre hemos dado muestras de priorizar los intereses de la Nación.

Actualmente en el mundo estamos frente a la construcción de nuevos paradigmas y en tiempos de trabajar en grandes consensos nacionales. Es necesario recuperar este país y lo debemos hacer para nosotros mismos, para las próximas generaciones y para el mundo que nos mira, pero teniendo en claro un proyecto de Nación que incluya y que integre, no que margine y expulse; un proyecto que aliente y tolere, no que discrimine y aliene.

El gobierno actual tiene que pensar que el futuro no sucede sino que se crea y se lo hace resolviendo desafíos y ejerciendo liderazgos.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: la verdad es que a esta hora se hace difícil hablar sin caer en

temas y en diagnósticos que aquí ya han hecho distintos senadores.

Por ello abordaré el tema que nos ocupa en forma muy breve y sintética, pero desde otro ángulo, desde otra óptica. Porque cuando a las 16 bajamos al recinto para iniciar esta sesión, yo lo hice en la inteligencia de hablar en los primeros momentos para dar mi opinión sobre los aspectos técnicos de este proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados.

Pero ahora me siento eximido de hacerlo, ya que aquí nuestro miembro informante, el senador Luis Molinari Romero y, posteriormente, el senador Eduardo Menem, han sido más que explícitos y brindaron fundamentos muy sólidos. Es más, diría que nos han dado una clase magistral de derecho constitucional.

En ese momento me sentí tan identificado con esas dos exposiciones que suponía, equivocadamente, que esta sesión iba a ser mucho más breve de lo que está siendo porque, reitero, ambos discursos fueron muy claros.

Debo destacar que el bloque mayoritario, opositor en este momento, fue muy generoso también cuando el senador Menem dijo que este proyecto vinculado con el otorgamiento de determinadas facultades al Poder Ejecutivo no rompía la virginidad sobre este tema. Esto significa que nadie debe asustarse y decir que esta delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo es un hecho nuevo o algo inédito en los anales políticos de la Argentina.

Por lo tanto, sobre este tema no voy a abordar artículo por artículo porque lo han hecho muy bien distintos senadores. Pero lo que sí quiero decir, porque aquí se ha hablado en un arco que abarca prácticamente la historia del país, es que nos venimos recriminando pesada y mutuamente las culpas de esta situación que vive la Nación, viendo qué gobierno fue mejor o cometió menos errores, y de esa manera no vamos a resolver el problema de la gente. Aquí el pueblo está esperando los grandes consensos de la dirigencia nacional.

Por eso, cuando hablamos de un gobierno de unidad, el presidente de la Rúa interpreta que esto es lo que requieren las horas que viven los argentinos: un gobierno que convoque a todas las expresiones políticas, que sepa que la oposición es oposición y debe opinar, pero que es generosa también en el apoyo y en la permisión de la gobernabilidad. Esto debemos reconocer-

lo. Al menos esto es lo que yo he percibido desde que soy senador, en la actitud asumida por la bancada del justicialismo y de los partidos provinciales.

Quiero decir un párrafo más acerca de esta delegación de facultades, porque se me viene a la memoria que debemos destacar el esfuerzo que ha hecho la Honorable Cámara de Diputados para consensuar y para acotar aquellas pretensiones, desmedidas en muchos casos, que nos proponía la redacción original de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

En este sentido, creo que los señores diputados han trabajado con honradez y esfuerzo. Y también destaco que muchos senadores estuvieron trabajando codo a codo con los diputados y técnicos del Poder Ejecutivo.

Y como bien lo ha señalado el senador Genoud, esto no quiere decir que hubo una derrota a ese proyecto original, sino que esta norma que hoy estamos considerando es el fruto de ese consenso que debemos buscar los argentinos.

Entonces, esto es bueno que lo digamos. ¿Por qué? Porque revaloriza a este Parlamento, que fue objeto de desprecios y de vituperios inmerecidos.

Por eso creo que lo que hoy estamos haciendo y lo que vamos a hacer hacia adelante, va a consolidar la idea de que este Congreso cumple con su obligación de ser el reaseguro del sistema democrático argentino.

Es nuestra obligación sostener y consolidar—con nuestro trabajo diario y cediendo con honradez posiciones partidarias—el objetivo superior de garantizar un sistema de vida digno para los ciudadanos argentinos.

En este sentido, no quiero caer en el análisis que se ha hecho de nuestra realidad, diciendo que se trata de una situación difícil, que algunos dicen que es una crisis económica y social. Recién decía el senador Massaccesi que, a su criterio, se trata de una crisis política. Con todo respeto y afecto creo que no es así.

Aquí estamos transitando las consecuencias de una crisis económica, que deriva naturalmente en un problema social. Pero esta crisis económica no es producto de la ineficiencia de este gobierno, como dijo el señor senador Cabana.

Quiero resaltar que si aquí hay culpas, ellas son compartidas. Y hay culpas compartidas porque esta recesión, que ya lleva treinta y tres

largos meses, no es producto del trabajo de los quince meses del presidente De la Rúa. En efecto, ya desde junio de 1998 veníamos soportando una recesión que vino para quedarse. Esto es cierto. Por eso es que con mucho esfuerzo y con el apoyo de todos es que ahora estamos tratando de revertir esta situación.

Hay un pueblo que está esperanzado que los políticos y los funcionarios le encontremos una solución a esta situación de angustia. Y esto lo digo con mucho pesar, porque siempre los políticos nos rasgamos las vestiduras y hablamos del beneficio de la gente. Tal vez hayamos cometido muchos errores y es posible que la clase dirigente política sea la responsable de esta situación, porque si no quién me explica que en esta Argentina haya más de 10 millones de personas que viven bajo los niveles máximos de pobreza.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Este es el producto de catorce meses de gobierno? No. Es el producto de los desencuentros de los argentinos desde hace muchos años; y la gente espera que la actual clase política sepa reparar esta situación.

Por eso digo que hoy no me preocupa si Cavallo es el ministro de Economía. Y yo no hago distinciones entre el Cavallo malo y el bueno o entre el de antes y el de ahora. Sé que es argentino y que si bien podemos estar de acuerdo o no con lo que hizo en su administración junto al presidente Menem, donde tal vez haya cometido errores, debemos tener la hidalguía de reconocer que tuvo muchos aciertos y uno de ellos lo constituye la Ley de Convertibilidad, porque hasta ahora se ha hablado mucho pero nadie fue capaz de exponer un plan serio para salir de este tema que muchos dicen que nos ha “entrampado”.

Cavallo es argentino. Yo descuento que tiene los mismos deseos que tenemos todos nosotros: ayudar para salir de esta situación. Reconozco que para un partido como es la Unión Cívica Radical ha sido difícil digerir este nombramiento. Pero yo creo que acá hay intereses superiores a los partidarios. Aquí tenemos que pensar en la colaboración de todos; y reconozco que durante nuestra actual gestión ya llevamos dos ministros de Economía.

Asimismo, debo admitir el esfuerzo intelectual y técnico que ha hecho José Luis Machinea, que no es el responsable de esta crisis econó-

mico-social. El hizo una administración férrea y austera. Lo que sucede es que a los argentinos no nos gusta cuando nos aplican los ajustes, pero debemos decir la verdad: Machinea ha hecho un esfuerzo tremendo para encarrilar las cuentas públicas, porque veníamos de déficit tras déficit.

Recordemos que en 1989 el doctor Raúl Ricardo Alfonsín entregó el gobierno anticipadamente. Esto es cierto. Y lo hizo en una situación muy difícil, con una inflación del 3 o 4 por ciento diario. Es cierto que así no se podía vivir en democracia, porque se carcomían las finanzas públicas y las particulares.

Entonces, es bueno que digamos esto. Y también es positivo que señalemos que a raíz de muchas privatizaciones, que redundaron en 40 o 45 mil millones de pesos, la Argentina creció. Lo vamos a reconocer. El gobierno de Menem, en los primeros seis o siete años, hizo crecer el producto bruto en un 42 o 43 por ciento y esto va al haber de esa administración.

Pero también es cierto, amigos justicialistas, que después de esa fecha vinieron el efecto Tequila, la crisis del Brasil y del sudeste asiático y todo ello trajo problemas externos a nuestra economía. Y ya estando Menem como presidente se empezaron a sufrir los efectos de una economía muy endiablada, muy difícil. A tal punto fue así que fíjense que ese crecimiento del 6 o 7 por ciento anual empezó a bajar tremendamente y llegamos a 1999, cuando se le entrega el poder a Fernando de la Rúa, con un déficit fenomenal y con una deuda pública que, habiendo sido en el inicio de su gestión de gobierno de 60 mil millones de pesos, luego de venderse bienes del Estado y privatizarse empresas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera, trepó hasta los 120 mil millones de pesos.

¿Qué pasa cuando los países se endeudan? Decrece el crédito. Cuando asumimos este gobierno estábamos orillando el 42 por ciento del endeudamiento del producto bruto interno. Y esta es una restricción que, nos guste o no, debemos aceptar.

No quiero con esto pasar facturas, pero lo digo en homenaje a la verdad histórica. Por eso dije al principio que esta crisis es económico-social y no política. Porque aquí funcionan los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

La actual crisis económica y social deriva entonces de todas estas situaciones que nos han

venido ocurriendo. Y yo no le echo toda la culpa al presidente Menem o a Domingo Cavallo, que fue su ministro; esto es culpa de todos los argentinos. Algunas habrán sido por acción y otras por omisión; pero pese a eso siempre digo que éste es nuestro país, es la Nación que tenemos, en el que 10 millones de argentinos están sufriendo y sobreviviendo en estado de pobreza.

Ahora, se encuentra acotada la situación de la Argentina. El blindaje vino para restablecer la confianza de los foros internacionales hacia el gobierno de nuestro país. Lamento que no se encuentre presente en este momento el senador Antonio Cafiero, quien el día en que tratamos la primera parte de esta ley de competitividad dijo que ha sido tan desastrosa la administración de la economía durante este gobierno que en tres o cuatro meses hemos dilapidado 40 mil millones de pesos del blindaje.

Al respecto quiero dejar dicho algo que se puede comprobar: de esos 40 mil millones de pesos, que no fueron entregados en efectivo sino que se dieron como resguardo o reaseguro en el caso de que la Argentina no cumpla con sus obligaciones, el ministro Machinea sólo usó 4 mil millones de pesos. Entonces, digamos la verdad de las cosas.

Es cierto que ahora debemos recomponer la economía; y para eso estamos tratando de instrumentar un plan de reactivación que nos posibilite el crecimiento.

También es verdad que hubo otro ministro, que duró quince días en su cargo, que con un discurso sincero le dijo a los argentinos cuál era la verdadera situación. Naturalmente que a ninguno de nosotros nos agradó ese discurso, pero era real. Allí se enumeraron todas las dificultades que teníamos pero era impolítico decir que este ajuste lo iba a pagar la educación pública, que se iban a recortar los subsidios al gas patagónico y a eliminar la exención del impuesto a la transferencia de combustibles en la Patagonia.

Hoy nos encontramos frente a una nueva perspectiva. Aquí, ha dicho en forma muy desinformada el senador Maya, que la ley 25.413 — sancionada hace muy pocos días — le va a permitir al Estado obtener recursos en el orden de los 20 mil millones de pesos. No hay nada más alejado de la realidad que esta afirmación.

Acabo de recibir una información que indica que recién a las 20 de hoy el nuevo secretario

de Hacienda ha fijado las alícuotas de esta ley de débitos y créditos bancarios. Este tema lo hablé con el ministro Cavallo la noche que sancionamos esta ley y en aquella oportunidad le dije que este era un máximo; y así fue. Hoy estamos hablando de una alícuota que fue fijada en el 2,5 por mil; es decir que nosotros conscientemente no hemos puesto el máximo, porque ello no era bueno para la economía sino que hemos sido lo suficientemente prudentes.

Por esta razón, cuando alegremente aquí se dice que se van a recaudar 18 mil o 20 mil millones de pesos, desearía que así fuera porque entonces no se justificaría que nos hiciésemos problemas por un déficit de 7 mil u 8 mil millones de pesos cuando con este recurso financiero podríamos lograr las cifras antes mencionadas. Pero esto no es así.

También les digo —y fíjense la responsabilidad de la conducción económica— que se ha fijado en el 0,75 por mil la alícuota para todos aquellos sectores que operen con cheques de terceros o sectores de baja rentabilidad, como pueden ser los supermercados o los expendedores de combustibles.

A los que decían que el Poder Ejecutivo haría un uso discrecional de estos poderes, yo les quiero responder que voy a votar el proyecto tal cual ha sido remitido por la Cámara de Diputados, porque tengo la absoluta confianza de que el presidente de la República va a imponer un uso moderado de todos los mecanismos legales que ya ha sancionado la Cámara Baja y hoy aprobará este Senado de la Nación.

Por eso, no me preocupa ni el Cavallo de antes ni el Cavallo de ahora porque las políticas que va a implementar el ministro Cavallo serán las que respondan al diseño político que impondrá el presidente de la República.

Señor presidente: podríamos decir muchas cosas más, pero la hora nos llama a ser recatados en el uso del tiempo.

No comparto lo que dijo el señor senador Maya en el sentido de que con los anuncios realizados ayer por el ministro Cavallo en la sede del Banco de la Nación ya no haría falta la sanción del proyecto de ley en consideración porque será excedente e innecesario. Yo creo que sí es necesario y, por esa razón, pienso que debemos apoyarlo y otorgar al Poder Ejecutivo esta herramienta porque, más allá de que algunos irónicamente digan que no estamos en cri-

sis, la verdad es que tenemos una crisis. De hecho, tenemos que recaudar todos los días entre 30 y 32 millones de pesos para pagar tan sólo los intereses de la deuda pública, lo que no es algo de menor cuantía ni algo que no exija un terrible esfuerzo. Por ello, creo que el nuevo impuesto a los créditos y débitos bancarios va a permitir, en función de su recaudación diaria, que, a lo mejor, a fin de mes logremos hacernos de mil millones de pesos para pagar los intereses de la deuda pública. Es por esto que la Argentina está en la actual situación y presenta restricciones externas, problemas de caja y de diseño, pero, según el nuevo enfoque que estamos pensando, podremos salir hacia adelante.

En ese sentido, el propio ministro de Economía se tiene fe y la ha transmitido a todos los argentinos. Por ejemplo, ha dicho que si las cosas funcionan como se están pergeñando, la política tributaria se basará solamente en dos grandes impuestos, para lo cual se harán modificaciones al actual sistema. Quien les habla, el 22 de marzo de 1999 presentó un proyecto de reforma integral de la política tributaria argentina. Lamentablemente, en ese momento no se le dio la atención debida, pero hoy todo el mundo habla de la necesidad de un nuevo diseño impositivo.

Creo que tomadas estas medidas, hay razones para ser optimistas. No tanto como para decir que ya podemos quedarnos tranquilos porque con esos 20 mil millones de pesos nos va a sobrar plata. Nada de eso. Pero sí soy un optimista moderado y tengo confianza en que el diseño de la política que se está elaborando juntamente con el Poder Ejecutivo nos va a permitir a los argentinos revertir la tendencia recesiva que, reitero, ya lleva 33 meses. Creo que se abre una nueva etapa de esperanza. Alguien por aquí dijo que la economía ya está funcionado. Creo que ello es así y que debemos poner todos el hombro para que estas iniciativas se puedan materializar.

Con estas palabras, dejo fundada mi decisión personal de votar afirmativamente este proyecto de ley tal como ha llegado de la Cámara de Diputados a fin de disponer lo antes posible de esta herramienta que requiere el Poder Ejecutivo de la Nación.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente, estimados señores senadores: voy a hacer una confesión pública por segunda vez en el día, ya que la hice antes en mi bloque.

Realmente, me siento desolada. Y digo que me siento desolada porque hace quince días que nos integramos a este cuerpo. Tuvimos el honor de que la provincia a la que pertenecemos nos eligiera para representarla y de que ustedes nos tomaran juramento. Hoy tengo que votar un proyecto de ley por el cual debo delegar las facultades legislativas que mi provincia me envió a ejercer en esta Cámara.

Desde ya adelanto que no voy a votar afirmativamente este proyecto de ley porque me causa violencia moral. ¿Porque es inconstitucional? No, no es inconstitucional. El proyecto de ley es absolutamente constitucional y, al respecto, comparto todo lo que se ha dicho en este recinto.

Tampoco creo que esté comprendido en el artículo 29, sino todo lo contrario. Lo que sí creo es que se trata de una iniciativa que ataca abiertamente al federalismo. Más aún, creo que es un proyecto de ley unitario en el que no se contemplan los intereses de las provincias argentinas.

¿Qué es la Cámara de Senadores? Es nada más y nada menos que la participación de la voluntad provincial en la elaboración del derecho nacional. Reitero: participación de la voluntad provincial. Nosotros somos los representantes de las provincias argentinas. Nosotros somos quienes debemos velar por los intereses de nuestras provincias. La Corte ha dicho que la Constitución abraza el ideal federalista con idéntico fervor que el republicano.

Entonces, yo he dicho que me siento desolada porque tengo que declinar la voluntad de mi provincia, que se debe ejercer a través de sus representantes. O sea, tengo que declinar la voluntad soberana de mi provincia a favor del Poder Ejecutivo.

Frente a ello, me pregunto: ¿cómo vuelvo a mi provincia diciendo que voté a favor de este proyecto de ley? ¿Cómo puedo ir a El Morro, vieja localidad cuna del vicepresidente de la Nación Juan Esteban Pedernera, a decir que voté a favor de la delegación? ¿Cómo vuelvo a los pagos de Juan Crisóstomo Lafinur, de Tomás Jofré, de Humberto Podetti? ¿Cómo vuelvo a mis pagos diciendo que voté a favor de esto, cuando mi pueblo fue estadísticamente el que más aportó en bienes y personas a la cam-

paña libertadora del general San Martín? Nosotros nos quedamos sin jóvenes —sólo mujeres, ancianos y niños— toda vez que aportamos mucho a la campaña liberadora. ¿Cómo volver a mi provincia habiendo aprobado este proyecto de ley, delegando los poderes legislativos en el Poder Ejecutivo?

Siento, y así lo dije en el bloque con todo respeto, que estamos siendo tratado como kelpers, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Son ciudadanos de primera los que nos pueden sacar de esta emergencia y de esta gran crisis que está viviendo el país. Ciudadanos de segunda somos nosotros, los representantes de las provincias argentinas, que debemos delegar a favor de los ciudadanos de primera la posibilidad de hacer lo que no somos capaces de hacer. ¿No somos capaces de hacer? ¿Somos incapaces o disminuidos intelectualmente? ¿Qué somos? Creo que sí somos capaces de hacer y que se lo demostramos al país todo la semana pasada, cuando votamos en tiempo récord, estudiando, consultando y analizando el proyecto de ley que permitía superar el déficit de caja. Lo votamos con urgencia.

Este Senado de la Nación, ante una proposición del bloque Justicialista, fijó como días de sesión todos los días incluidos sábado y domingo. Y este domingo estuvimos reunidos en los bloques y en los despachos, esperando para sesionar una vez que la Cámara de Diputados tratara la iniciativa.

Entonces, ¿cuál es el motivo por el que tenemos que delegar las facultades? ¿Trabajamos? Sí, lo hicimos en forma responsable. Prestigiamos a este honorable cuerpo con nuestro trabajo honesto y digno, como ha quedado debidamente demostrado. Analizamos y debatimos, más allá de las opiniones de una u otra corriente ideológica.

Y no solamente se han votado estas leyes últimamente. Se ha hecho un amplio recorrido del esfuerzo que ha hecho este cuerpo para acompañar y sancionar las leyes que el Poder Ejecutivo necesitaba.

Estamos resignando la responsabilidad histórica de ejercer las facultades que la Constitución nos da. No es inconstitucional este proyecto de ley ni van a ser traidores a la patria quienes voten a favor.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia, senador José María García Arecha.

Sra. Negre de Alonso. — Lo que creo es que no podemos, en este momento, resignar esas facultades. No hay fundamento alguno para que digan que se necesita trabajar más rápido, con prioridad. Lo hemos hecho, con responsabilidad, honestidad y dignidad. Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo.

Consecuentemente, creo que no hace falta esta delegación de facultades. Sí hacía falta sancionar el proyecto que se aprobó la semana pasada. Y eso no lo hicimos porque el gobernador Ruckauf dijera en conferencia de prensa mientras estábamos sesionando —cosa que se señalara en este recinto— que debíamos votar. Los legisladores por provincia de Buenos Aires no aprobaron el proyecto de ley. En cambio, el bloque Justicialista sí votó y acompañó.

Entonces, no lo aprobamos porque Ruckauf dijera que lo teníamos que hacer. Lo hicimos porque somos responsables. Somos oposición y mayoría, pero también conscientes de esta situación. Tampoco votamos porque Cavallo “apurara al Senado”, como dijeron los medios de comunicación la semana pasada. El martes anterior ya habíamos resuelto sesionar todos los días, incluidos sábado y domingo. Lo hicimos porque ejercemos nuestra responsabilidad como ciudadanos y porque supimos estar a la altura de las circunstancias.

Creo que estamos capacitados para debatir cada una de las leyes que este gobierno necesita para sacar adelante al país. También creo que así lo ha demostrado el bloque Justicialista y que esto está fuera de duda, como lo han dicho todos los expositores agradeciendo al bloque.

Entonces, senadores de la Nación, ¿por qué resignamos las facultades que nos corresponden legítimamente? Creo que con esta resignación no podemos reconocer nuestras propias limitaciones o una incapacidad que no tenemos.

Queremos demostrar de otra forma que estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que el país salga adelante, acompañando al gobierno y analizando con seriedad y celeridad cada iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo. Pero no han llegado proyectos de ley, sino sólo esta iniciativa para delegar facultades, a la que se incorporó toda esta serie de limitaciones. Esto me lleva a pensar que no existe plan alguno, sino sólo la voluntad y la aspiración de sacar las

cosas adelante. De lo contrario, como han dicho los senadores de sexo masculino, a esta hora —mientras están transmitiendo el partido de fútbol de la selección— en lugar de debatir este proyecto de ley deberíamos estar considerando leyes concretas que el Poder Ejecutivo debería haber remitido. Esta es la responsabilidad histórica que el país hoy nos pide que asumamos. También es la responsabilidad que yo estoy solicitando.

En lo personal, no puedo votar afirmativamente esta iniciativa pero no por los presagios enunciados en la Cámara de Diputados: no puedo hacerlo por creer que no debo delegar una facultad que me ha concedido mi provincia precisamente para que la ejerza. Es una facultad que me acompañará hasta el 9 de diciembre cuando finalice mi mandato.

Agradezco a mis compañeros de bloque que hayan comprendido que me causa violencia moral votar afirmativamente este proyecto de ley, que no apoyaré por los argumentos que acabo de esgrimir. Pero además, quiero resaltar en particular dos o tres aspectos.

En primer lugar, quiero referirme al tema del plazo. Comparto lo dicho en esta Cámara en el sentido de que, como nuestro mandato finaliza el 9 de diciembre, si delegamos facultades hasta el 1º de marzo, estamos comprometiendo a quienes nos van a sustituir.

En segundo término, considero que el inciso c), del apartado I del artículo 1º, afecta los derechos de los trabajadores.

Además, en el inciso a) del apartado II referido a la emergencia pública, el único límite consignado a la revocación de exenciones es el concepto de economías regionales. Como no está debidamente aclarado qué va a incluir ese concepto, considero que ese artículo debería haber sido redactado de otra forma o, en su defecto, haber suprimido el verbo “eliminar”.

Finalmente, debo mencionar que el artículo 8º ratifica el decreto 1299/00. Allí se hace referencia a un plan federal, cuando de hecho, de la aplicación de sus normas, surge una inequitativa distribución entre las distintas jurisdicciones provinciales.

Por lo expuesto, señor presidente, no votaré afirmativamente este proyecto de ley venido en revisión por considerar que se trata de una norma unitaria que como tal afecta el federalismo, pero fundamentalmente por considerar que, de

hacerlo, no cumpliría con el mandato que se me ha dado para representar a mi provincia en este honorable cuerpo.

Sr. Presidente (García Arecha). – Tiene la palabra el señor senador Sager.

Sr. Sager. – Señor presidente: cuando el viernes consideramos y aprobamos la ley de competitividad, a partir del análisis de los hechos el conjunto de la sociedad tuvo la oportunidad de sacar sus propias conclusiones.

Considero que aquellos formadores de opinión que maliciosamente muchas veces nos califican como “la clase política” habrán esperado que nosotros tomáramos de esta situación algún grado de enseñanza que nunca viene mal.

Quizá gracias a esa enseñanza hoy humildemente me permito analizar este proyecto de ley en revisión desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde el estrictamente político, es decir desde la responsabilidad de quienes ejercemos la política y, fundamentalmente, de quienes la deben llevar adelante cuando llegan al gobierno.

En segundo término, efectuaré un análisis de carácter netamente constitucional. Debemos asegurarnos de determinar si lo que estamos haciendo está ajustado a derecho y si con ello estamos cumpliendo el contrato social constitucional que oportunamente aquí juráramos.

Finalmente, abordaré la cuestión desde el plano rigurosamente jurídico o –por qué no decirlo utilizando un término que no es muy académico pero que tal vez sirva para que nos entendamos– jurídico-económico.

Por lo tanto, si comenzamos el análisis de lo estrictamente político podríamos decir que en estas circunstancias viene bien hacer referencia a aquel viejo dicho de que “cada uno de nosotros es artífice de su propio destino”. Nunca mejor aplicado que en esta situación.

El gobierno nacional, nuestro gobierno constitucional, el de todos los argentinos, ganó por el voto popular de la mayoría de los ciudadanos de este país que veían en él una esperanza y que –confiados quizás en las propuestas que se les hacía– entendió que la fórmula que estaba votando merecía ser depositaria de su voluntad. Pero al poco tiempo, a la hora de la verdad, cuando efectivamente hay que gobernar, afloró un elemento que a mi juicio se ha repetido en la historia argentina en los últimos veinticinco años. Se prefirió la posibilidad del salvataje individual apelando a una cuestión –entre comillas– ética

y no se midieron en absoluto las consecuencias del accionar que se estaba llevando adelante. Este tipo de actos, en una alianza política bien constituida, jamás resultan admisibles. Sin embargo, en la política argentina esto pareciera que fue un hecho más.

Y digo que afloró el producto de los últimos veinticinco años porque a partir del 24 de marzo de 1976 –fecha nefasta a la que hacíamos referencia cuando analizábamos la ley anterior– comenzamos a sufrir la pérdida de una generación progresista, comprometida política y socialmente, quizá con errores pero, en definitiva, comprometida, y el tiempo no nos permitió decantar lo bueno y lo malo que ella tuvo. Sin embargo, las acciones que se llevaron adelante, el terrorismo que se generó, instaló el primer germen de la irracionalidad y de la salvación individual por encima del todo.

Después, vinieron los primeros años de la democracia y surgió la hiperinflación que, además de la pérdida económica significaba un nuevo y brutal golpe al tejido social y fundamentalmente al de la solidaridad social. Nuevamente allí nació la salvación individual como una reacción del conjunto.

Para finalizar, en estos últimos quince meses de gobierno, el presidente, luego de una severa crisis política relacionada con lo que estoy mencionando, apeló y convocó a la unidad nacional. Y, sin embargo, dentro de su propio seno, muchos de quienes tendrían que estar estrechando filas –valga la redundancia– alrededor de ese llamado, optaron nuevamente por la salvación individual. Entonces, en ese contexto es donde aparece en este nuevo gobierno la figura del hombre salvador, sin pensar quizás en las instituciones y en una república con instituciones. Quizá la urgencia pudo llevar a cometer ese error. Démonos la licencia de pensar que fue un error y que estamos en condiciones de corregirlo.

Sin embargo, imagínese usted señor presidente, si con estos ejemplos, los peronistas hubiéramos votado por la salvación individual y no hubiéramos asumido el costo personal y del conjunto que significó para muchos ser convocados a la unidad nacional y estar estrechando filas alrededor del presidente de todos los argentinos.

Después, desde la vertiente constitucional a la que hacía referencia, el análisis que me cabe

es si lo que nosotros estamos haciendo se ajusta a lo normado por la Constitución o no. Aquí han vertido opiniones destacadísimos hombres que incluso han participado en la elaboración del texto constitucional que hoy tiene vigencia. Se han referido al artículo 76 y han hecho alusión expresa a que no cabe en esto la aplicación del artículo 29 y que sí lo estamos haciendo en consonancia con lo que prescribe el artículo 100.

No obstante, a pesar de estar convencido de actuar absolutamente ajustado a lo que dice la Constitución, se me han presentado algunas dudas que en el análisis en particular naturalmente voy a expresar y van a definir mi voto sobre algunos de los artículos que vamos a tratar. Pero aquí estamos haciendo un análisis en general del texto que tenemos sobre nuestras bancas y que ingresara hoy a las 12 y 50, aproximadamente. Quizás apresuradamente nos hemos convocado a discutir esto.

Decía que nos ajustamos a lo establecido por la Constitución porque de hecho y de derecho nosotros ya hemos reconocido formalmente los decretos de necesidad y urgencia; hemos limitado la competencia del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a su aplicación. Asumamos entre todos, entonces, que esto también es una delegación de facultades. Cada uno le encontrará la respuesta en uno y en otro sentido, pero en los hechos eso es lo que ha sucedido en todos estos años. Y nuestro gobierno, el del doctor Carlos Saúl Menem, hizo uso de esto y es de buena persona reconocer que hemos pasado por situaciones semejantes.

Sin embargo, señor presidente, el proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados y que oportunamente tuvimos la posibilidad de analizar era muy distinto del que nos llegó hoy a las 12 y 50 de dicha Cámara. Creo que se ha mejorado y en esto tengo que ser absolutamente justo. Y cuando hacía referencia a las dudas, hay una que particularmente me infundía una profunda necesidad de análisis que era precisamente la declaración de la emergencia pública.

Creo que esto está salvado. No obstante, reitero el concepto: estas dudas que todavía me quedan las he de plantear en el tratamiento en particular.

De la mano de esas dudas quiero entrar en el análisis del tercer enfoque que deseo hacer esta noche, que es el enfoque económico o jurídico-económico —como se lo quiera llamar—. Y ahí

voy a coincidir también con la duda que aquí han planteado algunos señores senadores.

El senador Moreau hoy hacía referencia a ciertos ejemplos de algunas fundaciones que, apresuradamente, han salido a plantear a la opinión pública algunas metodologías a aplicar en esta nueva etapa que se inicia en la Argentina.

Cuando se planteaba públicamente y se hacía suponer que después de la aprobación de esta ley todas las rutas de la República Argentina iban a ser concesionadas y que los argentinos estaríamos sujetos a la ampliación del nefasto peaje, me entró una profunda preocupación. Porque era muy difícil hacerles comprender a nuestras alicaídas economías regionales y a nuestros productores en particular, que en esta situación que se nos plantea en la República Argentina, el gobierno nacional y los distintos poderes iban a convalidar nuevamente que “se les meta la mano en el bolsillo”. Únicamente podríamos llegar a estar de acuerdo con esto si primero hacíamos las obras, después nos ajustábamos a los costos reales de recuperación de las mismas y, finalmente, si esto tenía una estricta justicia con lo que en nuestro propio bloque explicó el hoy el doctor Caro Figueroa, y después el propio ministro de Economía, cuando ayer nos visitara.

Esto, que se le pudo trasladar ayer al ministro, hoy viene reflejado en la sanción de la Cámara de Diputados, y creo que mi particular temor está salvado a medias. Como también están salvadas otras cosas. Esto lo debo reconocer.

Había otro elemento que se discutió en este Senado, no en una sesión de la Cámara sino en presencia de los parlamentarios de toda América, cuando algunos de los legisladores aquí presentes fuimos convocados por Su Santidad Juan Pablo II y asumimos el compromiso de atender al tratamiento de la deuda externa. Creo que se ha dado un paso muy importante —para alguno que pensaba que aquí se podía “pegar un zarpaço”— cuando ayer la Cámara de Diputados aprobó y obligó, fundamentalmente, a hacer desaparecer la garantía de los créditos públicos con la afectación de recursos.

Es decir, en síntesis, el Congreso estaba nuevamente retomando la facultad originaria del manejo de nuestra deuda externa. Y esto, que puede parecer un hecho más dentro del tratamiento de un proyecto de ley en una situación de emergencia como la que plantea el gobierno

nacional, para mí cobra una vital importancia. Porque el 80 por ciento de la deuda externa está en la Argentina. No es cierto que los dueños de la deuda externa estén afuera; están acá. Y muchos de ellos seguramente tenían expectativas cifradas en que esto “se le pasara” a nuestro Congreso. Celebro que hoy estemos honrando aquel compromiso que algunos señores senadores aquí presentes hicieramos ante el propio Juan Pablo II. Creo que esto no fue destacado. Y si lo fue, no por reiterativo deja de ser bueno.

Finalmente, me sentí satisfecho cuando acompañé la decisión de un grupo de señores senadores de mi bancada que solicitaban el tratamiento de una resolución que apurara la conformación de la comisión bicameral de control. Sinceramente, esto también es un buen mensaje a la sociedad.

Estamos aportando las herramientas que el Poder Ejecutivo nacional necesita en una situación como la que se atraviesa, pero también estamos asegurando que las decisiones que allí se adopten, tal cual lo expresa la Constitución, sean controladas y ejercidas por el Congreso.

Creo que también hemos podido cerrar el camino al mecanismo de la venta indiscriminada de activos. Esto, que ha sido motivo de muchas discusiones en este Senado, por los tiempos que pasaron y por los tiempos que vivimos, es también un pedido de la sociedad argentina.

Entonces, con ese ánimo y esperando el buen uso de las facultades que pide el Ejecutivo nacional, además de darle las herramientas que cree necesarias para poner el país en marcha, nos permita discutir algunas cuestiones pendientes.

Sigo creyendo en las utopías —aunque me cuesta entender a la luz de los hechos que algunas cosas las pueda alcanzar en vida— y sigo creyendo en la posibilidad de disminuir esa diferencia que existe entre el país del Obelisco y el país que a nosotros nos toca vivir cada vez que regresamos a nuestras provincias. Creo que debemos discutir efectivamente estas medidas para que nuestras economías regionales verdaderamente sean competitivas y que lo que hemos esbozado en uno de los incisos del articulado de esta ley se haga realidad.

Nosotros deberemos rendir cuentas de esto en nuestras respectivas provincias. Poco me interesan las señales de los mercados; más

me interesa que la gente de nuestras provincias sienta que este acto de consenso político que se ha logrado en una situación especial de la República Argentina, les llega alguna vez al bolsillo, a su economía real, a la de todos los días. Espero que esto les evite tener que salir a cortar rutas para pedir un precio justo para el algodón; que les evite tener que salir a cortar rutas para que se escuchen sus reclamos, para que sus hijos puedan ir a una escuela.

Entonces, si logramos que el hecho de que ambas Cámaras hayan estado trabajando ininterrumpidamente durante cinco días sirva para el conjunto de la sociedad y no simplemente para satisfacer una urgencia, creo que estará justificado debidamente lo que aquí hemos realizado. De lo contrario, podemos correr el peligro de que ese 70 por ciento del cual se habla, y que significa una esperanza para la gente, se transforme en una decepción. Y no creo que la gente de nuestro país tenga más margen para las decepciones.

Sr. Presidente (García Arecha). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Tell. — Señor presidente: la Argentina ha asistido azorada, en los últimos días, a un espectáculo político inusitado debido a la total pérdida del rumbo por parte del gobierno que ha sido ungido por las urnas el 10 de diciembre de 1999.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Senado, senador Felipe R. Sapag.

Sr. Tell. — La causa de esa pérdida de rumbo está a la vista. Las luchas intestinas de la coalición que lo formó, como acá se dijo, terminan poniendo a este gobierno de espaldas al electorado que lo votó y a las exigencias de liderazgo y éxito que toda la población le reclama hoy.

Como resultado de este desgobierno, se ha producido una crisis político-económica que no tiene precedentes en los últimos años de la historia argentina. Por ello, se hace necesario de un fuerte “timonazo” que nos aleje del naufragio político, económico y social que hoy nos acecha.

El proyecto de competitividad impulsado por el gobierno —cuya primera parte ya este Senado ha sancionado—, en su segunda parte y que viene hoy en revisión de Diputados, se inscribe en ese propósito. Para ello, el gobierno ha pedido el auxilio a las demás fuerzas políticas.

Una vez más el justicialismo, y en particular su bloque en esta Cámara, no ha faltado a ninguna de las citas en las que se juegan los intereses trascendentales de la República. Su apoyo responsable a la labor de gobierno, de éste y del precedente, descartan cualquier duda al respecto.

Y hoy, manteniendo el rol de oposición en que nos pusiera el electorado, tampoco defeccionaremos de tal responsabilidad en esta importante instancia.

Ahora se le pide a este Senado vapuleado, bastardeado y ultrajado por una parte sátrapa de la Alianza, que delegue en el gobierno una serie de facultades con invocación del mecanismo autorizado por el artículo 76 de nuestra Constitución Nacional.

No tengo ninguna duda, señor presidente, sobre la grave situación de emergencia por la que atraviesa la República Argentina. Abundar en sus características, me parece una redundancia frente al ilustrado debate abierto en esta sesión y a los antecedentes que acompañaron a la sanción de la Cámara de Diputados. Y no la tengo porque participé del criterio de mi bloque en este mismo recinto, en cuanto a ampliar la caracterización que le dio a la situación de emergencia —recalco la palabra “emergencia”— la ley 25.344 a fines del año pasado.

Sin embargo, y buscando rehuir a la realidad, prevaleció la insistencia del oficialismo, al formar mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso, quedó caratulada como mera emergencia económica y financiera lo que era, sin duda, una verdadera emergencia económica, financiera, social y laboral.

Sobre ese delicado cuadro se agregó, finalmente, una cruda realidad de emergencia política, que es la que hoy vivimos y padecemos. Pero debo decir que fue generada por este gobierno.

Por lo tanto, adelanto mi voto afirmativo a esta iniciativa. Y lo hago, porque muchas de las modificaciones introducidas al proyecto original por la Cámara de Diputados fueron requeridas por nuestro bloque de senadores, como bien lo expresara el señor senador por Salta.

En este sentido, estos cambios han producido un adecuado resguardo a los intereses y derechos de los trabajadores, de sus familias y de la castigada clase pasiva de jubilados y pensionados, con específica consideración del PAMI.

Estos derechos e intereses son hoy más sensibles que nunca, pues reforma tras reforma, la legislación laboral ha ido dejando en el camino jirones de su esencia protectora de los trabajadores, para acompañar la transformación económica y social.

Aún hoy nuestro cuerpo mantiene profundas discrepancias por la reforma previsional, recientemente alentada por la anterior conformación del gabinete nacional. Pronto vamos a rechazar o modificar en serio el régimen previsional argentino.

También han quedado a salvo los derechos adquiridos de los trabajadores públicos, viabilizando coberturas temporales exclusivamente para los casos en que resulte necesaria la conversión del régimen jurídico del empleo en los entes descentralizados. Se atendió también a las consecuencias de la crisis laboral derivada de la privatización de empresas públicas mediante un instrumento fiscal que, desde mi punto de vista, debe expresarse en políticas activas de empleo y, fundamentalmente, en la formación profesional en el marco sectorial y regional de promoción de la competitividad.

Señor presidente: pienso que una previsión de este tipo puede servir aún hoy para mitigar las consecuencias de la privatización. Por ejemplo no se tuvo este instrumento cuando se privatizó Altos Hornos Zapla en mi provincia. Y hoy mediante el articulado que se ha formulado, esas consecuencias sociales de la privatización pueden tener un criterio sustentador positivo.

Por último, se instituye una comisión bicameral, como bien lo decía el compañero por el Chaco, que es importante en el control y en el seguimiento mensual del uso que el gobierno haga de estas facultades delegadas. Comprometo mi esfuerzo y mi impulso como senador de la Nación para instar a esa comisión a la inmediata corrección de cualquier desvío de la letra y del espíritu de este proyecto.

En resumen, se trata de facultades ya desbrozadas de la desmesura original propuesta por el Poder Ejecutivo y razonablemente acotadas en la materia y en el tiempo, y con el debido control parlamentario, como lo exige nuestro texto constitucional.

Asumo esta responsabilidad con la expectativa de que las facultades delegadas habrán de ser utilizadas por el gobierno con el nivel de mesura y prudencia que se corresponda con la

grandeza de este cuerpo al otorgar la delegación y, por sobre todo, con la grandeza que demuestra la sufrida respuesta de los trabajadores, activos, pasivos, privados y públicos, y también de sus sindicatos, frente a las exigencias de modernización del país. Baste para ello con confrontar el sacrificio del desempleo a que se ven enfrentados los trabajadores activos o la reducción, cuando no la supresión, de coberturas de los pasivos como producto de la mezquindad de otros intereses siempre proclives a tenerlos de chivos expiatorios.

Esos intereses nada tienen que ver con los trabajadores y jubilados. Y valga recordar que las decisiones cotidianas de esos trabajadores y jubilados también son hoy parte del mercado.

Pero en todo caso, señor presidente, la utilización de estas facultades, que hoy pretendemos delegar, debe guardar el insoslayable respeto que reclama nuestra Constitución.

En ese sentido, las directivas de su artículo 14 bis y la absorción de los instrumentos internacionales evocados en su artículo 75, inciso 22, constituyen un bloque de protección infranqueable, sea para este Congreso como para cualquier otra instancia normativa inferior: en este caso el gobierno nacional, en razón de las facultades delegadas, deberá mantenerlos a partir de la sanción de este proyecto.

Cualquier duda sobre el alcance de las facultades delegadas al gobierno nacional debe ser resuelta en consonancia con ese bloque normativo de protección social, ya sea en el orden laboral como en el de la seguridad social. Menciono esto porque son los asuntos atinentes a la comisión de este Cuerpo que tengo el honor de presidir y que por convicción y extracción gremial son los que más me desvelan.

Por ello, toda incidencia laboral del proyecto debe guardar respeto por las garantías individuales y sindicales, así como el resguardo de la seguridad social, previsto en la iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados, ya que impone hacer lo propio con los organismos administrativos que las confieren.

Como ejemplo y para que quede claro, señor presidente, diré que el proyecto contempla la intangibilidad del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (PAMI). Análogo cuidado existe con la ANSES, que es la encargada de administrar el régimen jubilatorio de reparto, las asignaciones familiares y las prestaciones por desem-

pleo. Si esto no se cumple, podría quedar vulnerada la indicación establecida por el tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Con estas consideraciones y bajo las antedichas condiciones, reitero mi posición favorable al proyecto de ley en revisión, enviado por la Cámara de Diputados. A su vez convoco a mis pares, a través de la conformación de la comisión bicameral que esta Cámara tiene pensado crear a posteriori, a realizar una celosa vigilancia del uso que el Poder Ejecutivo haga de estas facultades.

Por último, quisiera decir que aquí muchos senadores han mencionado los cambios de posición demostrados por el oficialismo respecto del gobierno anterior. Sobre el particular, diré que esa transformación se debió a que nosotros hoy tenemos una responsabilidad en este momento de crisis profunda que vive el país y que ha convocado a este Parlamento. Hace unos momentos comenté que muchos que nos critican fueron también parte del descrédito que tiene la clase política argentina.

Acá no se trata de ver si uno es oposición u oficialismo. A usted le consta, señor presidente, que cuando fuimos gobierno no tuvimos el acompañamiento de una oposición como es la nuestra en la actualidad.

Pese a que hemos votado todos los proyectos de ley que nos han enviado y que hemos dado todos los elementos que nos pidieron, lamentablemente, por este hecho interno del que no somos parte, hoy nos han llevado a esta situación que vivimos.

Por eso, con todo respeto, pido a mis pares del oficialismo que no desaprovechen la oportunidad que este Parlamento les está dando. También les solicito que se pongan a trabajar en serio porque esta oposición va a seguir colaborando ya que la Argentina, y fundamentalmente sus habitantes, así lo requieren.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador por La Pampa, Martínez Almudevar.

Sr. Martínez Almudevar. – Señor presidente, señores senadores: esta crisis económica y política exige por parte de toda la dirigencia política un grado de compromiso ineludible y acorde con la emergencia que se vive en nuestro país. Debemos aprovechar esta oportunidad para interpretar la crisis como una oportunidad de cambio, y en eso estamos.

También tenemos que convenir en que el gobierno de la Alianza no fue bueno, porque en menos de un año y medio de gestión no pudo evitar la generación de un clima de expectativa negativa para la inversión y el consumo, mientras intentaban resolver el creciente déficit fiscal por la vía de un ajuste tras otro.

En el actual estado de situación, la sociedad no admite un ajuste más. Prueba de ello fue el reciente intento de avanzar sobre los presupuestos de educación, salud y el sistema de jubilaciones y pensiones, como se pretendió en la efímera gestión del doctor Ricardo López Murphy.

En todo este proceso de desajuste económico y político, nuestro bloque acompañó la totalidad de las iniciativas del Poder Ejecutivo, haciendo la salvedad en todo momento de que las erráticas y contradictorias estrategias seguidas por el gobierno no darían resultados favorables en términos de mayor crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. En definitiva, no servían para salir de la recesión y el estancamiento.

Hoy la apuesta es la reactivación económica y con ese espíritu el peronismo está legislando esta norma. Consideramos que la única alternativa para cerrar el agobiante déficit fiscal es el crecimiento de la economía y no, como se intentó recurrentemente hasta este momento, el ajuste permanente del gasto público.

En tal sentido, consideramos que la propuesta de la actual conducción económica es una de las pocas alternativas factibles que superan el discurso del ajuste permanente.

Que quede bien claro que la apuesta del justicialismo es por la reactivación y no por el ajuste. Votamos por la emergencia que vive el país y por lo que la sociedad espera de nosotros en este momento de crisis.

Tratamos la iniciativa del gobierno en la inteligencia de que no abusará de las delegaciones legislativas que solicita. En caso contrario, creemos que será la propia sociedad la que lo juzgue. También creemos que no estamos solos en este acompañamiento. Ha sido la mayoría de los gobernadores de nuestras provincias y los presidentes de los principales partidos políticos los primeros que se han pronunciado favorablemente en cuanto al tratamiento de la ley en su conjunto, incluida la delegación legislativa en el marco de la emergencia pública declarada por

el Congreso Nacional y conforme lo dispone el artículo 76 de la Constitución.

Recientemente, los legisladores nos enfrentamos con la alternativa de acompañar el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, medida que en definitiva no afecta a los que menos tienen, o seguir por el camino del ajuste crónico como lo proponía este mismo gobierno hasta hace apenas quince días.

Es así que en este momento el gobierno ya dispone de un impuesto lo suficientemente potente como para garantizar el funcionamiento del Estado nacional y hacer frente a los compromisos externos en la medida en que no se cometan errores.

En este sentido, debemos recordar que los Estados provinciales también han delegado su potestad de coparticiparlos, en un todo de acuerdo con las necesidades del país.

Consideramos que el camino seguido en la actualidad por las autoridades del Ministerio de Economía es el correcto. Bajar aranceles a la importación de bienes de capital, subir los aranceles extrazona al máximo permitido para la importación de bienes de consumo, simplificar el sistema impositivo, eliminar impuestos distorsivos a la producción, es decir, incrementar la competitividad y el crecimiento de nuestra economía, son medidas que acompañamos porque creemos que están bien enfocadas, siempre y cuando se implementen con equidad y justicia distributiva.

Combatir la hiperevasión es otra de las asignaturas pendientes. El impuesto a las transferencias en cuentas corrientes bancarias es una herramienta útil para combatir la evasión, puesto que el cobro se hace en el momento de mayor liquidez.

Apostamos a que en un futuro no muy lejano este impuesto pueda deducirse a cuenta del IVA y del impuesto a las ganancias, que las alícuotas bajen y que nuestro sistema se haya simplificado. Ahora pretendemos que esta delegación sea utilizada para el crecimiento armónico del país y de las economías regionales; es decir, para inducir una reactivación y no para que sea utilizada en forma arbitraria.

En lo personal, las dudas acerca de los alcances jurídicos de este proyecto de ley en tratamiento me fueron despejadas a través del informe brillante que produjeron los miembros informantes de ambas bancadas.

Tal vez este proyecto de ley tenga varias interpretaciones. Pero la más importante es que, tratándose de una crisis no sólo económica sino también política, se interprete que lo que hoy delega el Congreso al presidente de la Nación es un voto de confianza hacia él. No podremos, a lo mejor, dar más de lo que estamos dando. Quizás esta sea la última oportunidad del gobierno de la Alianza. Todos deseamos que el país salga a flote, pero no queremos que se tenga como excusa el pasado del gobierno justicialista que, a todas luces y aún en momentos más difíciles, fue mucho mejor que el que hoy estamos penando.

Sr. Presidente (Sapag). – Tiene la palabra el señor senador Massat.

Sr. Massat. – Señor presidente: hoy nuevamente la mayoría de los senadores justicialistas venimos, como la semana pasada, con absoluta buena predisposición a acompañar las iniciativas para tratar de resolver la crisis de la Argentina.

Por distintas informaciones que se han difundido hoy quiero señalar que la semana pasada, cuando discutimos en el bloque mayoritario del Senado el texto enviado por el Poder Ejecutivo nacional, habíamos decidido acompañar las iniciativas que creíamos que eran positivas para resolver los problemas de la Argentina. Tanto es así que en una actitud y en una decisión inéditas en el Senado de la Nación y siendo mayoría absoluta en este Cuerpo, no solamente dimos quórum y debatimos el proyecto de ley, sino que a pesar de nuestras diferencias y divergencias votamos afirmativamente la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo nacional.

Durante la semana pasada, el fin de semana y este lunes, seguimos trabajando en este proyecto de ley –que constituye la segunda parte de esta iniciativa global–, con la coordinación de la conducción de nuestro bloque y de los gobernadores de provincias. También habíamos decidido, respecto de esta segunda parte de la ley, que íbamos a poner lo mejor de nosotros para acompañar a la Nación pero no como ente jurídico, sino porque así acompañábamos a nuestras provincias y, porque haciéndolo, acompañábamos el intento de encontrar solución para los millones de argentinos que están en la desesperanza. Con esta actitud dejábamos de lado nuestras diferencias.

Pero hay algunos miembros de esta Cámara, de la bancada oficialista, que todavía no asumen que son gobierno.

Reitero lo que dijera la semana pasada. Quizá tenga dudas acerca de si estoy asumiendo el papel de oposición o de gobierno. Pero me justificaba diciendo que la Nación, la sociedad argentina y el futuro de los argentinos estaban por encima de ello.

No se trata de que este proyecto de ley que estamos considerando esta noche no se modifique, ni vuelva a la Cámara de Diputados porque no lo quiso el justicialismo. No es cierto, señor presidente. Ha sido el ministro de Economía del presidente De la Rúa el que nos pidió que hiciéramos el mayor de los esfuerzos. Y a través del trabajo previo que hicimos con los señores diputados se han incorporado muchas de las modificaciones e iniciativas que propusimos.

Hoy podemos decir que tenemos mucha más claridad y tranquilidad que cuando esta iniciativa llegó a la Cámara de Diputados. El proyecto que estamos tratando esta noche en el Senado de la Nación –digo esto en coincidencia con otros señores senadores–, no es el mismo; es totalmente distinto. Y los senadores abogados y especialistas en derecho se han encargado de darle solidez al marco jurídico, mientras que los senadores economistas de esta Cámara se han ocupado de otorgarle solidez en cuanto al aspecto económico.

Quiero preguntar, desde el punto de vista político, si el 16 por ciento de desocupación en la Argentina no es emergencia pública, ¿qué lo es? Si 9 o 10 mil millones de déficit en el presupuesto nacional no constituye una emergencia pública, ¿qué lo es, señor presidente? Si los créditos internacionales tomados a una tasa del 16 por ciento no representan una emergencia pública, ¿ésta dónde está? Si la miseria, el hambre y la desesperanza de millones de argentinos no son una emergencia, ¿qué lo es?

La emergencia pública está dada por la realidad de nuestro país. Así lo hemos interpretado desde el peronismo, que tiene una profunda voluntad democrática, que no resigna ser oposición pero que tampoco resigna el futuro.

Si miráramos con egoísmo hacia adelante, podríamos decir: “Que el gobierno se caiga, que esta crisis envuelta en la insolvencia política se lo lleve, señor presidente”.

Quien fue elegido para conducir el destino de todos los que vivimos en esta Nación es el doctor De la Rúa. Y a nosotros, por una decisión de

la sociedad argentina, se nos designó para ocupar el lugar de la oposición, que estamos cumpliendo con responsabilidad, racionalidad y mucho sacrificio.

No crea usted, señor presidente, que no tenemos dudas. No crea que no tenemos ganas de tomar discursos oficialistas como los de la Cámara de Diputados, hablar en contra de ciertos argumentos y hacer que la sociedad argentina entienda las cosas de otra manera.

Queremos llegar al ciudadano y a la familia argentina para decirles que también pedimos al señor ministro de Economía de la Nación que nos rinda cuentas y que nos esclarezca los puntos que resultan confusos para nosotros. También le exigimos ciertas garantías.

Es mentira que el doctor Cavallo modificó nuestra posición. Por eso hice mi reseña anterior. Antes ya habíamos resuelto votar afirmativamente y, de esa manera, acompañar a los argentinos.

Cuando ayer nos reunimos con el doctor Cavallo nos alegramos. El nos vino a decir que iba a hacer lo que nosotros le pedíamos cuando fue ministro en la anterior gestión: aumentar los aranceles extra-Mercosur, imponer barreras para los "productos basura" y llevar adelante una política regional de reactivación económica.

Señor presidente: ¡años atrás nos cansamos de pedir la reactivación de las economías regionales! Tuvimos que llegar a esta situación para lograr que todos reflexionáramos.

Cuando ayer el doctor Cavallo habló con nosotros en el bloque, parecía hacerlo según nuestro contenido y nuestro texto. Habló —y nosotros queríamos escucharlo— de decir a los banqueros: "Basta de usura." También habló, como lo hacemos nosotros cuando dialogamos con los productores del interior escuchando sus reclamos, sobre la necesidad de bajar las tasas de interés para los sectores productivos del país.

Por eso hoy estamos acompañando este proyecto de ley. Pero, además, porque tanto en la norma como a nivel político se asumió el compromiso de que con los recursos que permita recaudar este nuevo gravamen se comenzarán a reducir los impuestos regionales, a incentivar la producción y a cerrar las fronteras al ingreso de productos que no tienen razón de ser.

Ayer logramos concretar otro compromiso con el doctor Cavallo, que tal vez sea uno de los

más destacados para este Senado que representa a las provincias. Esta Cámara federal recibió ayer el compromiso del doctor Cavallo —del ministro de Economía del presidente De la Rúa— de que va a acompañar a los gobiernos provinciales atendiendo sus necesidades de financiamiento, volcando al tema social recursos del presupuesto y de los fondos especiales que le damos e impidiendo que la crisis estalle en las manos de los gobernadores.

Asimismo, el doctor Cavallo destacó ayer la actitud positiva y madura del Senado de la Nación en general y del bloque de senadores del justicialismo en particular que, siendo oposición, acompaña en la crisis.

Los tiempos de la política tienen un límite. Así lo decía la semana pasada. Hoy, llamo a la reflexión a los senadores del oficialismo para que intercedan ante su gobierno a efectos de que el presidente De la Rúa asuma con rigor la conducción de la Argentina; para que no se abuse de este instrumento que hoy le estamos dando, en un caso excepcional. Reitero que no se trata de facultades extraordinarias y que actuamos en el marco de la Constitución y de las leyes vigentes.

Señor presidente, de la misma manera que hoy es voluntad de los senadores del justicialismo apoyar esta norma, nos sentaremos aquí para modificarla si vemos alguna actitud autoritaria que intente ir más allá de ella o si apreciamos que no se cumple con las pautas y las expectativas que tienen la sociedad argentina.

De este modo quiero dejar sentado mi voto afirmativo, diciendo que esta noche no nos equivocamos y que tenemos confianza en este proyecto, tal como la tiene la mayoría de los argentinos.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador Funes.

Sr. Funes. — "Me matan si no trabajo y si trabajo me matan; siempre me matan, me matan", decía ese gran poeta cubano Guillén.

Por suerte, el Senado de la Nación ha decidido que lo maten por trabajar, porque esta noche —en un gran esfuerzo intelectual y verbal— los senadores hemos hablado de temas que van a tener un espacio muy reducido en los diarios de mañana.

Durante varias horas los televisores han estado encendidos para ver el partido de fútbol entre las selecciones de la Argentina y Vene-

zuela y para ver las telenovelas de la noche o alguna película. En consecuencia, todo nuestro esfuerzo y trabajo se puede tirar abajo con un dibujito como el que hoy se publicó en el periódico "La Razón", en la página dedicada al ámbito político, con un titular que menciona que el Senado apura la cesión de poderes.

Más abajo dice "Los sospechados presentan su defensa" y a su lado hay un chiste humorístico que describe a alguien que le pregunta al ministro Cavallo, si él quería tener la sartén por el mango. Cavallo responde que sí. El otro personaje le comenta que hay algunos senadores que están de acuerdo a medias con él. Cavallo pregunta por qué. Y recibe como respuesta que ellos también quieren tener algunos mangos. Este chiste se publicó hoy en el diario "La Razón".

"Me matan si no trabajo y si trabajo me matan; siempre me matan, me matan."

En consecuencia, estos dos humoristas—Guerra y Neira—tienen un poder de comunicación mucho más amplio que todos nosotros juntos. Este chiste humorístico se fija mucho más en la memoria colectiva que el enorme esfuerzo de trabajo que el Senado de la Nación viene haciendo desde hace varios días.

Es decir que acá estamos no sólo frente a un problema de naturaleza política sino frente a una cuestión mucho más profunda y, tarde o temprano, alguien "le va a tener que poner el cascabel al gato". En otras épocas, las acciones psicológicas contra los políticos se hacían para preparar el camino a los militares; ahora no se sabe a quién se le prepara el camino, pero también se hacen. Y me parece que en un momento en el cual todos los partidos políticos, más allá de las diferencias que se han expuesto acá, intentan acompañar al gobierno en una situación difícil, este tipo de supuesto humor político hace retroceder toda la película.

Obviamente que nadie está hablando de censurar, pero se trata de una responsabilidad colectiva. Afortunadamente sé que la mayoría de ustedes tiene el "cuero duro" y ya está acostumbrado a estas cosas, pero es importante que esto que digo lo tengamos presente pues no es verdad que esté Congreso no tenga nada que hacer después de esta sesión. Yo creo que, por el contrario, tiene muchas cosas por realizar; entre otras prepararse para una tarea de docencia que no se ejerce desde hace mucho tiempo. Y, en este sentido, el gobierno debe acom-

pañar esta labor porque de lo contrario, nos vamos a encontrar con el peor de los escenarios: es como el crítico que destruye todas las películas pero él no hace ninguna.

El hecho de que ayer el ministro hiciera una reivindicación del trabajo del Senado significó un paso muy importante. Pero en la misma página en la que el humorista destaca su chiste, hay una nota chiquita que dice: "Cumbre rebelde en el Frepaso", en donde se destaca que alrededor de quince legisladores se van a reunir en un plenario y afirman que con ese gobierno de Domingo Cavallo definitivamente no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, quiere decir que además hay una discriminación en el trato; no es para todos el mismo trato. Quiere decir también que evidentemente alguien decidió utilizar este método para lograr un objetivo político, rodeado de una aureola que ahora se está cayendo a pedazos.

Creo que finalmente el pueblo argentino, que recién después de tantos años ha empezado a diferenciar lo que es la opinión pública de lo que es la opinión publicada, va a reaccionar. No hace falta tomar ninguna medida extraordinaria, pero sí hace falta docencia. Me sorprende muchísimo cada vez que hablo con la gente joven por el absoluto desconocimiento que tienen de cómo funciona este sistema.

Entonces, como es fácil subirse a la corriente, lo hacen sin saber siquiera dónde termina.

Creo que cuando hoy llegamos a este recinto, la mayoría de nosotros sabía que veníamos con la voluntad de votar favorablemente en general y en particular esta iniciativa. En primer lugar, porque el trabajo en común con los diputados ya había acotado algunos aspectos del proyecto original y, en segundo lugar, porque todos sabemos que frente a esta situación que ha sido creada deliberadamente en la Argentina, vuelvo a repetir como Guillén, "me matan si no trabajo y si trabajo me matan; siempre me matan, me matan".

Entonces, yo invoqué al Santo de mi pueblo para ver si nos ayuda a que estas delegaciones al Ejecutivo sean utilizadas con humildad y prudencia, tal como lo hacía el fraile Martín de Porres. Yo me considero hijo adoptivo de un pueblito que se llama San Martín de las Escobas, en donde están enterrados mis padres y mis hermanos, porque llegué después de 1955. San Martín de las Escobas es un Santo que no

tiene día en el santoral y por eso mi pueblo celebra su fiesta el mismo día en que lo hace la ciudad de Buenos Aires, ya que es el día de San Martín de Tours, que por cierto era absolutamente lo opuesto a Martín de Porres, que lo llamaban Fray Escoba porque andaba con la escoba todo el día y era el más humilde de los miembros del convento en Perú.

Ahora bien, ¿por qué lo invoqué a él? Porque mirando su imagen se me ocurrió pensar que mi viejo amigo Domingo Cavallo sabe mucho de escobas. Su papá era un gringo labrador que fabricaba escobas en la ciudad de San Francisco de Córdoba, en donde yo estudié, viví y trabajé un tiempo y me casé con una mujer que vivía a pocas cuadras de la fabriquita de los Cavallo. Él es unos años menor que yo y recuerdo que estando yo en el diario, Cavallo ya era un brillante alumno del colegio secundario.

Pero después pensé que en realidad el fraile tenía que ser De la Rúa, porque es quien maneja la escoba, es decir, a Cavallo. En verdad es a él al que le tenemos que decir que utilice la escoba con la responsabilidad institucional que tiene. Obviamente, como Cavallo es un especialista en lo suyo y sabe de escobas, suponemos que va a barrer donde hay que hacerlo, pero ocurre también que a veces la escoba se usa para esconder la basura debajo de la alfombra.

Por eso entiendo que ya tendríamos que estar pensando en el pos Cavallo. Creo que esto va a alcanzar para sacar un barco que está encallado. Pero hasta ahora no hemos hablado del gran proyecto nacional, tema que está pendiente, al que tampoco se refirió Cavallo ni del que nunca habló este gobierno, ya que la coyuntura no ha dejado pensar en grande. Esta temática sigue estando eximida de todos los tratamientos y de todos los discursos. Incluso hoy el colega Maglietti creo que hablaba de la distribución del ingreso. Pero sigue obviándose un dato, que curiosamente fue publicado durante el actual gobierno radical, que dice que la Capital Federal tiene 23 mil dólares de ingreso por habitante, que las provincias productivas del centro de Cuyo y del Litoral tienen 7 mil dólares, y que nuestros supuestos hermanos del Norte, maltratados y olvidados, tienen 2 mil dólares, con mucha suerte y viento a favor.

Entonces, es una hipocresía hablar de unidad nacional en un país en el cual no se quiere reconocer dónde está el problema estructural, de

fondo. Es cierto que hay un modelo agotado, pero no es éste. Este modelo cumplió la primera fase, que es la de la estabilidad monetaria y que le permite hoy a Cavallo entrar a una etapa coyuntural para sacar el barco encallado. Después, hubo demoras; es cierto. Pero no tiene sentido pasar la factura.

Empecemos a pensar en el pos Cavallo, porque esa situación va a llegar pronto; las cosas pasan rápido. Y comencemos por asumir de una buena y santa vez que el verdadero modelo que está agotado es el modelo atlántico, el rioplatense, el centralista. Dejemos de engañarnos. Nosotros, que somos los representantes de las provincias, sabemos que vivimos en un país que se dice federal pero que en la práctica es unitario. A tal punto que uno se pregunta por qué todos los ministerios y secretarías de Estado, que a veces no tienen nada que ver con las cuestiones concretas de las regiones, están acá. Hasta los sindicatos de algunos amigos míos, como por ejemplo los que tienen que ver con los trabajadores rurales, tienen todas sus sedes en Buenos Aires; los muchachos tienen que venir a gastar su plata acá.

A nadie se le ocurre pensar que esto no fue casualidad. No es que la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires tenga toda la misma participación en la renta; no. Hay una minoría que la ha acumulado durante cincuenta años. Este es un modelo que se agotó en 1930, que se terminó de quebrar durante la guerra cuando el modelo atlántico dejó de tener sentido, ya que Inglaterra dejó de ser la dueña del comercio y de los mares.

Cuando se empezaron a diversificar los mercados, con su visión de siempre, el general Perón dijo: "Hay que hacer la Argentina bioceánica; hay que trasladar los ejes del comercio a una unión con Chile y con Brasil". No le llevaron el apunte, porque en ese momento el negocio era el de la guerra. En los tres países, en las escuelas y en todas partes se nos inculcaba un supuesto nacionalismo, por el que se nos hacía creer que los brasileños nos querían invadir; ellos decían que nosotros los queríamos matar; los chilenos nos iban a robar la Patagonia; y así sucesivamente. Hoy, gracias a Dios se ha avanzado muchísimo. Por eso, decía el otro día que tampoco hagamos un melodrama de esto.

Lamentablemente, no hay docencia. Entonces nadie le da mayor importancia a lo que ha

pasado con nuestro vecino Chile; la gigantesca trascendencia que tiene la obra diplomática que permitió terminar con los litigios fronterizos con este país hermano, que eran el último obstáculo para abrir la Argentina bioceánica.

Yo no sé si con el poco tiempo que nos queda a todos hasta el 10 de diciembre podremos hacer mucho respecto de este tema, pero creo que además de discutir estas cuestiones de fondo debemos resolver este híbrido que es hoy la ciudad de Buenos Aires, donde el presidente de la Nación se ha quedado sin territorio, ya que no es dueño ni de la Plaza de Mayo porque no existe más el distrito federal en la Argentina.

Digo esto no porque quiera hacer un discurso al margen del tema que estamos tratando sino para que se vea toda la tarea inmensa que tiene por delante este Congreso apenas ponga imaginación, se resuelva a abordar las cuestiones de fondo y enfrente con valentía esta realidad clamorosa que está en los números. Porque no estamos hablando de hermanos; la diferencia podría ser de tres a uno y, sin embargo, es de diez a uno. Pero aclaro que ni siquiera los porteños y los bonaerenses se van a salvar de la catástrofe.

Durante la época de esplendor del modelo atlántico se abrió el puerto de Buenos Aires para que los inmigrantes entraran y se fueran al interior. Ahora, por el embudo cae todo lo que sobra, todo lo marginal y todo lo excluido; y no solamente lo proveniente de las provincias rezagadas de la Argentina sino también lo de los países limítrofes. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto tiempo más dura sin explotar?

La ciudad de Buenos Aires cuesta 2 mil millones de dólares al año nada más que en embotellamiento, pérdidas de trabajo, contaminación ambiental, saturación de los servicios, etcétera. Pero como parece que existe un partido del obelisco, la ciudad de Buenos Aires se da el lujo de administrarse con un presupuesto igual que el de mi provincia Santa Fe, que con un movimiento de 25 a 30 mil millones de dólares anuales en ingresos, tiene aproximadamente un presupuesto anual de 3 mil millones de dólares, igual que el la ciudad de Buenos Aires, en donde se movilizan alrededor de 70 u 80 mil millones de dólares por año en ingresos.

Por eso tenemos que estar tranquilos con lo que estamos haciendo. De todas maneras, nos

van a seguir golpeando, porque además tampoco hay capacidad de autocrítica.

Yo he sido periodista muchos años y conozco el drama que tienen muchos jóvenes que empiezan a trabajar en la profesión, que los mandan a buscar sí o sí, a cualquier precio, la nota que dé rating. En estos años de recesión la torta publicitaria se achicó, la competencia es feroz, siempre vende más el despelote que lo que puede parecer normal. Eso es lógico y está bien, pero se llega al punto en el cual la autoridad de una persona que se preparó 30 ó 40 años para estudiar las cuestiones de Estado, vale menos que la palabra de un joven «movilero» que de golpe se encontró con un poder semejante como el de tener un micrófono y dirigirse a miles de argentinos, cosa que nosotros no podemos hacer esta noche —vuelvo a repetir—, porque el *rating* está en otra parte.

He tratado de sobrellevar algunos problemas de salud que tengo para estar, si Dios quiere, hasta el final de esta sesión, pero desde el primer momento supe que estábamos haciendo un gran esfuerzo intelectual que no va a ser premiado ni reconocido, a menos que hagan la pertinente autocrítica quienes empezaron esta historia y desencadenaron esta situación.

Si bien puntualmente puede haber alguien que merezca ser llevado ante la Justicia —aunque no es eso lo que estamos discutiendo—, lo grave es poner en riesgo el sistema institucional sin saber cómo ni con qué se va a cambiar. ¿Va a aparecer un ejército de ángeles y arcángeles que al primer sapo que se tienen que tragar después se las toman?

El general Perón siempre decía que quien se quiera meter en este oficio tiene que tomar junto con el desayuno un vasito de vaselina, para tragarse el sapo del día.

Yo caminé con Reutemann cuando recién empezó su carrera política y me divertía porque le decía al “Lole”, que todavía arisqueaba un poco: “A veces, en política hay menú fijo: sapo a la crema o escuerzo a la portuguesa. Es todo lo que hay para elegir”.

A lo mejor esta noche nos tenemos que tragar un sapo, sobre todo los peronistas, pero eso es parte de lo que brindamos los que hemos elegido esta vocación y los que hemos optado porque nos maten por trabajar.

Por eso, invocando una vez más a fray Martín de Porres, esperemos que el presidente De

la Rúa, para quien es esta delegación de facultades y a quien le deseamos que pueda cumplir su mandato hasta el final, maneje la escoba de tal manera que por lo menos quede limpia la pista, porque el resto de la carrera tenemos que empezar a hacerla nosotros.

Sr. Presidente (Sapag). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Baum. — Señor presidente: pese a que algunos no quieran admitirlo, estamos viviendo momentos muy difíciles en la vida del país; frente a los cuales una vez más este bloque mayoritario del justicialismo va a poner los superiores intereses del país por encima de cualquier consideración partidaria o sectorial. Y va a acompañar con total responsabilidad la decisión de sacar a la Argentina de esta grave situación en la que se encuentra.

Profundos cambios, como aquí se ha dicho durante toda esta noche, se han incorporado a la norma que hoy estamos considerando. Sustanciales reformas que nos han permitido avanzar en el tratamiento de este proyecto de ley y que se lograron gracias a los distintos aportes que se fueron haciendo a lo largo de estos días, tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado.

Sobre estas modificaciones ya han hablado distintos señores senadores de mi bancada, a los efectos de explicitar claramente cuáles han sido las causas y el sentido de ellas.

Pero hay un aspecto, el de la promoción impositiva, sobre el cual no puedo dejar de hacer algunas reflexiones, dado que en honor a la verdad esta cuestión ha sido una preocupación permanente de nuestro bloque en el Senado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario A. Losada.

Sr. Baum. — Ello se puede apreciar en innumerables iniciativas sobre la materia, respecto de la que se ha buscado permanentemente conseguir soluciones a las graves y extremas situaciones sociales que se viven en algunas localidades, sobre todo del interior del país.

En función de esto, es imperativo adoptar medidas vinculadas a crear condiciones que permitan reconvertir la realidad socioeconómica de localidades y regiones gravemente afectadas por las privatizaciones de las em-

En este sentido, debo decir que en dos provincias de la Argentina hay ejemplos verdaderamente emblemáticos en el campo de la actividad hidrocarburífera. Me estoy refiriendo a Tartagal en Salta, y a Cutral-Có y Plaza Huincul en mi provincia del Neuquén; verdaderos símbolos de injusta exclusión social en nuestro país, que se repite también, aunque en distinta medida, en otras provincias productoras de gas y petróleo de la Argentina.

En el inciso d) del apartado II —Emergencia pública— del artículo 1º de esta iniciativa se determina: “Establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales”.

Señor presidente: quiero adelantar que voy a votar favorablemente este proyecto, porque estoy esperanzado en que Cutral-Có y Plaza Huincul estén entre las principales destinatarias de estos beneficios promocionales, establecidos por el inciso d) del apartado II del artículo 1º, al que he hecho referencia.

Ello lo siento así porque cuando se debatía esta norma en la Cámara Diputados, varios senadores justicialistas propusimos —como ya se dijo aquí— que se contemplara específicamente la situación de las regiones afectadas por las privatizaciones. Y pudimos lograr incluir la posibilidad de establecer mecanismos de promociones y de diferimientos impositivos. Ese fue un logro del Senado de la Nación.

Se me reafirma aún más esta convicción al saber que el actual vicejefe de Gabinete de Ministros, doctor Armando Caro Figueroa, ya pensaba en la necesidad de impulsar medidas similares cuando fue ministro de Trabajo en el gobierno del presidente Menem, en oportunidad de producirse aquellas graves explosiones sociales, que con el nombre de “puebladas” conmocionaron a todo el país.

Miles de familias, en las localidades donde YPF y Gas del Estado constituían sus únicas posibilidades laborales, han quedado sumidas en la angustia y el sufrimiento. Y, sinceramente, si no se toman medidas como las que se van a adoptar a partir de la sanción de esta norma,

dichas familias quedarían sometidas a seguir padeciendo este grave drama social. En un importante diario de nuestro país se anunciaba ayer la voluntad del ministro Cavallo de dictar una nueva ley federal de hidrocarburos. Porque es precisamente en este sector de la actividad económica del país desde donde más rápidamente se pueden receptar inversiones para favorecer el crecimiento de la Argentina.

Pero es necesario ser muy realista: para que estas situaciones tengan en cuenta a los pobladores de aquellas localidades de provincias productoras de hidrocarburos, especialmente a los ex trabajadores de YPF y de Gas del Estado que quedaron sumidos en la pobreza y en el desempleo y muchos de ellos condenados a no alcanzar una jubilación digna, deberán crearse imprescindiblemente, como muchas veces lo hemos dicho, nuevos regímenes de promoción.

Señor presidente: he querido hacer estas breves consideraciones para dejar expresa constancia del espíritu de este legislador. Voy a apoyar este proyecto de ley con las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara de Diputados, porque estoy esperanzado de que con las facultades que le estamos otorgando al Poder Ejecutivo nacional ya no habrá más excusas para poner en marcha con regímenes promocionales o con diferimientos impositivos la reconversión de todas aquellas localidades afectadas laboralmente por las privatizaciones de las empresas públicas, tal como son los casos de Cutral-Có y Plaza Huincul en mi provincia del Neuquén.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: en la discusión de este proyecto de ley todos los señores senadores han hecho aportes importantes en sus intervenciones.

Simplemente quiero decir que es la primera oportunidad en que estamos utilizando el novedoso artículo 76 de la Constitución que, según los estudiosos de nuestra norma fundamental, antes estaba contenido entre las atribuciones del Congreso previstas en el artículo 67, inciso 28 de la anterior Constitución. Justamente, dado que el Núcleo de Coincidencias Básicas fue una de las condiciones por las cuales el radicalismo nos acompañó en su reforma, decidimos prohibir la delegación legislativa. En esa época, según la estadística que tengo aquí, alcanzaban a 1.901 normas: 1.568 leyes y 333 decretos ley,

que luego fueron prorrogadas por cinco años, según lo estableció una norma transitoria de la Constitución, circunstancia que el año pasado tuvimos oportunidad de debatir largamente en este recinto.

Alguna vez dije en este recinto que por más que el presidente, los ministros, los diputados y senadores hayamos sido prácticamente los mismos que estuvimos antes y después de la reforma constitucional de 1994, a la larga, aquella Constitución que había surgido del acuerdo político de Santa Fe y Paraná se iba a imponer e iba a tener parte de su objeto cumplido.

Este es el momento en que por primera vez vamos a utilizar este artículo. Considero que este es un estilo del presidente de la Nación. El ex presidente Menem tal vez hubiera empleado el camino de los decretos. Debemos coincidir en señalar que los tiempos de gobernar en la Rosada no son los tiempos de parlamentar en el Congreso y a veces las cosas deben resolverse rápidamente, y aquí los tiempos son más extensos.

Creo que fue el presidente el que eligió este camino y no Cavallo. Este presidente tal vez no será muy bueno para algunos, pero convengamos que todos sabemos que ha sido y es un importante hombre de derecho. Entonces, no me cabe ninguna duda de que el atajo de la legislación delegada, para manejar los tiempos más ajustados del Ejecutivo, ha sido su decisión, más allá de que la haya llenado de contenido el ministro de Economía o tal vez algunos asesores —ya sean diputados o senadores radicales— del presidente.

Este es un hecho elocuente y no menor. Por eso nos preocupamos en establecer que el límite entre la conducta punible del artículo 29 de la Constitución Nacional y la permisible del artículo 76 pasaba por que reconociéramos un estado de emergencia pública. Esto lo han entendido rápidamente tanto el Poder Ejecutivo como los diputados. Por esa razón hemos propuesto la declaración de emergencia pública, a efectos de evitar esta especie de amenaza que algunos diputados muy mediáticos nos hacían permanentemente desde aquella Cámara.

Luego de escuchar algunos diálogos entre peronistas y radicales me viene a la memoria la discusión que mantuvieron entre sí algunos diputados peronistas y radicales, según la cual Cavallo es como Helena de Troya: si la tienen

los troyanos, se enojan los griegos y si la tienen los griegos la quieren los troyanos. Entonces, quien la tenga, la defiende; quien no la tiene, la insulta. A partir de allí hay algunos que hablan de un Cavallo bueno y un Cavallo malo o, como hizo nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de un Cavallo keynesiano y de uno no keynesiano.

Creo que la diferencia entre un liberal y un neoliberal es una cosa muy seria. Un liberal es alguien que tiene una ideología, mientras que un neoliberal no tiene nada. Es un práctico. Si le viene bien, hace de liberal y si le viene mal, hace de conservador. Esta es la diferencia crucial. Yo respeto a un liberal pero no a un neoliberal.

No considero que el ministro haya devenido en keynesiano, pero confieso que me ha llenado de satisfacción lo que ha sucedido, después de tanto tiempo de disfrutar y de padecer los éxitos de la convertibilidad, porque la Argentina padece los éxitos de la convertibilidad.

En alguna oportunidad dije en el seno del partido que a Cavallo le pasaba lo del gato y el tigre. Dicen que el gato le enseñó todo al tigre: a ser cazador, sagaz, rápido y muy astuto, pero no a saltar para atrás. El gato, a diferencia del tigre que no puede, salta para atrás con el fin de defenderse o de atacar. Entonces, me pregunto si no será que Cavallo o el que le enseñó la convertibilidad no sabe saltar para atrás. ¿No le pasará lo del gato y el tigre?

Con mucho regocijo he escuchado a alguien decir que esto que nos trajo tanto bien puede mejorarse con un cambio. También me llena de satisfacción lo dicho por el ministro de Economía en el sentido de que el riesgo país —al cual se refirió el otro día un conductor de televisión muy gracioso llamado Pettinato, quien dijo “Mc van a explicar qué es el riesgo país, que no lo entiendo”— aparentemente no ha variado.

Además, señor presidente, creo que esto que en los últimos tiempos de nuestro gobierno lo reclamamos permanentemente y que figura en el proyecto de ley en consideración, que es la posibilidad de manejar políticas activas, establecer exenciones o fijar prioridades regionales, a alguien le va a tocar. Esperemos que tengan ciertos parámetros y que, en primer lugar, consideren la desocupación. No obstante, a mi modo de ver, es un hecho que da derecho a que los argentinos tengamos alguna esperanza. De ahí que nosotros estemos aquí trabajando, tra-

tando el proyecto y, finalmente, aprobando lo que resta del proyecto de ley de competitividad para que mañana o pasado mañana el presidente pueda promulgar la ley.

Ahora bien: con el tratamiento de esta futura ley pasa lo que muchas veces ha sucedido con otras leyes y por lo que algunos hemos sido sospechados de tener una empresa criminal. Hay muchos señores senadores que conocen el texto de la futura ley —no quiero nombrar a la innombrable, pero todos saben a cuál me refiero cuando los fiscales hablan de la otra— y que ayer u hoy han cambiado el voto. Y también hay muchos señores senadores que, así como cambiaron el voto y tal como la conocen hoy, creen que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados no son sustanciales, sino menores. Pero hay otros, como el señor senador Moreau, como quien les habla o como otros colegas, que pensamos que son modificaciones sustanciales porque, más allá de que el eje sigue siendo la delegación que pone en cabeza del señor presidente facultades que son del Congreso, algunas cosas que se han cambiado no son menores.

Por lo pronto, seguimos con nuestra vieja defensa de los salarios. Ya una vez incorporamos en una ley la prohibición de bajar salarios. Esa ley lleva un año, los salarios no se han bajado y tampoco se han discutido convenios para bajarlos. No sé si tenían razón los fiscales... Perdón. No sé si tenían razón los que decían que la ley es mala o nosotros que decíamos que la ley cumplía con su objetivo.

En el caso de las modificaciones al proyecto de ley en consideración, hay algunos señores diputados y señores senadores muy importantes que dicen que no son sustanciales, que son menores. Son opiniones. Pero lo cierto es que el eje central de la ley continúa y nuestro bloque la va a apoyar porque cree que no es justo frustrar la expectativa que el presidente de la Nación ha promovido a través de la designación de un equipo económico encabezado por Cavallo. Lo cierto es que, guste o no, sea viejo o nuevo, sea Helena de Troya para algunos o para otros, ha generado esperanza en los argentinos y nosotros no tenemos derecho a frustrarla. En eso estamos de acuerdo.

Lamento que algunos legisladores, fundamentalmente los señores diputados, en este afán mediático de condenar todas las cosas y de ha-

cer una especie de gimnasia de la destrucción, pretendan transformarse en especies de ejemplos permanentes. ¡Dios mío cuando se caigan! Me hacen acordar a aquel niño de una serie famosa de la televisión norteamericana que se llamaba "El hombre del rifle". Era un niño que parecía un modelo, no cometía ningún error ni desatino; era un ejemplo de la educación. Pareciera que estamos frente a lo mismo: hay algunos diputados o diputadas que son "ejemplitos"; nunca cometen un desatino. Siempre defienden el interés de todos. Pero cuando hay que "bancarse" ser oficialismo para desarrollar políticas hacen la más fácil: se enojan, se van, denuncian y condenan. Y a los argentinos, que ellos dicen defender, nunca les presentan alternativas concretas para salir adelante.

Por ello, creo que este proyecto de ley no solamente es un viento fresco para el gobierno y, obviamente, para su nuevo equipo económico, sino que mal que nos pese a algunos —y me incluyo porque creo que ninguno de nosotros está desprovisto de algún tipo de egoísmo— este viento fresco da a los argentinos la esperanza de que, por lo menos, se pueda empezar a salir de la tiniebla en la que estamos sumidos desde hace casi dos años, tiempo durante el cual el gobierno prácticamente ha dilapidado o regalado el soporte político tan importante que tuvo en su gestión.

No quiero hablar del texto del proyecto de ley. Basta decir que, afortunadamente, hicimos públicos a través de la televisión nuestros reclamos iniciales, en el sentido de que para aprobar esta iniciativa debíamos declarar la emergencia pública, de que debían estar excluidos el Banco de la Nación y el PAMI, de que debía garantizarse la no reducción de los salarios, de que no se podía meter mano en las cuestiones previsionales y asistenciales, estableciendo delegaciones sin intervención del Congreso. Por suerte, todo eso figura en este proyecto.

Asimismo, también logramos modificar esa especie de garantía de todos los activos y recaudaciones que terminarían siendo garantías particulares de la deuda. Eso, que no es algo menor, también ha quedado afuera de esta iniciativa.

Como han dicho otros colegas, no me cabe ninguna duda de que todo ello es suficiente razón para que acompañemos la sanción de este proyecto de ley.

Hay algunos que remanidamente vienen sosteniendo que no hay emergencia. Claro, no hay un terremoto. Mejor dicho, hay un fenomenal terremoto económico, financiero y social. No se moverá la tierra, pero ese terremoto existe.

Brevemente, voy a citar lo que la Corte ha entendido por emergencia. Evidentemente, sin duda alguna, la situación actual del país está contemplada en algunos de sus fallos. Por ejemplo, la Corte dice que el derecho de emergencia no nace fuera de la Constitución, sino dentro de ella. Se distingue por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el interés de los individuos o grupos de individuos o en el interés de la sociedad toda.

En otro fallo señala la Corte que en momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia, y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad.

Tengo en mi poder 42 fallos, pero no quiero abusar del tiempo de la Cámara. Pero, evidentemente, si el país no precisa decisiones rápidas, si el país no necesita encaminar rápidamente su economía detrás del crecimiento, si esto no es una emergencia, no entiendo qué es emergencia.

Ahora bien, no tengo ninguna duda de que cuando en la Constitución se puso "emergencia pública" se utilizó un término tan genérico para que contenga todas las posibilidades o las aristas que presenta la emergencia o, en este caso, la decisión de este cuerpo de declarar la emergencia pública.

Me reservo la posibilidad de formular algunas observaciones en el tratamiento en particular. Creo que lo que ha resuelto nuestro bloque con respecto al texto de este proyecto de ley es lo correcto y lo que precisa el país. Considero, además, que este bloque es fiel a la conducta que se impuso desde el principio. Es la sexta o séptima vez que le pone el hombro al gobierno y que saca adelante leyes aparentemente vitales. También creo que la actitud que adoptamos hoy no es sino la constante que hemos tenido a lo largo de los casi dos años en que acompañamos al gobierno del presidente de la Rúa.

Finalmente, señor presidente, quiero dejar absolutamente aclarados algunos puntos de la ley que no nos conforman. Creo que fue mucho

más prolijo lo que hizo el gobierno del presidente Menem, que al pasar hizo referencia el senador Moreau.

En la ley de reforma del Estado nosotros utilizamos al revés lo que nuestra Carta Magna establecía respecto de las expropiaciones. La Constitución histórica decía que para expropiar había que declarar previamente por ley que el bien estaba sujeto a expropiación.

En aquella oportunidad, Dromi o Barra —y hago la aclaración porque con tono despectivo el otro día la diputada Carrió dijo que eran plumas excelentes pero, en su axiología, no buenas—, con mayor prolijidad y honradez intelectual imaginaron este sistema y propusieron que declaráramos que para privatizar necesitábamos una ley que declare la empresa sujeta a privatización. Era la contracara de “sujeto a expropiación”. Y después de que la declaráramos sujeta a privatización, avanzábamos en ese proceso.

Como dijo el senador Moreau, no creo que con esta ley no se derogue a aquella. No creo que esa ley quede vigente y que la utilicen cuando se quiera avanzar en la reestructuración —como dicen ahora— de algún organismo. No hay que engañarse.

Pero también creo que este Congreso tiene que poner los puntos sobre las íes para controlar, a través de la comisión bicameral, el mecanismo de utilización de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Si no las emplea bien, la comisión tendrá que informar al Congreso y éste deberá dejar sin efecto las facultades delegadas.

Por último, termino como lo hice cuando se trató el proyecto de ley laboral. Señor presidente: les damos esta ley porque nos han dicho que la necesitan para sacar el país adelante. Si no les sirve, pidan su derogación y haremos otra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador García Arecha.

Sr. García Arecha. — Señor presidente: a esta altura del debate a uno se le presenta una contradicción entre “lo bueno, si breve, dos veces bueno” y “lo que abunda no daña”.

Si fuera por el tratamiento estricto y puntual del proyecto de ley, con los informes dados por los senadores Molinari Romero y Menem, sin que esto signifique una descalificación respecto de los demás senadores preopinantes, yo me daría ampliamente por satisfecho. Pero, en el

marco en el que se ha desarrollado el tratamiento de esta norma creo que hay que poner algunas cosas en claro.

Me parece fundamental destacar que esta crisis y esta norma se hayan querido instalar y que, finalmente, se haya dado un juego de contraespejos.

Esto se instaló en el marco de una serie de disparates a que tan acostumbrados están los argentinos. Entonces, de entrada se trataba de dar facultades extraordinarias al ministro Cavallo, y no al presidente de la República. De hecho, no se trataba de ninguna de las dos cosas.

Por supuesto, con nuestra historia de desencuentros y de enfrentamientos, el hecho de poner este llamador de facultades extraordinarias conmueve a la gente. Bien señalaba el señor senador Menem que quizás esto arranca cuando la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio facultades extraordinarias a Juan Manuel de Rosas. Yo no lo quise interrumpir. Le comenté una cuestión que hace a la historia. Pero como el senador por Santa Fe trajo a colación el tema de San Martín de Porres, quiero decir que entre los desvaríos llevados a cabo en aquella época con esas facultades, puedo mencionar el siguiente. Ante el conflicto con Francia, como una delegación expresa estaba en defensa de la religión católica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo la siguiente interpretación. San Martín de Tours, que tenía origen francés, era el patrono de la ciudad. Entonces, tomó la circunstancia de que se habían producido dos epidemias de viruela y una gran inundación a efectos de invocar que no era intermediario suficiente ante Dios para los vecinos de la ciudad, y lo suplantó a través de un decreto.

En la vida argentina hubo muchos de estos disparates; de allí toda esta tendencia a desvirtuar en el artículo 29 de la Constitución lo que es una facultad clara y expresa del Congreso a través del artículo 76.

En este marco se instaló la lucha para remontar el desprestigio de las instituciones y para la recuperación de la clase política. Creo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación han dado una señal clara y muy expresa de conectarse con la realidad que vive la Argentina, así como con lo que espera el hombre común del pueblo: la solución a sus angus-

tias y a las necesidades que viene arrastrando luego de casi tres años de recesión. Me refiero a la recesión que trajo como consecuencia el aumento de la exclusión social. Por supuesto, la prioridad debe ser la puesta en marcha de un programa que tenga como objetivo concreto la reactivación de la economía de la Argentina, bajar la tasa de desempleo y producir la recuperación de las pequeñas y medianas empresas. Puntualmente esto es lo que figura como objetivo básico en este plan.

Quienes hoy somos oficialistas debemos con dolor tomar este plan de alguien que no fue integrante de nuestra coalición. Al mismo tiempo, quienes tenemos responsabilidades públicas siempre sufrimos los cachetazos o lonjazos por haber acompañado propuestas como la de aumentar impuestos o bajar salarios. Se trataron, por supuesto, de propuestas que no nos gustaron y que finalmente tampoco sirvieron para lograr esos objetivos.

Creo que el funcionamiento del Parlamento en el trámite de esta ley constituye la derrota concreta a la intriga, a la pequeñez y a la política mediática que tanto se ha señalado en este recinto.

Los compatriotas provincianos hacen que los porteños sintamos este tipo de sacudones. Pero debo recordar que desde la reinserción de la democracia, en esta ciudad de Buenos Aires tuvimos una gran cantidad de estos fenómenos mediáticos. Puedo mencionar, por ejemplo, a Adelina D'Alessio de Viola, Eduardo Varela Cid, Albamonte, Luis Zamora —que actuó en el Parlamento, pero no recuerdo si en representación de la provincia—, entre otros. Ellos no duraron mucho tiempo, señor presidente. Tampoco dejaron algo. No dejaron nada, por lo menos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de mi ciudad.

Sr. Branda. — Falta uno: Álvarez.

Sr. García Arecha. — No dejaron ningún proyecto, algo realizado en el ámbito de la vida de los porteños.

Yo no soy tan pesimista como el señor senador Funes. Creo que el tiempo, la lucha, la constancia y la perseverancia dejan en claro las cosas.

Sr. Funes. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. García Arecha. — No. Fijese, señor presidente, el manoseo que ha habido con respecto de la delegación de facultades al presidente.

Como ejemplo, voy mencionar los titulares de dos matutinos de la ciudad. Un día, la tapa de uno de ellos, decía qué Diputados iba a debatir la ley que había pedido Cavallo y que, en general, se rechazarían las facultades especiales pedidas por el presidente De la Rúa. Así rezaban el título y subtítulo de la tapa.

Habían dividido la ley: diez artículos eran propuestos por Cavallo y tres por De la Rúa.

Al día siguiente se aprobó la ley y, entonces, el título fue que aprobó Diputados la ley que pedía Cavallo y el subtítulo decía que no obstante, se habían rechazado buena parte de las facultades especiales que quería De la Rúa. Nuevamente tuvieron la tremenda capacidad de dividir la ley: había artículos pertenecientes al presidente de la República y otros pertenecientes al ministro de Economía.

Por supuesto que esto hace al juego de la libertad de prensa pero no creo en esta capacidad infinita de confundir la racionalidad del ser humano.

También quiero señalar como un gran logro del presidente de la Nación y del Parlamento el hecho de haber enviado un proyecto de máxima y que en esta casa, durante varias horas, tanto los integrantes de distintas bancadas, así como el jefe de Gabinete, el vicejefe de Gabinete, el ministro de Economía y funcionarios del Poder Ejecutivo, hayan logrado consensuarlo y mejorarlo, sacarnos algunas dudas e incluir ciertos aspectos puntuales que, por supuesto, fueron necesarios atento al disparate y a la magnitud de las cosas que se señalaban.

No sé, señor presidente, cómo no se les ocurrió plantear, por ejemplo, que se iban a privatizar los hospitales, con los pacientes a la espera de su fallecimiento y la posterior venta de los órganos.

La imaginación dio para cualquier despropósito. Pese a que en el proyecto original se hablaba de las universidades y de una serie de organismos, reiteradamente, con mala fe y con la intención de algunos hombres de sacar un rédito político inmediato, se quiso instalar la idea de que se trataba de facultades extraordinarias que pedía el presidente de la República. A veces, se reiteran los contraespajos.

Hace pocos minutos subí a mi despacho y pude ver que en un programa televisivo llamaban a votar a favor de las facultades extraordinarias para el doctor Cavallo, es decir, insistien-

do con algo que es falso. Del debate participaban seis diputadas; una de las seis era la que había hecho la amenaza de la denuncia. Cinco de ellas coincidieron con que la Argentina no espera salvadores y que Cavallo no es un salvador. Había dos diputadas radicales, una diputada de Acción por la República y dos por el justicialismo. Por supuesto que a esta altura de la vida democrática, todos coincidimos con que no es bueno esperar salvadores pero tampoco lo es que los políticos sean pontífices. Y digo esto porque en el mismo programa la diputada de la amenaza señaló que si no hubiera sido por la amenaza todos los que integramos el Parlamento nacional hubiéramos estado incurso en el delito previsto en el artículo 29 de la Constitución, lo que es un verdadero disparate. Sin duda, son deformaciones culturales que tenemos.

Hace varias décadas ese gran filósofo que fue Ortega y Gasset nos dijo: "Argentinos a las cosas". Sin embargo, no sé si por deformación de la religión que profesamos la mayoría de los argentinos, acá hay muchos seminaristas pero también hay muchos pontífices en la vida pública argentina.

Señor presidente: quiero destacar que el Congreso tiene todos los derechos de aprobar, rechazar y mejorar una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Digo esto porque he escuchado algunas opiniones —y no voy a hacer referencia personal— acerca de este aspecto.

Lo que ni el Parlamento ni ninguno de sus integrantes tiene derecho es a reclamar sobre la integración del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo lo integra el presidente de la República y es quien designa. No hay ámbito de debate ni en el Senado ni en las coaliciones ni en los partidos a los que pertenece el presidente de la República que se puedan trasladar al Parlamento, a fin de proponer condiciones de la gobernabilidad enarcanadas en quienes designa el presidente. Este presidente tiene una doble legitimidad porque por primera vez en la historia política argentina, desde 1983 en adelante, su candidatura no surgió de un acuerdo de estructuras partidarias, señor presidente. Surgió de un hecho inédito en la vida política argentina, de una elección interna abierta en la que participaron quienes querían expresarse en la coalición que formamos; y votaron más de 3 millones de argentinos y el presidente de la República triunfó.

Cuando fue al examen definitivo del voto popular, para desgracia de quienes somos parte de la coalición oficialista, de radicales, de frepasistas y de otros integrantes, y para alegría de la mayoría circunstancial del Senado, las elecciones fueron desdobladas, señor presidente, y los candidatos que nosotros ofrecimos en todos los estados que componen la Nación triunfaron solamente en siete. Después hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires.

Pero cuando el presidente fue a las urnas a someterse a la consulta popular, de los 24 estados que constituye la Nación, en 21 el pueblo le dio su respaldo y le dio el mandato expreso de ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo.

Entonces, qué reclamo vienen a hacer de estructuras partidarias que puedan estar por encima del poder legítimo y popular del presidente de la República. Desde mi niñez soy parte de la estructura política de la Unión Cívica Radical. Pero qué derechos podemos venir a plantear en un recinto para reclamarle al presidente de la Nación. La decisión la tomó el pueblo y el mandato lo va a ejercer.

Hoy estamos debatiendo este proyecto por un acto de tremenda valentía del presidente de la Nación. Aquí hay que dejar las cosas en claro; desde 1983 hasta ahora, en las elecciones presidenciales nunca se votó a un partido político, señor presidente. En 1983 la figura de Raúl Alfonsín excedió con amplitud a la Unión Cívica Radical y nos desbordaron los sectores provenientes de distintas líneas y la ciudadanía independiente, dándole un rotundo triunfo en la urnas.

El presidente Menem fue candidato y superó con amplitud todas las estructuras del justicialismo. No me quiero meter en la interna que tuvieron los justicialistas, pero tengo información y creo que le ganó a la mayoría de la estructura del Partido Justicialista en la elección interna. Y lo mismo sucedió con el presidente De la Rúa. Así que no instalemos dilemas falsos en la República, señor presidente.

Hace falta voluntad de hacer, voluntad de decir menos, de ser menos comentaristas, fundamentalmente; y soy sincero para los que tenemos la responsabilidad de ser oficialistas. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a sectores que componen la mayoría de este Senado, que han tenido una actitud de absoluta responsabilidad como también a distintos partidos provinciales.

Estoy seguro, señor presidente, de que con esta propuesta y con estas facultades delegadas vamos a salir de este largo túnel que ya lleva tres años y que tanto ha angustiado a todos los argentinos. Muchas gracias y pido disculpas por algunas palabras que exceden el marco del tratamiento de la ley.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Funes. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Branda. — Le voy a conceder la interrupción al senador Funes.

Sr. Presidente (Losada). — Se debe dirigir al señor presidente, señor senador Funes.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Funes. — No sé de dónde extrajo el señor senador la conclusión de que yo soy pesimista. Al contrario, creo que si los justicialistas no fuéramos optimistas no estaríamos sentados aquí considerando este proyecto. Más aún, soy tan optimista que he dicho que ya tenemos que ir pensando en el post Cavallo. No he dicho que va a fracasar.

En mi anterior intervención señalé varias veces que el destinatario de estas facultades era el presidente De la Rúa, que es el que tiene la representación legítima que le otorgó el pueblo. Yo improvisé, así que voy a consultar el Diario de Sesiones para ver de dónde extrajo la conclusión el colega García Arecha de que he sido pesimista.

Sr. García Arecha. — ¿Me permite una interrupción, señor presidente?

Sr. Presidente (Losada). — Si lo autoriza el senador Branda.

Sr. Branda. — Cómo no, señor senador.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. García Arecha. — Me refería a la imposibilidad de luchar contra la política mediática; no hacía referencia a las propuestas económicas que incluye este plan.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor presidente: voy a asumir lo que hablamos hoy en el bloque en cuanto a ser breve.

Empezaré diciendo que soy abogado, así que desde ese punto de vista están cubiertos los comentarios que se hicieron anteriormente por parte de algunos señores senadores.

Estoy en el pleno ejercicio de mi mandato, sin mi voluntad viciada, procesado, y dispuesto a ser condenado por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Porque considero, señor presidente, que cuando uno asume responsabilidades las asume con todas sus consecuencias.

En ese carácter digo que tengo pleno conocimiento de lo que está pasando en el país. La Argentina está en emergencia, y aquel que no quiera verlo de esta forma es porque es un necio o un ciego.

Nosotros estamos en un proceso de involución y de autodestrucción. ¿O no lo notamos cuando caminamos por las calles, por los barrios, por las ciudades? Esto es producto del accionar de clases o sectores dominantes que en vez de reinvertir los excedentes económicos en el país los han sacado. Nosotros fuimos los culpables por no poner todos los controles necesarios para que eso no se produzca.

No quiero incursionar en el devenir histórico de esta cuestión, pero creo que este proceso lo estamos sufriendo después de la revolución del 55 en forma alternativa, por lo que todos conocemos de la historia.

Con respecto a este proyecto de ley quiero decirle, señor presidente, que nosotros los justicialistas sabemos muy bien cuando la patria está en peligro. Y cuando esto ocurre nadie tiene que hacerse el distraído o sacar ventaja de esa situación. Todos tenemos que poner el hombro y la buena voluntad para que el país salga adelante.

En esta oportunidad quiero decir que nadie se va a realizar en un país que no se realiza. Esta enseñanza que nos dejó el general Perón la tenemos que tener hoy más presente que nunca. Porque si algo hemos hecho los justicialistas en esta última etapa fue pacificar el país y tratar por todos los medios que los argentinos nos encontremos unidos para afrontar este tipo de problemas, y para evitar las consecuencias que sufren, precisamente, los que menos tienen, los menos protegidos, ya que esta involución y esta autodestrucción afectan a los sectores del trabajo y de la producción.

Por eso —como decía— voy a votar afirmativamente con plena conciencia este proyecto,

sin temor a equivocarme y a hacerme cargo de todas las consecuencias que puedan derivar de mi actitud.

Ahora pasaré a considerar muy rápidamente algunas reservas y observaciones.

En el contexto de las atribuciones que le otorga el presente proyecto de ley, considero que el Poder Ejecutivo tendrá que adoptar las medidas necesarias para que los gobiernos provinciales procedan a establecer las bases del convenio marco que posibilite iniciar el urgente tratamiento de una nueva ley de coparticipación federal.

En dos tercios de las provincias argentinas los recursos públicos de origen provincial y nacional constituyen la base principal para intensificar el proceso de inversiones, generando impactos positivos para superar la recesión económica y generar más empleo.

Adicionalmente, quiero llamar la atención al Poder Ejecutivo nacional para adoptar decisiones en políticas públicas que pueden ampliar la competitividad de la economía nacional y, en especial, redefinir las bases de una política económica de ámbito internacional, a fin de que el país pueda acentuar su participación en el escenario de los organismos internacionales donde se determinan normas de regulación y protección al comercio que afectan de hecho la competitividad de la producción argentina.

También quiero acentuar las acciones de supervisión y control sobre el sistema financiero a fin de lograr consenso para inducir la urgente caída del costo del dinero. Se deben intensificar las funciones de regulación y control sobre las empresas privatizadas a fin de rebajar los costos de servicios que afectan directamente a la rentabilidad de la empresa, además de controlar la significativa transferencia hacia el exterior del excedente económico. Su reorientación a la ampliación de la inversión en el país podrá generar impacto inmediato sobre la producción y el empleo. Se debe extremar la facultad de control de la evasión en el ámbito tributario, previsional y laboral, y velar rigurosamente por la preservación ambiental a fin de eliminar prácticas predatorias en materia de explotación de la pesca, la forestación y minería.

Con transferencia del excedente potencial estimado en torno a los 18.000 millones de pesos anuales el país no podrá incrementar sus recursos de inversión para superar la recesión.

Se impone, en consecuencia, establecer normas de regulación y control y definir una nueva política de estímulo a la inversión con criterio de rentabilidad y de integración territorial.

Estos puntos muy brevemente expuestos creo que van a ser motivo de consideración por parte del Poder Ejecutivo para trabajar juntos por el futuro de la Argentina, con nuevas leyes y no solamente con esta ley.

Considero que vamos a necesitar trabajar mancomunadamente en nuevas leyes y no solamente en esta que hoy nos toca aprobar en este recinto.

Señor presidente, señores senadores: con lo expuesto creo que he cumplido con el pedido expreso del presidente de nuestro bloque. Me gustaría abordar otros temas, pero creo que otros señores senadores ya lo han hecho acabadamente.

Estos son momentos en que todos juntos tenemos que poner el hombro para que la Argentina pueda salir adelante. Espero que este remedio no sea peor que la enfermedad y que sea para bien del conjunto de la sociedad.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: anticipo mi voto positivo a este proyecto de ley de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Ante todo quiero destacar que frente a una fuerte instalación mediática del denominado “huracán Cavallo” en estos últimos días, alrededor de todo el tema de los superpoderes y las tensiones generadas por acusaciones de diputados de recurrir a la Justicia, hago especial mención de mi beneplácito por las exposiciones de los dos miembros informantes al comienzo de esta sesión.

Creo que adecuadamente “desdramatizaron” el tema, lo pusieron en su justo término y le dieron a la cuestión la dimensión y la ubicación constitucional que ella tiene.

La principal aspiración de un buen político es que a su país y a su gente les vaya bien. Por eso creo que es obligatorio, frente a las crisis, deponer posiciones. Se deben deponer parcialidades e incluso actitudes que, de no ser depuestas, suenan facciosas.

En este sentido, todos los bloques de las dos Cámaras están dando un ejemplo de que la

dirigencia política argentina está a la altura de esa necesidad: de responder a las crisis deponiendo posiciones.

No voy a abundar en el tema de la crisis, pero sí voy a reafirmar que estamos en crisis. También destaco especialmente el impacto que me ha producido la descripción muy puntual, pero muy precisa y muy gráfica, del senador Sala respecto de la dimensión de la crisis desde un lugar muy concreto y desde gente muy concreta.

Incluso, respecto de consideraciones acerca del federalismo, autocríticas, sapos y otras yerbas, mi propuesta es justamente transmitirle al senador Funes que hoy depongamos estos temas en función de darle aprobación a esta norma que la Argentina necesita.

Al encontrarnos en una crisis, considero que ha sido realmente oportuno y muy bueno el planteo del señor presidente de la Nación, al llamar a la construcción de un acuerdo de unidad nacional. Y como consecuencia de ese llamado, también ha sido muy bueno el planteo del doctor Domingo Felipe Cavallo, al aceptar incorporarse al gabinete de gobierno del doctor De la Rúa.

Se han mencionado treinta y tres meses de recesión. Yo quiero agregar un par de años más de "piloto automático". Hoy la Argentina tiene el mismo producto bruto interno que en 1996. Llevamos cinco años de economía estancada. Entre 1991 y 1996 la Argentina creció un 61,3 por ciento. Y de 1996 a 2000, en promedio, cero.

Y en este lapso, desde la Alianza debemos hacernos cargo de catorce meses de desaciertos en las soluciones económicas ensayadas. Lo debemos hacer, además, reconociendo los problemas políticos que hemos tenido y tenemos. Son problemas muy similares a los que originaron la crisis de la economía hace cinco años, cuando se enemistaron Menem y Cavallo.

Eran temas que rondaban alrededor de una cuestión respecto de la cual, en esta noche, tampoco es conveniente hablar. Me refiero a los temas de la corrupción.

El nuevo ministro hizo el planteo de perseguir la competitividad. Y esa consigna hay que hacerla operativa, tal como se hace operativo un esquema en donde hacen falta decisiones rápidas y encadenadas. Así nos fue explicado por el propio ministro. Lo entendimos y por eso le decimos "sí" a la delegación.

Hace falta un Ejecutivo que tenga tiempos muchos más ágiles que los del Congreso. En este sentido, voto la delegación con la tranquilidad de estar entregando herramientas necesarias para actuar con rapidez y con medidas sucesivamente encadenadas que tiendan a lograr determinados objetivos, los cuales, en conjunto, darán por resultado una Argentina más competitiva.

Pero como ya dijeron varios señores senadores —y coincido con ellos—, la delegación prevista en el artículo 11 del proyecto del Ejecutivo de la semana pasada, no me conforma. Me pareció excesivamente amplia, difusa y sobre todo, excesivamente peligrosa.

Varios senadores trabajamos duramente con los diputados para lograr —junto con los funcionarios del Ejecutivo— una limitación racional, no sólo desde lo jurídico sino también desde lo político, en nuestros posicionamientos y discursos acerca de la decisión que teníamos que tomar. Lo logramos. Considero que este proyecto, como también dijeron varios senadores, tiene muy poco que ver con el artículo 11 del proyecto del Ejecutivo de la semana pasada.

De paso, quiero comentar muy brevemente una situación que no deseo dejar pasar, que es el hecho de haber sido duramente reprendido al final de la última sesión por el presidente del bloque Justicialista, por no haber estado presente en parte de esa sesión. Reitero que me encontraba trabajando en Diputados con otros colegas senadores en este proyecto de ley que hoy estamos tratando, con la clara intención de poner el hombro a la Argentina, de trabajar con la altura y la dignidad que el Senado de la Nación merece. Por eso sé que con el senador Gioja —a quien no sólo le tengo aprecio sino que lo considero un hombre políticamente muy honesto— nos vamos a poner de acuerdo mano a mano en esto y nos daremos las satisfacciones mutuas que creo merecemos. Porque considero que ningún senador de esta Cámara tiene que sufrir reproches de sus pares por ausencias en el recinto. Si así fuera me parece que los reproches serían interminables por las ausencias.

Señor presidente: vuelvo al tema para dejar expresamente sentado que mi fuerza política, el Frepaso, la semana pasada, frente al proyecto inicial del Poder Ejecutivo decidió que no iba a realizar delegaciones genéricas fundamentalmente en materia laboral y previsional, y que

iba a colaborar e intentar limitar el resto de las delegaciones a materias precisas y con posibilidad de ser sujetas a control. Ese objetivo se cumplió; a pesar de eso, como sucedió con todos los bloques en Diputados, mi bloque votó fraccionado.

Además quiero dejar planteado, junto con la convicción de que estamos en el rumbo correcto, que la Argentina puede tener una oportunidad a partir de este llamado del presidente De la Rúa a construir un acuerdo de unidad nacional. El primer paso ha sido la incorporación del doctor Cavallo al gabinete, y ésta puede ser la oportunidad de retomar el ritmo de crecimiento, pero allí es donde siento la obligación de dejar marcada una seria advertencia. Sobre todo, porque a esta delegación hay que ponerle un rumbo de marco político y la va a ejecutar en gran medida—como colaborador del presidente de la Nación—un ministro que ya actuó en la década pasada, en ese período de cinco años que yo destaqué, donde la Argentina creció un 61,9 por ciento, donde los aciertos en la apertura económica, en la estabilidad monetaria, en la reforma del Estado debían haber venido acompañados—según nos decía—de un crecimiento que a su vez iba a generar derrame. Hoy todos sabemos lo que ocurrió: la Argentina creció, pero los argentinos nos empobrecimos. Esta es la realidad, señor presidente, y creo que en ese punto es necesario hacer un debate profundo sobre qué significa crecimiento y qué significa distribución del ingreso en la Argentina.

En estos días, con un equipo de colaboradores y el licenciado Ricardo Gerardi hicimos distintos análisis y tengo unos apuntes cuya inserción voy a pedir porque creo que tienen que ser la base para un debate futuro. Considero que dichos estudios tienen una extensión lo suficientemente larga como para insertarlos. En todo caso propongo que consideremos el material en las comisiones respectivas porque creo que puede constituir una base necesaria y suficiente para el trabajo de control que el Congreso tiene que hacer sobre estas facultades que está delegando.

De paso, comento que en esa sesión de trabajo con el equipo descubrimos—con gran satisfacción—más de una docena y media de coincidencias entre las propuestas del doctor Domingo Felipe Cavallo y el programa de la Alianza, la Carta a los Argentinos.

Sr. Maya. — Al final se encontraron. *(Risas.)*

Sr. Del Piero. — En todo caso habrá que reconocer que en 1999 la Alianza no era todo lo amplia que debía ser para poder tener éxito de entrada.

Sr. Maya. — Estos, ahora, se van a Acción por la República. *(Risas.)*

Sr. Del Piero. — Especialmente, quiero hacer notar que la Argentina, durante la década pasada, tuvo una serie de macrorreformas exitosas—que he mencionado con anterioridad—aceptadas por nosotros, que aceptó y pagó el pueblo y que hicieron suyas todos los políticos de nuestro país.

Hoy, como debió haber sido en 1995, hacen falta medianas y pequeñas reformas que, efectivamente, hagan llegar los beneficios del crecimiento a toda la gente y que permitan al país seguir creciendo. En este punto, creo que ha llegado el momento de comentar algo relacionado con el llamado a un acuerdo de unidad nacional. Para realizar medianas y pequeñas reformas no alcanza un equipo de tecnócratas del Ministerio de Economía ni el acierto en medidas macroeconómicas como, por ejemplo, la ley de convertibilidad; hace falta que los políticos podamos convencer, convocar, persuadir y recrear un contrato social donde la política vuelva a tener sentido y que, a su vez, integre en la economía los esfuerzos necesarios de un pueblo convencido de un determinado rumbo.

Sostengo que eso se logra con una exitosa convocatoria. También digo que ese acuerdo de unidad nacional, al que llamó el presidente, exige un primer escalón de restañamiento de las crisis políticas que ha venido teniendo la Alianza—esto lo digo con toda claridad y responsabilidad—, a partir de lo cual debemos madurar un diálogo serio y persistente con la oposición, los gobernadores y los legisladores. De otra manera, una vez más, señor presidente, la Argentina habrá comprado un “Cavallo llave en mano” y, realmente, no nos merecemos una situación como la de la década pasada.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Villarroel.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: no sólo por virtud o por apego a la moderación, sino porque además estoy físicamente rendido—confieso que debo estar viejo—, le voy a regalar a la Cámara la mayor parquedad posible.

Sin hablar desde la modestia —ni desde lo contrario—, quiero decir que mucho más he conversado durante las reuniones que hemos tenido con colegas del Senado, miembros del Poder Ejecutivo y con diputados nacionales cuando estuvimos examinando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en materia de delegación, así como cuando hemos procurado, con buen éxito en la mayoría de los casos, que se precisaran mejor algunas normas que suscitaban dudas y en otros casos reparos de algunos de los circunstantes. Sé que lo propio ha ocurrido con integrantes del bloque Justicialista.

Pero antes de decir algo que —debo confesarlo— me ha molestado un poco, porque creo en las cuestiones de las amistades cívicas, voy a contar que allá por 1958, cuando compartíamos en calidad de alumnos de la Universidad de La Plata las clases de don Miguel Marienhoff, un gran maestro del derecho administrativo, aquél nos explicaba que el sistema de nuestra Constitución, contra las apariencias, indica que el presidente de la Nación, que es el titular del Poder Ejecutivo, que es un poder unipersonal, es el jefe general de la administración y, por la reforma de 1994, se le ha agregado el título de jefe del gobierno y de jefe supremo. Dentro de las potestades que implica ese cargo o empleo, como dice la Constitución Nacional, está justamente la totalidad de la organización administrativa, cuyo caso paradigmático podría decirse que es el de las personas autárquicas, algo que a algunos ha espantado, como si fuese una novedad, que por este proyecto de delegación se hablase de fusión, transformación de personas autárquicas, de descentralización y desconcentración, etcétera, pero que son facultades propias de la administración.

Decía Marienhoff que cierto afán legislativo de estatuir mediante leyes personas autárquicas era flagrantemente inconstitucional porque desconocía la atribución del Poder Ejecutivo. Y no era una ocurrencia aislada de don Miguel Marienhoff que exponía en sus clases y luego publicó en su *Tratado de Derecho Administrativo*, sino que era una opinión que estaba apoyada fervientemente por quien prologó su tratado, que fue Villegas Basavilbaso, otro gran maestro del derecho administrativo. Y más recientemente fue apoyada por el constitucionalista Bidart Campos. Entonces, si bien se mira la cosa, todo esto que ha alarmado a algunos, incluso a algunos correligionarios, sobre las atribuciones

que presuntamente se delegaban para transformar, modificar, etcétera, personas autárquicas y otros entes públicos, no es más que volver la Constitución por sus fueros, aunque parezca sorprendente; pero es la realidad.

A través de su actuación y de sus dictámenes en la Procuración General del Tesoro, Marienhoff ha dicho en más de una oportunidad que si bien la potestad de declarar inconstitucionales las leyes es exclusiva del Poder Judicial según nuestro sistema, también es cierto que el Poder Ejecutivo tiene la atribución, vale decir el deber, de no cumplir leyes que resulten inconstitucionales, entre ellas las que invaden las potestades del Poder Ejecutivo.

Digo esto porque aquí se ha insinuado que esas conversaciones previas que tuvimos para obtener consensos, acuerdos y precisiones con funcionarios del Ejecutivo, autores o coautores del proyecto que fue girado al Congreso, eran una especie de intercambio de astucias en las que teníamos que vernos con individuos que, de alguna manera, estaban procurando entrar de contrabando, cosas que no se ajustaban a nuestra concepción de lo que es la vida democrática e, incluso, a lo que es nuestra concepción de la plataforma partidaria y otras obligaciones de carácter cívico. Y digo que, más allá de las subjetividades implícitas en esto, aquí subyace un desconocimiento de ese derecho que estoy invocando.

Es claro que si el Poder Ejecutivo hubiese querido, por ejemplo, meterse en cuestiones atañedoras a los derechos laborales o a la reorganización administrativa, hubiese optado por el decreto de necesidad y urgencia.

El decreto de necesidad y urgencia solamente está vedado en cuatro materias, que son las siguientes: impositiva, penal, electoral y en lo atinente a los partidos políticos. De tal modo que si vino al Congreso a proponerle una delegación de potestades era porque venía a la búsqueda de consensos. Esa es la realidad.

De otra manera, hubiera optado por un camino muy diferente. Digo esto porque ciertas inercias de los discursos, ciertas voces levantadas, ciertos clamores, no les permiten a algunos percibir lo que va implícito en el discurso. El grito y el gesto ampuloso son malos consejeros.

Yo no puedo compartir la implícita sospecha contenida en algunas afirmaciones según las cuales vendría a resultar el presidente de la

Nación una especie de autor de una tentativa de traición a la patria. Lo digo sin ánimo de molestar susceptibilidades y porque me parece que la prudencia y la mesura en los dichos son también un valor que todos debemos cultivar.

Además, señalo que tengo la satisfacción moral de haber descartado por absurda la invocación del artículo 29 de la Constitución Nacional—el del anatema famoso— cuando en febrero de 1996 se discutieron en este cuerpo dos proyectos de ley, ambos continentes de delegaciones. Me refiero a las leyes de reorganización administrativa y de modificación de los impuestos a las ganancias, al valor agregado y a los bienes personales.

En esa ocasión, discutimos bastante duramente la amplitud de este nuevo artículo 76 de la Constitución. Durante ese debate, a pesar de impugnar la amplitud de las delegaciones contenidas en esas normas, dije expresamente que no consideraba del caso traer a cuento el famoso artículo 29.

No voy a insistir en ello, pero sí quiero acotar que del juego de los artículos 227 del Código Penal, que remite a la figura del 215—si no recuerdo mal— que es el que mensura la pena, porque hay reenvío a este artículo, y del 67, que se refiere a la prescripción de la acción, resultaría—por decir lo menos— que los presidentes constitucionales desde 1983 hasta la fecha deberían ser también incluidos como imputados en esa denuncia que se anunció. A ellos se deberían agregar casi todos los legisladores que desde 1983 han venido desempeñando sus respectivos mandatos.

Complemento con esto algo que muy bien apuntaron los miembros informantes, senadores por Córdoba y por La Rioja, doctores Molinari Romero y Menem, en cuanto a que mal se puede hablar de novedades cuando cualquier manual de derecho administrativo nos ilustra acerca de que este asunto de la delegación legislativa se viene produciendo en el país de modo notorio desde la década del 20; vale decir, desde hace ochenta años. Si a eso le agregamos que en 1983 el gobierno del doctor Raúl Alfonsín también usó la delegación en las leyes de presupuesto—cabe acotar que en todas las leyes de presupuesto desde 1983 hasta la fecha ha habido delegaciones— y a nadie se le ocurrió en ese momento que porque estuviéramos delegando, cuando la Constitución no preveía la delega-

ción, hubiera lugar a formar causa o a hacer denuncias por presunta traición a la patria, nos daremos cuenta de que acá, una vez más lamentablemente, hemos asistido al fenómeno del que hablaba don Carlos Cossio, ilustre jurista argentino—tucumano, para mayor precisión—, quien sostenía que aquello de la representación tiene también una acepción histriónica.

También se representa cuando se hace un papel en el escenario, ante las luces y las candilejas. Digo que esto ya casi es excesivo porque tampoco hay que hacer el juego y contribuir a ese tipo de comedia. También digo que ese trabajo que hemos realizado entre varios y que además no sólo nos abarca a muchos sino que diría a casi todos los presentes, es fundamento bastante para que uno pueda decir con auténtico sentido de responsabilidad que vota porque está convencido de que está brindando un servicio a la República.

Con ese propósito, me voy a permitir un par de observaciones más. Y disculpen por el desorden. Digo que al presidente de la Nación, aunque en otro sentido, también le son aplicables aquellas dos líneas de versos recitados por el señor senador por Santa Fe en su muy fluida exposición. Resulta que, por un lado, lo impugnan porque no se decide a gobernar y, por el otro lado, lo impugnan porque dicen que pretenden tener la suma del poder público. Son dos impugnaciones que se cruzan entre sí y se anulan, porque precisamente este hombre que ejerce la Presidencia de la Nación está en el justo medio, como buen hombre de derecho que es.

La actitud de la mayoría del bloque justicialista desde luego que merece nuestro reconocimiento, pero al respecto me gustaría introducir algún matiz.

El gobierno de la Nación lo constituyen los tres poderes, pero en el sentido real, no solamente en el formal, es un concepto político que también debe abarcar el hecho de que este Senado tiene mayoría justicialista, de que hay catorce provincias cuyos gobernadores son de diferente signo que el del presidente de la Nación y de que, además, tres de esos catorce distritos son los más grandes del país: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Así que, en realidad, sin que esto mengüe en algo el mérito de la actitud asumida por el justicialismo, yo creo que no estamos recibiendo un favor de la oposición sino la actitud pru-

dente y responsable de quienes conforman también el gobierno de nuestro país. (*Aplausos en la bancada de la Alianza.*)

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: cuando son cerca de las dos de la mañana, cuando vamos a cumplir doce horas de sesión —más de cincuenta o sesenta si tenemos en cuenta el debate de la Cámara de Diputados— y cuando el cansancio nos domina a todos porque no se trata solamente de la jornada de hoy sino que ella es sólo el fin de este paso que estamos dando y que implica otorgar las herramientas que nos está pidiendo el Poder Ejecutivo, no son muchas las cosas que quedan por decir.

Quizá yo sería insolente si me pusiera a hablar de cuestiones jurídicas, económicas y sociales. A lo mejor me reservo un poco el tema político, que también ha sido mencionado acá, pero en honor a nuestra representación creo que debemos hacer algunas consideraciones de esta índole.

Lo primero que quiero decir, en línea con todos mis compañeros de bancada que, con muy pocas excepciones, han hecho uso de la palabra, es que no vamos a obstruir el proyecto de ley que requiere hoy el Poder Ejecutivo. Y así lo vamos a considerar en el ejercicio responsable de nuestro papel de legisladores que representamos a los estados provinciales, buscando siempre el justo equilibrio entre las necesidades del gobierno federal, al cual pertenecemos, y las de la gente, que nos ha confiado su mandato.

Señor presidente: asumiendo un ejercicio responsable y como legítimo aporte a la gobernabilidad seriamente desestabilizada, porque consideramos que existió y que todavía subsiste un problema político, el justicialismo va a prestar su voto afirmativo a este proyecto de ley. Y esto lo decimos aun cuando sabemos que algunos legisladores del oficialismo no lo han hecho en la Cámara de Diputados.

Yo no voy a hacer la historia de la estrategia seguida por el justicialismo, que ya la señalamos la semana pasada, porque este proyecto de ley de competitividad tiene dos partes.

Cuando la semana pasada el miembro informante mencionaba la cifra estimada de recaudación correspondiente a la primera parte de la norma, algunos se agarraban la cabeza y decían: “¡No, están locos! ¡No puede ser tanto!”

En aquel momento, nosotros hicimos referencia a la condición de máxima, es decir, con una alícuota del 6 por mil —o sea, del 1,2 por ciento entre ida y vuelta— y tengo entendido que hoy la tasa se fijó en el 2,5 por mil. De cualquier forma, creo que van a recaudar bastante y que van a resolver no sólo los problemas de caja sino también los de la cesación de pagos.

Y lo dijimos la semana pasada. Para nosotros era mucho más urgente que tal vez fuésemos más prácticos y objetivos en algunas cosas de aquella norma y no en ésta, que también es importante y sabemos que la va a complementar.

Cuando el justicialismo definió su estrategia, fuimos los primeros en ir a hablar con el nuevo ministro. Al concurrir con nuestros legisladores el doctor Cavallo nos dijo: “Yo necesito esta delegación que anunció el presidente para cuestiones puntuales.” En ese momento, nuestra impresión fue que necesitaba esta delegación para la cuestión fiscal, para subir o bajar alícuotas e, incluso, para eliminar impuestos. Y esta norma la necesitaba con urgencia, porque si adelantaba qué impuestos iba a rebajar, la gente no los pagaría. Evidentemente, quería utilizar el elemento sorpresa y decir: “Mañana bajo el IVA”, pero que primero la gente pagara. Su intención era no generar expectativas para que quienes tenían que cumplir obligaciones no dejaran de hacerlo.

Pero fíjense lo que pasó. El Poder Ejecutivo remitió su iniciativa y como siempre acostumbra el actual ministro —probablemente esté bienvenido por más; venía por todo. Es probable que quien leyó el proyecto original se haya tomado de los pelos y pensado en un montón de cosas que se dijeron exageradamente, como que había que cerrar el Congreso, es decir, una serie de cuestiones que se justificaban en función de lo que venía. Y tanto en aquella oportunidad, como ahora, nosotros dijimos que íbamos a brindar las herramientas que se necesiten.

Cuando con muy buen criterio nuestro compañero Maya dijo algunas cosas ciertas del ministro Cavallo, omitió señalar otras que me gustaría mencionar para que nos entusiasmemos y, por ahí, este pacto de unidad nacional o esta forma de hacer oposición responsable se contagie y exista para siempre en la Argentina.

Quien leyó en los principales diarios del fin de semana los reportajes que se le efectuaron

al ministro Cavallo —yo lo hice dos o tres veces— habrá advertido que prácticamente denostaba al Fondo Monetario Internacional. En esas entrevistas, decía que el Fondo no tenía identidad para hablar con el presidente ni con el ministro de Economía sino que tenía que comunicarse con los técnicos.

A mí me pareció que esto era demasiado. Y cuando le preguntaban que ocurriría si los mercados abrían mal el lunes, el ministro contestó que se joderían los mercados, que iban a perder plata, porque a nosotros nos va a ir bien y el país iba a seguir adelante. Y fíjense que no estuvo desacertado.

Entonces, frente a toda esa expectativa y sin coincidir quizás en la parte final con el senador Maya —con quien me hubiera gustado coincidir—, nosotros vamos a dar las herramientas que se solicitan.

Esta mañana un compañero de bancada decía en el bloque que esta situación era similar a la de un carro que está empujado y justo empieza a llover, entonces, pareciera que el pantano se va a transformar en ciénaga y que el carro se va a hundir más. Y frente a este panorama, el carrero en lugar de adoptar alguna medida, se sube a dos o tres acompañantes y se pone a discutir, hasta que justo pasa por ahí alguien que antes tenía experiencia de ser buen carrero y lo llama para que lo ayude. Así, ese carrero le dice que las medidas por tomar son ir a buscar una topadora, una caterpillar grande, para sacar el carro; y les pide las herramientas.

Nosotros creemos que, efectivamente, la herramienta en vez de ser una topadora grande son un par de bueyes, entonces le damos la herramienta; le damos el par de bueyes. Nosotros sostenemos que la caterpillar no hace falta, porque capaz que hace daño, ya que tal vez va a servir para que se tientes, para que no la usen bien o para que, en definitiva, tengan facultades que no deben poseer y, así, estemos violando o incumpliendo con alguna ley.

Por eso, les vamos a dar las herramientas, pero hay que saber usarlas. Les pedimos que las usen bien. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos convencidos.

En su discurso, el senador Moreau decía que cuando en 1989 considerábamos la emergencia se trataba de una situación difícil y también de emergencia, aunque tal vez de otro tipo, y ellos nos ayudaban votando con el traste. A lo mejor

los peronistas tal vez seamos más prácticos o solidarios y, en consecuencia, vamos a ayudar levantando la mano, como corresponde y no escondiéndonos detrás de las cortinas, porque estamos convencidos de que a este presidente lo votó más del 50 por ciento de los ciudadanos y, por lo tanto, hay que ayudarlo.

Además, nosotros no cogobernamos sino que gobernamos siendo oposición y ocupamos y ocuparemos el lugar que debemos; y eso es lo que estamos haciendo.

Puntualmente, en este tema estamos convencidos. Creo que lo que termina de decir el senador Villarroel pone las cosas en su lugar. Toda esta situación mediática, esta amenaza, que es vedetismo y se relaciona con lo que él decía, por supuesto que no nos hace mella, porque somos responsables y queremos seguir siéndolo. En consecuencia, decimos que en este tema no concedemos ninguna suma de poder público ni poder absoluto; no transferimos facultades extraordinarias que pongan en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes. Hemos jurado respetar la Constitución Nacional y mantendremos ese juramento con mucha convicción.

Nosotros creemos que en este tema se han dado las condiciones de emergencia pública y de puntualidad. Por otra parte, considero que en el consenso de esta iniciativa han trabajado legisladores de ambas Cámaras, tanto del oficialismo como de la oposición, y entiendo que el contenido del proyecto es el mejor que se pudo conseguir dentro de la emergencia que estamos viviendo. Digo esto, porque en el tema del tiempo pueden haber distintas interpretaciones. Yo me quedo con una, que es la que tengo y creo que se debería aplicar, que es la del vencimiento de la Ley de Emergencia, a la que hace referencia el artículo 2º del proyecto de ley cuando la toma como emergencia pública.

También está el tema del control, porque este Parlamento tiene que controlar. En este sentido, el general Perón, que siempre nos enseña, decía que el hombre es bueno pero si se lo controla es mejor. Por eso hay que conformar rápidamente esa comisión que establece el artículo 5º de la iniciativa que vamos a aprobar. Por eso, con posterioridad a que aprobemos la norma vamos a presentar un proyecto de resolución en donde se designa a los seis senadores que tienen que integrar esa comisión.

Nosotros creemos que no estamos entregando ninguna facultad y no estamos perdiendo la

posibilidad de seguir legislando sobre aquellos temas que este Parlamento considere necesarios.

Con esa convicción, y tal como lo dije la semana pasada, pensando siempre en que por encima de cualquier interés partidario están los de la patria y que por encima de cualquier bandera partidaria está la azul y blanca, es que hoy estamos dando nuevas herramientas. Entonces, úsenlas bien, para que se concrete esta esperanza que hoy vemos en la gente.

En este sentido y a modo de anécdota, les cuento que esta mañana cuando salía de mi casa, muy cerca de aquí, la encargada del edificio estaba limpiando el espacio común y al reconocermela, por estas cosas de la televisión, me pregunta ¿Cómo van las cosas? ¿Le van a dar apoyo al ministro? Y yo le contesté "Bueno; ahí estamos". Entonces, me responde "Ayúdenlo". Esto era lo que me decía la encargada del edificio.

Me parece que ese sentimiento, esa esperanza y esas ganas las tiene mucha gente. A los justicialistas no nos interesa quien está gobernando sino que a nuestra gente le vaya bien. Por eso insistimos en que queremos que les vaya bien al presidente y al ministro de Economía.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: en el día de la fecha vamos a culminar con esta larga tarea que ha demandado el tratamiento de este proyecto de delegación de facultades.

Antes que nada quería hacer pública una nota que me envió el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Yoma, en donde hace hincapié en la necesidad de que este proyecto sea girado a la comisión que preside. Yo creo que hubiese sido importante lo que él manifiesta, pero creo que se olvidó el senador Yoma de que estamos en un momento de crisis. Seguramente que no le habrá gustado que esta iniciativa no pasara por la Comisión de Asuntos Constitucionales y, en consecuencia, habrá decidido no venir a esta sesión.

De todas maneras, creemos que no hay que repetir conceptos. Acá se han vertido ideas muy apropiadas, que yo ratifico totalmente en cuanto a sus fundamentos.

Repetía un concepto que habíamos dicho el viernes pasado cuando tratábamos la llamada

"ley del impuesto a los pasivos y a los activos". En ese momento, yo había manifestado la inteligencia parlamentaria que tuvo la Cámara de Diputados en desdoblar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional en dos iniciativas: una relativa precisamente a cómo se recaudaba y, otra, que es la que estamos tratando en el día de la fecha, referida a las delegaciones de las facultades.

Fíjense que tratando separadamente los proyectos hemos logrado consenso en el Senado de la Nación y por amplia mayoría.

Creo que muchos pueden pensar que esto fue un apuro de la Cámara de Senadores. Y es cierto lo que dijo el senador Genoud. El día viernes, cuando estábamos tratando la primera parte del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, senadores del justicialismo, de los partidos provinciales y de la Alianza concurren a la reunión que se llevó a cabo con diputados de los distintos partidos y con autoridades y funcionarios del Ministerio de Economía. Desde ese momento se comenzaba a tratar el tema vinculado con las delegaciones de facultades.

Al mismo tiempo, durante la sesión llevada a cabo en la Cámara de Diputados, seguíamos comunicados con nuestros senadores a los efectos de ir siguiendo artículo por artículo el debate. Por lo tanto, estábamos impregnados del conocimiento, de las modificaciones y de los consensos que se estaban logrando acerca del proyecto. En conclusión, la iniciativa fue debatida con responsabilidad y contrición.

De ahí este consenso mayoritario que se ha logrado. Por lo tanto tengo que decir que el bloque de la Alianza y del radicalismo propiamente dicho en lo que a mí respecta, necesitamos que esta noche se apruebe el proyecto en general y en particular, sin modificación alguna, porque sabemos de la necesidad del Poder Ejecutivo y que esta iniciativa ha sido consensuada con toda responsabilidad.

Si tuviera que agrupar los discursos escuchados, los podríamos dividir en dos. Uno sería aquel en el cual los miembros informantes, con toda claridad y precisión, justificaron la aplicación legal y constitucional del artículo 76 de la Constitución Nacional. Creo que fueron unas exposiciones que nos hicieron bien, porque aclaramos circunstancias que muchos no tenían claras y comprendimos que el artículo 76 es un concepto nuevo de la Constitución de 1994.

Y en este proyecto está este concepto nuevo, porque se han respetado los principios de la temporalidad y de la precariedad de la delegación, en el marco de una base delegada precisa y con una materia determinada. Por eso, no hay en esta iniciativa ningún tipo de delegación abierta, por tiempo indeterminado, incierto y con carácter excepcional.

A lo que se ha dicho podemos agregar que esto todavía mantiene la delegación, el control jurisdiccional a posteriori y el control que tenemos nosotros como poder delegante.

Por lo tanto, está muy claro que la delegación que estamos haciendo a través de este proyecto, que vamos a sancionar esta noche, es fundamentalmente clara, precisa y terminante, no obstante todo aquello que se ha dicho sobre el particular.

En un pequeño párrafo se dice que cada vez que exista duda acerca del alcance que haya que otorgar a las cláusulas que estamos sancionando, deberá ser resuelta interpretando de la manera más restrictiva posible las facultades presidenciales. Consecuentemente, las facultades del Congreso en el control del gobierno debe interpretarse ampliamente. Lo dijo Raúl Alfonsín el 1º de agosto de 1994 en la Convención reformadora.

En segundo lugar, quiero hacer referencia a los discursos que se pronunciaron esta noche a partir de la exposición del senador Sala, que me llamó la atención. Es cierto lo que él decía respecto de que se debe agregar a la emergencia económica y fiscal una emergencia social: la de los hombres argentinos de carne y hueso que están padeciendo esta crisis grave que tiene la Argentina. Recordé lo que dijo el viernes pasado el senador por Tucumán Carbonell, cuando sancionamos el otro proyecto. El decía que en la Argentina se está sucediendo una acumulación de errores. Esto nos muestra que no debemos estar echándonos las culpas entre los partidos políticos respecto de quién llegó al gobierno y quién no.

Tenemos que aceptar que hay una emergencia social. En consecuencia, debemos empezar a trabajar todos juntos en la búsqueda de una solución a esa situación. La primera cuestión está concreta y saldada. Respecto de la emergencia social tenemos que empezar a trabajar en una unidad nacional en serio, sin hipocresías, con la cual se puede estar al servicio de todos

los argentinos. Evidentemente, señor presidente, estamos haciendo bastante.

A su vez considero que los políticos, independientemente de la ideología, tendríamos que ser un poco más previsibles y actuar con más coherencia. Digo esto porque veo que ha habido cierta incoherencia en el tema. En efecto, el ministro Cavallo está respaldado fuertemente por el gobernador Ruckauf. Sin embargo, los legisladores del gobernador Ruckauf no pueden, no deben o no quieren acompañar esta norma que supuestamente Ruckauf, como jefe político, está acompañando.

También veo en los medios que el gobernador de Córdoba quiere acompañar este proyecto.

¿Y por qué no decirlo, más allá del respeto personal e intelectual que les tengo a mis dos comprovincianos? Los dos expresaron que no iban a acompañar este proyecto. Uno por una causa y otro por otra, justificables, por supuesto.

Un diario de hoy titula: "Más apoyo a Cavallo". Habla del gobernador de Entre Ríos y del gobernador de mi provincia. En la parte pertinente dice: "Por su parte, el puntano Adolfo Rodríguez Saá respaldó a Cavallo y bendijo su viaje a España para que tranquilizara a los inversores de ese país."

"España, es uno de los principales inversores que tiene la Argentina, y se requiere el aval necesario para que siga invirtiendo en el país", sostuvo. Asimismo dijo que el cambio de rumbo aporta a que las provincias mantengan su política exitosa en materia de obras públicas y estabilidad financiera. En este sentido Rodríguez Saá, que se reincorporó luego de unos días de descanso, destacó entre los logros de San Luis su plan de infraestructura. Seguramente no se han comunicado con los legisladores o evidentemente tenemos discursos totalmente distintos.

Sr. Torino. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Losada). — Le están pidiendo una interrupción, señor senador.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: no doy interrupciones. Normalmente hablo muy poco, entonces no doy interrupciones. Además, que digan en la provincia lo que dicen acá.

Sr. Torino. — Lo voy a decir en mi provincia.

Sr. Agúndez. — Cómo no, señor senador, usted tiene los medios.

Sr. Presidente (Losada). — No dialoguen, por favor.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: además me acordé de otras cosas.

El otro día, cuando estábamos debatiendo decía el senador Torino: "Qué poco margen que tenemos para discutir las leyes" Sin embargo, en mi provincia, en un día se aprueban todas las leyes necesarias. De todas maneras voy a seguir, porque me parece que es más importante el país.

Señor presidente: observe el pensamiento político en este tema de las delegaciones. Al país y a los argentinos les ha tocado estar en los extremos. Algunos pensaban que era necesario aprobar inmediatamente el proyecto del Ejecutivo tal como venía. Por suerte, eran pocos. Otros se fueron al otro extremo. Decían que si nosotros aprobábamos esta norma, por más modificaciones que le hiciéramos, seríamos considerados infames traidores a la patria.

Por suerte se logró el consenso y la responsabilidad política, lo cual dio por resultado este proyecto que le sirve al Ejecutivo, además de cumplir acabadamente con la legalidad y la constitucionalidad que requiere una norma de este tipo.

¿Pero podemos los políticos pensar en forma tan dispar, en una cosa común y objetiva? ¿Pueden ciertos políticos pensar que por adoptar una posición determinada uno se convierte en traidor a la patria, y otros considerar que estamos haciendo las cosas bien?

Realmente, no creo que la mayoría de los diputados, senadores y los prestigiosos dirigentes de la política argentina hayan decidido de repente transformarse en irresponsables y apoyar la entrega de la suma del poder público. Por eso decía que los políticos teníamos que empezar a ser un poco más coherentes respecto de las cosas comunes.

Se ha hablado de que hay crisis exclusivamente política. Algunos dijeron eso. Yo no creo en las parcialidades, sino más bien en el conjunto de la crisis.

Evidentemente, ha habido y hay una crisis económica, tal como señaló el senador Massat con toda claridad. Hay una crisis de tipo fiscal. Los tres últimos ministros de Economía de este gobierno han coincidido en la existencia de una crisis fiscal. Y esto necesariamente lleva a una crisis política. Se planteó también el problema de

decidir si estas crisis hay que declararlas o si directamente constituyen una situación de hecho.

Me voy a permitir nombrar dos o tres situaciones. El otro día, cuando nombré una, el senador a quien aludí decía que esta crisis evidentemente no era igual que la de 1996. Yo considero que la crisis de una emergencia es de hecho. Es por eso que la emergencia pública existe cuando la declara la ley, o es un supuesto de facto vivido por la sociedad, y que el legislador manifiesta en el articulado cuando escribe la norma, o cuando la vota. Luego se contesta el propio legislador: la emergencia es una situación de hecho que se da y que el legislador siente, interpreta y transcribe en una norma. Esto lo dijo el senador Yoma en febrero de 1996.

En ese mismo sentido de la emergencia de hecho, se hablaba que la emergencia económica es un dato de la realidad, un hecho comprobable, verificable y certificable. Esto lo dijo el senador Menem en julio de 1989, y concuerda en ese sentido.

Con respecto a esto ¿nos hemos olvidado de lo que significó la reforma de la Constitución? ¿No creamos nuevas instituciones de control? ¿Debemos utilizar las facultades que nos da la Constitución en lugar de llorar por los supuestos poderes que estamos delegando? Estamos en condiciones de hacer valer nuestros privilegios y atribuciones constitucionales. Podemos convocar al jefe de Gabinete para que nos informe cómo va a utilizar este instrumento racionalizador. Concuerdo con el senador Cafiero, 1996.

Señor presidente: en el diario de ayer se publicó que esta era una crisis política y lo citaban al ex ministro de Interior. Se decía que despotricaba contra el gobierno a pocos días de dejarlo. Yo no sé si son operativos o qué intereses pueden tener estas cosas. Hoy recibí una información de prensa del doctor Storani donde dice que desmiente total y categóricamente haber realizado una entrevista con algún periodista de ese medio, como se consigna en la edición del día de la fecha.

En el punto 3 dice: Como es público y notorio mi posición referida a la situación del gobierno es que al existir un estado de emergencia es imprescindible que todos los sectores apoyen para salir de la crisis.

En el punto 5: Las conversaciones con legisladores nacionales que se sienten identificados con el sector interno de la Unión Cívica Radical,

que tengo el honor de encabezar, recibieron de mi parte la opinión de que debía hacerse el máximo esfuerzo para que se sancionen los instrumentos legales que permitan superar la crisis.

En definitiva, considero que esta minicampaña de invento o tergiversación de mi pensamiento tiene la intención de desacreditar a quienes luchamos por la construcción de un verdadero gobierno de unidad nacional.

Señor presidente: estas son las cosas que tenemos que ir marcando para la consecuencia de lo que normalmente decimos.

El bloque oficial va a aprobar mayoritariamente esta noche en general y en particular el proyecto enviado por la Cámara de Diputados, sin modificaciones. Estamos actuando sobre la base del derecho constitucional. Creemos en la clase política en general. En nuestro caso particular creemos en la garantía y en la moral política del presidente De la Rúa que va a aplicar correctamente la utilización de estas facultades delegadas. Contamos para ello con la opinión de un demócrata por excelencia como es el doctor Raúl Alfonsín. No tenemos miedo a las presiones que se han vertido y queremos ejercer acabadamente la representación en este tema y en este recinto federativo nacional.

Sr. Torino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Habiendo sido aludido, tiene la palabra el señor senador Torino.

Sr. Torino. — Le quiero aclarar al coterráneo senador Agúndez que el gobernador ha dicho “apoyar”. En ningún momento dijo “delegar facultades al Poder Ejecutivo”. En el día de la fecha lo ha llamado el señor Colombo, jefe de Gabinete de Ministros; pero en ningún momento se ha dicho que vamos a votar este proyecto de ley.

Hemos brindado nuestro apoyo para que se pudieran obtener los dos tercios a fin de que comience la sesión.

Creo que no es unidad nacional —lo es para la gente de Cavallo— porque si ella existiera se tendría que ver en mi provincia, y la verdad es que la Unión Cívica Radical jamás se ha sentado a dialogar. Ni siquiera da quórum y hace varios años que no presta ningún tipo de colaboración ni apoyo siendo que hemos ganado en San Luis con el 55 por ciento de los votos.

Por eso creo que muchas cosas que se han dicho respecto de la política de unidad nacional

son una verdadera hipocresía y no conciben con el argumento que se acaba de expresar.

Con respecto a lo dicho por Storani, debo aclarar que en el día de hoy...

Sr. Presidente (Losada). — Acá no venimos a hacer debates provinciales. Usted ha pedido la palabra para efectuar una aclaración y ya la hizo. Lamento decirle que ya ha cumplido el objetivo de su solicitud.

Tiene la palabra la señora senadora Raijer.

Sr. Torino. — Le contesto al senador porque él aludió a un incidente provincial...

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra la señora senadora Raijer.

Sra. Raijer. — Señor presidente: el senador Agúndez, después de hablar sobre el gobernador Ruckauf, se refirió a la provincia de Córdoba. No sé si lo hizo en el mismo sentido que se manifestara con relación a los senadores por Buenos Aires.

Al respecto le quiero decir que no solamente estoy sentada en mi banca, sino que también estoy votando a favor del proyecto. Por esa razón no entiendo a qué se refirió cuando mencionó a Córdoba.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra la señora senadora por San Luis, que también ha sido aludida.

Sra. Negre de Alonso. — Sin duda debo recordarle al senador Agúndez que la semana pasada la suscripta apoyó el proyecto en general y en particular y que expresamente aclaró por qué dio su apoyo la semana pasada y por qué no lo daría en esta ocasión.

Sr. Presidente (Losada). — Esta Presidencia entiende que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto de ley venido en revisión.

Sr. Tell. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Para que no ocurra lo mismo que sucedió con la norma que sancionamos el otro día, hago moción de que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Losada). — En primer lugar debe cerrarse la conferencia.

Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Losada). — Queda cerrada la conferencia.

3

Votación

Sr. Presidente (Losada). — Continúa la sesión.

A continuación corresponde votar...

Sr. Tell. — En este momento, señor presidente, vuelvo a formular la moción.

Sr. Presidente (Losada). — En primer lugar voy a someter a votación la moción que formuló el senador Tell.

—Se practica la votación...

Sr. Presidente (Losada). — Por Secretaría se dará lectura para la votación en general.

Sr. Sala. — ¿Cuál fue el resultado de la votación, señor presidente?

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Carbonell. — Solicito que la votación se haga por signos.

Sr. Presidente (Losada). — Hay dos mociones. En primer lugar, se votará la moción formulada por el señor senador Tell respecto de que se vote en forma nominal.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Losada). — Queda rechazada.

Sr. Maya. — Señor presidente: cuando se pide votación nominal no es necesario que se apruebe por mayoría, sino que basta con que tenga suficiente fundamentación. En este caso, y por las afirmaciones puestas de manifiesto...

Sr. Meneghini. — ¿Cuáles fueron esas fundamentaciones?

Sr. Presidente (Losada). — Ya se ha votado. La Presidencia ha tenido en cuenta el resultado de la votación: como no se ha obtenido la mayoría...

Sr. Maya. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Cómo no, señor senador.

Sr. Maya. — Usted conoce mucho mejor que yo el Reglamento. Pero a los fines de hacer viable la votación nominal tengo entendido que no es necesario alcanzar la mayoría, sino que es suficiente con que dicha petición tenga suficiente fundamentación, que en estas circunstancias se registró.

Solicito que lo que acabo de decir se verifique con el Reglamento, a fin de determinar si no estoy equivocado.

Sr. Presidente (Losada). — Por Secretaría se dará lectura al artículo del Reglamento que usted menciona, señor senador.

Sr. Secretario (Oyarzún). — (Lee:) “Artículo 209. — Toda elección se hará por votación nominal y mayoría absoluta. Fuera de este caso solamente procederá la votación nominal, cuando así lo decida la Cámara por mayoría absoluta de sus miembros.”

Sr. Presidente (Losada). — ¿Ha quedado aclarado, señor senador?

Sr. Maya. — Sí, señor presidente. Estaba equivocado.

Sr. Presidente (Losada). — Corresponde votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Queda aprobado.

Sr. Maya. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Maya.

Sr. Maya. — Señor presidente: solicito que se consigne mi voto por la negativa tanto en general como en particular.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará.

Sr. Varizat. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Varizat.

Sr. Varizat. — Señor presidente: en el mismo sentido que el señor senador Maya, solicito que conste mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará.

Sr. Torino. — Lo mismo planteo respecto de mi voto.

Sra. Negre de Alonso. — Solicito que se proceda de la misma forma con relación a mi voto.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará.

En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Señor presidente: solicito que se vote por incisos.

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Verna.

—Luego de unos instantes:

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. — Señor presidente: hace varias horas que venimos sesionando en un clima de armonía, pese a las distintas posiciones.

Entiendo que es procedente el pedido de que se vote por incisos o por períodos, como dice el Reglamento, porque hay algunos señores senadores que quieren manifestar sus observaciones o sus votos negativos respecto de algún inciso en particular. Creo que forma parte del legítimo derecho de expresar una opinión.

El 1º es un artículo muy largo, con muchos incisos o períodos, y creo que es bueno que la bancada que votará negativamente el pedido del señor senador Verna comprenda el derecho de cada senador de expresarse respecto de cada uno de los temas.

No sería justo que después de un debate hecho con tanta altura se niegue a un senador el derecho de expresarse respecto de cada uno de los incisos.

De todos modos, van a hacerlo y la exposición será más confusa si se pone a votación el artículo completo, porque cada senador expondrá sobre el inciso que es de su interés. Mi experiencia me indica que esa forma de votación será muy desordenada. Por eso en la Cámara de Diputados se votó de esta forma, precisamente por la estructura de la norma.

Entonces, les solicito que nos acompañen en la moción de votar por incisos.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Vamos a aceptar la modalidad señalada, toda vez que así se votó en la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Losada). — Se procederá a votar por incisos.

—Se enuncia el inciso a), apartado I, artículo 1º.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Señor presidente: de acuerdo con lo que fundamenté en mi exposición en general,

voy a solicitar que conste mi voto negativo al artículo 1º porque mi propuesta consistía en declarar la emergencia por un período de seis meses.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. — Señor presidente: en el mismo sentido que lo dicho por el señor senador Sala...

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia solicita que los señores senadores precisen si votan el inciso o el artículo en forma negativa, y les recuerda que se está votando por inciso.

Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. — Señor presidente: el artículo 1º dice "Facúltase al Poder Ejecutivo..." y cuando hice mi exposición dije que no estaba a favor de dar atribuciones con posterioridad a mi mandato.

Entonces, por eso dije que estaba de acuerdo con un período de seis meses y no con un plazo que llega hasta el 1º de marzo del 2002. Eso es lo que voto negativamente.

Sr. Presidente (Losada). — Les pido a los señores senadores que precisen sus propuestas. Así, por Secretaría se podrán contabilizar bien los votos.

Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: lo que vamos a votar es el encabezamiento del artículo 1º porque, luego de él, aparecen las distintas partes en que se divide dicho artículo. El primer punto se divide en varios incisos, lo que también ocurre en el caso del segundo punto, y luego hay un tercer punto. De manera tal que lo que se debe votar ahora es el encabezamiento, o sea, el primer párrafo del artículo 1º.

En ese sentido, debo agregar que el hecho de que las facultades se deleguen hasta el 1º de marzo de 2002 tiene una razón fundada y es que recién en ese momento comenzará a sesionar el Honorable Senado con los señores senadores que resulten electos en la próxima elección ya que, como todos sabemos, en el período que abarca los meses de diciembre, enero y febrero el Senado no se reúne salvo en sesiones extraordinarias. De manera tal que el plazo solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación es razonable, motivo por el cual consideramos que se debe votar en forma afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: como miembro informante quiero adelantar, con todo respeto por aquellos señores senadores que deseen formular objeciones en los distintos incisos, el criterio de que no vamos a aceptar modificaciones al dictamen de la Cámara constituida en comisión que se encuentra en tratamiento. Repito que digo esto con todo respeto por los legisladores que deseen manifestar su posición sobre cada inciso.

Sr. Presidente (Losada). – En consecuencia, se va a votar el primer párrafo del artículo 1°.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia nuevamente el inciso a), apartado I, artículo 1°.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Es para preguntar por su intermedio, señor presidente, al miembro informante si tiene conocimiento de cuáles son los entes autárquicos a los que se refiere este inciso. Porque yo tengo la nómina de los entes autárquicos que figuran en el presupuesto general de la Nación y quisiera saber si este inciso involucra a la Administración General de Puertos, a la Administración Nacional de Medicamentos, al Ballet Folklórico Nacional, al Ceamise, a la Comisión Administradora del Río de la Plata, a la Comisión Administradora del Río Uruguay, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, etcétera.

Quiero preguntarle entonces al miembro informante si él tiene precisión acerca de los entes a los que se refiere este inciso.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Señor presidente: en tanto y en cuanto gocen de autarquía en el concepto del derecho administrativo están incluidos. En la nómina que usted ha leído figuran entes que gozan de autarquía administrativa. Creo que queda aclarada la pregunta del señor senador.

Sr. Verna. – No está aclarada.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Yo no estoy preguntando si están incluidos en este artículo porque, evidentemente, son entes y están definidos, sino si está

decidido que los entes que yo he mencionado son los que van a ser fusionados con la administración central.

Sr. Alasino. – Es una facultad delegada.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Tal como lo acaban de decir, se trata de una facultad que estamos delegando en el Poder Ejecutivo. Hace a la naturaleza de cada uno de los órganos que usted ha enumerado –seguramente, puede haber otros– el hecho de que cuenten con autarquía o no. Habrá que determinar cuál es el estatus o la norma legal que dio origen a esos entes, para saber si gozan de autarquía o no. Pero estamos hablando de una facultad delegada al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Losada). – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el inciso a) del apartado I del artículo 1°.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia y aprueba el inciso b), apartado I, artículo 1°.

–Se enuncia el inciso c), apartado I, artículo 1°.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. – Es para dejar constancia de mi voto negativo a este inciso.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra la señora senadora Raijer, el senador Arnold, el senador Zalazar, el senador Sager, el senador Alasino, el senador Verna, el senador San Millán, el senador Cantarero, el senador Romero y el senador Palacios.

Sra. Raijer. – Es para dejar constancia de mi voto negativo.

Varios señores senadores. – En el mismo sentido.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso c) del apartado I, del artículo 1°.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – Se deja constancia del voto negativo de los señores senadores Sala, Raijer, Arnold, Zalazar, Sager, Alasino, Verna, San Millán, Cantarero, Romero, Sapag, Palacios y Massat.

–Se enuncian y aprueban los incisos d) y e), apartado I, artículo 1°.

–Se enuncia el inciso f), apartado I, artículo 1°.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Quiero hacer una observación, que podrá servir o no como interpretación, pero yo tengo que formularla.

Este inciso dice que, con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración, podrá derogar total o parcialmente aquellas normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento operativo de organismos o entes de la administración descentralizada, empresas estatales o mixtas, o entidades públicas no estatales, adecuando sus misiones y funciones..., etcétera.

Quiero decir que las entidades públicas no estatales realmente no tendrían que estar incluidas en este inciso, porque dice "Con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración..." y las entidades públicas no estatales no forman parte de la administración.

Respecto de estas entidades, si bien se discute en el derecho administrativo, la verdad es que el Código Civil sólo distingue entes públicos y privados. Esta vendría a ser una subcategoría de los entes públicos, pero no son estatales, no forman parte de la estructura estatal.

Quiero advertir que, si se quisieran dictar normas respecto de estas entidades públicas no estatales, podrían ser insanablemente nulas. Hago esta referencia, aunque sé que por razones prácticas no vamos a hacer modificaciones; ya lo pidió el miembro informante y creo que este proyecto de ley tiene que ser aprobado hoy. Pero quiero dejar a salvo esta interpretación a los fines de que, el día de mañana, cuando se quiera hacer una interpretación auténtica se tenga en cuenta esta opinión. Dentro de estas entidades públicas no estatales están las obras sociales, los colegios profesionales, las fundaciones y sobre eso el Estado nacional no puede dictar este tipo de normas. Por eso creo que no podría aplicarse este criterio de que, para dar mayor eficiencia a la administración, se puedan dictar o derogar normas respecto de estos entes públicos no estatales.

Quería dar esta opinión a los fines de la interpretación pertinente.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Señor presidente: en primer lugar, quiero plegarme al fundamento expresado por el senador Menem.

Seguramente, quien redactó esta norma, cuando habló de entidades públicas no estatales y las vinculó a la administración, se estaba refiriendo específicamente al PAMI. Y como se estaban refiriendo a esta institución es que tratamos precisamente de excluirla, porque las otras entidades públicas no estatales, que acaba de enumerar el señor senador, efectivamente, no pueden estar sujetas a modificación de rango legislativo con el objeto de darle mayor eficiencia a la administración, ya que no forman parte de ella. No forman parte de la administración los colegios profesionales, a los que —sabemos ya, desde hace mucho tiempo— pertinazmente se pretende modificar en su estructura, ni las obras sociales, ni las fundaciones.

Por eso, me parece más que pertinente la expresión del senador Menem. Y que quede en el fundamento que la voluntad del legislador de ninguna manera se orienta a modificar el funcionamiento de esas entidades.

En lo que se refiere también a este artículo quiero especificar —y ya lo hice en el debate en general— que es muy clara la norma cuando dice que se podrán derogar total o parcialmente normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento operativo; aunque de ninguna manera, las de creación de estos entes públicos que aquí se mencionan y se enumeran. Repito, de ninguna manera, las normas de creación.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor presidente: en el mismo sentido, quiero avalar lo dicho y señalar que esta interpretación debe ser tomada por la comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas que se crea por esta misma ley.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Señor presidente: quiero referirme a lo explicitado por los señores senadores Menem y Moreau.

Hoy nos hicieron conocer su preocupación las entidades cooperativas de servicios públicos por sentirse comprendidas en este artículo.

En el mismo sentido, quiero expresarme en defensa de estas instituciones.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. — Señor presidente: sugiero que si no existen controversias en la interpretación de este inciso, como lo han hecho los senadores Menem y Moreau, nosotros reafirmemos al momento del voto que ésta es la interpretación y la voluntad del legislador.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Villarroel.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: convengo parcialmente en las observaciones formuladas por el señor senador por La Rioja. Pero también me parece bueno observar que las entidades públicas no estatales en algunos casos sí ejercen funciones que son de incumbencia del Estado; concretamente, el poder de policía—por ejemplo—en el ejercicio de las profesiones.

Los colegios profesionales actúan por delegación estatal en el ejercicio del poder de policía sobre la actividad profesional en cuanto a matrículas, disciplina, protección de los intereses legítimos de los eventuales clientes, por ejemplo, de los abogados, de los ingenieros, de los médicos, etcétera.

De todas maneras me parece buena la precisión porque implica también fijar una directriz. Aunque no está expresa en la norma, surge de la voluntad acorde de los legisladores. Pero quería hacer esta observación que, de alguna manera, también explica mi voto afirmativo de este inciso.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: adelanto mi voto negativo al inciso porque realmente no entiendo la inteligencia que prima en la redacción de la norma. Además, creo que es confusa. La propia designación de “entidades públicas no estatales” no es una definición utilizada en el ámbito del derecho público para designar lo que normalmente se caracteriza como entidades privadas de derecho público.

No entiendo qué se quiere decir con esto; no entiendo cuál puede ser la aplicación. En definitiva, no entiendo cuál es el sentido.

Además, la exclusión del PAMI que se realiza al final de la norma le resta explicación, ya que la fórmula inicial tiende a dar eficiencia, a evitar gastos superfluos y a brindar un ordena-

miento. Tengamos en cuenta que éstas son entidades que normalmente se administran con fondos propios; que no dependen de subsidios ni de presupuestos de la administración pública. Entonces, como decía el señor senador Moreau, si esto tiende a las normas fundacionales o a las que modificaron la creación de colegios profesionales, de obras sociales, de cooperativas, etcétera, yo francamente me opongo. Ya hubo demasiados intentos, tras la desregulación de los honorarios de las profesiones liberales, de avanzar sobre la existencia en sí de las colegiaturas y organizaciones que manejan el poder de policía y la matrícula de las profesiones liberales.

Por lo tanto, como no entiendo el sentido de la norma; como no le encuentro ningún fin práctico posible, adelanto mi voto negativo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: más allá de que efectivamente puede haber confusión en la redacción de la norma—en algún sentido, se acaba de aclarar o por lo menos expresar la voluntad del legislador—, debo puntualizar que yo no he dicho que esto tiende precisamente a las normas de creación. Expresé exactamente lo contrario.

Esto no tiende a las normas de creación. Por eso la norma modificada en la Cámara de Diputados—porque no se trata del artículo remitido originalmente por el Poder Ejecutivo—dice “...que afecten o regulen el funcionamiento operativo...” En consecuencia, no tiene nada que ver con las normas de creación. No se afecta ninguna norma de creación; no podría. No se está delegando en el Ejecutivo la posibilidad de modificar normas de rango legislativo que afectan las normas de creación de esos entes. Lo dicho, independientemente de que pueda haber alguna confusión que comparto en la redacción de la norma.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: con respecto a este artículo, hicimos un minucioso estudio de la lista que aparece en Internet de organismos descentralizados y autárquicos. Así, nos encontramos con el caso del PAMI. De ahí que dimos el alerta, entre otros, sobre el tema del PAMI y por eso se lo termina excluyendo de la norma.

Creo que lo demás es, simplemente, un exceso de dialéctica jurídica porque la norma dice con toda claridad que en primer lugar —como dice el senador Moreau— es sobre el funcionamiento operativo y para adecuar sus misiones y funciones; dice: "...excepto en materia de control, penal o regulatoria de la tutela de intereses legítimos o derechos subjetivos de los administrados..."

Evidentemente, con estas limitaciones la norma no avanza sobre lo que puede implicar un perjuicio directo en las entidades públicas o las personas de derecho público que regulan situaciones de los particulares. Considero que el riesgo sí se daba con respecto al PAMI, por eso se le agregó la aclaración.

De manera que, tal como está redactada, el inciso no entraña riesgo alguno, pues ella misma establece cuál es el límite sobre el que se va a avanzar en las entidades públicas no estatales que, obviamente, son todas menos el PAMI.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: atendiendo a la aclaración del senador Moreau, me consta que hay muchos colegios profesionales de la Argentina en los que se confunde la norma que los creó con la que regula su operatividad, porque fueron creados por una norma que incorporó la reglamentación operativa del funcionamiento y es la única que tienen.

Por lo tanto, conservo el criterio que anuncié anteriormente.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: solamente quiero ratificar —en tanto el cuerpo no tenga objeción— el criterio que expuso el senador Branda, en el sentido de que todos estos criterios de interpretación de la Cámara que sean pacíficos sirvan para que los senadores que integren la comisión de seguimiento de estas facultades delegadas, los tengan como norma de interpretación y dirijan su actuación.

Sr. Gioja. — Que se vote, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Esa es la intención de la Presidencia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso f) del apartado I del artículo 1º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el inciso a), apartado II, artículo 1º:

Sr. Gioja. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: quiero dejar expresamente sentado lo que dijo en general el senador Menem en cuanto a crear o eliminar exenciones y, especialmente, la exclusión de las economías regionales.

También quiero ratificar lo que se dijo en la Cámara de Diputados y que fue aceptado por el miembro informante; que quede claro que es la intención del legislador que queda expresamente prohibido eliminar exenciones con respecto al tema de las promociones agrícolas e industriales pues están rigiendo —las remanentes de las industriales— en distintos puntos del país, especialmente, en San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Quiero que eso quede bien señalado, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará.

Sr. Verna. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Señor presidente: a fin de ayudar al miembro informante del oficialismo, quiero aclarar que la norma habla de crear y eliminar exenciones para los consumos que integran la canasta familiar.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Verna. — No existe una definición legal de canasta familiar, ni existe definición al respecto en las normas del INDEC.

Por lo tanto, creo que debemos interpretar que estamos hablando de la canasta de productos que consume una familia tipo y que se utiliza como base para la elaboración de los índices de precios al consumidor.

Le solicito al miembro informante que me diga si coincide con esta interpretación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. — Jamás podría contradecir a quien tanto sabe sobre el tema, señor presidente. *(Risas.)*

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Arnold. — Señor presidente: ampliando lo que dice el presidente de mi bloque, que se de-

dica exclusivamente a la promoción industrial, no quiero ser cargoso señalando nuevamente que en esto también quede expresada la intención del legislador en cuanto a los temas del subsidio al gas y la rebaja de combustibles que tenemos en la Patagonia y al Fondo del Tabaco.

Sr. Presidente (Menem). – Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego.

Sr. Preto. – En el tratamiento en general de este proyecto de ley declinamos hacer uso de la palabra en mérito a la brevedad pero, lamentablemente, luego los acontecimientos han demostrado que no han sido tan cortas las exposiciones ni el número de oradores. Pero llegado a este punto no quiero dejar pasar al menos el planteo de un interrogante, de una advertencia respecto de lo que puede significar la aplicación de las normas una vez que éstas sean aprobadas mediante este proyecto de ley.

Cuando se habla de aprobar una ley que apunta a la competitividad de la economía y que la misma debe ser apoyada porque la necesita el Poder Ejecutivo, los miembros del bloque del Movimiento Popular Fuegoño entendemos que no sólo debe ser apoyada porque la necesita el Poder Ejecutivo sino porque la necesita el país.

Nosotros votamos afirmativamente lo que hoy ya se conoce como la ley 25.413, que es el impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes. Y también estamos votando afirmativamente esta segunda parte del proyecto de ley de competitividad enviado por el Ejecutivo nacional para contribuir a resolver la crisis nacional en todos los aspectos que tienen que ver con su economía.

Lo que no podemos aceptar, señor presidente, es que las primeras aplicaciones de estas normas, anticipándose a la sanción de las mismas, comiencen a producir algunos efectos no deseados como los que están ocurriendo ahora en mi provincia, en donde los medios de comunicación, los actores económicos en general y el gobierno de la provincia se plantean ciertos interrogantes.

Si bien la celeridad de los tiempos en los que estamos sesionando no nos ha permitido profundizar todavía en estas materias, advertimos que ya se están tomando medidas que están lejos de crear o eliminar exenciones, como dice la norma del inciso a) del apartado II, relativo a emergencia pública: "...con el objeto de mejorar la competitividad de los sectores y regio-

No creo que haya mala fe sino que aquí debe haber un error que, si se confirma, a partir de mañana debería ser corregido. Precisamente, versa en que la resolución número 8/2001 del Ministerio de Economía publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial número 29.617 fija un derecho de importación extra zona del cero por ciento para diversas posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur de los siguientes productos que son fabricados en la provincia de Tierra del Fuego: telefonía celular, derecho anterior 22 por ciento; equipos de aire acondicionado, derecho anterior 14 por ciento; y computadoras y monitores, derecho anterior 10 por ciento.

Es evidente, señor presidente, que habiendo eliminado el derecho anterior de estos productos y habiéndolos sustituido por un arancel de tasa cero, el interrogante que nos planteamos los senadores fueguinos es si con este esquema vamos a proteger a las economías regionales, dado que si estos productos se fabrican en Tierra del Fuego, puede ser que la experiencia demuestre que se puedan seguir fabricando o que la realidad plantee que, a partir de mañana, estos productos dejen de fabricarse.

Como bien han dicho los medios de comunicación aportando también una cuota de humor a la situación que estamos viviendo en el país y versando sobre los distintos calificativos que en algún momento se han generado sobre la figura del ministro Cavallo, a los fueguinos no nos interesa el pelaje del gato, nos interesa que cace ratones. Lo que no queremos es que los trabajadores de la industria de Tierra del Fuego sean los ratones que van a ser cazados por las normas que vamos a poner en funcionamiento.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Mario A. Losada.

Sr. Preto. – Esta es la experiencia que hoy estamos viviendo los fueguinos y, a pesar de ello, vamos a votar afirmativamente esta norma porque creemos que bien utilizada, con responsabilidad y con madurez, puede ser útil para el país y para la apertura y la desregulación positiva de la economía. No obstante, hacemos un nuevo llamado a la reflexión para que ésta no sea la metodología que lleve a que la competitividad de las regiones, como en el caso de la nuestra, se vea vulnerada con actitudes apresuradas de esta naturaleza.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el senador por el Chaco.

Sr. Sager. — Señor presidente: en el mismo sentido de lo que se viene expresando, pero con diferente intención, quiero dejar manifestada la voluntad particular de quien les habla.

Pero también me gustaría que con el voto positivo de la Cámara llegue el mensaje a quien tiene que aplicar esta norma, y que cuando se dice: “crear exenciones”, se haga realidad lo que venimos pregonando desde hace muchísimo tiempo; es decir, buscar la igualdad de las regiones que no han tenido nunca exenciones impositivas con las otras.

Así que con ese sentido hago esta aclaración, porque esta Cámara ha votado en forma unánime hace aproximadamente un año una norma que hoy duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados.

Y si este proyecto de ley nos permite resucitar lo que nos vienen pidiendo todos los sectores productivos de la provincia del Chaco, nosotros sí vamos a acompañar afirmativamente el inciso a) de la sección II, de emergencia pública.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Oudin.

Sr. Oudin. — Señor presidente: quiero apoyar lo que se viene expresando como interpretación auténtica de la voluntad del legislador. Ese es el sentido de mi voto; y pongo como ejemplo que el Fondo Especial del Tabaco está dentro de las excepciones que se establecen en esta norma. Asimismo, solicito también que quede a su vez como mandato para quienes vayan a integrar la comisión de vigilancia a los efectos de cuidar este aspecto.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: ante la preocupación que planteó en su oportunidad el senador Arnold y ahora el senador Oudin, quiero recordar que ha sido promulgada a través de un decreto del Poder Ejecutivo una ley que ha sancionado este mismo Congreso el viernes.

En el artículo 11 *in fine* contempla estas situaciones que ustedes están planteando, y no hay ningún elemento en este proyecto de ley —pero vale la pena ratificar una vez más la interpretación tal cual se ha señalado— que se

oponga a aquella ley que nosotros hemos votado el viernes pasado y ha sido promulgada el sábado por el Poder Ejecutivo.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — ¿Pidió la palabra, senador Alasino?

Sr. Alasino. — Sí, simplemente quiero hacer una observación, señor presidente.

Remanidamente, los señores legisladores insisten en dejar constancia de la interpretación auténtica de la norma. Sin embargo, creo que la interpretación del legislador constituye el método al que los jueces —los conocemos— habitualmente menos atención le prestan.

Creo que hay muy pocos jueces que en realidad utilizan en sus fundamentos este método de la interpretación auténtica del legislador; usan otros. Decir remanidamente, para evitar corregir la norma, “que la interpretación auténtica será tomada de la discusión...”, creo que va en perjuicio de la misma disposición. Porque lo que hace es añadirle una inseguridad y una irregularidad a la norma que nosotros advertimos. No obstante, en lugar de corregirla, optamos por este atajo.

Insisto, señor presidente: me parece que esto no es bueno y mi experiencia me indica que este es el método al que los jueces le dan menos importancia.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: obviamente, el senador Alasino, en ejercicio de su profesión, efectivamente conoce mucho más que yo cuáles son las razones a las que apelan los jueces cuando tienen que fundamentar sus sentencias. Pero en este caso se trata de una delegación de facultades que tiene cierta imprecisión, por la propia naturaleza de la delegación de facultades. Además, porque no hay una exposición de motivos suficientemente detallada que haya acompañado al proyecto de ley. Entre otras cosas, porque el proyecto originario tenía definiciones de carácter muy general. Por lo tanto, me parece que los jueces van a hacer una excepción y que es muy importante la voluntad del legislador, precisamente, porque estamos delegando facultades.

Así que me parece, señor presidente, que es muy útil que se hagan —y se subrayen— precisiones de este tipo; no creo que confundan a los

jueces, quienes realmente podrían estar mucho más confundidos si no hiciéramos este tipo de precisiones –reitero–, por la falta de una exposición de motivos y porque estamos delegando funciones que, en algunos casos, tienen un carácter muy general.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. – Señor presidente: quiero agregar un argumento adicional al que acaba de mencionar el senador Moreau, que ya fue mencionado por el senador Molinari Romero, y deseo remarcar. Aquí va a haber un control del uso de estas facultades, que va a ser ejercido por una comisión bicameral.

En ese sentido, creo que todas las precisiones que hagamos van a servir para que los colegas que integren esa comisión también tengan una base a los efectos de analizar paso a paso el cumplimiento y el ejercicio de estas funciones delegadas.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Genoud.

Sr. Genoud. – Señor presidente: es cierto lo que dice el senador por Entre Ríos respecto de que son muy pocos los jueces que apelan a la opinión de los legisladores para fundar sus fallos.

Pero lo que me extraña es que sea un legislador el que precisamente señale que lo que hacemos no es bueno, porque es una autodevaluación de la opinión del legislador. Nosotros mismos tenemos que ser quienes sostenemos con mayor énfasis el criterio de que la opinión del legislador, en caso de duda, debe ser tomada en cuenta para que los jueces interpreten la ley.

De tal modo que lo que están haciendo los señores legisladores al resaltar la opinión del legislador como fuente del derecho creo que es saludable, y aquellos jueces que se aparten de esa costumbre, en definitiva, estarán equivocando el camino.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso a), apartado II, artículo 1º.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el inciso b), apartado II, artículo 1º.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Cantarero.

Sr. Cantarero. – Señor presidente: en su despacho, tal cual anunciara el senador San Millán, se habló con el jefe de Gabinete, con el ministro Cavallo y el viceministro Caro Figueroa respecto de que fuimos portadores de una resolución del Foro de Ministros de Economía Provinciales en el siguiente sentido. Ante la demora en la presentación de los formularios correspondientes por parte de las provincias que han transferido las cajas de jubilaciones, la AFIP realiza débitos o multas y las trata como sujetos privados de derecho. La solución, al entender de los ministros, es que el trato sea de Estado a Estado.

¿El inciso b) se aclara en lo que expuse, señor senador; es decir, que las provincias a que me referí reciban tratamiento por parte de la AFIP como estados que son?

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. – Obviamente que sí.

Además, incluso discutimos en nuestro bloque el sentido de la palabra “modificará”. Estamos absolutamente de acuerdo en que figure así porque es el cumplimiento de un compromiso político al cual usted hace referencia.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: ya lo aclaró el miembro informante. “Modificará” no es una facultad sino una orden.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso b), apartado II, artículo 1º.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia y aprueba el inciso c), apartado II, artículo 1º.

–Se enuncia el inciso d), apartado II, artículo 1º.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: quiero hacer una sola consideración.

Como bien dijo el senador Cantarero, ésta fue una idea del Senado.

Quiero que quede claro también que es la intención del legislador que entran departamentos provinciales que tienen crisis laborales porque se privatizaban empresas públicas en general. Pero solicito también que donde haya emergencia laboral por otro motivos puedan in-

cluirse otros departamentos de otras provincias, porque el caso del diferimiento es un instrumento que existía en mi provincia y en otros lugares del país también; entonces, propiciamos que esa posibilidad ante la emergencia laboral también pueda existir.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: el senador Genoud considera que yo creo que la opinión de los legisladores está simplemente devaluada, porque digo lo que corresponde.

La mayoría de los jueces sabe que la norma es una cuestión autónoma. Entonces, a partir de la autonomía de la norma hacen la interpretación. De todas maneras, como es cuestión de poner la voluntad del legislador—y creo que esto es simplemente para darle más inseguridad a la norma— quiero que acá se deje constancia de que—así como el senador Gioja pide otro departamento más—yo pido que la provincia de Entre Ríos esté entre las beneficiadas por diferimientos impositivos y regímenes promocionales.

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso *d*).

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Queda aprobado el inciso *d*).

—Se enuncia y aprueba el inciso *e*), apartado II, artículo 1º.

—Se enuncia el apartado III del artículo 1º.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Moreau.

Sr. Moreau. — Señor presidente: más allá de que esto de la interpretación del legislador se esté convirtiendo en una polémica acerca de sus alcances, insisto en su importancia.

Además, en el caso particular de este proyecto de ley sobre delegación de funciones, quiero señalar—como lo hice en el debate en general—que, a mi juicio, cuando en la primera parte del apartado III se hace la enumeración de las exclusiones que la norma prevé para la privatización total o parcial o la cesión en garantía de empresas públicas, debe entenderse que se comprenden también las sociedades del Estado, en el sentido extensivo en que lo interpretaba Dromi.

Además, en el segundo párrafo, cuando se dice: "Para la transferencia de empresas, so-

ciedades...", naturalmente se incluye a las sociedades del Estado. Incluso en la enumeración del inciso *b*) del apartado I, se incluyó a las sociedades del Estado.

En consecuencia, quiere decir que ha habido una omisión involuntaria por parte del legislador. Por lo tanto, las sociedades del Estado quedarían sujetas por esta norma a la exclusión, y para su transferencia, a las normas que prevé desde el punto de vista del procedimiento la ley 23.696.

Sr. Presidente (Losada). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el apartado III del artículo 1º.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Queda aprobado el artículo 1º con sus incisos.

—Se enuncia el artículo 2º.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: en línea con lo que dije cuando se discutía en general, a mi criterio esta norma que estamos votando se remite al artículo 1º de la ley 25.344—que es la de emergencia que oportunamente sancionáramos—; el límite máximo de esta delegación sería el que establece el artículo 1º, o sea, el 1º de marzo de 2002.

A mi criterio, y en función de la emergencia pública necesaria, si no se prorroga la ley 25.344, el límite sería el 14 de noviembre, fecha en la que se cumple el año de la promulgación de dicha norma.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Ullóa.

Sr. Ullóa. — Señor presidente: creo que no lo dije en mi exposición en general, pero entiendo que el Poder Ejecutivo, en virtud del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, para aplicar las disposiciones de la norma que estamos considerando debe hacerlo a través de un acuerdo general de ministros y no necesariamente por un decreto de necesidad y urgencia.

Según el criterio de interpretación de la ley, como el Ejecutivo está ejerciendo funciones legislativas, tendría que hacerlo a través de un acuerdo general de ministros.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: como en esta norma se está haciendo referencia concreta a la disposición constitucional que autoriza a delegar facultades, es decir que ése es el núcleo central en base al cual nosotros hacemos la delegación de facultades, propongo que se interprete también como voluntad auténtica del legislador, que la enumeración de delegaciones sea considerada, en primer término, como taxativa. Y en segundo lugar, que la interpretación sea restrictiva.

Con esa intención y a los fines de una interpretación auténtica de la ley, pido que votemos con el ánimo de que ésa sea expresión fiel de la voluntad del legislador.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2°.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – Queda aprobado el artículo 2°.

–Se enuncia el artículo 3°.

Sr. Verna. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Adelanto que voy a votar positivamente el artículo 3° porque cuando el viernes se aprobó el proyecto de ley, quedó claro que por un olvido había sido excluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que firmó –junto con el resto de las provincias argentinas– el último pacto fiscal.

Pero cuando uno analiza la composición del gasto del Estado nacional –que ascienda a 10.448 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto del año 2001– debe saber cuánto corresponde a gastos corrientes y cuánto a gastos de capital. Hay 10 mil millones de gastos corrientes y 442 millones de gastos de capital. Del total de gastos corrientes, 5.200 millones corresponden a gastos de consumo.

Considerando estas cifras, realmente, nos debemos el debate porque es hora de que en la Capital se pague la policía, la Justicia, las escuelas. Hoy vamos a votar este artículo, por el que se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero es hora de que hagamos el debate de lo que tiene que pagarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los servicios que el resto de los argentinos estamos pagando por sus habitantes.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3°.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Sapag. – Que quede constancia de mi voto negativo, señor presidente.

Sr. Alasino. – También del mío.

Sr. Presidente (Losada). – Se deja constancia de que los señores senadores Sapag y Alasino votaron por la negativa.

–Se enuncian y se aprueban los artículos 4° a 6°.

–Se enuncia el artículo 7°.

Sr. Verna. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. – El artículo 7° modifica el inciso 3 del artículo 2° de la Ley de Impuesto a las Ganancias y grava, además de los resultados obtenidos por la enajenación de bienes muebles amortizables, las acciones, los títulos, los bonos y los demás títulos valores, cualquiera fuera el sujeto que las obtenga. Pero a su vez, en el segundo párrafo de este artículo, se mantiene la excepción a la que se refiere el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en su inciso w), en cuanto a que solamente lo elimina para aquellas personas que realicen dichas operaciones en forma habitual, pero lo mantiene para las personas físicas. Es decir que salvo que el ministro haga uso de las facultades que hoy le estamos confiriendo, los que venden las acciones, los que tienen acciones de empresas que se venden por millones, no van a ser gravados. Esto tiene que estar claro porque reiteradamente los diputados han dicho que esto queda gravado y no es así. Se pone el gravamen pero se mantiene la exención. La única manera de que esto sea grave es que el ministro elimine la exención.

Espero que el ministro haga esto pensando en el bienestar de todos los argentinos, sin que lo condicione la voluntad de la Bolsa de Valores.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. – Señor presidente: más allá de los senadores que son ávidos intérpretes de los jueces y siguiendo al senador Moreau en el sentido de que no se tome a mal expresar cuál es la voluntad auténtica del legislador, ante el planteo de distintas organizaciones y trabajadores accionistas de las empresas que fueron objeto de

privatización a través de la ley 23.696, considerando además que están en proceso de liquidación las acciones de los referidos trabajadores accionistas incluidos en este programa, y dado que también lo hemos consultado con el señor ministro, quiero que la comisión bicameral que se va a constituir tenga presente que no tributarán aquellas acciones de los trabajadores accionistas integrantes de estos programas que están en el proceso de liquidación. Es decir que el tributo comprendería a las nuevas PPP que se podrían integrar en el proceso de privatización.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Altuna.

Sr. Altuna. — Señor presidente: quiero expresar mi opinión respecto del artículo 7º en el mismo sentido en que lo hiciera el señor senador Verna.

Es necesario que quede bien en claro que con la sustitución del inciso 3 del artículo 2º de la Ley de Impuesto a las Ganancias se hace un agregado que es muy importante y que ha sido reclamado insistentemente por todos los sectores que buscan que el pago de los impuestos sea más equitativo. Por esta razón, se encuentran comprendidos en el impuesto a la renta todas las "...acciones, títulos bonos y demás títulos valores...", cualquiera fuera el sujeto que las obtenga.

Viene muy bien que esto sea dicho porque cuando se creó la ley de Impuesto a las Ganancias se estableció que la fuentes de la renta debían ser permanentes y hacer a la habitualidad del sujeto. En este caso se prescinde de eso, de modo tal que aunque se realice una sola operación aislada va a quedar gravada la renta o ganancia que se pueda obtener por la comercialización o transferencia de acciones, títulos o valores.

También ha dicho muy bien el señor senador Verna que con la sustitución del primer párrafo del inciso w) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que estamos por sancionar con esta iniciativa, queda exenta esa renta. Lo que sí queda claro, a través de las facultades que le estamos dando al Poder Ejecutivo mediante uno de los artículos que acabamos de aprobar, es que puede eliminar exenciones; ahora la renta queda gravada. Hasta este momento la renta quedaba exenta, pero hoy el Poder Ejecutivo tiene una facultad que antes no poseía porque el objeto no estaba gravado.

Es muy bueno que esto se remarque porque —como bien se decía— cuando el Poder Ejecutivo analice esta situación, sería bueno que se impusiera este criterio. Por ejemplo, fíjense que en el costo financiero del presupuesto 2001 se menciona la suma de 810 millones de pesos que corresponden al sector de rentas financieras, que hasta ahora no están gravadas, pero que con esta reforma pueden gravarse si el Poder Ejecutivo lo considera pertinente.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell; pero como me indica que es para referirse al artículo 8º, queda en uso de la palabra el señor senador Del Piero y, posteriormente, el senador Tell.

Sr. Del Piero. — Ante todo quiero pedir disculpas.

Como el senador Verna es muy hábil en el manejo de los números, tardé unos minutos en advertir lo que quiso decir cuando mencionó al distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que represento en esta Cámara.

Vuelvo a disculparme pero la aclaración que voy a efectuar vale la pena, porque el señor senador ha territorializado un gasto que es de orden federal. Entiendo que lo ha hecho con la intención de decir que es un efecto económico que sucede en la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Verna. — Así es.

Sr. Del Piero. — De igual modo, digo que la Ciudad de Buenos Aires recauda el 28 por ciento del total de los impuestos nacionales y que esa recaudación va a fondos nacionales para, finalmente, recibir una coparticipación del 1.1 por ciento.

Haciendo juegos de números, también puedo decir que la Ciudad de Buenos Aires aporta a los trescientos mil millones de pesos del producto bruto nacional un total de 80 mil millones.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Del Piero. — De todos modos quiero agregar que no tenemos dificultad, sobre todo en esta Cámara, para realizar una discusión a fondo sobre números, siempre y cuando nos otorguen la derogación de la ley Cafiero y nos den la autonomía completa.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia no va a aceptar que se debatan artículos ya votados.

Si he dado la palabra ha sido para que no queden dudas de que existe la voluntad de que todos sean escuchados.

Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Después de lo expresado por el señor senador Altuna y para que no queden dudas acerca de lo que he manifestado anteriormente, voy a puntualizar que deberá mantenerse la exención respecto de las rentas y ventas que realicen los trabajadores accionistas integrantes de los Programas de Propiedad Participada.

Sr. Baum. — Señor presidente: quiero hacer una pequeña aclaración y pido disculpas por la digresión.

Voté afirmativamente el artículo anterior y no puedo dejar flotando en el recinto la expresión del señor senador Del Piero.

La Capital Federal recauda el 28 por ciento de los impuestos nacionales. Pero no los produce, porque si bien muchas empresas tienen su sede en la Capital Federal, la riqueza se genera en el interior de la República Argentina.

Sr. Presidente (Losada). — Se va a votar el artículo 7°.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 8°.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Señor presidente: creo que acá alguien se “colgó” porque por el proyecto en consideración vamos a ratificar un decreto sobre Plan Federal de Infraestructura cuyo tratamiento lo debimos abordar en la ampliación de las sesiones ordinarias el 29 de diciembre de 2000, pero lamentablemente el decreto incluyendo este tema para las sesiones extraordinarias no fue dictado.

Creo que este plan está fuera del objetivo del proyecto en consideración y de la declaración de emergencia. Incluso, hay un dictamen sobre el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

En consecuencia, solicito lisa y llanamente la derogación del artículo 8°. Además, pido que conste mi voto en ese sentido.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: en igual sentido que lo dicho por el señor senador

preopinante, creo que se trata de un artículo introducido en el debate de la Cámara de Diputados que no estaba previsto entre los objetivos iniciales del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Asimismo, tampoco estuvo en alguno de los enunciados que ha hecho el señor ministro de Economía cuando solicitó el apoyo parlamentario para esta delegación de poderes. Además, aclaro que no se trata de un planteo de mezquindad por la mezquindad misma.

Se trató de un proyecto del Poder Ejecutivo que tuvo sanción en la Cámara de Diputados, que contaba con dictamen en este Senado y que, como bien dijo el señor senador Sala, debía ser tratado antes de fin de año, pero inexplicablemente no se habilitó su tratamiento para sesiones extraordinarias y el penúltimo día del año se dictó un decreto respetando totalmente la sanción de la Cámara de Diputados.

Pero ocurre que en la sanción que nos remitiera dicha Cámara habíamos detectado claramente cinco detalles que la hacían inconveniente o entorpecían el buen funcionamiento de los importantes objetivos que contenía el Plan Federal de Infraestructura.

Además, aclaro que estos cinco aspectos que contemplaba nuestra propuesta estaban consensuados con aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que tenían específica incumbencia en los temas de infraestructura.

Entonces, creo que hubiera sido mucho más fácil para las nuevas autoridades económicas que van a llevar adelante el Plan Federal de Infraestructura, haber modificado este decreto por vía de actos del poder administrador que endurecerlo y darle validez a un decreto imperfecto dictado por el Poder Ejecutivo.

Creo que esto es inconveniente porque va a generar problemas y va a entorpecer la implementación del Plan Federal de Infraestructura, que es tan importante para todo el país y, en particular, para las provincias que han luchado duramente para incorporar sus obras dentro de este buen diseño que busca dinamizar mediante el financiamiento privado los requerimientos de infraestructura que tiene la República Argentina.

Por estas razones, adelanto mi voto negativo a este artículo y solicito a los señores senadores que reflexionen sobre los aspectos que hemos mencionado juntamente con el señor senador Sala.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. — Señor presidente: a lo que dijeron los dos señores senadores preopinantes quiero agregar que el 21 de febrero pasado presenté un proyecto de ley por el que se proponía la derogación del decreto 1.299/00 de Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de la Infraestructura.

No obstante eso, también quiero indicar que lo que pretendíamos con la sanción de la Cámara de Diputados era perfeccionarla aún más, porque las provincias no tienen participación en el Consejo de Administración. A nuestro criterio es una barbaridad dejar la discrecionalidad del manejo de esta cuestión al funcionario de turno.

Recordaré un ejemplo que mencioné en la fundamentación que hice en ocasión del tratamiento en general. Con motivo de los festejos del centenario de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el secretario de Obras Públicas, en el marco de este Plan Federal de Infraestructura, ofreció inmediatamente un viaducto de ingreso a la mencionada ciudad que cuesta 70 millones de dólares y solamente porque se le ocurrió a ese funcionario. Entonces, no puede ser que actúen con esa discrecionalidad.

Por otra parte, para el manejo de las obras públicas hay dos leyes marco que rigen desde siempre: la de obras públicas y la de presupuestos. Con esas dos leyes pueden funcionar perfectamente hasta tanto se sancione una norma que sea mucho más abarcativa y que les dé la participación que corresponde a las provincias.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: creo que lo que se ha dicho acá es absolutamente cierto. Incluso, oportunamente le pedí una interrupción al señor senador Genoud cuando hablaba del vicio —o algo por el estilo— del gobierno anterior en cuanto a la utilización de los decretos de necesidad y urgencia.

En ese sentido, debo decir que la ley de reforma previsional está reglamentada por un decreto de necesidad y urgencia y se trata nada más y nada menos que de una norma que involucra a casi el 40 por ciento del presupuesto nacional. Por otro lado, este plan de obras de infraestructura, que supera los 20 mil millones de pesos, también estaba reglamentado por un

decreto de necesidad y urgencia, con lo cual entiendo que ya nos han superado en cuanto al uso y abuso de este tipo de decretos.

Por lo tanto, los argumentos que esbozó el señor senador Carbonell son efectivamente ciertos.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. — Señor presidente: entiendo que a los efectos prácticos nosotros tenemos que dar sanción a este proyecto de ley. Nos hemos comprometimos en ese sentido. Por lo tanto, creo que debemos votar esta iniciativa y el oficialismo tendrá que hacer gestiones para que el señor presidente de la Nación vete este artículo. Esa sería la mejor forma de dar satisfacción a los señores senadores que han planteado este problema.

Por último, pido que se vote.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Verna.

Sr. Verna. — Yo voy a historiar un poco sobre el plan de infraestructura.

En las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas discutimos el proyecto de ley en revisión de la Cámara de Diputados y llegamos a consensuar con el oficialismo el texto de un dictamen. Pero como terminaron las sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo sacó este plan a través de un decreto de necesidad y urgencia. Hubo un acto en Olivos, al que concurren muy contentos el señor jefe de Gabinete de Ministros y el señor secretario de Infraestructura, en donde se anunció el Plan Federal de Infraestructura, pero luego se encontraron con un pequeño problema. ¿Cuál era ese pequeño problema? Que cuando fueron a buscar plata a los bancos, se encontraron con que éstos no ponen plata contra un decreto de necesidad y urgencia. Para que haya plata tiene que haber seguridad jurídica y, para ello, se requiere la sanción de una ley.

Como dijo el señor senador Sala, por estos días apareció por la Cámara de Diputados algún vivo que coló este “temita” de dos mil millones de dólares en el primer año y de 20 mil millones en total en este proyecto de ley.

Ahora bien, como lo que sucede es la teoría del señor senador Moreau, en cuanto a que viene el “cuco” —o sea que si no aprobamos el proyecto de ley con el establecimiento de las

delegaciones al Poder Ejecutivo se cae todo el sistema—, como acaba de adelantar el señor senador Branda, nosotros—que somos oposición y mayoría—estamos obligados a aprobar esta iniciativa.

A continuación, voy a señalar algunos aspectos del decreto de ese decreto de necesidad y urgencia. El artículo 15 dice que las partes podrán acordar en el contrato los plazos y el valor de la contraprestación, los que no podrán ser cuestionados en sede administrativa ni judicial. Yo les pregunto a los abogados si eso se puede sostener.

Sr. Sala. — Es una barbaridad.

Sr. Verna. — En lo que se refiere al lobby que hicieron algunas de las empresas—podríamos dar el nombre de los empresarios que caminaron los pasillos de la Cámara de Diputados; algunos de ellos muy conocidos—para colocar un límite a la licitación por debajo del cual sólo podrían participar empresas locales de capital nacional, deseo manifestar que el argumento de las empresas, el argumento vendedor—como hacen quienes ofrecen productos en los colectivos—, era que ellas les daban trabajo a los ingenieros y a los obreros argentinos.

Pero se olvidaron de decir que hay empresas argentinas de capital extranjero, es decir empresas nacionales, radicadas en nuestro país, con ingenieros, tecnología y obreros argentinos, que en su momento fueron vendidas y en las que el dueño es un extranjero; y que las dejaron afuera, porque es más fácil armar un club más chiquito, con menos empresas.

Todo esto que está en el decreto, porque lo sacaron de la sanción de la Cámara de Diputados, nosotros lo habíamos eliminado en el dictamen que habíamos hecho. Pero viene el “cuco” para los que hicieron lobby en los pasillos.

Yo coincido con la propuesta del senador Branda. Creo que el oficialismo debería comprometerse a hacer una gestión para que este artículo sea vetado y, así, sancionaríamos de inmediato la norma con las correcciones que estamos proponiendo.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: he solicitado la palabra al solo efecto de asumir en nombre de mi bloque el compromiso de hacer las gestiones ante el Poder Ejecutivo para

que este artículo sea vetado, en caso de que sea sancionado, tal cual lo anticipado por el senador Verna.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. — Señor presidente: quiero agregar a lo señalado por el senador Verna, y también a lo dicho anteriormente, que si verdaderamente se quiere atraer capital e inversión a nuestro sistema, es un contrasentido exigir que éstos sean nacionales. En efecto, basta con que ellos ingresen porque tratándose de obras todas quedan radicadas en el país.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — No quiero cansar, insistir ni ser cargoso en esto.

Me quiero dirigir al señor miembro informante, al presidente de la bancada oficialista y a usted, señor presidente de esta Cámara, que a la postre es vicepresidente de la Nación, para decirles que necesitamos el compromiso colectivo de todos ustedes en el sentido de que este artículo será vetado en función de las buenas relaciones que tienen que seguir existiendo, por la circunstancia particular de que en esta Cámara la oposición es mayoría y queremos seguir siendo responsables con nuestro voto, sin arrepentirnos de nada.

Entonces, con la explicación del miembro informante y con el consentimiento suyo y del presidente de la bancada oficialista, asumimos que se van a hacer las gestiones respectivas y, en ese sentido, esperamos el veto de este artículo para ponernos a trabajar y que podamos sacar la legislación que necesiten.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: ratifico plenamente lo que dice nuestro presidente de bloque. Pero nosotros no tendríamos reparos en que el presidente del bloque radical o el miembro informante llamen por teléfono al jefe de Gabinete de Ministros o al presidente de la Nación—los vamos a esperar aquí—y tomen este compromiso que creemos que es importante y que hace, de alguna manera, a las buenas relaciones. Además se trata de un artículo que ingresó en este proyecto nadie sabe cómo, porque nunca estuvo.

Entonces, como hacíamos en nuestras épocas con el presidente Menem y a veces a pedi-

do de la bancada radical, que el gobierno, por medio del jefe de Gabinete de Ministros, admita esta posibilidad que sugiere el presidente de nuestro bloque, en la convicción de que, de esa forma, le daríamos aprobación inmediata a este proyecto de ley.

Creo que sería bastante importante que se hiciera la consulta al gobierno, porque si nosotros y los diputados no dormimos, que tampoco lo haga el Ejecutivo hasta que tenga sancionada la iniciativa. De la manera propuesta entiendo que podríamos aprobar el proyecto en el día de hoy, tal como esperamos todos.

Sr. Moreau. — Que llamen a Cavallo también.

Sr. Alasino. — Llamen a Sonia o a quien quieran, pero pregunten... *(Risas.)*

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: me parece que a esta hora es difícil que encontremos a algún funcionario despierto, pero si es necesario creo que podemos acompañar lo peticionado. Y ése es el compromiso que podemos hacer, el de derogarlo después, con una ley posterior.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Agúndez. — Lo digo por una razón práctica. Me parece que no vamos a hacer un cuarto intermedio de dos horas para ubicar a un ministro. Como dijo el señor miembro informante, asumimos el compromiso e indudablemente lo vamos a cumplir.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Le cedo la palabra al señor Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. — Señor presidente: quisiera dejar aclarado que la iniciativa que voy a plantear no es mía sino del señor senador Meneghini, de manera que no quiero robarle la autoría.

Sr. Alasino. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia solicita a los señores senadores se sirvan no dialogar.

Senador Molinari Romero: el senador Alasino le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Molinari Romero. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Losada). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. — Señor presidente: si el miembro informante fuera la diputada Carrió llamaría a las 4 de la mañana al presidente de la Nación.

No desaprovechen la oportunidad. Mediáticamente ha tenido mucho éxito.

Sr. Presidente (Losada). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. — La diferencia es que yo no amenazo, senador.

Me parece que lo que está planteando el señor senador Meneghini aquí en voz baja implica asumir un doble compromiso. El primero es la gestión por el veto, pero el segundo —que creo que debemos asumir todos como cuerpo— es dar tratamiento al proyecto que tenemos aquí en el Senado.

Sr. Gioja. — Pero ese proyecto no pasa por la Cámara de Diputados.

Sr. Molinari Romero. — Pero creo que es una ratificación de la voluntad que nosotros tenemos en este momento. Entonces, no quisiera que se plantee como una cuestión impracticable a las 4 de la madrugada.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: en esto no queremos ser más papistas que el Papa.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Gioja. — Pero me parece que si el señor presidente de la Nación no va a respetar un compromiso que asumen el presidente de la bancada oficialista, el miembro informante y el vicepresidente de la Nación y que concretaremos en una gestión en conjunto, entonces no se podrá legislar más en este Senado. Y digo esto, porque con el voto de este bloque opositor mayoritario vamos a estar reclamando permanentemente el cumplimiento de ese compromiso.

Quiero decir lo siguiente. Este artículo llega aquí porque estaba atado al famoso inciso f) del apartado I del artículo 1º del proyecto, en donde se garantizaba con fondos públicos la deuda externa y todas las operaciones financieras que se hiciesen. Cuando la Cámara de Diputados eliminó con muy buen criterio este inciso f)

—también había sido objeto de cuestionamiento en este Senado— surge este misterioso artículo 8° en esta ley de competitividad. Entonces, si analizamos este artículo 8° veremos que no tiene nada que ver, porque precisamente lo que está permitiendo es que no haya competencia y que existan algunos privilegios como los marcados con mucha precisión por el señor senador Verna.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Señor presidente: yo estoy enrolado en la misma línea que ha trazado el señor senador Alasino, quien se me ha adelantado.

Creo que debemos actuar en función de la gravedad que anunció el señor senador Verna. Todos los borradores en cuyo estudio participó el Senado constaban de siete artículos. Nosotros no participamos en la elaboración de este artículo 8°.

En consecuencia, por la gravedad que han planteado el señor senador Verna desde el tema de los números como el señor presidente de nuestro bloque con respecto a la actitud que la bancada justicialista adoptará de aquí en adelante, creo que podríamos pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos, levantar un teléfono y tomar el recaudo propuesto.

Caso contrario, si el problema es que ahora son las 4 de la madrugada, haré moción formal en el sentido de que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. Hago este planteo como una moción de orden.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia tiene que hacer votar la moción del senador Tell.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: yo he sido...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — Por favor, señores senadores.

Hemos tenido un debate muy ordenado. Entonces, me parece que hay que mantener ese mismo estilo.

Sr. Carbonell. — Señor presidente: quisiera decir que, aun siendo quien introdujo el tema para la discusión en este recinto, confío en la buena fe de la gente y de los compromisos. En consecuencia, si acá existe un compromiso tanto del presidente del bloque oficialista como del presidente de la Cámara en llevar a cabo la gestión comprometida, creo en la buena fe de ambos compromisos.

Por otro lado, también creo que la celeridad y el esmero con que se van a cumplir esos compromisos van en línea con los intereses reales de los senadores radicales que representan a provincias argentinas que están absolutamente excluidas del manejo, en el tiempo, del Consejo de Administración que va a dirigir el Fondo Fiduciario para la Infraestructura.

Así mismo, me parece que a los senadores radicales —ya sea que participen del gobierno de su provincia o que lo puedan llegar a hacer en el futuro— también les va a interesar, tanto como a nosotros, contar con la iniciativa y el control para definir qué obras, cómo van a realizarse y con qué criterio de legibilidad se va a discernir en qué provincia se edificará y en cuál no.

Por eso, a pesar de haber introducido la discusión y de haber anunciado mi voto negativo, coincido con el presidente de mi bloque en el sentido de confiar en el compromiso asumido por los senadores radicales.

Sr. Presidente (Losada). — En primer lugar, la Presidencia tiene que someter a votación la moción formulada por el señor senador Tell.

Si el senador Tell no retira su moción es lo que corresponde hacer conforme lo fijado por el Reglamento.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: en la discusión en general dijimos que íbamos a proponer la aprobación de una resolución —lo recuerdo porque estamos considerando el último artículo— que es la que autoriza la designación de los seis senadores que van a integrar la Comisión de Contralor creada por el artículo 5°.

Pediría que no se retiren hasta que aprobemos esta resolución que es el expediente S.-239 /01 que es el que tiene el secretario en su poder.

Sr. Presidente (Losada). — Está previsto su tratamiento.

Si el senador Tell retira la moción...

Sr. Tell. — No la retiro.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — Señores senadores: hay que respetar el Reglamento.

Hay que votar la moción de orden.

Senador Tell: ¿mantiene la moción o la retira?

Sr. Tell. — La mantengo.

Sr. Presidente (Losada). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Tell, en el sentido de pasar a un cuarto intermedio.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Losada). — Se va a votar el artículo 8° con las consideraciones expresadas en el recinto.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 9° es de forma.

Sr. Presidente (Losada). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Sr. Alasino. — ¿Con cuántos votos se aprobó el artículo 8°?

Sr. Presidente (Losada). — Por mayoría. (*Risas.*)

Sr. Sala. — Señor presidente ¿cuál fue el resultado?

Sr. Presidente (Losada). — Corresponde votar las inserciones solicitadas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Se procederá en consecuencia.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Sala. — Pido la palabra.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Tell. — Señor presidente: con cuatro votos no puede haber mayoría...

Sr. Presidente (Losada). — Señor senador Tell: si solicita la reconsideración, la Presiden-

cia no tiene ningún inconveniente en volver a someter su pedido a votación.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Sala. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sala.

Sr. Sala. — Señor presidente: solicito que quede expresa constancia de mi voto negativo al artículo 8° porque se trata de una absoluta irregularidad frente a lo que planteó el presidente de la Nación y lo que reclamó el ministro de Economía. Este artículo ha sido incorporado de un modo absolutamente irregular en este proyecto de ley, que es el de mayor envergadura de este gobierno.

Reitero que es una total irregularidad y quiero que quede constancia de mi voto negativo.

Sr. Tell. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Señor presidente: coincido con el concepto y los fundamentos vertidos con el señor senador Sala.

Sr. Gioja. — Votemos la resolución...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia insiste en que si hay un pedido de reconsideración no tiene inconveniente en hacerla votar.

Varios senadores. — ¡No!

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: adhiero a las palabras expresadas por el señor senador Sala pero quiero dar por finalizado este asunto. Es necesario que se tengan en cuenta los esfuerzos y la actitud de este bloque mayoritario opositor. No nos gusta amenazar. No somos de hacerlo. Si no se hace respetar el uso de la palabra, indudablemente va a haber problemas posteriores.

2

COMISION BICAMERAL PARA LA DELEGACION DE FACULTADES

Sr. Gioja. — Solicito, señor presidente, que someta a consideración el expediente S.-239/01 que obra en Secretaría.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Losada). – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución.

Sr. Secretario (Oyarzún). – *(Lee)*

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º – Determinase que la Comisión Bicameral prevista en el artículo 5º de la ley de delegación de facultades al Poder Ejecutivo nacional, estará integrada por tres (3) senadores del bloque del Partido Justicialista, dos (2) senadores del bloque de la Alianza, y un (1) senador representando a los partidos provinciales.

Art. 2º – Facúltase a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación a efectuar las designaciones respectivas, a propuesta de dichos bloques.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José L. Gioja. – Jorge Massat. – Eduardo Menem. – Angel F. Pardo. – Gerardo L. Palacios. – Beatriz I. Raijer. – Felipe Sapag. – Ricardo A. Branda. – Manuel A. Rodríguez. – Omar M. Vaquir. – Augusto Alasino. – Luis Molinari Romero. – Carlos L. de la Rosa. – Néstor D.

Rostan. – Osvaldo R. Sala. – Eduardo Bauzá. – Jorge A. Agüindez. – Remo J. Costanzo. – Hugo A. Sager. – Fernando Cabana. – Héctor M. Maya. – José F. Carbonell. – Carlos A. Verna.

Sr. Presidente (Losada). – En consideración el tratamiento sobre tablas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

Como no hay más temas que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 4 y 6 del jueves 29 de marzo de 2001.

RUBEN A. MARINO

Director del Cuerpo de Taquigrafos.

3

APENDICE

I

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 935.

2

Comisión Bicameral para la Delegación de Facultades

–El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 1059.

II

INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador San Millán

Señor presidente:

En esta circunstancia, no puedo sin embargo dejar de señalar, la necesidad de que a estas medidas coyunturales, se les sumen por iniciativa del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional (nosotros), las medidas de fondo que permitan la adecuación de los factores económicos a las exigencias de los tiempos.

Se ha producido en nuestro país en los últimos diez (10) años un proceso que, a partir del sector

público privatizado o de la apertura económica, ha posibilitado una acumulación de capital concentrada en determinados sectores.

El efecto en su momento ha sido beneficioso para el país que vivió la posibilidad de modernización, y resultó un paso decisivo en el abandono de un estatismo ya superado.

Sin embargo, no hay duda tampoco de que, lo que todos suponíamos o queríamos que fueran inversiones de riesgo, consistieron luego en transferencias del patrimonio de las empresas con un cambio gerencial exitoso, debido, en la mayoría de las veces exclusivamente, al aumento de las tarifas respectivas

Muchos en vez de traer capitales frescos, se limitan a invertir sólo a partir de los recursos de los usuarios o de las ganancias generadas por la propia actividad, sin riesgo alguno. Y esto, como dijo hace poco un reconocido analista político, "ya no es capitalismo, sino prebenda".

Otros que tienen derecho por ley a que se les garantice un lucro objetivamente razonable, se olvidan de que la contrapartida a eso, cuando se excede en ganancias, significa la disminución de tarifas en beneficio de los usuarios.

Algunos, aprovechándose de su posición dominante del mercado, a pesar de tratarse de insumos de interés esenciales y estratégicos, subiendo los precios cuando para ellos el costo del producto baja.

La desregulación de la economía, incluyendo las facultades que ahora se otorgan al Poder Ejecutivo para continuar en ese sentido, tienen por objeto recrear las condiciones normales del mercado en donde los factores puedan operar en situación de libertad y competencia, sin distorsiones de cualquier índole.

Pero de ninguna manera significa que el Estado abdique de su deber y obligación de actuar con las medidas correctivas conducentes a restablecer estas condiciones cuando las situaciones de monopolio o abuso de la posición dominante en el mercado, lo distorsionan gravemente generando mayores perjuicios a la actividad y al público usuario o consumidor que los que se quería evitar.

El vaso, como muchos pregonaban, no ha rebasado, y superado el problema de la capitalización y modernización, tenemos enfrente el problema de la distribución y asignación adecuada de los recursos, que debemos resolver.

Y al respecto algunos de los interrogantes podrían ser:

Hasta dónde las empresas concesionarias de servicios públicos monopólicos pueden continuar generando ganancias objetivamente irrazonables sin que tal beneficio se traduzca a favor del público usuario.

Hasta dónde el cartel de petroleras pueden mantener o subir el precio de los combustibles, aunque el precio del petróleo crudo baje.

Hasta dónde el sector financiero puede continuar con tasas, comisiones, y recargos, totalmente desmesurados en relación a cualquier pregonado riesgo de incobrabilidad o mora, que sin embargo no afecta sus ingresos.

Hasta dónde las AFJP pueden seguir percibiendo de comisión el 30 % de los fondos que efectivamente administran.

Hasta dónde debemos continuar aceptando competir con algunos, en condiciones de absoluta libertad cuando se trata de productos que no producimos eficientemente, y simultáneamente, con esos mismos, pero en productos en los que sí somos eficientes y modernos, caso de los agropecuarios,

tenemos que aceptar por parte de ciertos países europeos y Estados Unidos, subsidios y subvenciones que nos eliminan del mercado.

Así podríamos seguir enumerando distorsiones.

De ninguna manera se trata de afectar por cualquier medio la seguridad jurídica garantizada a todos los involucrados. Se trata de recrear, las condiciones de regulación y competencia, en beneficio del país, según los principios fundamentales de nuestro sistema jurídico expresados en la Constitución Nacional, y según lo realizan y lo llevan adelante los países más desarrollados que nos han servido como modelo, para que la prosperidad no sea de unos pocos sino de todos.

Y esto será parte de la tarea a la que en los próximos días tendremos que abocarnos.

En este sentido, considero como prioritario que la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo plenamente de todos sus servicios públicos esenciales, que todavía continúan solventados por el presupuesto nacional.

Sólo de esta manera se logrará que los recursos no coparticipables que luego de la transferencia tenga el gobierno nacional, se asignen equitativamente con destino a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

2

Solicitada por el señor senador Del Piero

APUNTES PARA EL DEBATE SOBRE CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA ARGENTINA

Señor presidente:

La Argentina tuvo en los últimos años un fuerte crecimiento del producto. Si tomamos como base el año 1991 y lo comparamos con el año 1996, el producto creció en todo ese período un 61,3 %.

Sin embargo, este fenómeno fue acompañado de una cuasi triplicación de la tasa de desempleo abierto urbano, así como de un incremento del porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia, que en el caso del conurbano bonaerense pasó de 2,4 en 1991 a 4,8 en octubre de 1995, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En lo que se refiere a la distribución del ingreso, en base a datos del INDEC, FIDE ha realizado estimaciones (en porcentaje del total de perceptores) en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si tomamos el mismo período base de 1991 (mes de mayo) y lo comparamos con el mes de mayo de 1997 nos da que el estrato bajo pasa de 14,7 a 13,1, el medio de 34,6 a 34,0 y el alto de 50,7 a 52,9. Ello evidencia la gran caída del estrato bajo, la menor caída del estrato medio y la ganancia que obtiene el estrato alto en ese período de tiempo.

Algunas de las explicaciones que se han dado para el caso argentino, en el campo económico, referido a la relación negativa evidenciada entre el crecimiento económico y el empeoramiento del ingreso de los sectores medios y bajos (o, por ejemplo, del incremento del desempleo), se han centrado en:

—El “sinceramiento” de un empleo ficticio y por lo tanto de una distribución del ingreso irreal, producto de una Argentina cerrada y no competitiva,

—Las políticas e instrumentos llevados a cabo, en el período mencionado, que produjo esas consecuencias. Aquí se podrían distinguir, a su vez dos posiciones: los que indican como culpables a los instrumentos utilizados y otros que indican como culpables a las modalidades de implementación de dichos instrumentos.

—En mi caso personal, quisiera adherir a la posición última, referida a las modalidades de implementación de los instrumentos, relacionándola con la temática de los diferentes contratos (implícitos o explícitos) que hay dentro de las experiencias de crecimiento económico.

En esta línea partiendo de las modalidades de implementación y tomando como base el año noventa y uno:

—Se partió de un fenómeno como la hiperinflación (con ingresos concentrados) buscando la estabilidad de precios a través de un esquema de convertibilidad pero sin un contrato social más justo y sin llevar adelante políticas que permitieran generalizar el crecimiento significativo de la productividad —frente a un tipo de cambio fijo— para el conjunto de los sectores productivos regionales y no sólo para pocos inversores.

—Se llevó adelante una forma indiscriminada de apertura de la economía, con el objetivo implícito de controlar los precios internos de manera salvaje.

—Se buscó el equilibrio fiscal pero con un esquema impositivo regresivo, sin una política coherente para el conjunto de las economías regionales (con parches e incoherencias en la promoción regional) y sin realizar una efectiva reforma del Estado para hacer más eficiente el gasto. Esta búsqueda del equilibrio suponía la perdurabilidad en el tiempo del combate contra la evasión (continuidad de personas como Tacchi) que no se dio, y el supuesto fuerte de que los efectos del traspaso de aportes previsionales a las AFJP y la rebaja de aportes patronales serían compensados con el crecimiento de la economía y la recaudación. El déficit que hoy tenemos, según algunos especialistas, es producto de estas dos medidas de Cavallo.

—Se implementaron privatizaciones que no previeron el impacto general, y en particular geográfico, en el desempleo a los que posteriormente tuvo que asistir a través de programas de empleo precario o basura.

Estas modalidades inadecuadas de implementación trajeron efectos también inadecuados para la mayor parte de la población, y se basaron en un pretendido “realismo político, económico y social” de una sociedad asustada. El miedo ya no era por una poco probable “defraudación” del sistema político vigente (desaparición de la democracia) sino más bien por las “defraudaciones” —en algunos casos— y “desilusiones” —en otros casos— de la confianza social y económica que se venía produciendo. A título de algunos ejemplos y en especial, desde mediados de los setenta desde el “rodrigazo” y las donaciones que la sociedad había canalizado frente al conflicto con Inglaterra y nunca llegaron a Malvinas, pasando por “estatizaciones” de deudas privadas, hasta las limitaciones que tuvieron iniciativas e implementaciones de cambio de moneda que no dieron los frutos estables en el tiempo que de ellas se esperaban.

La agudización de significativos conflictos internos (ruptura de contratos, “micros y macros”) y externos terminaron llevándonos, al igual que a otras sociedades en otros momentos de su historia, a que prevaleciera la lógica de “sálvese quien pueda”, “lo común no tiene más sentido” (el Estado y su moneda) y “refugiémonos en la moneda de la potencia hegemónica del momento” (convertibilidad con el dólar).

Dado que la hiperinflación en una determinada sociedad es el reflejo —entre otras cosas— de la inexistencia o inviabilidad de un contrato social satisfactorio o soportable para sus pautas culturales (expresado en una puja redistributiva salvaje), quisiera resaltar el caso de Alemania occidental de posguerra. Este caso se presenta, a mi entender, como una modalidad sugerente de salir para adelante con fuerte crecimiento, una distribución más equitativa de los ingresos, reconstruyendo su economía, incorporando al conjunto de su población a dicho crecimiento (más allá de los actuales desempleados financiados por el Estado), a una cantidad significativa de inmigrantes así como posteriormente articularse nuevamente con el conjunto de su sociedad y su territorio separados por el que fuera denominado muro de Berlín.

En efecto, en el caso de un país como Alemania de posguerra que había perdido una cantidad importante de población y tenido una fuerte destrucción de recursos materiales y de infraestructura, utilizó también el instrumento de la convertibilidad (aunque con un sesgo en su conversión que buscó compensar o mitigar las desigualdades del proceso hiperinflacionario) con un nuevo contrato social que les permitiera refundar su Nación desde una perspectiva diferente al escenario que generó el conflicto bélico. Ello se manifestó en una nueva distribución de los sacrificios y los premios, expresados en la generación y apropiación del excedente económico: los alemanes llevaron la flexibilización laboral al máximo trabajando determinado tiempo gratis

o sin cobrar nada por su país pero implementaron leyes de co-gestión, autogestión y de seguridad social, que les permitieron a ese tipo de capitalismo (que denominaron economía social de mercado) derramar hacia toda la sociedad su crecimiento y no concentrarlo sólo en unos pocos.

Todo esto más allá de aspectos como: si el seguro de desempleo debe ser reformado o no o de los problemas de la incorporación del "Oeste con el Este" que tiene dicha sociedad.

En el caso de la experiencia argentina, si bien el margen político, social y económico era escaso, se podría haber intentado sentar las bases —a futuro— de un nuevo contrato social. Más allá de utilizar este recurso instrumental para situaciones límite no hubo en los "conductores" de este proceso la "visión" de intentar hacer algo para que en el futuro hubiera menos excluidos y que los incluidos lo estuvieran desde una perspectiva satisfactoria.

Pensando que, tal vez, mágicamente la mano invisible se encargaría por sí sola de corregir los efectos de lo que alguien denominó "una guerra civil monetaria" o, tal vez, sin dar importancia a estos aspectos, los resultados fueron la relación negativa entre crecimiento y distribución del ingreso.

Para terminar estos "Apuntes para el debate" quisiera plantear que detrás de conceptos como crecimiento y distribución del ingreso hay lógicas, vínculos más o menos formalizados (contratos), relaciones de poder o de fuerza entre seres humanos, formas de "visualización del otro/a/s, pautas culturales diversas, además de lo que nos enseñan habitualmente a los economistas en las instituciones educativas a las que hemos ido.

Si la afirmación anterior es cierta será distinto un tipo de crecimiento y de "derrame de sus frutos" basado en un contrato social que tenga como base un contrato fiscal con impuestos regresivos y malos servicios del Estado y un contrato laboral donde lo que se busque sea fundamentalmente el quiebre del poder sindical y la baja del costo salarial, de otro tipo de crecimiento donde la base impositiva sea más equitativa, los servicios del Estado sean eficaces y el contrato laboral busque la calidad, la productividad y el crecimiento de la comunidad de intereses que son las empresas y que es también el país.

Uno u otro sendero, sin duda, no está vinculado con el azar o la mera buena o mala voluntad de algunos, sino que conllevaría a que podamos reflexionar sobre nuestras formas de articularnos como sociedad, determinar si ellas son satisfactorias en cuanto al grado de inclusión que logran o de exclusión que provocan, si las formas de inclusión son satisfactorias o no (como es el caso de las formas corruptas o mafiosas) y concluyamos en acciones que promuevan diversas y plurales formas institucionales de contratación que "derramen y hagan partícipes de estímulos materiales y no materiales" para todos aquellos que formamos parte

de esas categorías no muy utilizadas en el lenguaje económico tradicional como nación, cultura/s y sociedad.

3

Entregada por el señor senador Romero

Muy brevemente deseo exponer algunos conceptos relativos a este proyecto de ley venido de la Cámara de Diputados y que sin duda concita el interés de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Un interés que sin duda es esperanza de muchos hombres y mujeres argentinos, esperanza con la cual no podemos jugar, porque la gente nos está mirando para ver si nosotros permitimos que la recuperen.

El filósofo y político alemán Carl Schmitt decía que "soberano es aquel que decide sobre el estado de emergencia". Y después de haber asistido al bochornoso proceso de enlodamiento de este Parlamento, después de haber soportado el ataque artero y mediático de quien sumiera al país en la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente, este Parlamento asume la soberana decisión de legislar para enfrentar ese estado de emergencia pública. Y conocemos el costo político que nuestras decisiones pueden tener, frente a nuestros partidos, frente a nuestros votantes, frente al incierto futuro que hoy reclama de nuestras decisiones.

Pero no vamos a gritar "a los botes", como otros, porque sabemos que el barco está encallado y no hay botes suficientes para todos los argentinos. Estamos aquí para brindar las herramientas que permitan reparar el barco, y si es necesario ayudaremos a remolcarlo hacia aguas menos turbulentas, en donde será más fácil para la gente llegar a tierra firme.

Y después de treinta meses de recesión, nos están vedadas las chicanas y artilugios. Estamos asistiendo a una emergencia sin precedentes en la Argentina, estamos al borde de la bancarrota, y todavía algunos trasnochados siguen anteponiendo intereses partidarios o pretenden asumir conductas obstructionistas para no enfrentar este crítico desafío que hoy debemos inexcusablemente afrontar.

Tomemos conciencia de la realidad que vive el país de una buena vez y reivindicemos con acciones concretas nuestro compromiso político con los argentinos. Hemos perdido 15 valiosos meses entre impetazos, dudas, "portazos" desgobierno, alianzas y desalianzas. Mientras tanto hasta un chico maneja la palabra "default".

Confucio decía que "gobernar es rectificar", y yo digo que enhorabuena, porque un país en llamas no se arregla con baldes de nafta. El presidente ha virado el timón; nos corresponde como Parlamento despejar el puesto de mando, sin abandonar nuestras funciones y sin olvidar nuestras responsabilidades. Nos pide que deleguemos en sus manos algunas herramientas que le faciliten la maniobra. Esto

no es tan grave, ni vulnera el equilibrio de poderes, ni constituye un vaciamiento funcional del Parlamento, en la medida que velemos por los recaudos establecidos en el artículo 76 de nuestra Carta Magna y ejerzamos eficazmente nuestro deber de control y vigilancia de su estricto cumplimiento.

El texto del proyecto modificado en la Cámara de Diputados otorga el marco adecuado de la delegación legislativa, pone a buen recaudo los derechos laborales y previsionales adquiridos, y disipa el fantasma de las privatizaciones generalizadas y a ultranza, que muchos esgrimieron como argumento para sus agoreras profecías.

Un proverbio anglosajón dice que "la mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos". Evitemos el error de anteponer sentimientos personales o pensamientos sentimentales.

La difícil situación que debemos afrontar nos obliga a prescindir de visiones apocalípticas. Debemos dar al Poder Ejecutivo las facultades que reclama, en virtud de la emergencia económica declarada por la ley 25.344, porque de lo contrario seremos socios del fracaso y directos responsables de sus consecuencias.

Y debemos hacerlo con fe en que Dios ilumine los pasos de nuestro presidente y lo guíe en las difíciles decisiones que deba afrontar.

Como decía el senador Eduardo Menem en la sesión anterior, pongamos "buenas ondas" y transmitamos nuestra propia visión de esperanza a todo un pueblo que no quiere perder la fe en que el país merece y puede salir adelante.

4

Entregada por el señor senador Usandizaga

Señor presidente:

La delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo está expresamente prohibida en nuestra Constitución Nacional, salvo en el supuesto excepcionalísimo que regula el artículo 76 de ese mismo texto.

El Poder Ejecutivo, en el marco de esa disposición constitucional y a través de un proyecto de ley, solicita al Poder Legislativo la delegación de atribuciones legislativas en "materias determinadas de administración" y por motivo de "emergencia pública".

Hablar de la delegación legislativa en materias de administración confunde ya que es el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo la administración general del país, siendo el presidente de la Nación el responsable político de la administración (artículo 99 de la Constitución Nacional) y correspondiéndole al jefe de Gabinete de Ministros ejercer la administración general (artículo 100 inciso 1° de la Constitución Nacional).

La distinción radica en que las materias de administración que el Ejecutivo puede reclamar son aque-

llas que pertenecen al Parlamento y que podríamos llamar "materias especiales de administración", aquellas atribuciones contenidas en el artículo 75 de la Constitución.

Este Congreso, en oportunidad de sancionar la ley 25.148, sobre ratificación de la legislación delegada preexistente a 1994, trató de precisar el alcance de estas materias en una enumeración no taxativa y comprendió aquellas referidas a la creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales—incluyendo el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros—; la fijación de fuerzas armadas y dictado de sus normas de gobierno; la ley de ministerios; la creación, y atribuciones de un organismo fiscal federal; la legislación en materia de servicios públicos, etcétera.

Como correlativo de ello la delegación tiene límites precisos en razón de la sustancia misma de la materia a delegar y del juego armónico del artículo 76 y el inciso 2° del artículo 99 de la Constitución.

Coincidimos con Humberto Quiroga Lavié, cuando señala que "...hay materias que son absolutamente reservadas e indelegables por su misma sustancia: ...leyes penales, cuestiones impositivas, de expropiaciones, amnistías generales, el estado de sitio, la intervención federal, los códigos de fondo, las leyes orgánicas de las distintas materias, ...la ley de presupuesto, todo acto de control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, la cuenta de inversión, los tratados internacionales, y las consultas populares".¹

Y seguimos a Cassagne en la interpretación de que si el Poder Ejecutivo no está habilitado para emitir decretos de necesidad y urgencia en materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos, tampoco puede estarlo para dictar decretos delegados en estos temas.²

El Congreso debe hoy definir con el mayor consenso posible, cuáles son las materias de administración que en esta particular situación de crisis delega en el gobierno nacional, y debe hacerlo con el mayor cuidado.

Es coincidente con los criterios enunciados en los párrafos antecedentes la atribución de las facultades delegadas en los incisos a), b), d), e) y g) del apartado II del artículo 1.

También ha sido acertada la intervención de la Cámara iniciadora acotando el alcance del mensaje, originario del Poder Ejecutivo y excluyendo principalmente la delegación de atribuciones legislativas en materia laboral, previsional y de seguridad social, facultades indelegables y cuyo otorgamiento tenían a la norma propuesta de inconstitucionalidad,

¹ Convención Constituyente de 1994, sesión del 28-7-94.

² Cassagne, citado por Néstor Pedro Sagües en *Elementos de derecho constitucional* tomo 1, editado por Astrea, 1999, página 604.

al tiempo que permitían el avance del Poder Ejecutivo sobre la zona de reserva exclusiva del Legislativo (artículo 11 apartado II inciso a) del mensaje P.E.-356).

En igual sentido es adecuada la supresión de la autorización que el Poder Ejecutivo pretendía de “garantizar operaciones de crédito público mediante la afectación de recursos o activos públicos” (artículo 11 apartado I inciso d) del mensaje P.E. 356).

Mayor detenimiento merece el análisis de la norma propuesta por la Cámara de Diputados respecto de la sujeción del personal de los entes autárquicos, reparticiones descentralizadas o desconcentradas convertidas en empresas públicas, sociedades del Estado o aun sociedades anónimas, a las normas de derecho común, garantizándole una estabilidad por el término de dos años a partir de la modificación del vínculo laboral, en tanto se negocia un nuevo convenio colectivo.

En principio debemos indicar que no constituye materia posible de delegación toda aquella referente a la protección de los derechos fundamentales, entre ellos los establecidos en el artículo 14 bis y particularmente la estabilidad del empleo público.³

La estabilidad del empleo público; originariamente denominada propia, garantiza al agente o empleado público que no será despedido a menos que incurra en la comisión de un hecho previsto como causa justificativa de cesantía, que el mismo le sea imputable y que resulte debidamente acreditado mediante sumario en el cual haya tenido oportunidad de defenderse.

El alcance de dicha protección se ha ido moderando en doctrina y a través de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al punto de poder decirse que la estabilidad del empleo público es hoy impropia, “es decir que al empleado despedido sin causa no se le debe restitución, sino indemnización, siempre que ello se sustente en la invocación de la necesidad de reestructurar la administración, pues entonces el despido no tendría carácter de sanción (caso Schreb F 279:62). En general le basta a la administración invocar razones de mejor servicio para justificar los despidos (caso Brasesco 266:159)... Se ha institucionalizado así el procedimiento de la “prescindibilidad” justificada para conferir al Ejecutivo “un instrumento ágil, para lograr que la administración sea eficaz, funcional y económica” (F 307:539). La Corte también se apoyó en el derecho que tiene el Ejecutivo de nombrar y remover empleados para darle fundamento constitucional a la prescindibilidad (F 312:495 y 2393; 307:878).⁴

A esto agregamos las normas sobre “disponibilidad” que contemplan los artículos 11 a 15 de la ley 25.164, Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. En particular, el artículo 11 de ese cuerpo legal que establece que el personal alcan-

zado por el régimen de estabilidad que resulte, afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a las mismas, con la eliminación de los respectivos cargos, será reubicado en las condiciones reglamentarias que se establezcan; pero en el supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en situación de disponibilidad por un período de hasta 12 meses, finalizado el cual y sin que haya sido reubicado, se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una indemnización.

Lo expuesto cuestiona la necesidad de recurrir a la delegación legislativa para resolver el problema del empleado o agente público afectado en casos de transformación o fusión de organismos públicos.

Optar por una propuesta cuestionable respecto de su constitucionalidad —ya que desde lo más íntimo debemos reconocer que se avanza transformando la relación jurídica de empleo público en sujeción al régimen del contrato de trabajo, sin bien a través de la mutación de la naturaleza jurídica del ente—, no parece ser lo aconsejable cuando las normas vigentes y la jurisprudencia del más alto tribunal habilitan otros recursos.

En cuanto a las materias delegadas por motivo de emergencia pública, se cumple con las exigencias mínimas que ha establecido la Corte respecto de la determinación de la emergencia: a) que sea definida por ley, tal como surge de la ley 25.344 de Emergencia Económica Financiera, sancionada el 19 de octubre de 2000, b) que persiga un fin público, y así lo expresan los fundamentos del mensaje del Poder Ejecutivo: “El proyecto de ley que se acompaña posibilita al Poder Ejecutivo nacional terminar con la inconclusa reforma del Estado, de forma de satisfacer el reclamo popular de que el reparto de cargas no recaiga siempre sobre los sectores más débiles y posibilitar se liberen recursos para los sectores más productivos de la economía”, c) que respete los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y d) que someta la limitación de los derechos al control de razonabilidad.

También siguiendo las normas constitucionales, se evita delegar facultades de creación de tributos y ello se reafirma con la incorporación al texto en el inciso c) del apartado II de la mención de “tasas o recursos no tributarios”.

El proyecto fija el plazo de la delegación en un tiempo determinado, al término del cual el Parlamento retorna sus facultades.

El artículo 76 de nuestra Constitución Nacional tal vez exige más que lo proyectado en términos de fijar las bases de la delegación. Lo mejor hubiese sido seguir los pasos de su fuente, el artículo 82 de la Constitución de España, y procurar que esta ley base precisara con detalle el objeto y alcances de la delegación y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Algunos incisos cum-

³⁻⁴ Conf. Iván Cullen.

plen con este requisito (apartado A incisos c), g) y párrafo final, apartado II inciso c), otros son menos explícitos.

Asimismo cabe señalar que la delegación se opera sin estar conformada la Comisión Bicameral Permanente que la Constitución prevé como instancia de control de la legislación delegada (artículo 99 inciso 2). Sin embargo, se incorpora como mitigante de tal ausencia a una comisión especial bicameral integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por ambas Cámaras respetando la pluralidad de la representación política y cuyo presidente será designado a propuesta del bloque político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Por último, creo oportuno traer a la memoria de mis pares que esta Cámara ha votado anteriormen-

te estas facultades excepcionales y lo ha hecho a través de la ley 24.629.

Concluyo enfatizando que el procedimiento de la delegación legislativa no debe funcionar como un remedio habitual, es de carácter excepcional y su incorporación a la reforma de 1994 fue inspirada en la voluntad de "crear nuevas instituciones que aseguren un mejor equilibrio entre los poderes y desconcentren las facultades presidenciales... crear las condiciones que permitan actuar con mayor libertad y seguridad jurídica, espaciando los riesgos del autoritarismo y de la pretensión hegemónica".⁵

⁵ Raúl Alfonsín, Convención Constituyente; (1-VIII-94).